REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Ref. Proceso verbal de **OTTO LUIS NASSAR MONTOYA** en contra **BALOCO S.A.S.** y otro. (Recurso de reposición). **Rad.** 11001-3103-042-2019-00855-04.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO A RESOLVER

Se decide el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra el auto del 8 de febrero pasado, proferido por esta Magistratura.

II. ANTECEDENTES

1. En la aludida providencia se confirmó el pronunciamiento del 10 de junio de 2022, emitido por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta capital, a través de la cual se rechazó la solicitud de nulidad alegada por la demandada Baloco S.A.S, sin imponer condena en costas[1].

2. En oposición, la parte actora promovió el remedio de defensa horizontal, para que se revoque esa última determinación, argumentando que sí procedía esa sanción, en aplicación del numeral 1 del artículo 365 del C.G.P., máxime cuando ya en dos oportunidades se ha alegado y definido lo atinente a la invalidez del rito por pérdida de competencia[2].

---

[1] Archivo "*05ConfirmaAuto04.pdf"* de la carpeta "*02CuadernoTribunal"*
[2] Archivo *"07ReposicionAuto08FebBalocco04"* de la carpeta "*02CuadernoTribunal"*

3. El 15 de febrero pasado[3], se corrió traslado de ese medio defensivo a los demás intervinientes, quienes guardaron silencio, según da cuenta el informe secretarial del 21 siguiente[4].

III. CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 318 del Código General del Proceso "*el recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja*", vale decir que ese medio de defensa no tiene cabida contra las decisiones de esa estirpe, sin que se establezca excepción alguna.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia precisó: "*del referido texto legal se desprende que el medio de impugnación planteado no se halla autorizado para decisiones como la que en este asunto se ha pretendido controvertir y en esa medida, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º del canon 38, ibídem, su rechazo debe ser la consecuencia*"[5].

En el caso bajo análisis, el proveído recurrido es precisamente el que decidió la apelación interpuesta contra el pronunciamiento del 10 de junio de 2022, resultando abiertamente improcedente el medio defensivo, aun cuando a través de él se pretende controvertir la causación de las costas.

En un asunto de similares contornos, en el que a través de ese mecanismo de impugnación se pretendía censurar la imposición de esa sanción, la memorada Alta Corporación procedió a desecharlo, al estimar:

> *"En relación con el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia de casación, se rechaza por improcedente*
> *(…)*
> *Cabe aclarar que la norma en que se sustenta el memorialista para pretender reponer la sentencia de casación en lo atinente a la fijación de las costas de primer y segundo grado, en la forma señalada en la decisión de instancia de la misma providencia, esto es, el artículo 366 del CGP, no es la llamada a operar en la medida que la misma regula es la liquidación de las agencias en derecho y costas del proceso, la cual aún no se ha practicado"*[6].

---

[3] Archivo *"08Traslado", ib.*
[4] Archivo "*09 Informe Entrada 20230221", ib.*
[5] Corte Suprema de Justicia, AC. 12 mar. 2012, Rad. 2012-00300-00.
[6] Corte Suprema de Justicia AL2743-2022, Rad. 85859, 22 de junio de 2022.

Postura que también acogió al decidir un recurso de súplica interpuesto, para que se revocara la determinación que impuso una condena en costas, resaltando su improcedencia, por cuanto *"la providencia en virtud de la cual se adoptó la decisión ahora cuestionada parcialmente fue un pronunciamiento de Sala, por tanto, de conformidad con el artículo 331 del CGP, no es susceptible de este medio de impugnación"*[7].

Por consiguiente, en aplicación del numeral 2 del artículo 43 *ejusdem,* se dispondrá su rechazo.

En consecuencia, se **RESUELVE:**

Primero. RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra el auto del 8 de febrero pasado.

Segundo. Por la secretaría dese cumplimiento a lo ordenado en el ordinal tercero de la parte resolutiva del aludido proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
Aida Victoria Lozano Rico
Magistrada
Sala 016 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **449aedcb68b01de183e9cbba991d436291559a359f4180677603e7e5d2ebb79f**
Documento generado en 24/07/2023 08:36:26 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[7] Corte Suprema de Justicia AL1645-2020, Rad. 69469, 15 de julio de 2020.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Proceso No.	11001310304320170006405
Clase:	VERBAL – DECLARACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS
Accionante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Accionado:	BANCOLOMBIA S.A. Y OTROS.

Discutido y aprobado en Sala Dual Civil de decisión n.° 28 de la fecha.

Para proveer sobre el impedimento manifestado por la Magistrada, doctora Stella María Ayazo Perneth, en la actuación del epígrafe, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

En aras de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de dirimir los asuntos sometidos a su consideración, nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de apartarse del conocimiento de la controversia, en caso de estructurarse las precisas circunstancias que configuren las causales taxativas de recusación e impedimento. Sobre ese criterio, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha recalcado que:

> "Los impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consideró bastante para afectar su buen juicio, bien sea por interés, animadversión o amor propio del juzgador... [S]egún las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, estructuren una de las causales específicamente previstas en la ley -en el caso de la acción de tutela, del Código de Procedimiento Penal-, toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de

> la especificidad, de suyo más acompasado con la seguridad jurídica" (Auto del 8 de abril de 2005, rad. 00142-00, citado el 18 de agosto de 2011, rad. 2011-01687 y reiterado, entre otros, en ATC3380-2016, 1 jun. y ATC1095-2020, 17 nov.).

En el presente asunto, con soporte en las causales previstas el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, y numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, la mencionada servidora judicial se declaró impedida para conocer de la actuación del epígrafe, por cuanto laboró "como abogada contratista en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante contrato nro. 1095 de 2019 suscrito el 28 de marzo de esa anualidad", y en virtud de las obligaciones que tenía a su cargo "conoci[ó], particip[ó] en comité y emiti[ó] concepto verbal a la Oficina Jurídica del ICBF, sobre el asunto aquí tramitado".

En ese orden, se impone aceptar la manifestación de la togada, en tanto que la circunstancia descrita armoniza con la causal impeditiva prevista en el numeral 4º del artículo 56 de la citada Ley 906 de 2004, consistente en "[q]ue el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso".

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Dual de Decisión,

RESUELVE

Aceptar el impedimento invocado por la Magistrada, doctora Stella María Ayazo Perneth.

En consecuencia, por Secretaría efectúese la correspondiente compensación y retornen las diligencias al despacho, para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

Firmado Por:

Manuel Alfonso Zamudio Mora
Magistrado
Sala 005 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **41e37ea21660c452d30a9206a00413c50c5c4c9de22b84d6689a20ea0ea8224c**
Documento generado en 24/07/2023 04:13:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO: PROCESO EJECUTIVO DEL SEÑOR RICARDO CRUZ HERNANDEZ CONTRA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTÍFICO E INDUSTRIAL -COMCI-.

Rad. 45 2021 00175 01

SE ADMITE en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia anticipada que profirió el Juzgado Cuarenta y Cínco Civil del Circuito de Bogotá el 2 de marzo de 2023, dentro del presente asunto.

La parte apelante deberá tener en cuenta lo establecido en el inciso 3º del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, a cuyo tenor: "*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes"*, vencidos los cuales la contraparte deberá descorrer, si a bien lo tiene, el correspondiente traslado; términos que comenzaran a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

Concurrente con lo antes señalado, los profesionales del derecho deberán dar estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

A su turno, las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE este proveído en la forma establecida en el artículo 9º de la Ley 2213 de 2022.

Cumplido lo anterior, ingresen las presentes diligencias **inmediatamente** al despacho con informe pormenorizado de Secretaría, para proveer lo que en derecho corresponda.

Notifíquese,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Magistrada

Rad. 45 2021 00175 01

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **81bda30fbad7cf4c30e8cd016ab77de81ef729006a4d21f112107a4dc720c009**

Documento generado en 24/07/2023 08:43:54 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

11001-31-030-50-2020-00306-01

Por encontrarse legalmente procedente, el Despacho dispone:

Admitir en el efecto **SUSPENSIVO**, el recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales, en contra de la sentencia proferida el día 9 de junio del año 2023, por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito.

Una vez cobre ejecutoria la presente decisión, contrólense los términos con los que cuentan los aquí apelantes para sustentar la alzada formulada, conforme lo consagra el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. Transcurrido dicho lapso, de la sustentación presentada se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días, a fin de que, si a bien lo tiene, se pronuncie frente a las manifestaciones elevadas por los impugnantes.

Por Secretaría, una vez vencidos los mencionados términos, ingrese el expediente al Despacho, con el propósito de emitir la decisión que en derecho corresponda.

Las partes deberán allegar el escrito sustentatorio y su réplica, a la dirección de correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE,

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado.

Firmado Por:

Juan Pablo Suarez Orozco

Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b9f27a75ae8098620f7673063649b6987cbeba5d9e68e7278e6bd0f541d6c985**

Documento generado en 24/07/2023 04:11:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO: RECURSO DE ANULACIÓN INSTAURADO POR SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DE TECNOLOGÍA SAS CONTRA EL LAUDO ARBITRAL DICTADO EN EL PROCESO ARBITRAL CLAUDIA MARCELA PRIETO CÁRDENAS COMO CONVOCANTE CONTRA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DE TECNOLOGÍA SAS COMO CONVOCADA.

Rad. 00 2023 01613 01

Cumplidos como se encuentran los requisitos establecidos en los artículos 40 y 42 de la Ley 1563 de 2012, **SE ADMITE** el recurso de anulación que interpuso el apoderado de la sociedad Soluciones Estratégicas De Tecnología SAS contra el Laudo Arbitral que dictó el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 de mayo de 2023 dentro del trámite arbitral en el que fungieron Claudia Marcela Prieto Cárdenas como convocante contra Soluciones Estratégicas De Tecnología S.A.S. como convocada.

Ejecutoriado este proveído, ingresen las presentes diligencias **inmediatamente** al despacho para proveer lo que en derecho corresponda.

Notifíquese,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Magistrada

Rad. 00 2023 01613 01

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **25484c0a89b75116c377bbf595afcd8d2ae480a75fdf2eb266a0bfa4fcd29101**

Documento generado en 24/07/2023 08:44:53 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Ponente
SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	Conflicto de Competencia
DEMANDANTE	Delma Yojana Torres Camargo
DEMANDADO	Clara Inés Olachea García y otros
RADICADO	11001220300020230152900
PROVIDENCIA	Interlocutorio 47
DECISIÓN	**Asigna competencia**
FECHA	Veinticuatro (24) de Julio de dos mil veintitrés (2023)

1. ASUNTO

Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Once y Doce Civiles del Circuito de esta ciudad.

2. ANTECEDENTES

2.1. El 3 de abril de 2018, la señora Delma Yojana Torres Camargo promovió demanda contra Clara Inés Olachea García, Jorge Adolfo Torres Camargo, Ashley Marie, Stephanie Michelle, Nathalie Sabrina y Melanie Samantha Torres Olachea, junto a las personas indeterminadas, con el fin que se declare que adquirió por prescripción extraordinaria de dominio el apartamento 505 y el parqueadero 83 de la Urbanización Quinta Ramos, ubicados en la calle 13 sur No. 08-70, los cuales se identifican con las matrículas inmobiliarias 50S-40207526 y 50S-40207636 respectivamente.

Su conocimiento le correspondió por reparto al Estrado Once Civil del Circuito de Bogotá, bajo el radicado 11001310301120180017100 y su admisión tuvo lugar el 22 mayo siguiente.

2.2. El 17 de febrero de 2023, el citado Despacho judicial declaró la nulidad de lo actuado con posterioridad al 23 de febrero de 2022 y ordenó la remisión del expediente a su homólogo, el Doce Civil del Circuito.

La anterior decisión la adoptó amparado en el inciso 1º del artículo 121 del Código General del Proceso, en atención a que había transcurrido más de un año desde que fue intimado el curador *ad litem* de los herederos indeterminados de Jorge Adolfo Torre Camargo, la nulidad se había alegado por una de las partes, no fue prorrogada la competencia, los intervinientes no tuvieron conductas dilatorias y no se había proferido sentencia de primera instancia.

2.3. El 14 de junio siguiente, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá repelió el conocimiento de esa actuación bajo el argumento de haberse saneado el motivo de invalidez evocado en razón a que la convalidaron por haber actuado después de configurada. En ese orden, promovió conflicto negativo de competencia.

CONSIDERACIONES

3.1. Los mencionados juzgados pertenecen a la especialidad civil de la Jurisdicción Ordinaria, así como al Distrito Judicial de Bogotá y, por tanto, compete a este Tribunal

resolver el conflicto planteado, por mandato del artículo 139 del Código General del Proceso.

3.2. Sobre la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso existen diferentes posiciones; sin embargo, prevalece la interpretación de la Corte Constitucional como órgano garante de los derechos fundamentales a un debido proceso y en relación con el acceso a la administración de justicia, el juez natural, el acatamiento de los plazos judiciales y la celeridad procesal.

El Máximo Tribunal Constitucional en sentencia C-443 de 2019 del 25 de septiembre, declaró inexequible la expresión *"de pleno derecho"* contenida en el inciso 6° del artículo 121 *del estatuto procesal* y condicionó el resto del párrafo *"en el entendido de que la nulidad allí prevista* ***debe ser alegada antes de proferirse la sentencia****, y de que* ***es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes*** *del Código General del Proceso"* (negrilla propia).

Pues en su sentir *"(…) la medida legislativa es incompatible con la Carta Política, ya que, primero, no solo no contribuye eficazmente a la materialización del derecho a una justicia oportuna, sino que constituye un obstáculo para la consecución de este objetivo, y, segundo, porque la norma comporta una disminución de las garantías asociadas al derecho al debido proceso y al derecho a una justicia material, al compeler a los jueces resolver los trámites a su cargo dentro de los plazos legales, incluso si ello implica cercenar los derechos de las partes o afectar el desenvolvimiento natural de los mismos, y al dar lugar al traslado de las controversias a*

operadores de justicia que carecen de las condiciones y de los elementos de juicio para adoptar una decisión apropiada»"[1].

Sobre su saneamiento, expuso que no puede desatenderse la voluntad del legislador plasmada en el Código General del Proceso, que *"(...) determinó que* ***los vicios deben ser saneados en cada etapa procesal, de suerte que, en general no se pueden alegar en las fases subsiguientes (art. 132 y 133),*** *ni tampoco por quien dio lugar al hecho que la origina o por quien después de ocurrida actúa en el proceso sin proponerla (art. 135), que la nulidad debe ser declarada judicialmente,* ***y que se entiende saneada cuando no fue propuesta en la oportunidad debida,*** *cuando la actuación fue convalidada, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa (art. 136).”* (Se destaca).

Asimismo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SC845 de 25 de mayo de 2022, precisó que la configuración de la aludida pérdida de competencia requiere (i) del vencimiento del plazo máximo de duración del proceso sin obtener resolución de fondo y (ii) que una de las partes la invoque ante el juez de la causa, con antelación a esa decisión. En igual sentido, concluyó que podía convalidarse la nulidad derivada de ese actuar siempre que se cumplan las exigencias del artículo 136 del Código General del Proceso, por no proponerse oportunamente y cumplir su finalidad el acto, dictarse sentencia.

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-443 de 2019.

3.3. Desde esa perspectiva se aprecia que el libelo genitor fue repartido el 3 de abril de 2018 y su admisión se efectuó mediante proveído el 22 de mayo siguiente, es decir, dos días hábiles después de los 30 que exige el inciso 6º del canon 90 del estatuto adjetivo.

Por tanto, fue superado el lapso anual con el que contaba el Juez Once Civil del Circuito de Bogotá para resolver la litis, el cual inició el día siguiente de la fecha en que fue presentada la demanda, esto es, el 4 de abril de 2018, a la luz de lo preceptuado en el inciso 1º de la regla 121 *ibídem,* en concordancia con el precepto citado en el párrafo que precede.

A lo anterior le sigue que los términos judiciales estuvieron suspendidos entre 9 de noviembre de ese año y 14 de enero de 2019, por 28 días hábiles; en consecuencia, luego de descontar ese intervalo, el año se cumplió el **22 de mayo de esa anualidad**, aun cuando en auto de 28 de marzo de 2019 no se dijo nada al respecto y se tuvo como vencimiento el 3 de abril subsiguiente.

Si a ello se suma que hubo una prórroga de seis meses más, adoptada en providencia de 28 de marzo de 2019, el fenecimiento de ese semestre aconteció el **22 de noviembre postrero** y – se resalta- que a la fecha no se ha emitido aún fallo de primera instancia.

De manera que no puede pasarse desapercibido que hizo bien el Juez Once Civil del Circuito de esta urbe en reconocer la pérdida de competencia sobre el proceso 11001 31 03 011 2018 00171 00 y ordenar la remisión del expediente al juzgado siguiente, pues así lo solicitaron varios de los integrantes de la

parte demandada y todavía no se ha decidido la instancia, por lo que ese actuar se ciñó a lo trazado por la Corte Suprema de Justicia, como se citó *ab initio*.

Ahora bien, no desconoce esta Magistratura que no debió invalidar lo actuado en atención a que después de 22 de noviembre de 2022, se surtieron varias actuaciones, incluso de la parte convocante, como descorrer el traslado de las excepciones de la contestación de la demanda realizada por el curador *ad litem* de los herederos indeterminados (6 de mayo de 2021)[2]; solicitar la fijación de fecha y hora para adelantar la audiencia inicial (15 de marzo de 2022)[3] y pedir el rechazo de plano de las pruebas aportadas por las partes (10 de junio de 2022)[4], entre otras.

Lo anterior evidencia que su intervención constante sin proponerla, después de configurarse la causal de nulidad, la convalidó y saneó (art. 135 y 136-1 *ibidem*), puesto que fue solo hasta el 3 de octubre de 2022 que la deprecó, amparada en la previsión 121 de la codificación procesal.

Empero, ello no conduce a que la competencia continúe en ese despacho judicial y que el competente para seguir conociendo del asunto no sea el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, pues es quien debe proseguir con las etapas subsiguientes del juicio de la referencia y a partir del estado en que se encuentra, sin perjuicio de dejar claro que la actuación

---

[2] 001CuadernoPrincipal, 46ApoderadoDemandanteInterponeRecursoReposicion.pdf del Expediente digital
[3] 001CaudernoPrincipal, 38ApoderadaParteDemandanteSolicitaFijarFechaAudiencia.pdf del Expediente digital
[4] 001CuadernoPrincipal, 42AoderadaDemandanteSolicitaRechazodePruebas.pdf del Expediente digital

no podía declararse nula por las razones expresadas previamente.

3.4. Valga anotar que con la decisión aquí adoptada, esta Magistratura no pretende avalar la conducta del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, pues, sin lugar a dudas, la actuación revisada refleja una larga e injustificada dilación para adelantar el trámite de primera instancia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que es al Juez Doce Civil del Circuito de Bogotá, a quien le corresponde conocer del proceso de la referencia.

SEGUNDO: Por Secretaría remítanse las diligencias al referido despacho judicial, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9a6ab64150ce524dfa7abfb2270ac653fc606befbf3f9c72fc5fe33d3ee1a881**

Documento generado en 24/07/2023 03:57:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Proceso	Verbal – Acción de protección al consumidor
Demandante	Copropiedad Edificio Taurus Módulo Kentaurus
Demandado	Constructora Superhavit - AT S.A.
Radicado	110013199 001 2021 81602 01
Instancia	Segunda

Proyecto discutido en Salas de Decisión del 12 y 19 de julio de 2023.

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia proferida el 26 de julio de 2022 por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el asunto en referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones[1]

La Copropiedad Edificio Taurus Módulo Kentaurus, instauró demanda para que, a través de la acción de protección al consumidor, se disponga que, la Constructora Superhavit-AT S.A., debe: *i)* reconocer la garantía legal establecida en la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor; *ii)* realizar las reparaciones, cambios o sustituciones de todos los bienes que presentan irregularidades evidenciadas en los soportes técnicos anexados; y *iii)* ser acreedora de la multa por el mayor valor permitido, ante el no reconocimiento de la garantía legal.

[1] Cuaderno de la SIC, archivos 02 y 04.

2. Fundamentos fácticos de las pretensiones

2.1. La copropiedad demandante explicó que el 28 de febrero de 2020 firmó el acta de entrega de las zonas comunes del Edificio Taurus Módulo Kentaurus, que le hiciera la Constructora Superhavit-AT S.A., en la que, se dejó claro que existían inconformidades y observaciones "*detalladas en el documento adjunto*", mismas que no eran taxativas.

2.2. Ante diversas inconformidades presentadas, se contrató con Protocolo Integral S.A.S., la realización de un levantamiento de las irregularidades y defectos en la construcción en la edificación, más la valoración y cuantificación de los hallazgos; lo que evidenció más de 160 aspectos, avaluados en $467.984.611.

2.3. Al interior del informe técnico obtenido, se clasificaron los hallazgos a la licencia de construcción en ocho cuadros:

"CUADRO 1 – SEMISOTANO

1- Cuarto de bombas no aparece en sitio
2- Parqueaderos con anchos por debajo de las medidas de licencia
3- Falta puerta de escalera de emergencia
4- Parqueaderos en sitio sin número en frente de cuartos técnicos
5- Aparece subestación donde es parqueadero de licencia de construcción
6- Aparece espacio para planta de emergencia y cuarto de bombas
7- En sitio de subestación aparece parqueadero.

CUADRO 2 – PRIMER PISO

1- Escalera de acceso localizada en otro lugar al de la licencia
2- Rampa de acceso discapacitados con diferente ubicación
3- No existe parque infantil en la licencia
4- Falta un depósito y 2 cuartos útiles en sitio
5- Área de depósito al aire libre anexo a acceso de parqueaderos es parte del edificio Kentaurus.

CUADRO 3- SEGUNDO PISO

1- Faltan 2 depósitos en sitio.
2- Los anchos de rampas están licenciados de diferente ancho para cada tramo y el radio de giro en la actualidad dificulta la fácil circulación. Aunque está construido como lo licenciado. (ver definiciones Acuerdo 45 Artículo 734)

CUADRO 4- TERCER PISO

1- En sitio se encuentra un depósito adicional.
2- Falta un parqueadero privado, en licencia hay 18, se encuentran 15 privados y 2 de visitantes.
3- Falta puerta de emergencia en acceso a escalera.
4- La cubierta de parqueaderos no se encuentra licenciada.

CUADRO 5- CUARTO PISO

1- En sitio hay dos depósitos no autorizados en licencia.
2- Faltan 5 parqueaderos privados.

CUADRO 6- PISO APARTAMENTOS

1- Falta puerta de emergencia de escalera de emergencia.

CUADRO 7- PISO 19 ZONA SOCIAL

1- No existe en sitio puerta de acceso a depósito en frente de cocineta.
2- Cocina distribuida en sitio de otra manera.
3- Zona de lavaplatos en sitio no autorizado en licencia.
4- Ducha localizada en sitio no autorizado en licencia.
5- Jacuzzi localizado en sitio no autorizado en licencia.
6- Área de cubierta plana utilizada como área de salón en sitio.
7- Zona de turco en sitio no autorizado en licencia, baños distribuidos en sitio diferentes a los licenciados.

CUADRO 8- PISO 20 HELIPUERTO.

1- No se tiene acceso a cubierta final.
2- Escalera a piso 20 construida de diferente forma y materiales a lo licenciado.
3- Distribución en sitio de zona de bombas diferente a lo licenciado."

2.4. Adicional a los anteriores, existen otros hallazgos evidenciados en el informe técnico presentado por el experto.

2.5. El 07 de diciembre de 2020 se formuló reclamación directa y prejudicial ante la fustigada para el reconocimiento de la garantía inmobiliaria por los defectos en la construcción y en las zonas comunes.

2.6. El 23 de diciembre de 2020 recibió respuesta negativa para lo solicitado.

2.7. La activa ha gastado, para el momento de presentación de la demanda, más de $45.000.000 en honorarios al arquitecto que realizó el estudio y al abogado, para velar por el cumplimiento de las obligaciones de la constructora.

2.8. Bajo juramento estimatorio tasó las pretensiones en $467.984.611.

3. Posición de la parte pasiva[2]

Constructora Superhavit-AT S.A., *i)* dio respuesta a cada uno de los hechos, *ii)* se opuso a las pretensiones de la demanda, y *iii)* formuló como excepciones de mérito: a) inexistencia de la obligación, b) inexistencia de violación de derecho alguno frente a los consumidores, c) buena fe, d) genérica, e) cobro de lo no debido, f) prescripción de la acción de protección al consumidor, y g) incumplimiento de la carga probatoria del demandante.

4. La sentencia de primera instancia[3]

La Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de julio de 2022 profirió sentencia, en la cual procedió a:

> *"PRIMERO: Declarar que la sociedad SUPERHAVIT-AT S.A., vulneró los derechos del consumidor de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*
>
> *SEGUNDO: Ordenar a la sociedad SUPERHAVIT-AT S.A., identificada con el Nit. No. 900215626-9, y en favor de la COPROPIEDAD EDIFICIO TAURUS MODULO KENTAURUS, identificada con el NIT. No. 900829850-8, a título de efectividad de la garantía, dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a lo dispuesto en el parágrafo, proceda con el suministro e instalación de las puertas corta fuegos para entrada a escaleras desde el semisótano hasta el piso 20 de la COPROPIEDAD EDIFICIO TAURUS MODULO KENTAURUS; entrega formal de la red contra incendio con las respectivas certificación y prueba de funcionamiento.*
>
> *PARÁGRAFO: Para el efectivo cumplimiento de la orden, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la COPROPIEDAD EDIFICIO TAURUS MODULO KENTAURUS, deberá prestar toda la colaboración que sea necesaria, otorgando los permisos y poniendo a disposición las zonas que se deberán ser intervenidas por parte de la sociedad SUPERHAVIT-AT S.A. Momento en el cual se computará el término conferido a la demandada para el cumplimiento.*
>
> *TERCERO: Declarar la prescripción de la acción sobre las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones del presente fallo.*

[2] Ibidem, archivo 15, páginas 83 y 93.
[3] Ibidem, archivo 027.

CUARTO: Se ordena a la parte demandante que, dentro del término improrrogable de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo concedido para darle cumplimiento a la orden impartida en la Sentencia, informe a este Despacho si la demandada dio cumplimiento o no a la orden señalada en esta providencia, lo anterior, con el objetivo de dar inicio al trámite jurisdiccional de verificación del cumplimiento, conforme lo señalado en el numeral 11° del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, so pena de declarar el archivo de la actuación en sede de verificación del cumplimiento, con sustento en el desistimiento tácito contemplado en el numeral 1° del artículo 317 del Código General del Proceso.

QUINTO: El retraso en el cumplimiento de la orden causará una multa a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, por el equivalente a una séptima parte del valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.

SEXTO: En caso de persistir en incumplimiento de la orden que se imparte la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá decretar el cierre del establecimiento de comercio, de conformidad con el literal b) del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.

SEPTIMO: Sin perjuicio del trámite de la imposición de alguna de las sanciones previstas en los numerales que anteceden, téngase en cuenta que la sentencia presta mérito ejecutivo y ante el incumplimiento de la orden impartida por parte de la demandada, el consumidor podrá adelantar ante los jueces competentes la ejecución de la obligación.

OCTAVO: Condenar en costas a la parte demandada. Para el efecto se fija por concepto de Agencias en Derecho, atendiendo los lineamientos que en tal sentido ha establecido el Consejo Superior de la Judicatura, la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigente, que serán pagados por dicho extremo procesal. Por Secretaría efectúese la correspondiente liquidación."

Las anteriores determinaciones quedaron fundadas en que, las cuestiones alegadas no eran de carácter estructural, por tanto, el término de prescripción aplicable consistía en el de un año a partir de la entrega o el uso.

En ese sentido se determinó que, la garantía estuvo vigente hasta abril de 2020, por lo que, la demanda debió impetrarse a más tardar en abril 2021; empero, solo lo fue hasta el 23 de septiembre de 2021; lo que dejó sin fuerza lo pedido, al haber sido alegado tal instituto.

Contrario, las puertas cortafuego y la red contraincendios no fueron entregadas, por lo que, para estas, no era aplicable dicha contabilización, lo que tornó procedente su exigibilidad, al cumplir estos pedidos con los requisitos para la prosperidad parcial de la acción.

5. Recursos de apelación

5.1. De la parte demandante[4]

La parte actora interpuso recurso de apelación, sustentado en esta instancia[5] contra el fallo anterior en procura de su modificación bajo los siguientes raciocinios:

5.1.1. Refutó la declaratoria de prescripción, para lo que consideró que, no se tuvo en cuenta el material probatorio aportado con la demanda, lo que llevó a tener por sentado que las zonas comunes fueron entregadas en abril de 2019, porque en ese momento se encontraba habitado en su totalidad el edificio, lo que no fue demostrado.

5.1.2. Si bien, el artículo 24 de la Ley 675 de 2001 presume la entrega de los bienes privados esenciales y no esenciales de dos formas distintas, debe considerarse que, la tesis adoptada por el fallador a partir del uso y del goce admite prueba en contrario; tal como lo es en este caso el "*acta de entrega de zonas comunes firmada por las partes el 28 de febrero de 2020*", data que fue ratificada por el demandado en el escrito de contestación y que no debió ponerse en discusión.

5.1.3. Se asumió sin ningún sustento que, el 51% de los coeficientes de la copropiedad ya estaban enajenados para abril de 2019; lo que no encuentra respaldo y hace imposible afirmar que las zonas comunes del edificio fueron entregadas en esa calenda.

5.2. De la parte demandada[6]

La pasiva interpuso recurso de apelación, para el cual, únicamente ofreció los puntos de reparo ante la primera instancia lo que llevó a que, por falta de sustentación en esta sede se diera la declaración de deserción, en auto del 29 de

[4] Ibidem, archivo 084.
[5] Ibidem, grabación 27, minutos 01:20:44 a 01:21:46, archivos 28, 29 y 31 y cuaderno de segunda instancia, archivo 06.
[6] Ibidem, grabación 27, minutos 01:23:33 a 01:24:22, archivo 31 y cuaderno de segunda instancia, archivo 09.

septiembre de 2022.

6. Intervención del no recurrente[7]

La demandada presentó oportunamente escrito como oposición al recurso planteado por su contraparte, enfocado a la conservación del proveído en los términos en que fue dictado.

II. CONSIDERACIONES

1. La competencia del Tribunal está delimitada por los puntos de controversia expuestos en la sustentación de la apelación, y están vedados los temas que no hayan sido debatidos frente al fallo de primera instancia como enmarcan los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.

2. Desde ahora se advierte que se modificará la sentencia refutada, toda vez que, los puntos de inconformidad permiten despachar favorablemente las pretensiones del medio de impugnación vertical.

3. En el presente, la controversia se ha suscitado en el marco fáctico de los desacuerdos presentados por la Copropiedad Edificio Taurus Módulo Kentaurus con la Constructora Superhavit-AT S.A., frente a las zonas comunes y para lo cual, se acudió a la efectividad de la garantía legal; misma que, fue declarada prescrita para la mayoría de los pedimentos, excepto para lo no entregado (puertas cortafuego y red contraincendios); derroteros para los que se adujo que, no había transcurrido el término para hacer exigible tal obligación.

4. En lo que respecta al marco normativo nos encontramos dentro de una acción de protección al consumidor para la efectividad de la garantía legal en los términos del artículo 78 Constitucional[8] y del numeral 3, del artículo 56 de la Ley

[7] Cuaderno de segunda instancia, archivo 07.
[8] Constitución Política de Colombia.
Artículo 78: La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

1480 de 2011[9], sobre cuestiones no estructurales presentadas en las áreas comunes de la obra desarrollada por la demandada; como seguidamente se ampliará dado el caso concreto.

5. En el contexto anterior, se pasa a abordar el punto de apelación que se centra en la declaración de prescripción planteada como desacuerdo; exceptuando lo atinente a las puertas cortafuego y la red contraincendios que no se hallan en contienda.

Para el efecto se tiene que, el delegado de la primera instancia declaró la prescripción al evidenciar superado el término para acudir a la jurisdicción en procura de una orden que coaccionara a la adecuación de las obras con sustento en la garantía legal, puesto que, encontró la radicación de la demanda fuera del límite temporal de un año que restringe la norma, contado desde el vencimiento de dicho amparo. Al respecto, se verifica:

5.1. Las disposiciones aplicables:

5.1.1. El numeral 5, del artículo 5 del Estatuto del Consumidor dispone que, la garantía, es una *"[o]bligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto."*

A su turno, el artículo 7 *ejusdem*, define:

> *"Artículo 7°: Garantía Legal. Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos.*
>
> *En la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación de medio, la garantía está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio, según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado."*

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

[9] Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil[10], esta *"[c]onsiste, en breves palabras, en una obligación de carácter restaurativa puesta sobre el productor o comercializador para asegurar el correcto estado, calidad, idoneidad o seguridad de los bienes o servicios colocados en el mercado de consumo",* y que tiene como rasgos:

> *"(I) Es un tipo de garantía, esto es, una «[s]eguridad o protección frente a un peligro o contra un riesgo»[11], consistente en un vicio que pueda afectar un bien o servicio;*
>
> *(II) Está sometido al término de duración definido por el productor o por la ley (artículo 8° de la ley 1480 de 2011), vencido el cual se extingue la garantía;*
>
> *(III) Es exigible de toda persona que intervenga en el proceso de creación y comercialización -quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, importe, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos-;*
>
> *(IV) Los deudores se obligan solidariamente (artículo 10 de la ley 1480 de 2011), por ende «puede exigirse [a] cada uno de los deudores… el total de la deuda» (artículo 1568 del Código Civil);*
>
> *(V) Es una obligación condicional, pues su nacimiento depende «de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no» (artículo 1530 del Código Civil), como es que el producto presente un vicio;*
>
> *(VI) Por sí mismo no genera un deber indemnizatorio, pues se agota con la restauración del producto, su sustitución o la devolución de lo pagado (artículo 11 de la ley 1480 de 2011, en concordancia con el decreto 735 de 2013);*
>
> *(VII) Su existencia y satisfacción no puede generar cargas o erogaciones para el consumidor, pues la «reparación [es] totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos» (artículo 11 de la ley 1480 de 2011);*
>
> *(VIII) Los defectos cubiertos son de dos (2) clases: «buen estado» y «calidad, idoneidad, seguridad». La calidad es la «condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él»; la idoneidad es la «aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado», y seguridad impone que el producto «no present[e] riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores» (artículo 5° de la ley 1480 de 2011).*
>
> *(IX) La garantía es de orden público, por lo que no es susceptible de ser renunciada sino en los casos señalados en la ley, como sucede con productos usados (artículo 8° de la ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 12 del decreto 735 de 2013), o con imperfectos o deterioros (artículo 15 de la ley 1480 de 2011)."*
>
> (Subraya fuera del texto).

[10] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC2850-2022. MP. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
[11] Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastra S.R.L., 1993, p. 144.

5.1.2. Para el término de esta figura se establece:

> *"Artículo 8o. Término De La Garantía Legal. El término de la garantía legal será el dispuesto por la ley o por la autoridad competente. A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, será el anunciado por el productor y/o proveedor. El término de la garantía legal empezará a correr a partir de la entrega del producto al consumidor. (…)*
>
> *Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) años, y para los acabados un (1) año."*
> (Subraya fuera del texto).

5.1.3. Frente a lo que debe probarse, refiere el artículo 10 de la misma obra:

> *"Artículo 10. Responsables De La Garantía Legal. Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía legal recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos.*
>
> *Para establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad, bastará con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad establecidas en el artículo 16 de la presente ley."*
> (Subraya fuera del texto).

5.1.4. Sobre la clasificación de los bienes comunes en esenciales y no esenciales, debe de acudirse a la Ley 675 de 2011[12] que consigna:

> *"Bienes comunes: Partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular.*
>
> *Bienes comunes esenciales: Bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás tendrán el carácter de bienes comunes no esenciales. Se reputan bienes comunes esenciales, el terreno sobre o bajo el cual existan construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, los cimientos, la estructura, las circulaciones indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones generales de servicios públicos, las fachadas y los techos o losas que sirven de cubiertas a cualquier nivel."*
> (Subraya fuera del texto)

5.1.5. En tratándose de la entrega, esta se reputa en el marco del artículo 24 *ibidem*:

[12] Ley 675 de 2011. Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.

"Artículo 24. Entrega De Los Bienes Comunes Por Parte Del Propietario Inicial. Se presume que la entrega de bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados de un edificio o conjunto, tales como los elementos estructurales, accesos, escaleras y espesores, se efectúa ***de manera simultánea con la entrega de aquellos según las actas correspondientes****.*

Los bienes comunes de uso y goce general, ubicados en el edificio o conjunto, tales como zona de recreación y deporte y salones comunales, entre otros, ***se entregarán a la persona o personas designadas*** *por la asamblea general o en su defecto al administrador definitivo, a* ***más tardar*** *cuando se haya terminado la construcción y enajenación de un número de bienes privados que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad. La entrega deberá incluir los documentos garantía de los ascensores, bombas y demás equipos, expedidas por sus proveedores, así como los planos correspondientes a las redes eléctricas, hidrosanitarias y, en general, de los servicios públicos domiciliarios.*

Parágrafo 1o. Cuando se trate de conjuntos o proyectos construidos por etapas, los bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados se referirán a aquellos localizados en cada uno de los edificios o etapas cuya construcción se haya concluido.

Parágrafo 2o. Los bienes comunes deberán coincidir con lo señalado en el proyecto aprobado y lo indicado en el reglamento de propiedad horizontal."
(Subrayas y negrilla fuera del texto)

5.1.6. Para la forma de hacerse valer la garantía debe acudirse al Decreto 1074 de 2015[13]

"Artículo 2.2.2.32.3.3. Garantía Legal De Bienes Inmuebles. En el caso de bienes inmuebles, para solicitar la efectividad de la garantía legal sobre acabados, líneas vitales del inmueble (infraestructura básica de redes, tuberías o elementos conectados o continuos, que permiten la movilización de energía eléctrica, agua y combustible) y la afectación de la estabilidad de la estructura, definidos en la Ley 400 de 1997, el consumidor informará por escrito dentro del término legal de la garantía, al productor o expendedor del inmueble el defecto presentado.

El productor o expendedor, entregará una constancia de recibo de la reclamación y realizará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, una visita de verificación al inmueble para constatar el objeto de reclamo.

Parágrafo 1. Cuando la solicitud de la garantía legal sea sobre los acabados y las líneas vitales, el productor o expendedor deberá responder por escrito al consumidor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la visita de verificación del objeto del reclamo. Este término podrá prorrogarse por un período igual a la inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo así lo requiera, situación que deberá ser informada por escrito al consumidor.

A partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor, el productor o expendedor reparara el acabado o línea vital objeto de reclamo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la respuesta.

[13] Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Si una vez reparado el acabado o la línea vital, se repite la falla, el consumidor a su elección, podrá solicitar una nueva reparación, la reposición del acabado o la línea vital afectados o la entrega de una suma equivalente al valor del acabado o línea vital afectados.

Parágrafo 2. Frente a la reclamación por la afectación de la estabilidad de la estructura del inmueble, el productor o expendedor deberá responder por escrito al consumidor, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la realización de la visita de verificación señalada en el presente artículo. Este término podrá ser prorrogado por un período igual a la inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo así lo requiera. En todo caso, deberá ser informado por escrito al consumidor.

A partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor y dentro del plazo que señalen los estudios técnicos que definan la solución a implementar, el productor o expendedor reparara el inmueble, restituyendo las condiciones de estabilidad requeridas conforme a las normas de sismorresistencia vigentes con que fue diseñado.

De no ser posible la reparación del inmueble ni restituir las condiciones de estabilidad que permitan la habitabilidad del mismo, el productor o expendedor del bien procederá a la devolución del valor total recibido cómo precio del bien. Para tal efecto, y en caso de existir crédito financiero, reintegrara al consumidor tanto el valor cancelado por concepto de cuota inicial, así como la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de crédito a la entidad financiera correspondiente, debidamente indexado con base en la variación del IPC. Así mismo, deberá cancelar a la entidad financiera, el saldo total pendiente del crédito suscrito por el consumidor. Una vez realizada la devolución del dinero al consumidor y a la entidad financiera, se producirá la entrega material y la transferencia del derecho dominio del inmueble al productor o expendedor.

En caso de no existir crédito financiero, el productor o expendedor deberán reintegrar el valor total cancelado por concepto del bien, debidamente indexado con base en la variación del IPC.

En todo caso, el consumidor devolverá el inmueble libre de cualquier gravamen y deuda por concepto de impuestos, servicios públicos o cánones de administración.

La devolución del dinero se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que el productor o expendedor y el consumidor suscriban la escritura pública de transferencia de la propiedad del inmueble a la persona indicada por el productor o expendedor y siempre que se hubiere procedido con el registro de la correspondiente escritura. Los gastos de la escritura pública y registro correrán por cuenta del productor o expendedor.

Parágrafo 3. Para los bienes inmuebles, el término de la garantía legal de los acabados y las líneas vitales será de un (1) año y el de la estabilidad de la obra diez (10) años, en los términos del artículo 8 de la Ley 1480 de 2011.
(Decreto 735 de 2013, art. 13)

Artículo 2.2.2.32.3.4. Garantía Legal De Bienes Comunes De Propiedades Horizontales. En los bienes inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, la garantía legal sobre los bienes comunes deberá ser solicitada por el administrador designado en los términos del inciso 1 del artículo 50 de la Ley 675 de 20010 las normas que la modifiquen o adicionen.

El procedimiento y términos para hacer efectiva la garantía legal de estos bienes, será el establecido en el artículo 2.2.2.32.3.3 del presente Decreto, según corresponda.

(Decreto 735 de 2013, art. 14)
(Subrayas y negrilla fuera del texto)

5.2. En el presente asunto se alegó que las disparidades detectadas recaen en las zonas comunes con defectos no estructurales, de allí que, para acudir en búsqueda de alivio judicial debía acreditarse, entre otros aspectos *i)* la reclamación directa al encargado dentro de la vigencia de la garantía y *ii)* la presentación de la demanda dentro de la temporalidad de un año siguiente a la finalización de la garantía.

Sobre el primero, el *a quo* no ofreció reparos, puesto que, esta se tuvo por presentada el 07 de diciembre de 2020.[14]

Ahora, el segundo de estos fue el que derivó en la prescripción declarada; en tanto, se adujo que el uso de la propiedad horizontal se produjo en abril de 2019 por lo que, la garantía estuvo vigente hasta abril de 2020 y por contera, la demanda debió presentarse a más tardar en dicho mes, del 2021; sin embargo, lo fue el 23 de septiembre de 2021[15].

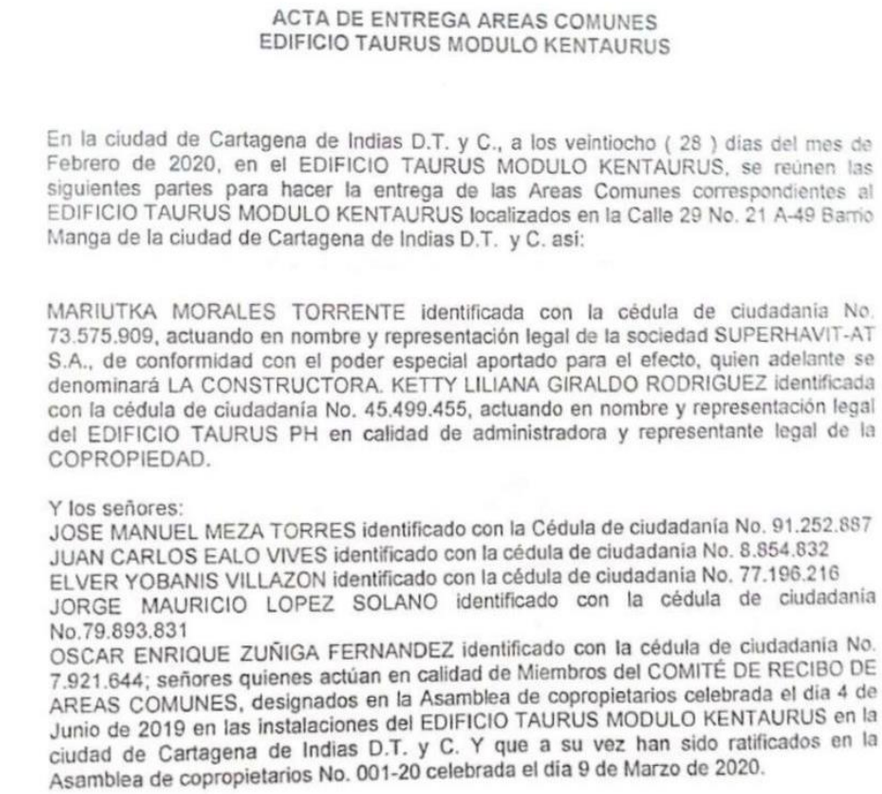
Dicha verificación se sentó por el juzgador, en los casos en que no existe un acta de entrega (como cuando no se firman las actas o no se quiere recibir), por lo que no puede decirse que, no empieza a descontarse el término de la garantía, lo que "*se debe valorar a partir también, del uso, del disfrute de determinado bien o zona común; y es el punto de partida para contabilizar el término de la garantía legal*"[16].

5.3. Como punto de divergencia frente a la sentencia rebatida, se tiene por esta Corporación:

5.3.1. En el presente caso, sí fue elaborada y suscrita un acta de entrega de las zonas comunes el 28 de febrero de 2020 para el módulo 2, de la torre Kentaurus,

[14] Cuaderno 01, grabación 27, minutos 08:50 a 10:00, ver también archivo 04, páginas 312 a 335.
[15] Ibidem, grabación 27, minutos 1:00:00 a 1:02:05.
[16] Ibidem, grabación 27, minutos 33:30 a 34:20; ver también, minutos 1:00:00 a 1:00:30.

Edificio Tauros PH, de Cartagena[17], data que no fue desconocida por los contendientes.



ACTA DE ENTREGA AREAS COMUNES
EDIFICIO TAURUS MODULO KENTAURUS

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2020, en el EDIFICIO TAURUS MODULO KENTAURUS, se reúnen las siguientes partes para hacer la entrega de las Areas Comunes correspondientes al EDIFICIO TAURUS MODULO KENTAURUS localizados en la Calle 29 No. 21 A-49 Barrio Manga de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. así:

MARIUTKA MORALES TORRENTE identificada con la cédula de ciudadanía No. 73.575.909, actuando en nombre y representación legal de la sociedad SUPERHAVIT-AT S.A., de conformidad con el poder especial aportado para el efecto, quien adelante se denominará LA CONSTRUCTORA. KETTY LILIANA GIRALDO RODRIGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.499.455, actuando en nombre y representación legal del EDIFICIO TAURUS PH en calidad de administradora y representante legal de la COPROPIEDAD.

Y los señores:
JOSE MANUEL MEZA TORRES identificado con la Cédula de ciudadanía No. 91.252.887
JUAN CARLOS EALO VIVES identificado con la cédula de ciudadania No. 8.854.832
ELVER YOBANIS VILLAZON identificado con la cédula de ciudadania No. 77.196.216
JORGE MAURICIO LOPEZ SOLANO identificado con la cédula de ciudadanía No.79.893.831
OSCAR ENRIQUE ZUÑIGA FERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadania No. 7.921.644; señores quienes actúan en calidad de Miembros del COMITÉ DE RECIBO DE AREAS COMUNES, designados en la Asamblea de copropietarios celebrada el dia 4 de Junio de 2019 en las instalaciones del EDIFICIO TAURUS MODULO KENTAURUS en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. Y que a su vez han sido ratificados en la Asamblea de copropietarios No. 001-20 celebrada el dia 9 de Marzo de 2020.

Encabezado del acta de entrega de las zonas comunes.

Sobre lo visto, se tiene que en el hecho 12 de la demanda se indicó que, "*[E]l pasado 28 de febrero de 2020, se firmó el Acta de Entrega de Zonas Comunes del Edificio Taurus Módulo Kentaurus, en donde se dejó claro que las inconformidades y observaciones detalladas en el documento adjunto, no son taxativas, teniendo el carácter de preliminares, habida cuenta que una vez recibidas, las mismas debían estar sometidas a una inspección realizada por la persona y/o empresa escogida por la Asamblea General de Propietarios.*"[18]

En la contestación a ese punto de la demanda, se adujo que *"[al décimo segundo]: Es cierto, en el sentido que la Copropiedad al momento de suscribir el acta de entrega de zonas comunes, manifestaron algunas observaciones en relación con la inspección de las zonas comunes."*[19]

[17] Ibidem, archivo 04, páginas 84 a 86.
[18] Ibidem, archivo 02, página 07.
[19] Ibidem, archivo 15, página 87.

La entrega en sí, fue un tema que cursó pasivo y sin exclusiones, para la fijación del litigio, al tenerse aquello como un hecho cierto[20], exceptuado de prueba, en aplicación del inciso cuarto, del numeral 7, del artículo 372 del C.G.P; incluso, al haberse interrogado a los testigos sobre la entrega y funcionamiento de las áreas comunes[21], ello ya no ofrecía disidencia.

Sobre la cifra porcentual requerida para la entrega de los bienes comunes no esenciales del artículo 24 de la Ley 675 de 2011, debe mirarse que, aún de aceptarse que conforme a los documentos acercados con la demanda[22], la copropiedad hubiera alcanzado esa proporción en data anterior (al 28 de febrero de 2020), la norma establece varios requisitos para ese acto, como lo son la terminación de la construcción y la enajenación de un número de bienes privados que represente por lo menos el 51% de los coeficientes de copropiedad; condiciones que permiten la realización de la formalidad a la persona o a un número plural, designadas por la asamblea general o al administrador definitivo.

Delineado que impide aplicar otros supuestos no acaecidos, puesto que la asamblea de copropietarios designó un "*comité de recibo de áreas comunes*"[23] y dicho despliegue existió, de ahí que, no se caiga en el hipotético planteado por la autoridad con funciones jurisdiccionales, porque no debe suplirse aquello que la norma reza como condición, cuando en efecto se cumple.

5.3.2. Aunque en los documentos traídos con la contestación obra respuesta del 06 de noviembre de 2019 extendida por Superhavit-AT al edificio inmiscuido, en el que enlista que las zonas comunes del "*salón social, piscina, jacuzzi, sauna, gimnasio, baño zona social, cuarto de bombas y pasillos*" fueron entregadas el 16 de abril de 2019[24], ello no enerva la entrega del 28 de febrero de 2020, tanto por la aceptación de la contendiente, como por lo abarcado.

---

[20] Ibidem, grabación 23-2, minutos 1:57:10 a 1:58:48.
[21] Ibidem, grabación 23-1, minutos 15:00, 19:00 y 01:25:00, testigos Carlos Eduardo Angulo Ujueta y María Mercedes Oliveros Jiménez.
[22] Ibidem, archivo 04, página 336, punto 3°.
[23] Ibidem, archivo 04, páginas 84 a 86.
[24] Ibidem, archivo 15, página 64.

Se destaca que, a excepción del pasillo, las demás áreas vuelven a aparecer en el pluricitado documento del 28 de febrero; es decir, de existir repeticiones o aclaraciones debieron proponerse y probarse, como orienta el inciso primero del canon 167 del Código General del Proceso; lo que no ocurrió; así, la reiteración de esas zonas no puede tomarse en detrimento de la demandante cuando la contraparte no ofreció protesta suficiente; más, al imponerse la interpretación en la forma más favorable al consumidor "*favor consumitoris*" del artículo 4 de la Ley 1480 de 2011.

5.3.3. La forma en que fue alegada la prescripción por el extremo pasivo en su excepción no fue diáfana en los cómputos de los que pretendía beneficiarse; para lo que se otea que, las fechas de quietud de la parte no fueron demarcadas por el interesado en su contestación, quien, luego de aludir al numeral 3, y al inciso segundo del numeral 6 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor arguyó que:

> *"De acuerdo con la citada disposición y en concordancia con los hechos de la demanda, nos encontramos ante un caso de controversias contractuales. De conformidad con lo anterior, en aplicación de la regla consagrada en el numeral 3 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011, para iniciar una acción de protección del consumidor por una controversia de tal naturaleza, la parte demandante contaba con un plazo de 1 año para interponer su demanda.*
>
> *En ese orden, le solicito respetuosamente declare probada la excepción formulada y, en consecuencia, absuelva a mí representada, dentro del presente proceso."*

Nótese que, nada refirió la defensa sobre la forma en que consideraba edificada la prescripción; por tanto, su protesta fue falta de precisión sobre el conflicto que se creaba entre las normas que regulan la garantía legal y el cómputo que operaba en el particular. Lo pregonado no solo debía alegarse, como consigna del artículo 2513 del Código Civil, sino que, estaba llamado a enmarcarse en el contorno de tal aspiración; puesto que, como ha referido la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil "*quien enarbola la prescripción, debe alegar y demostrar la presencia del fenómeno en su componente temporal, esto es, cuando inicia y, el momento de su configuración.*"[25]

[25] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia STC2041-2021. MP. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

En esa línea, indicó el apoderado de la constructora que, la copropiedad tuvo conocimiento de los hechos desde el 2018, ante lo cual, invitó a que se valorara desde cuándo el "*consumidor tuvo conocimiento de los supuestos hechos*" y que ello llevó a la ocurrencia del "*fenómeno de la caducidad*"[26].

Empero, dicho embate no tiene mayor injerencia porque, como ya se sostuvo, se extendió un acta de entrega, documento que marca la pauta para la verificación del plazo fijado por el legislador; así hay convergencia con lo dicho por el *a quo*, de no estar en un evento de publicidad engañosa[27]; y menos aún de vicios ocultos.

Visto lo anterior, no debió declararse la prescripción de la acción de protección al consumidor, porque el acta de entrega de las áreas comunes se suscribió el 28 de febrero de 2020, calenda de inicio que extendió la garantía legal hasta el 28 de febrero de 2021 y con ello, el lapso para acudir a la sede jurisdiccional se aumentó a dicho tiempo, en el 2022; por ulterior, radicada la demanda como se soportó el 23 de septiembre de 2021[28]; no asiste reproche para cerrar el litigio a una decisión de fondo.

Al estar en término la reclamación directa y la presentación del escrito inaugural, se debe dar paso a analizar las demás cuestiones, como ordena el artículo 282 de la codificación procesal civil.

6. *Las excepciones de fondo planteadas en la demanda, pendientes de resolver.*

Las demás excepciones del archivo de contestación a la demanda, de *i)* inexistencia de la obligación, *ii)* inexistencia de violación de derecho alguno frente a los consumidores, *iii)* buena fe, *iv)* genérica, *v)* cobro de lo no debido, y *vi)* incumplimiento de la carga probatoria del demandante; deben resolverse de la siguiente manera:

---

[26] Ibidem, grabación 23-2, minutos 48:30 a 50:35.
[27] Ibidem, grabación 27, minutos 54:05 a 58:00.
[28] Ibidem, archivo 01.

6.1. Las excepciones de fondo enlistadas como inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido e incumplimiento de la carga probatoria (enunciados *i*, *v* y *vi*).

Como se mostró en anterior, la obligación derivada de la garantía legal recae en el productor o proveedor; dado que, las faltas a la calidad e idoneidad quedarán demostradas al probarse el defecto. En este ámbito surge relevante que:

6.1.1. La obligación jurídica de reconocer y pagar las sumas de dinero pretendidas emerge en la medida en que, visto por la delegatura lo atinente a la prueba del consumo y la reclamación (lo que no fue disentido en este grado), se tiene por configurado el defecto al mediar el dictamen de un experto; sin que surja para la constructora justificación en una causal de exoneración de responsabilidad; así, las sumas recabadas hallan un soporte legal para su declaración.

6.1.2. La demandante a través del dictamen pericial acercado mostró los desperfectos achacados en la obra; ante lo cual, la convocada en atención a lo permitido en el artículo 228 del Código General del Proceso, solicitó únicamente la comparecencia del experto para ser interrogado en la audiencia de práctica de pruebas, sin valerse de otro medio de similar talante para refutar los hallazgos allí descritos[29].

En el desarrollo de la vista pública, tuvo la oportunidad de inquirir al arquitecto Rafael José Ávila Rodríguez quien elaboró el dictamen presentado por Protocolo Integral S.A.S; acerca de su idoneidad, imparcialidad y contenido del informe; para lo que hizo especial énfasis en las acreditaciones de estudio, experiencia y vínculos con la activa[30].

Ahora, al efectuarse la confrontación de lo manifestado por el apoderado de la demandada en los alegatos de conclusión en cuanto a que el perito no posee "*ningún tipo de conocimiento*", ni "*experticia suficiente*", debe señalarse que, ello no fue lo que resultó respaldado para con el profesional, en cuanto a la trayectoria como

[29] Ibidem, archivo 17.
[30] Ibidem, grabaciones 24, minutos 27:00 a 1:07:30 y grabación 24-2, minutos 13:10

arquitecto y bagaje en el diseño, construcción y entrega de proyectos; con experiencia aproximada de 31 años en la verificación de "*hallazgos*", como actividad que se debe realizar "*siempre*", encausada a la revisión de "*conformidad*" de todas las obras que han estado a su cargo, y en cuanto a copropiedades, con unos 15 años[31].

Asimismo, adujo el experto, que solo ha cobrado sus honorarios por el estudio realizado, sin existir ningún tipo de pacto por resultado, comisión o porcentaje por lo que se llegara a obtener dentro del proceso; que se ha tratado de una "*gestión que viene haciendo desde el año 2019, por el mismo valor del contrato*"; resultado de lo cual, el documento del 15 de junio de 2021 es un "*resumen adicional a todo lo que se ha ejecutado*" [32].

Lo visto es insuficiente para truncar la imparcialidad del auxiliar de la justicia porque se trata de quien ha venido en escrutinio de las obras desde el inicio de su contratación con el fin de contrastar lo licenciado por la curaduría y lo entregado; sin que resulte probado que su actividad se ha extendido a otras esferas en desvío de su objetivo, para beneficiar únicamente a la propiedad horizontal.

Se recalca que, no se probó la desproporción de su juicio, ni que estuviera nublada su independencia o aminorada la capacidad suasoria de sus razonamientos; contrario a lo anterior, el experto conoce lo acontecido con las faltas de conformidad, desde momentos atrás y dicho saber hace fiable lo rendido.

Ahora, su seguimiento desde octubre de 2019 no impide que pueda referirse a situaciones anteriores, porque su análisis se sustenta en hallazgos que se consolidaron a partir de la entrega, misma que se suscribió el 28 de febrero de 2020; con ello, si se quiere, se entendería carente de objeto lo que discrepó la parte.

No basta con decir que el perito no es idóneo o imparcial, sino que tendría que demostrarse, bajo alguna de las alternativas que habilita la libertad probatoria, lo que en el particular no se logró sellar.

---

[31] Ver nuevamente: grabaciones 24, minutos 27:00 a 1:07:30 y archivo 04, páginas 214 a 224.
[32] Ibidem, grabaciones 24, minutos 33:00 a 35:20.

6.1.3. Con todo, esta Corporación si encuentra sustento para obviar el peso de lo relatado frente a algunos de los aspectos consolidados en el cuadro de presupuesto de intervención de zonas comunes del 20 de junio de 2021, que integran los hallazgos con su valor, sustento además del juramento estimatorio, anexo al dictamen pericial[33]. Se tienen como motivos para descartar de la experticia:

i) Las instalaciones eléctricas – Ítem 12 del cuadro de descripciones[34].

Este derrotero deberá excluirse de las órdenes a impartir, en tanto, las certificaciones de RETIE[35] y la RETILAP[36], fueron extendidas sin novedad[37]; sobre ello, no se acreditó que la autoridad encargada ofreciera reparos o que, surgieran anomalías con posterioridad a la habilitación, dentro del término de garantía, atribuibles a la constructora; de ahí que, tal punto del consolidado de hallazgos carezca de prueba.

Al guardar estas certificaciones fundamento en normas técnicas, los cambios requerían de una carga suasoria superior; porque al existir un chequeo positivo a

---

[33] Ibidem, archivo 04, páginas 225 y 226.

[34] Ibidem, archivo 04, página 225.

[35] Ver en el Ministerio de Minas y Energías, en las preguntas frecuentes:

¿Qué es el RETIE?

El RETIE - Reglamento de Instalaciones Eléctricas es un Reglamento Técnico-Legal obligatorio para Colombia, el cual señala las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas.

¿Qué es la inspección con fines de certificación y qué requisitos debe cumplir?

La inspección de la instalación eléctrica es el examen y comprobación de la funcionalidad de la instalación y la determinación de su conformidad con los requisitos establecidos en el RETIE y debe ser hecha sobre la base de un juicio profesional, por lo que requiere que la persona que la realice posea las más altas competencias sobre el tema a inspeccionar y lo demuestre con su certificación de competencia profesional.

La inspección realizada por un organismo independiente es el mecanismo para validar la declaración de cumplimiento, se debe realizar a las instalaciones que requieran certificación plena y debe cumplir los requisitos mencionados en el numeral 34.3 de RETIE.

Información recuperada de: https://www.minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/reglamentos-tecnicos/preguntas-frecuentes-reglamentos-t%C3%A9cnicos-del-sector-energ%C3%ADa-el%C3%A9ctrica/

[36] Ver en el Ministerio de Minas y Energías, en las preguntas frecuentes:

¿Cuál es el objeto del RETILAP?

El Reglamento de Iluminación y Alumbrado Público tiene por objeto fundamental establecer los requisitos, reglas y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, para garantizar: Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual. / La seguridad en el abastecimiento energético / La protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo. / La protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo. / El uso racional y eficiente de energía (URE) en iluminación. / Seguridad y confort. / La seguridad nacional en términos de garantizar el abastecimiento energético mediante uso de sistemas y productos que apliquen el Uso Racional de Energía. / La protección de la vida y la salud humana. / La protección de la vida animal y vegetal. / La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. / La protección del Medio Ambiente.

Información recuperada de: https://www.minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/reglamentos-tecnicos/preguntas-frecuentes-reglamentos-t%C3%A9cnicos-del-sector-energ%C3%ADa-el%C3%A9ctrica/

[37] Ibidem, grabaciones 24-2, minutos 13:15 a 17:00. Relató el perito que los documentos RETIE y la RETILAP, hacen referencia al reglamento técnico de instalaciones eléctricas y de alumbrado, los que son emitidos por la entidad certificadora sin comentarios; pese a las observaciones respecto a la planta, por más que esté certificada.

los requerimientos de funcionamiento (entre otros), debía mostrarse que los defectos actuales contrarían la calidad, idoneidad y seguridad.

Igualmente, hace parte de ese numeral la conexión "*de la bomba contraincendio de forma independiente en la subestación*", lo cual debe ser evaluado dentro de lo ordenado por el primer grado, lo que no es materia de discusión y atañe a la red contra incendios.

ii) Gestión a estudios, interventoría y honorarios profesionales – Ítem 17 del cuadro de descripciones[38].

Este se circunscribe al *"[d]iseño del sistema de detección y extinción contra incendios"*, lo que quedó abarcado dentro de la orden de adecuación de la ya citada red contraincendios; de ahí que, una nueva imposición en ese sentido llevaría a duplicar una carga que la demandada ya tiene la obligación de cumplir, con la entrega formal y prueba de funcionamiento[39].

Para las filas de "*interventoría de obra*" y "*diseño eléctrico, gestión de permisos para modificación de ubicación de subestación y planta de emergencia*" se registra cantidad 0 (cero) y valor total (0), por lo que se tienen como no comprendidas dentro de la tasación realizada y fuera del ánimo de persecución por esta vía.

iii) Ítems que conciernen al mantenimiento.

Estos serán excluidos al indicar en cero su cantidad y valor total, aunado a que el interés y justificación en el mantenimiento de estos contenidos no fue motivado al interior del escrito de demanda, de ahí que, no se dio una pretensión de manera precisa y clara que bajo ese miramiento implicara la garantía. Los anteriores, incumben a[40]:

> *3.01. Suministro y aplicación de pintura tipo 1 en muros zonas comunes color blanco marca: pintuco. Incluye todos los halles de ascensores de todos los pisos con*

[38] Cuaderno de primera instancia, archivo 04, página 226.
[39] Ibidem, archivo 27, página 02. Acta que contiene la parte resolutiva de la sentencia.
[40] Cuaderno de primera instancia, archivo 04, páginas 225 y 226.

observaciones en: Remates de marcos de puertas contra muros, zócalos manchados con pintura, remate general de muros.
3.03. Pintura elementos metálicos.
5.04. Mal estado de rejillas de aguas lluvias de desagües de parqueaderos.
10.03. Desmonte, suministro y reinstalación de membrana interior de piscina.
15.02. Reubicación parque infantil.

iv) Ítems que ya fueron objeto de orden en la sentencia de primera instancia y cursan pacíficos ante esta Sala. Al no estar en litigio la sección del fallo que acogió algunas de las pretensiones, se excluye del estudio abordado, lo concerniente a las puertas cortafuego, subpuntos 5.01 y 5.02, y todo el punto 8 de la red contra incendios.

6.1.4. En conclusión, al no haberse valido la pasiva de otra prueba homóloga y no truncar su forma de contradecir, la anterior, deberá soportar lo que aquella evidenció, dada la importancia que el conocimiento experto aporta a la resolución del proceso, como ha hecho hincapié el Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, en la Sala de Casación Civil [41].

> "4.*7.2. La prueba por expertos sirve al proceso para explicar hechos, fenómenos, teorías, o el actuar de pares, que* ***requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos****. El auxilio en la ciencia* ***supone la incorporación al juicio de conocimientos validados por la comunidad científica, los cuales escapan al saber del juzgador***."
> (Negrillas fuera del texto).

6.1.5. Como resumen, lo que permanece en el examen de modificación atañe a las siguientes especificaciones que, reposan con mayor detalle en la experticia[42]; empero, en razón al tamaño de la información únicamente se transcribe la descripción:

1	**Actividades Preliminares**
1.01	Desmonte actual rampa de acceso de discapacitados
1.02	Desmonte de actual baranda de rampa de discapacitados
1.03	Desmonte parque infantil
1.04	Desmonte de rebabas, sobrantes de concreto de fundidas en vigas y columnas
1.05	Retiro de acero a la vista de concreto y reparación con epóxico
1.06	Desmonte de puerta metálica existente de subestación

[41] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC5186-2020. MP. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.
[42] Ver nuevamente: Ibidem, archivo 04, páginas 225 y 226.

1.07	Desmonte de puerta metálica existente en planta eléctrica
1.08	Esgrafiado de placas de parqueaderos de tercer piso

2	**Mampostería Y Pañetes**
2.01	Suministro e instalación de muro en superboard 8 mm de 1 cara estructura B6 para cerramiento de ductos a la vista
2.02	Pañetes y pinturas en cuartos de contadores de gas
2.03	Reparaciones de manchas y afectaciones por salida de humo de planta de emergencia en muro de fachada

3	**Acabados De Muros Y Techos**
3.02	Pintura para cielorraso y placas de concreto (remates) color banco- gris pintura para zonas comunes
3.04	Pintura de remates de puertas de ascensores
3.05	Suministro y aplicación de pintura para demarcación de parqueaderos de discapacitados
3.06	Suministro y aplicación de pintura para demarcación de número de parqueaderos
3.07	Suministro y aplicación de pintura epóxica en pisos para pisos y muros en cuartos de bombas de sótano y cuarto de subestación
3.08	Detalles finales de estuco y pintura en escalera
3.09	Suministro, cambio e instalación de enchape de techo cerámico en basuras

4	**Acabados De Pisos Y Enchapes**
4.01	Suministro e instalación de plantilla de concreto reforzada pulida para parqueadero piso 3
4.02	Suministro e instalación de enchape mármol de bordillos exteriores de jardinera
4.03	Suministro y aplicación de impermeabilización en zonas húmedas (cuarto de bombas, cuarto de bombas superior, y zona bajo jacuzzi)
4.04	Cambio de piezas de cemento de adoquín sueltas

5	**Carpintería Metálica**
5.03	Desmonte, suministro e instalación de escalera de acceso a piso 21, debido a inconvenientes de acceso, seguridad y evacuación
5.05	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable central de la escalera de acceso ppal
5.06	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable rampa discapacitados
5.07	Desmonte de cubierta existente en lámina alveolar en mal estado, suministro e instalación de lámina alveolar de 6mm para cambio con todos los elementos necesarios
5.08	Pasamanos de escalera de emergencia debe ser continuo
5.09	Reparación rejilla de ventilación de muro de parqueaderos hacia parque infantil
5.10	Zócalo en bordillo de mármol y bordillo para pasto sintético en parque infantil

5.11	Protección de tuberías verticales
5.12	Instalación de canal de cubierta hacia vecino colindante

6	**Carpintería De Madera**
6.01	Suministro e instalación de puerta de depósito salón social piso 19
6.02	Instalación entrepaño de mueble de cocina de zona social
6.03	Pieza de madera en turco

7	**Aparatos Y Accesorios**
7.01	Trazado e instalación de topellantas existentes en parqueaderos

9	**Impermeabilizaciones**
9.01	Impermeabilización cubierta (remates de cubierta, mediacañas, goteros e impermeabilización), en techos de piso 21

10	**Piscina**
10.01	Trabajos de suministro e instalación de sensores y alarmas basado en ley de piscinas
10.02	Acabados integrales del cuarto inferior de piscina
10.04	Reubicación botón antipánico
10.05	Pasamanos acceso a piscina desde hall
10.06	Rampa de acceso de discapacitados
10.07	Señalización de evacuación
10.08	Cerramiento independiente entre piscina de niños y adultos
10.09	Baranda de acceso interior a piscina
10.10	Jacuzzi suministro de agua
10.12	Jacuzzi accesibilidad, baranda de acceso

11	**Resanes De Grietas De Paños, Reparación De Filos De Ventanas Y Pintura Fachada**
11.01	Resanes de grietas en vanos de ventanerías exteriores, grietas de muros
11.02	Reparación humedades y pintura general de fachada

13	**Instalaciones Hidrosanitarias**
13.01	Entrega final de bombas de acuerdo con cumplimiento de soporterías, bases, anclajes, accesorios debidamente instalados y puesta en marcha de sistema de agua potable
13.02	Realización de protocolo de entrega de bombas y de cuarto de bombas hidráulicas
13.03	Protección y pintura para tuberías de acometida principal de gas
13.06	Pintura de bases de bombas
13.07	Bases antivibratorias de equipos de presión constante

14	**Acceso A Parqueaderos**
14.01	Demolición rampas de concreto acceso a parqueaderos Rampas de 2,40 x 3,70; 9,96 x 4,00 (radios de giro)

14.02	Retiro de escombros
14.03	Nuevas rampas de concreto con incremento de un metro para radio de giro
14.04	Acabado de placa de piso acabado piso 3

15	**Otras Obras Civiles**
15.01	Construcción rampa de discapacitados
15.03	Cambio estructura metálica y cambio de cubierta en zona de cuarto de bombas piso 21
15.04	Escalera de acceso a cubierta
15.06	Acabado final de cubierta de helipuerto
15.07	Soportería de tuberías de tanques elevados
15.08	Instalación eléctrica de zona de tanques de almacenamiento

16	**Limpieza Y Aseo**
16.02	Jornales por recolección, retiro, bajada de escombros hasta el punto de acopio y aseo permanente
16.03	Protección para pisos

18	**Otros Requerimientos**
18.01	Parqueaderos de áreas comunes (Pendientes de entrega a copropiedad)
18.02	Parqueadero de discapacitados (Faltante)
18.03	Parqueaderos privados con anchos menores a licencia En semisótano: 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 En primer piso: 21, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 En segundo piso: 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 En tercer piso: 56, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69 En cuarto piso: 74, 75
18.04	Parqueaderos de visitantes con ancho menor a licencia En semisótano: 12, 13 En primer piso: 31, 32 En cuarto piso: 71, 76
18.05	Modificaciones a licencia de construcción finalmente ejecutada
18.06	Reposición área anexa a acceso a parqueaderos sobre vía principal y enfrente de Taurus

6.2. Las excepciones de fondo enlistadas como inexistencia de violación de derecho alguno frente a los consumidores y buena fe (enunciados *ii y iii).*

Refirió la demandada que, al no haber trasgredido norma alguna no debe aplicarse sanción; sumado, la constructora estuvo en disposición de cumplir las inconformidades comunicadas.

En ese escenario ausculta la Sala de Decisión que, bajo el rumbo de lo que se ha venido iterando, se dio la transgresión a la garantía legal, sin que la excepción planteada ofrezca exactitud frente a aspectos disímiles a los ya vistos; menos aún, con entidad de excluirla de responsabilidad.

Frente a la disponibilidad que se indicó ha mostrado la pasiva para dar alcance a lo que se tornara del caso, en consonancia con lo acotado por el perito en cuanto a que, la relación con la constructora "*siempre ha sido buena*" y "*positiva*" desde su punto de vista; poco aporta a esta instancia, puesto que, ni en la etapa de conciliación, ni en la de suspensión del proceso[43] logró consolidarse un arreglo, situación que no impide la definición judicial de lo traído a desatar, alcanzado este estadio.

Lo visto tampoco desdice la buena fe de la demandada en la etapa de entrega, puntualmente con la voluntad para atender los reparos; pero distinto es que, pese a la receptividad los defectos logran acreditarse y son estos, los que dan paso a la acción incoada.

En cuanto a la mala fe de la demandante, se tiene que, debió probarse; tal como pregona el artículo 769 del Código Civil, al presumirse que el actuar de las partes se sitúa dentro de la buena fe y que en materia de consumo ha alinderado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil[44]:

> *"No en vano, el numeral 2.2. del artículo 3° de la ley 1480 de 2001 obliga al consumidor a «obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las autoridades públicas», de lo cual emana un deber de colaboración, «en el sentido de que 'se orienta a la satisfacción del interés de su cocontratante, lo que específicamente supone, según reconocida doctrina iusprivatista, una dinámica cooperación en beneficio ajeno' (SC, 2 ag. 2001, exp. n.° 6146, reiterada en SC5327, 13 dic. 2018, rad. n.° 2008-00193-01)» (SC4670, 9 nov. 2021, rad. n.° 2015-00370-01)."*

Sin embargo, se valora que, las excepciones emprendidas por la pasiva no desdibujan las premisas del artículo 16 del Estatuto del Consumidor, en el que se lee:

---

[43] Ibidem, grabación 22.
[44] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC2850-2022. MP. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

> *"Artículo 16. Exoneración De Responsabilidad De La Garantía. El productor o proveedor se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de:*
>
> *1. Fuerza mayor o caso fortuito;*
> *2. El hecho de un tercero;*
> *3. El uso indebido del bien por parte del consumidor, y*
> *4. Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano.*
>
> *Parágrafo. En todo caso el productor o expendedor que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien."*

Por ende, no se alegó y menos se probó que los defectos tuvieran un amparo legal que alejara a la constructora de la responsabilidad endilgada; lo que hace patente el acompañamiento que debe darse a lo planteado por el censor.

6.3. La excepción de fondo enlistada como genérica (enunciado *iv*).

No se avizora en los términos del artículo 282 del Estatuto Procesal Civil, situación alguna que deba ser declarada de oficio, bajo la habilitación residual dada al sentenciador, ni aún bajo la permisión *ultra* y *extra petita* que caracteriza la acción de protección al consumidor; una vez agotada la valoración individual y en conjunto de la prueba.

7. *La modificación a la sentencia.*

Al estar frente a un asunto que cuenta con un dictamen pericial, cuya contradicción fue superada en los términos vistos, y aunado a que, no surgió contradicción al juramento estimatorio que conlleve a segregar secciones diferentes a las atrás mencionadas de la experticia; deberá revocarse el ordinal tercero de la decisión, para que en su lugar se imponga la orden a la Constructora Superhavit-AT S.A., como efectividad de la garantía legal de que es titular la Copropiedad Edificio Taurus Módulo Kentaurus, y proceda a adecuar los defectos probados sobre el módulo 2, de la torre Kentaurus, Edificio Tauros PH, de Cartagena.

Para el efecto, se tomarán como referencia los plazos establecidos en la sentencia de primera instancia, en aras de la armonía y unicidad a guardar, y no turbar los despliegues y coordinación entre las involucradas para el cumplimiento.

8. Sin más miramientos se impone modificar la decisión, sin condena en costas a la apelante ante el curso favorable de esta impugnación. Se condenará en costas a la parte demandada por las costas de primera y segunda instancia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Séptima Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero. Modificar la sentencia proferida el 26 de julio de 2022 por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el presente radicado; y en consecuencia se **revoca** el ordinal tercero de la parte resolutiva.

Segundo. Disponer que, en adelante, el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia disponga:

> **Tercero: Declarar** que la Constructora Superhavit-AT S.A., infringió los derechos del consumidor derivados de la garantía legal de que es titular la Copropiedad Edificio Taurus Módulo Kentaurus, en consecuencia, dentro del término de noventa (90) días hábiles siguientes a lo dispuesto en el parágrafo, deberá adecuar lo atrás reseñado **(punto 6.1.5. ver experticia**[45]**)** dentro de cada uno de los puntos de:
>
> 1. Actividades preliminares
> 2. Mampostería y pañetes
> 3. Acabados de muros y techos
> 4. Acabados de pisos y enchapes
> 5. Carpintería metálica
> 6. Carpintería de madera

[45] Ver archivo 04, páginas 225 y 226.

7. Aparatos y accesorios
9. Impermeabilizaciones
10. Piscina
11. Resanes de grietas de paños, reparación de filos de ventanas y pintura fachada
13. Instalaciones hidrosanitarias
14. Acceso a parqueaderos
15. Otras obras civiles
16. Limpieza y aseo
18. Otros requerimientos

Parágrafo: Para el efectivo cumplimiento de la orden, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la Copropiedad Edificio Taurus Modulo Kentaurus, deberá prestar toda la colaboración que sea necesaria, otorgando los permisos y poniendo a disposición las zonas que se deberán ser intervenidas por parte de la sociedad Superhavit-AT S.A. Momento en el cual se computará el término conferido a la demandada para el cumplimiento.

Tercero. Confirmar en lo demás la decisión.

Cuarto. No condenar en costas a la apelante, al salir avante sus reclamaciones. **Condenar** en costas a la parte demandada por las costas de primera y segunda instancia. Las de primera serán liquidadas por el A quo. Como agencias en derecho por esta segunda instancia, el Magistrado sustanciador fija el equivalente a un (1) smmlv.

Quinto. Devolver el expediente a la autoridad jurisdiccional de origen, una vez ejecutoriada esta providencia. Por secretaría procédase de conformidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE;

Los Magistrados[46],

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

[46] Documento con firma electrónica colegiada.

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

Firmado Por:

Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Manuel Alfonso Zamudio Mora
Magistrado
Sala 005 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **abea73ebf8bb47f74246e7f1b5b0782aa8e07f88395f64dface5d583a86515ad**
Documento generado en 24/07/2023 03:43:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Ref. Proceso verbal de **ÓSCAR EMILIO RESTREPO PATIÑO** y otros contra **DIEGO FÉLIX ÁLVAREZ TOBÓN** y otros. (Despacho comisorio). **Rad.** 11001-3199-002-2016-00315-01.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Para efectos de la contradicción del dictamen se convoca a la audiencia de que trata el artículo 228 del C.G.P. para las DIEZ (10:00 A.M.) de la mañana del próximo DIEZ (10) de agosto del año en curso. La cual se llevará a cabo en la Sala de Audiencias No. DIEZ (10) de esta Corporación. Comuníquese a las partes y al experto quien deberá comparecer en la fecha y hora indicada, al lugar señalado.

Se deja a disposición de los intervinientes, por el término de DIEZ (10) días, el dictamen allegado, junto con su adición, así como la documentación aportada por Bancolombia (canon 231 *ibídem*), para ese fin por la Secretaría de la Sala, compártase en forma inmediata el link del expediente.

Con todo, en esta providencia, también puede ser consultado: 02-2016-00315-01.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
Aida Victoria Lozano Rico
Magistrada
Sala 016 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f6bfd238981b5c101a8baa9a9b0e0d0d3065393ae5d6a89965b3986658d5c334**
Documento generado en 24/07/2023 04:55:30 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Expediente No. 003201300676 02

De conformidad con el artículo 316 del C.G.P., se acepta el desistimiento del recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 47 Civil del Circuito dentro del proceso de la referencia.

Las apelaciones adhesivas planteadas por HDI Seguros S.A. y Enel Colombia S.A. E.S.P. quedan, por tanto, sin efecto (C.G.P., art. 322, par., inc. 2º).

No se condena en costas, por no haberse causado (CGP, art. 365, num. 8).
NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **44f07ffacc4224eb727ab0e01c64a9dbb8e96c51cab3d3cac5bdb740273d3821**
Documento generado en 24/07/2023 12:36:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Ref. Proceso verbal de pertenencia de **ISMAEL SARMIENTO RODRÍGUEZ** en contra de **EXPRESO DEL PAÍS S.A.** y otros. (Recurso de Casación). **Rad.** 11001-3103-003-2017-00174-01.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO A RESOLVER

Procede la suscrita Magistrada a resolver lo conducente, sobre la concesión del recurso extraordinario de casación, interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante.

II. ANTECEDENTES

1. Mediante providencia del 9 de junio pasado, proferida por esta Corporación, se confirmó el fallo emitido el 28 de marzo de la anualidad anterior, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, en el cual se desestimaron las pretensiones de la demanda[1].

2. En su contra, el accionante por conducto de mandatario judicial, interpuso el medio de impugnación que viene de comentarse[2].

III. CONSIDERACIONES

Dispone la legislación adjetiva civil que corresponde al magistrado sustanciador, la concesión de ese recurso extraordinario, como etapa

---

[1] Archivo "*09 Sentencia*" del "*02Cuaderno Tribunal*".
[2] Archivo ""*11.RecursoExtraordinarioCasacion.pdf*", *ibídem.*

anterior a su admisión por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para lo cual ha de observar la legitimación, procedencia, oportunidad y la cuantía del interés para recurrir, cuando ella sea necesaria (artículos 333 y ss. del C.G.P.).

En el caso presente, no se satisfacen la totalidad de las exigencias antes enunciadas. En efecto, el demandante y hoy recurrente está legitimado para interponerlo, porque apeló el fallo de primer grado, el cual fue confirmado por este Tribunal, siendo adversa a sus intereses esta última decisión judicial.

Con relación a los presupuestos restantes, se evidencia que, la sentencia impugnada fue emitida en segunda instancia por esta Sala, notificada por estado electrónico No. E-101 del 13 de junio del hogaño[3], al paso que, el recurso se interpuso el 16 siguiente[4], vale decir, en forma tempestiva.

Sin embargo, la cuantía del interés para recurrir, correspondiente al monto de la resolución desfavorable al impugnante, no supera los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000smlmv)[5], como lo exige el inciso primero de la regla 338 del Estatuto Ritual.

A propósito de ese aspecto, tiene dicho la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:

> "*está supeditado al valor económico de la relación jurídica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe hacerse para el día del fallo, aunque,* ***cuando la 'sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma'****. Lo anterior significa que,* ***si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su interés para recurrir en casación estará definido por lo pedido en la demanda****; pero, si aquella sólo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido interés estará dada por la desventaja que le deriva la decisión"* [6] (Se resalta).

---

[3] Archivo "*110 Estado electrónico*", *ejúsdem.*
[4] Archivo "*11.RecursoExtraordinarioCasacion.pdf", ejúsdem.*
[5] El Decreto 2613 de 2022 dispuso que a partir del 1° de enero de 2023, el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, ascendería a la suma de $1'160.000.
[6] Corte Suprema de Justicia Auto AC 5 de septiembre de 2013, rad. n° 2013-00288-00 reiterado en AC1852-2021.

Ahora bien, tratándose de un proceso de pertenencia, la referida Alta Corporación ha decantado que el interés para recurrir en casación se determina "*teniendo en cuenta el valor del inmueble sobre el que descansa el litigio (AC2325-2022)*", el cual debe establecerse acorde con el canon 339 del C.G.P. con *"los elementos de juicio que obren en el expediente. Sin embargo, 'el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario', y el magistrado decidirá de plano"*; además, puntualizó que no es viable *"adelantar actividad probatoria adicional o permitir la incorporación de nuevas pruebas (AC1294-2022, AC2325-2022)"*[7].

En el *sub examine*, en la demanda en el acápite *"proceso competencia y cuantía",* el actor la estimó *"superior a CIENTO ONCE MILLONES DE PESOS ($111.000.000.oo)"*[8]. Aportó también copia del *"[f]ormulario para declaración sugerida del impuesto sobre vehículos automotores"* del rodante materia de la controversia, correspondiente al año 2018, en el que se señaló como avalúo comercial $71.590.000[9]; copia de un recibo de caja por la compra de dicho bien, signado en el 2011, por $185.000.000[10]. Además, obra una experticia elaborada en el 2019, por un *"perito valuador",* concluyendo que *"*[*e*]*l análisis matemático evidencia que el vehículo con placas SMY 977 tiene un valor comercial de: ciento cincuenta y siete millones ($157.000.000)"*[11].

Cabe advertir que, no resulta dable actualizar esas cifras, pues para ese fin le incumbía al interesado allegar la prueba idónea con el propósito de establecer que el precio del referido bien superaba esa última cantidad.

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la mencionada Alta Corporación, ha referido en relación con dicha temática que:

> *"En efecto, el único medio de prueba obrante en el expediente, que señala el valor del inmueble es el Certificado Catastral expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que señala como avalúo la suma de $147.969.000 para el año 2018[12], cifra muy inferior a la cuantía exigida como interés para recurrir en casación, que al 2020[13] ascendía a $ 877´803.000. Aunado a ello, es de resaltar que no es deber ni*

[7] Corte Suprema de Justicia, AC3153-20222, Rad. 001-20004-0028-01, 19 de julio de 2022.
[8] Archivo *"01DvdFolio57.pdf"* del "*01 Cuaderno Principal".*
[9] Folio 343 en *"04CuadernoNo1.pdf", ejúsdem.*
[10] Folio 12 *"04CuadernoNo1.pdf", ibídem.*
[11] Folio 249 *"04CuadernoNo1.pdf", ibídem.*
[12] Folio 307 cuaderno 1.
[13] Año en que se profirió la sentencia de segunda instancia.

del Tribunal o de la Corte actualizar motu proprio los valores del bien, pues tal labor recaída directamente en el interesado.
De manera que, de los compendios de juicio obrantes en el expediente, el avaluó catastral, no se avizora que la cuantía de 1000 SMLV se encuentre satisfecha"[14].

Siguiendo ese hilo conductor y atendiendo el valor acreditado del bien cuya declaratoria de dominio se solicitó y negó tanto en primera instancia como en segunda, según lo manifestado en la demanda y las pruebas recaudadas, es de $157.000.000, cifra inferior a la exigida en la normatividad adjetiva civil, la cual, para este año está establecida en $1.160.000.000.

Por consiguiente, como la resolución desfavorable al recurrente no supera el límite establecido en el canon 338 del C.G.P., no se concederá el medio de impugnación formulado.

IV. DECISIÓN

En consecuencia, la suscrita Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. NEGAR la concesión del recurso de casación, interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2023, por esta Corporación, en el asunto de la referencia.

Segundo. En firme esta providencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo referido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

[14] Corte Suprema de Justicia, AC1957-2022, Rad. 2021-00618-00, 16 de mayo de 2022.

Firmado Por:

Aida Victoria Lozano Rico

Magistrada

Sala 016 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e2173bb643fe51978d8518ea6da0af25d77b664864d7d02b4685372886361ed4**

Documento generado en 24/07/2023 08:38:55 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso N.°	11001319900320210193501
Clase:	VERBAL – ACCIÓN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Demandante:	LUZ VERDE REPRESENTACIONES S.A.
Demandada:	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. y otro

Con fundamento en los artículos 322 (incisos 2° y 3º del numeral tercero), 323 y 327 (último inciso) del Código General del Proceso, se ADMITE, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación que la compañía demandante impetró contra la sentencia que el 16 de febrero de 2023 profirió la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, y declaró probadas los medios exceptivos denominados "incumplimiento contractual de los deberes de la demandante Luz Verde Representaciones S.A.S." y "cumplimiento contractual del Banco Itaú", así como las intituladas por Credibanco S.A. como "ausencia de responsabilidad en Credibanco" y "responsabilidad del establecimiento de comercio".

En oportunidad, la secretaría controlará los traslados de que trata el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, luego de lo cual el asunto ingresará al despacho para resolver lo pertinente.

So pena de los efectos procesales correspondientes, la **sustentación** de la alzada admitida versará, únicamente, sobre los reparos concretos que se presentaron contra el fallo de primer grado, conforme lo regula el inciso final del artículo 327 del CGP y la jurisprudencia (CSJ. SC3148-2021 y STC12927-2022). Las partes harán llegar sus respectivos escritos al correo electrónico de la secretaría: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

Manuel Alfonso Zamudio Mora

Magistrado

Sala 005 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cf68ad9e442867523f711c617ab588fb317048f4949fd9d16b6bc9c6f89ced90**

Documento generado en 24/07/2023 04:27:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D. C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés

Magistrado Ponente: **Germán Valenzuela Valbuena**

Radicado: 1100 1310 3005 2012 00027 01 - **Procedencia**: Juzgado 1° Civil del Circuito Transitorio
Proceso: Pertenencia, Jorge Eliecer Lozano ***vs***. Samuel Rueda Gómez y personas indeterminadas.
Aprobación: Sala virtual 19/08/23. Aviso N.° 24
Decisión: **Confirma**

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 11 de noviembre de 2020[1], proferida por el Juzgado 1° Civil del Circuito Transitorio de esta ciudad.[2]

ANTECEDENTES

1. Jorge Eliecer Lozano Sánchez promovió demanda contra Samuel Rueda Gómez y demás personas indeterminadas, con el objeto de que se declarara que adquirió por prescripción extraordinaria de dominio el apartamento 621 y el garaje 451 ubicados en la Calle 63 N.° 10-61/71/83/87, predios que catalogó como de 'vivienda de interés social'. Y que, en consecuencia, se inscribiera la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

[1] Proceso asignado al magistrado sustanciador por reparto de **1° de septiembre de 2022.**
[2] Fallo por escrito en aplicación de lo dispuesto por la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se estableció la vigencia permanente del Decreto 806/20, normativa por la cual se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de la justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

2. En apoyo de sus pretensiones adujo que detenta la posesión real y material de los predios, con ánimo de señor y dueño, por más de doce años '*implícitos cinco (5) para vivienda de interés social*'. Que entró a los mismos el 28 de diciembre de 1998 y desde esa fecha los ha habitado, realizado mejoras, pagado impuestos y servicios públicos; que es reconocido como dueño por los vecinos, amigos, familiares, también por los diferentes administradores, vigilantes y aseadores que ha tenido el conjunto residencial Lourdes Center Chapinero P.H.

3. El demandado se notificó del proceso, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó: *"no haberse configurado los elementos exigidos por la ley para usucapir"*; y "*no es procedente la acción de pertenencia frente a unos bienes que el actor le ha dado la calidad de bienes de interés social*".

Al efecto, manifestó que el accionante no ha tenido la posesión de forma quieta y pacífica, puesto que los inmuebles fueron objeto de medidas cautelares de embargo y secuestro por parte de la Superintendencia de Sociedades en el proceso de liquidación obligatoria de Inversiones Lourdes 63 Ltda. –otrora titular de dominio de los bienes-.

Agregó que: *i.* los predios no son de vivienda de interés social, pues la sociedad que los construyó '*nunca lo hizo bajo tales presupuestos*'; *ii.* proyectos urbanísticos de dicha calidad '*se deben desarrollar bajo convenios específicos, previamente autorizados por los órganos correspondientes y con sujeción a la normatividad que vincula incluso la contratación estatal*'; y *iii.* el valor de los fundos '*en este momento*' es distinto al que tenían cuando se edificaron y '*de aceptarse lo que el actor hace, darle la calidad de vivienda de interés social, por el valor que ahora tiene, pues prácticamente con el paso del tiempo habrá muchos*

más bienes que pasaran por ese sólo hecho a ser considerados como vivienda de interés social'.

4. El curador ad-litem que representa a las personas indeterminadas contestó la demanda, pero no formuló ningún tipo de oposición.

5. El demandante desistió de las pretensiones respecto del garaje N.° 451 ubicado en el Edificio Lourdes Center Chapinero P.H., petición convalidada por el a-quo en auto de 8 de abril de 2013.

LA SENTENCIA APELADA

Denegó las pretensiones por cuanto no se acreditó que la vivienda fuera de interés social. Al respecto, el juez estimó que no obstante que el accionante ha poseído el bien objeto de las pretensiones, en el dictamen pericial se mencionó que el predio está ubicado en un edificio de uso mixto, esto es, con destinación residencial y comercial "*situación que por sí sola impediría considerar el apartamento como vivienda de interés social, en la medida en que se sitúa en un predio de uso mixto y no sólo de vivienda*", pero además, sigue el juez, que el hecho de que con antelación una persona jurídica tuviera la propiedad, también imposibilita que el bien se pueda considerar como de vivienda de interés social.

También consideró: "*Finalmente considera el despacho que si es cierto, tal como lo manifiesta el apoderado de la parte demandada en esta audiencia, que el demandante se opuso a las diligencia que se adelantaron dentro del proceso de liquidación de la sociedad Inversiones Lourdes 63 LTDA, tal situación tan solo debía ser interpretada en favor del aquí demandante como poseedor del bien, en medida de que con su actuación pretendía defender la propiedad antes mencionada*".

Y concluyo: "*Es importante destacar que en este proceso se deniegan las pretensiones sólo por una razón y es la ausencia de calificación del bien objeto de este proceso como vivienda de interés social, motivo por el cual considera este despacho que si el demandante hubiera accedido a la jurisdicción por la vía de la prescripción de un inmueble de naturaleza normal, sus pretensiones habrían sido estudiadas en ese sentido y las pretensiones de este proceso están limitadas a las invocadas en el libelo genitor*" (sic).

LA APELACIÓN

1. La parte demandante repara en que las leyes que regían para el año 2012 'no *consideraban que para catalogar un inmueble como vivienda de interés social solamente eran las que se encontraban en proyectos específicos para esa calificación*'.

Señaló que las únicas condiciones para que un inmueble se tipifique como de vivienda de interés social, son las contenidas en el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, y para el caso, que el valor del predio para la fecha de adquisición sea inferior a 135 Smlmv, presupuesto que en el *sub lite* se cumple de conformidad con el avalúo y la certificación catastral que obran en el expediente.

2. Ni el demandado ni el curador presentaron réplica.

3. En esta sede se incorporaron pruebas de oficio: Copia del acta diligencia de secuestro del inmueble materia del presente proceso, otrora surtido en un proceso liquidatorio ante la Superintendencia de Sociedades. E informe del Juzgado 51 Civil del Circuito sobre la

existencia de otro proceso entre las mismas partes, pero referido a un inmueble diferente.

CONSIDERACIONES

1. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, la acción de pertenencia permite adquirir la propiedad de bienes ajenos por la vía de la prescripción, a cuyo efecto el demandante deberá acreditar, en lo fundamental, que ha ejercido posesión sobre un bien de naturaleza comerciable, esto es, que ha desplegado actos de riguroso señorío sobre el respectivo bien, de forma tal que no quede duda acerca del dominio de hecho que desarrolla como poseedor material (arts. 2512 y 2518 C.C.), durante todo el tiempo indispensable para que se consuma el tipo de prescripción alegada. Se trata de requisitos concurrentes, por lo cual la falta de uno solo de ellos impedirá el éxito de la pretensión.

Para la prescripción extraordinaria, que es la invocada en el presente caso, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los elementos que la conforman, son: "*(i) posesión material actual en el prescribiente; (ii) que el bien haya sido poseído durante el tiempo exigido por la ley, en forma pública, pacífica e ininterrumpida; (iii) identidad de la cosa a usucapir; (iv) y que ésta sea susceptible de adquirirse por pertenencia*"[3]. Y para el *sub judice*, dado que el demandante acudió a la prescripción especial para viviendas de interés social, el término de posesión se reduce a 5 años tratándose de la usucapión extraordinaria.

2. El tribunal confirmará la sentencia apelada que negó las aspiraciones del convocante, aunque por razones diferentes, pues no obstante que la parte recurrente afirma que el inmueble cuya declaración de pertenencia

[3] CSJ, sentencia SC19903-2017 de 29 de noviembre de 2017. Radicación: 73268-31-03-002-2011-00145-01

se reclama es una “vivienda de interés social”, con abstracción de si tal conclusión pudiera ser acertada o no, encuentra la sala que de todos modos de nada serviría a los intereses del demandante, pues superado lo relativo a si en realidad se trata de una ‘solución de vivienda’ de aquella especie, la suerte de sus pretensiones sería igualmente adversa.

En efecto, observadas las cosas de manera prospectiva, de nada vale despejar el camino de la problemática sobre si el apartamento es de vivienda de interés social, si de todas formas el fracaso de la pretensión vendría dado por la falta de prueba de la posesión.

Al respecto nótese que en la demanda Jorge Eliecer Lozano Sánchez afirmó que su posesión se remonta al mes de diciembre de 1998, sin que en el escrito inicial haya narrado el motivo por el cual empezó esa relación con el predio, pero a partir de esa data, se dice, ha venido ejerciendo actos de señor y dueño.

Sin embargo, el tribunal se percata de que el demandante no logró acreditar de manera contundente los actos en que fincó su posesión, por lo que si en verdad el *a quo* hubiera incurrido en el yerro que se le atribuye, a la larga ello ninguna eficacia tendría en el sentido del fallo apelado, que igualmente sería desestimatorio, no tanto por la conclusión que adoptó el juez, como por la ausencia de otro de los requisitos de la prescripción adquisitiva, reitérese, la prueba de la posesión.

2.1. Para llegar a esa determinación, hay que decir que la posesión está definida como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño (artículo 762 C.C.), y aunque es sin duda un poder de facto sobre una cosa que en derecho pertenece a alguien más, el ordenamiento la reconoce, protege y hasta patrocina; no en vano es el presupuesto fundamental para hacerse al dominio por virtud de la usucapión.

Concebida así la usucapión sobre un elemento fundamental: la posesión, y entendida ésta última como un poder de hecho sobre las cosas (*corpus*), en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos materiales con la intención o voluntad propios del dueño (*animus*), sería absurdo exigir -o sugerir- que la prueba de esos componentes se hiciera o procediera con determinados medios (cualidad) y con cuántos de ellos (cantidad), como si sobre el particular operara una especie de restricción a la libertad probatoria o un rezago del régimen de valoración legal de la prueba.

En ese orden de cosas, es casi incontestable que así no sea la única, la prueba que suministran los testigos sobresale a efectos de crear convicción en torno a las acciones que en la cosa realiza el poseedor. La razón de ello es evidente: se trata del relato de las personas que están más próximas a la vida de relación del poseedor, y, por ende, de quienes mejor que cualquier otro sujeto distinto a él pueden suministrar valiosa información relacionada con los hechos que interesan a esta especie de procesos.

En este asunto se recibieron las declaraciones de Benjamín Suárez Rubio, Parmenio Vanegas y José Rafael Mora Rodríguez, pero el estudio de lo que dijeron dichos testigos no genera certeza sobre los hechos que incumbía probar en el proceso, en tanto que manifestaron que Jorge Eliecer Lozano Sánchez empezó la supuesta posesión en razón de haber celebrado un negocio con quien, al parecer, era la persona que ostentaban derechos de dominio.

Sobre el punto, véase que Benjamín Suárez Rubio relató que según comentarios del propio demandante "*él mismo había adquirido el inmueble por medio de una promesa de compraventa y por eso es que él ocupa el apartamento desde el tiempo que cité anteriormente, por eso sé*

que se presentaron inconvenientes que no pudo firmar la escritura por eso se llegó al proceso"[4]. En un sentido similar Parmenio Vanegas manifestó: "*conozco a Jorge quien es mi amigo desde la infancia y sé que él adquirió el inmueble desde el año 1998 por compra que hizo al propietario pero sé que no se llevó la legalización las escrituras de venta a pesar de Jorge haberlo pagado*"[5]. Y José Rafael Mora Rodríguez narró que "*él* [refiriéndose al accionante] *compró el apartamento al señor Gonzalo de san Andresito, al cual conozco hace 17 o 18 años y lo que sé es que Jorge Lozano le canceló a don Gonzalo de san Andresito la totalidad del valor del apartamento y no hicieron la escritura en ese momento por un problema que ocurrió el cual no sé exactamente que es..*"[6].

Bajo estos parámetros, llama poderosamente la atención que los testimonios que se recaudaron a instancias del accionante, hayan declarado al unísono que la detentación inicial del predio por parte de Jorge Eliecer Lozano Sánchez tenga soporte en la celebración de contratos, ora de promesa, o de compraventa, con un tercero, pero que en el escrito inicial no se hubiera mencionado nada al respecto, ya que simplemente se adujo una posesión que inició en el año de 1998.

Lo que demuestran esas pruebas es que, a partir de una perspectiva lógica y temporal, habría sido poco probable que el supuesto prescribiente empezara a poseer desde el 29 de diciembre de 1998, habida cuenta que, se repite, lo que atestiguaron los declarantes –personas cercanas al actor-, es que para esa anualidad se celebró un contrato para que por la vía negocial se pudiera llegar al dominio del inmueble, lo que a su vez, conlleva un implícito reconocimiento del derecho del co-contratante, lo que desdibuja las genéricas afirmaciones que se expusieron en los hechos

[4] Página 332 del archivo '01CuadernoUnoDigitalizado'.
[5] Página 335 del archivo '01CuadernoUnoDigitalizado'.
[6] Página 338 del mismo archivo.

de la demanda. Así, entonces, los elementos de juicio bajo análisis no ofrecen información suficiente sobre la posesión invocada por el demandante. Es decir, se trata de relatos que impiden al tribunal hacerse a una sólida convicción de que se cumple cabalmente uno de los presupuestos de la acción de pertenencia.

Ahora bien, el testigo Camilo Riaño Ávila dijo que no era vecino del sector donde está ubicado el predio, que no conoce nada sobre la realización de construcciones, etc., sólo se limitó a señalar que el actor es el propietario, pero sin exteriorizar las circunstancias por las cuales tiene esa percepción; no refiere más que eventos generales y no contextualizados temporalmente. En definitiva, las declaraciones en este caso no suministran versiones contundentes de la situación posesoria que, naturalmente, es preciso acreditar para que la consolidación del derecho de dominio se tenga completa y perfecta.

Esta circunstancia la corrobora lo expresado por el actor mismo en la diligencia de secuestro del inmueble llevada a cabo dentro del proceso liquidatorio de la Sociedad Lourdes 63 Ltda.[7], en que ese bien devino en "dación en pago" a favor del acá demandado, diligencia en la cual, contrario a lo estimado por el juez a-quo sin contar entonces con una prueba apenas incorporada de oficio en esta instancia, la 'oposición' no se basó expresamente en la posesión que ahora en este proceso se invoca, sino en calidad de "propietario" por haberlo "cancelado en su totalidad" según "paz y salvo expedido por el revisor fiscal de la concursada", alegato que condujo a que el respectivo funcionario dispusiera el rechazo de tal "oposición".

[7] Diligencia llevada a cabo los días 28 y 29 de agosto de 2006. Págs 96 y 97 archivo pdf 26 carpeta cuaderno tribunal.

2.2. Sobre la prueba documental se tiene que el pago del impuesto predial, o las expensas de administración, por sí solos son insuficientes para demostrar posesión, en tanto que cualquier persona puede estar compelida al pago de esos tributos y cuotas de la co-propiedad[8]. De modo que sin otras pruebas que acreditaran de modo fehaciente la condición en estudio, los rubros en mención se han juzgado como una circunstancia no necesariamente reveladora del ejercicio del señorío que anima a un verdadero poseedor.

De otro lado, al margen de que el perito en su trabajo haya expuesto que se realizaron mejoras al apartamento, ese conocimiento no lo tuvo de primera mano, sino porque se lo informó el demandante, lo que de plano le resta validez a la conclusión del experto. Y es que incluso, aclaró que "*se deja constancia que para el perito es muy difícil establecer si estas mejoras se realizaron como nuevas. Para poder asegurar que existieron se debe tener un registro fotográfico o cualquier constancia que lo compruebe…*"[9].

3. Por las razones expuestas, al margen de si en realidad el inmueble se pudiera catalogar como una 'vivienda de interés social', y de que, en gracia de discusión, al respecto los reparos del apelante fueran acertados, las pretensiones de la demanda no podían abrirse camino, comoquiera que no quedó acreditado que su posesión se haya ejercido de manera ininterrumpida por espacio de 5 años, término que corresponde a la forma como se promovió el proceso. Ante la falta de este elemento estructural de la acción de pertenencia, se imponía asimismo denegar las pretensiones.

---

[8] P. ej., el tenedor a cualquier título del bien de dominio privado cosa está compelido al pago de las cuotas de administración, porque existe solidaridad con el eventual propietario. (art. 29 Ley 675 de 2001).

[9] Páginas 391 y 392 del archivo '01CuadernoUnoDigitalizado'.

Por último, aunque en la sentencia de primera instancia se mencionó que sí habían elementos demostrativos que daban cuenta del ánimo de señorío, el tribunal destaca que esas apreciaciones fueron marginales, no constituyeron el soporte de la decisión que el a-quo adoptó, y, bajo ese entendido, tampoco generan algún tipo de limitante para el tribunal en la resolución de la segunda instancia, comoquiera que la eventual prosperidad de la impugnación, daría paso al estudio íntegro de todos los requisitos que se han desarrollado para que opere la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, máxime si se tiene en cuenta que la declaración de pertenencia tiene efectos *erga omnes* (art. 375-10 Cgp), lo que impone un examen panorámico del litigio.

4. Es por lo acá expuesto que se confirmará la decisión impugnada por el actor. Sin condena en costas en esta instancia por no aparecer causadas.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada proferida el 11 de noviembre de 2020 por el Juzgado 1° Civil del Circuito Transitorio de Bogotá. Sin costas. Devuélvase el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA **JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**

Firmado Por:

German Valenzuela Valbuena

Magistrado

Sala 019 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Oscar Fernando Yaya Peña

Magistrado

Sala 011 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Juan Pablo Suarez Orozco

Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: c3cb9bbe62b5efd66a5d444cc5bc4a197f6d567c4925756ce43eb76063453aa8

Documento generado en 24/07/2023 02:13:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sala Civil

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) julio de dos mil de veintitrés (2023)

Radicado: Verbal No. 110013199005 **2021 52086** 02 –Procedencia Dirección Nacional de Derechos de Autor
Proceso: Inversiones Ultra S.A.S. ***vs*** Luis Alberto Posada
Asunto: **Apelación rechazo de reforma de la demanda de reconvención**

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante en reconvención, contra el auto de 19 de septiembre de 2022, alzada concedida el 3 de octubre de ese año.

ANTECEDENTES

1. La DNDA inadmitió la reforma de la demanda de reconvención instaurada por Luis Alberto Posada Hernández, al considerar que la pretensión principal cuarta no era precisa, y el juramento estimatorio no cumplió con la totalidad de los requisitos legales (9 ag. 2022).

2. El apoderado de Posada Hernández presentó escrito de "*subsanación"*, en el cual señaló que no fijó un valor concreto en la pretensión porque Inversiones Ultra S.A.S. es la que cuenta con la información, pero no se la facilitó pese a que la solicitó; de manera que, aduce, es la funcionaria de conocimiento quien debe ordenarle a esa entidad que la entregue en los términos del inciso 1° del art. 90 del CGP. Agregó que la imposición de esta carga es contraria a los preceptos 11, 43, 78, 173, 283 *ibídem*, y

no toma en cuenta la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la Carta Política).

3. Se rechazó ese libelo porque de la lectura del escrito aportado por el demandante en reconvención era evidente que no subsanó las falencias anotadas en el auto inadmisorio, sino simplemente anticipó una discusión "*que no atañe con el momento procesal en el que se encuentra la actuación"*.

4. Inconforme el apoderado de Posada apeló, para lo cual reiteró lo expuesto en el escrito que tituló como de subsanación.

CONSIDERACIONES

1. En este evento es preciso anotar que el artículo 82 del CGP señala los requisitos que debe tener toda demanda, norma que en su numeral 4° establece: "*Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad",* y en el 7° prevé: "*El juramento estimatorio, cuando sea necesario"*. Por su parte, el canon 90 de esa codificación consagra en el inciso 3°: "*mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisible la demanda solo en los siguientes casos"*, entre ellos, "*1. Cuando no reúna los requisitos formales. (...). 6. "Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario"*.

2. De otro lado, el inciso 1° del art. 206 cgp señala: "*Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus*

conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación".

De lo descrito en esta disposición, es evidente que el 'juramento estimatorio' tiene como objetivos: la formulación de pretensiones justas y economizar la actividad probatoria, desarrollándolo no solo como medio de prueba, sino también como requisito de la demanda.

Eventualmente podría plantearse si esta figura constituye una limitante al derecho fundamental al acceso a la justicia, al debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de buena fe al ser establecida como requisito de admisión de la demanda, en especial cuando para hacer la estimación se requiere bien de una información que provenga de la asesoría de un tercero y la parte no pueda acceder a ésta, o no cuente con los recursos económicos para cubrir los honorarios del perito, ni con los medios para formular un juramento razonado y discriminado.

Sin embargo, es preciso establecer que el juramento estimatorio como requisito de la demanda no debe entenderse como una medida que sacrifique el acceso a la justicia y las garantías en mención, ya que en la mayoría de los casos es el demandante quien conoce el valor de los frutos, las mejoras y los perjuicios, por tanto, debe aportar los documentos de forma directa que acrediten el concepto de estos valores, o en caso de requerir asesoría técnica puede anexar un dictamen para discriminar y señalar los valores.

3. Por otra parte, cabe anotar que el artículo 61 de la Carta Política protege en un sentido amplio la propiedad intelectual, razón por

la cual el legislador ha proferido diferentes normas dirigidas a resguardar los derechos de autor y sus garantías conexas en sus diferentes modalidades, entre las que se destacan, la Ley 23 de 1982 *"Sobre derechos de autor"*, la Ley 44 de 1993 *"por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944*, la Decisión 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, la Ley 565 de 2000 *"Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)",* la Ley 1403 de 2010 *"Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o "Ley Fanny Mikey"*.

Por medio de estas disposiciones se ha pretendido garantizar el reconocimiento de los derechos de autor y sus derechos conexos, con el objeto de que en la práctica no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras.

4. De acuerdo a lo descrito y descendiendo al caso de auto, se advierte que el funcionario de instancia inadmitió el libelo porque la pretensión principal cuarta indicó "*un monto indeterminado el cual fijará en el futuro, lo cual no es preciso, pues al no concretarse en una suma se hace imposible para la contraparte ejercer su derecho de defensa"*, y además, pese a incluirse en la demanda el acápite 'juramento estimatorio', éste no cumple con los requisitos del precepto que lo regula, pues en el pago de las regalías no se estimó un monto bajo juramento, ni se discriminaron los conceptos pretendidos, esto es, daño emergente, o lucro cesante.

Los omisiones a las que se refirió el *a quo* se verifican de la revisión del citado escrito introductorio, pues efectivamente la pretensión principal cuarta no señaló el valor de las regalías comprendidas entre 1987 a 1993 de las cuales se pretende el pago, ya que se limitó simplemente a precisar que esta cantidad "*será fijada de acuerdo a la contabilidad que allegue Inversiones Ultra SAS a este proceso, toda vez que solo aquella posee los datos, y no los facilitó a esta parte"* y el juramento estimatorio nada indicó sobre este concepto, pues se limitó a manifestar "*que no se cuenta con la cifra exacta de lo recibido, por lo que se le solicitará al despacho en el acápite probatorio, se le ordene Inversiones Ultra S.A.S. allegar al proceso su relación de contabilidad de los años 1987 a 1993 con el fin que demuestre la cantidad exacta pagada a mi poderdante, para demostrar tanto el impago respectivo, como el valor y monto exacto"*.

Así las cosas, es evidente que lo resuelto en el referido trámite no es arbitrario, por cuanto en realidad la pretensión no precisó un valor concreto de lo incoado y el juramento estimatorio no cumplió con los requisitos establecidos en la norma que lo regula.

4.1. De igual manera, se aclara que en el escrito titulado por el apoderado de Posada Hernández "*Se subsana reforma de la demanda de reconvención"*, no se ajustaron estas falencias, pese a que era deber de esa parte llevar a cabo tal labor, ya que en este memorial solamente se censuró lo resuelto por el funcionario de instancia.

4.2. Además, el recurrente, si bien solicitó a Inversiones Ultra S.A.S. entregar copia de la totalidad de la contabilidad "*relacionada a todos los movimientos económicos de las canciones interpretadas por el señor Luis Alberto Posada Hernández con Industrias Fonográficas Victoria Ltda. (cedido a Inversiones Ultra S.A.S.), desde 1987 hasta el año en*

curso”, lo cierto es que su petición fue resuelta de forma adversa a sus intereses el 8 de septiembre de 2021, en la que se manifestó que el reclamante recibió en su momento un pago único por sus interpretaciones, “*sin que el productor fonográfico tuviera obligación de ninguna otra clase de contraprestación económica”*, y aclaró que “*Ni DISCOS VICTORIA, en su momento, ni **INVERSIONES ULTRA S.A.S** han recibido monto alguno por derechos de comunicación pública que correspondan al intérprete …, los citados derechos han sido recaudados por **ACINPRO** y pagados directamente al citado intérprete …”*.

La anterior respuesta a pesar de no resolver lo pedido, sí le indicó al demandante en reconvención un camino a seguir, esto es, que acudiera a Acinpro; sin embargo, en este trámite no se acreditó que hubiera elevado esa petición. Situación que lleva a concluir que el recurrente no acató lo consagrado en el numeral 10 del canon 78 del Código General del Proceso, relacionado a que las partes deben “*abstenerse de solicitarle al juez la consecuencia de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir”*, y tampoco lo establecido en el inciso 2° del artículo 173 del CGP, referente a que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que de forma directa o mediante petición, hubiera podido conseguir el respectivo sujeto procesal.

4.3. De otro lado, si el accionante en reconvención no contaba con las herramientas para señalar el valor de las regalías reclamadas desde 1987 a 1993, tuvo la oportunidad de aportar un dictamen pericial, el cual tendría como fundamento la tasación de los perjuicios materiales causados por la reproducción, o enajenación de las obras artística del demandante en reconvención, sin autorización previa y expresa, operación que podría fundamentarse en lo consagrado en el artículo 57 de

la ley 44 de 1993, que establece que para este tipo de daños se tendrá en cuenta: *"1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización. 2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación"*, pero no lo hizo, y por tanto es evidente que tal omisión fue la que llevó al *a quo* a rechazar el libelo.

Ahora bien, en el evento en que no hubiera contado con la facultad económica de allegar este medio probatorio, pudo solicitar el amparo de pobreza, desde antes de la presentación de la demanda, conforme al artículo 152 del CGP.

4.4. Sumado a lo anterior, el apelante no tiene razón en su argumento relacionado a que se le impuso una carga imposible, la cual es contraria a lo consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, los cánones 11, 43 (num. 4°), 281 y 283 del Código General del Proceso y que ésta debe ser asumida por Inversiones Ultra, pues como se anotó puedo haber presentado ante Acinpro la petición en la cual reclamara la información relacionada con las regalías, o aportar un dictamen en el que se tasara este concepto, sin que hubiese obrado de tal manera.

Al respecto, vale recordar que la figura del juramento estimatorio como requisito de la demanda no debe entenderse como una medida que afecte garantías fundamentales como el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y demás, toda vez que de acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores es el actor quien conoce el valor de lo que reclama al interponer una acción, de modo que le incumbe y es su deber aportar los documentos de forma directa que acrediten estos conceptos y no a la parte contraria de la litis, como de forma errada lo pretende el censor.

5. En síntesis, se confirmará la providencia cuestionada.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, **CONFIRMA** el auto apelado, proferido el 19 de septiembre de 2022 por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
*Rdo. 11001 31 99 005 2021 52086 **02***

Firmado Por:
German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ec83b794e2cc3f4d9de9c9bc17170d9aa9a8fa28c0765e161bb4d0689e72fec3**
Documento generado en 24/07/2023 04:31:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SEXTA DE DECISIÓN CIVIL

Magistrado Ponente
OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Bogotá D. C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés
(aprobado en sala ordinaria virtual de 19 de julio de 2023)

11001 3103 006 2014 00545 02

Ref. proceso ordinario de pertenencia (con demanda de reconvención, de naturaleza reivindicatoria) de Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Eduard Leonardo Urrego Solórzano, Johanna Marcela Urrego Solórzano y Danny Alejandro Urrego Solórzano frente a Adriana Montejo Santana (demandante en reconvención)

Se decide la apelación que formuló Adriana Montejo Santana (demandante en reconvención) contra la sentencia de 6 de febrero de 2023 que profirió el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso ordinario de la referencia.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA PRINCIPAL (de pertenencia, cuyo trámite se finiquitó, por desistimiento tácito). Con su memorial incoativo de 21 de agosto de 2014, reclamaron sus promotores que se declare que a ellos les pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble que se distingue con matrícula inmobiliaria M.I., 50C-456448.

Relataron los demandantes principales que entraron en posesión del predio, junto con el señor Luis Hernando Urrego Beltrán (cónyuge fallecido de la señora Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, y padre de los demás demandantes principales) con motivo de la promesa de compraventa de 30 de junio de 1999 en la que figuró el señor Luis Hernando como promitente comprador, quien falleció el 30 de septiembre de 2008.

Añadieron que desde ese momento han realizado todo tipo de mejoras, pagado impuestos y servicios públicos.

Por auto de 4 de abril de 2019, que alcanzó firmeza, la juez *a quo* dispuso la terminación del proceso en lo atinente a la demanda de pertenencia, por desistimiento tácito, por lo que continuó solamente con el trámite de la demanda reivindicatoria (hoja 305, PDF 001CuadernoUno).

2. LA DEMANDA REIVINDICATORIA (hoja 76 y siguientes, PDF 001DemandaReconvención). Adriana Montejo Santana radicó su memorial de reconvención el 23 de junio de 2016 y reclamó la restitución del mismo predio, con los frutos dejados de percibir.

Relató dicha demandante, en síntesis, que por escritura pública N° 1842 de 4 de diciembre de 2013 de la Notaría 49 de Bogotá compró el inmueble a los señores Pedro Joaquín Urrego Bernal y Rosalba Londoño Rodríguez, quienes lo habían comprado a Jorge Alberto Martin González y Ruby Stella Urrego (escritura pública N° 1651 del 11 de julio de 2000); que a su vez, estos habían comprado a Ángel Alberto Agudelo Veira y Ana Belén Parra de Agudelo (por escritura pública 1144 de 7 de abril de 1997) y que los últimos dos nombrados habían comprado el predio a Inversiones García Paredes Rueda Caro y Cía. (por escritura pública 4327 de 29 de julio de 1971.

Añadió que todos esos negocios jurídicos, de los cuales dijo prevalerse, fueron inscritos en la oficina de registro.

Agregó que desde la fecha en que compró el predio, los vendedores se negaron a entregárselo, por lo que impulsó un proceso de entrega del tradente al adquirente, en el que obtuvo sentencia favorable el 26 de mayo de 2014, proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá (R. 2014 00045 00), pero que no se ha podido materializar la entrega (por una oposición que allí plantearon quienes aquí fungen como demandados en reconvención) y que, en la actualidad su contraparte ostenta el señorío sobre el predio, desde el día 30 de septiembre de 2008, cuando falleció Luis Hernando Urrego Bernal, entonces arrendatario, padre y esposo de los contrademandados.

3. LA CONTESTACIÓN A LA CONTRADEMANDA. Los demandados en reconvención excepcionaron, en escrito radicado el 18 de septiembre de 2017:

3.1. “Prescripción adquisitiva de dominio”.

Sin efectuar precisiones adicionales, los excepcionantes invocaron la aplicación del artículo 2518 del Código Civil. Señalaron que junto con Luis Hernando Urrego Beltrán (fallecido el 30 de septiembre de 2008) "desde el año 1999 tomaron posesión del bien, luego de suscribir la promesa de compraventa con los propietarios anteriores y de que estos realizaran la entrega material del bien".

3.2. "Mala fe del negocio jurídico realizado entre José Pedro Joaquín Urrego Beltrán su cónyuge, la señora Rosalba Londoño Rodríguez y Adriana Montejo Santana, materializado en la escritura pública No. 1842 del 4 de diciembre de 2013".

Lo anterior con soporte en que el contrato de compraventa de 4 de julio de 2013, que su contraparte adujo como título para reclamar la reivindicación, constituye "un medio presuntamente fraudulento para apropiarse del bien inmueble por parte de la demandante en reconvención, quien al no encontrar la posibilidad de cobrar los exagerados 127 millones de pesos por concepto de honorarios, decidió bajo cualquier costo despojar del bien a la familia Urrego Solórzano".

4. LA SENTENCIA RECURRIDA. La juez *a quo* declaró probada la excepción de "prescripción adquisitiva de dominio" que frente a la demanda de reconvención impetraron Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Eduard Leonardo Urrego Solórzano, Johanna Marcela Urrego Solórzano y Danny Alejandro Urrego Solórzano y denegó la demanda de reivindicación.

Destacó la sentenciadora de primer grado que, pese a que "se tienen por probados todos y cada uno de los requisitos de la acción reivindicatoria", también "se reunieron los presupuestos para la prosperidad de la excepción de pertenencia, esto se debe a que se demostró que los demandados (en reconvención) se encuentran como poseedores del predio (...) desde el año 1999, sin que tal condición tuviere cambios".

Añadió que "obra como medio suasorio la providencia emitida por el H. Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 15 de mayo de 2019, en la cual se decidió la apelación interpuesta por el demandante contra la determinación del 14 de diciembre de 2018, a través de la que se declaró fundada la oposición de Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Eduard Leonardo y Johanna Marcela, sobre el

bien cautelado en el litigio 29-2014-00045-00, acción de entrega del tradente al adquirente que inició la señora Montejo Santana" y que las declaraciones de las partes, los dichos de los testigos (Luis Danilo Novoa Bermúdez, Alexandra Teneche Ayala, Jorge Alberto Martin González y Amparo Zamora Poveda) y los documentos recaudados muestran actos de posesión por parte los demandados en reconvención, respecto del mismo predio.

Con soporte en el artículo 6° de la Ley 791 de 2002, destacó la juez *a quo* que "la posesión ejercida por la familia Solórzano Urrego, se ha mantenido a lo largo del tiempo, de una manera pública, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años con anterioridad a la presentación de la demanda".

5. LA APELACIÓN. En resumen, la demandante en reconvención señaló que "la excepción de mérito denominada prescripción adquisitiva de dominio no puede ser declarada dentro de este proceso, por no ser jurídica, ni fácticamente viable, porque no se puede tener como poseedores a los demandados por un término de 10 años antecesores a la radicación de esta demanda, la razón, es que se probó, que no hubo una posesión desde 1999, pues esta, no fue exclusiva, ni con ánimo de señor y dueño, siempre hubo reconocimiento de dueño ajeno de manera expresa y tácita".

Aseveró que "los demandados no excepcionaron la prescripción adquisitiva de dominio, en calidad de herederos de una posesión, sino como coposeedores junto con su difunto padre y esposo, entonces, al quedar reducida la comunidad de poseedores por el fallecimiento de uno de sus integrantes, significa que los coposeedores sobrevivientes acrecen su participación en la comunidad posesoria y que previó a ese hecho reconocen dominio ajeno en el finado comunero, por lo tanto, su posesión viene a iniciar una vez su progenitor y cónyuge muere"

Como soporte de sus reparos, la apelante trajo a colación lo dicho por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SC16250 de 9 de octubre de 2017 y SC1939 de 5 de junio de 2019.

6. LA RÉPLICA. Los demandados en reconvención hicieron un recuento fáctico a partir del cual plantearon que aquí se demostró que los integrantes de la familia Urrego Solórzano (conformada por ellos cuatro y el finado Luis Hernando Urrego Beltrán) detentan la posesión del inmueble desde

el 30 de junio de 1999 hasta la fecha, lo cual imponía la confirmación del fallo de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Verificada la ausencia de irregularidades que impidan proferir decisión de fondo, anuncia el Tribunal que revocará el fallo apelado y, en su lugar, atenderá la demanda de reconvención, esto por ser de recibo los reparos y demás argumentaciones efectuadas por la apelante, lo que lleva a la Sala a concluir que no había lugar a acoger la "prescripción adquisitiva de dominio" que, como excepción de mérito, acogió la juez de primera instancia, ni ninguna otra defensa de fondo planteada por los contrademandados.

1. Sabido se tiene que sobre quien reclama la reivindicación de un bien pesa la carga de acreditar el "derecho de dominio en el demandante, posesión material en el demandado, cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular, identidad entre la cosa que pretende el actor y la poseída por el demandado" (CSJ, sent. de diciembre 2 de 1997, exp. 4987).

Sobre el particular, el Código Civil enseña que "La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla" (art. 946).

1.1. El derecho de dominio de la demandante en reconvención sobre el predio con matrícula No. 50C-456448 es un asunto que fue demostrado con la copia de la escritura pública de compraventa N° 1842 de 4 de diciembre de 2013 (hojas 12 a 30, archivo 001DemandaReconvencion.PDF) en la que figura que los señores José Pedro Joaquín Urrego Beltrán y Rosalba Londoño Rodríguez vendieron el predio a Adriana Montejo Santana (apelante) y con el certificado de tradición que da cuenta de la inscripción del mencionado título en la oficina de registro (hoja 40, archivo 001CuadernoUno.pdf).

1.2. Tampoco resiste mayor controversia la posesión de los demandados en reconvención, quienes reconocieron, desde los albores de este proceso, que ellos detentan el predio como amos y señores.

Precisamente en el ejercicio de ese señorío fue que soportaron la defensa perentoria de "prescripción adquisitiva de dominio", percepción que retomaron, ante el Tribunal, al replicar la alzada que formuló su contraparte.

Ya lo precisó la Corte Suprema de Justicia en fallo del 3 de marzo de 1994, "para demostrar el presupuesto referente a la posesión en el demandado, la ley no exige una prueba específica. **Pero si el demandado, al responder la demanda acepta o admite que es poseedor, incuestionablemente se está en presencia de un medio de prueba excelente, vigoroso y bastante para demostrar tal hecho**".

1.3. A lo que recién se consignó se suma que ninguna objeción cabe frente a la identidad entre el inmueble de propiedad de la demandante en reconvención y aquel sobre el cual detentan posesión los señores Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Eduard Leonardo, Johanna Marcela y Danny Alejandro Urrego Solórzano, se colige, en principio, la concurrencia de los requisitos inherentes a la acción reivindicatoria impetrada.

Se impone, entonces, estudiar la defensa perentoria que halló próspera la juez de primera instancia, esto es, la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio prevista en el artículo 2518 del Código Civil, puesto que encontró probada una posesión de los demandados superior al término decenal que estableció la Ley 791 de 2002.

2. La juez *a quo* acogió la excepción de prescripción extintiva de la acción de dominio, pues encontró que se demostró que los demandados en reconvención "se encuentran como poseedores del predio (...) desde el año 1999, sin que tal condición tuviere cambios".

2.1. Lo anterior, con soporte, principalmente, en "la providencia emitida por el H. Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 15 de mayo de 2019, en la cual se decidió la apelación interpuesta por la demandante contra la determinación del 14 de diciembre de 2018, a través de la que se declaró fundada la oposición de Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Eduard Leonardo y Johanna Marcela, sobre el bien cautelado en el litigio 29-2014-00045-00, acción de entrega del tradente al adquirente que inició la señora Montejo Santana" (aquí apelante) y que los interrogatorios de las partes, los dichos de los testigos (Luis Danilo Novoa Bermúdez, Alexandra Teneche Ayala, Jorge Alberto Martin González y Amparo

Zamora Poveda) y los documentos evidencian actos de posesión por parte los demandados (familia Urrego Solórzano), respecto del predio en disputa desde el 30 de junio de1999.

Lo primero que hay que mencionar es que la Ley 791 entró a regir el 27 de 2002, por manera que sería a partir de esa data que podría empezar a computarse el término decenal de prescripción extintiva que declaró probada la juez *a quo.*

Como lo resaltó la apelante, en el fallo apelado se dejó de ver que desde los albores de este litigio y no en pocas en oportunidades, al formular la fallida demanda de pertenencia, terminada por desistimiento tácito; al esgrimir la excepción perentoria en comento; al absolver sus declaraciones de parte, e incluso al replicar la apelación en estudio, los señores Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Eduard Leonardo, Johanna Marcela y Danny Alejandro Urrego Solórzano resaltaron que la posesión que dicen ostentar se remonta al año 1999 y que en consuno con ellos, también el señor Luis Hernando Urrego Beltrán poseyó el predio desde el año 1999 hasta el día de su óbito (**30 de septiembre de 2008**).

Entonces, si se miran bien las cosas, lo resuelto en el trámite de la oposición a la diligencia de entrega que se suscitó en el proceso de entrega de tradente al adquirente R. 029 2014 00045 00, no resulta suficiente para sostener que los cuatro demandados en reconvención ostentan la condición de poseedores exclusivos y excluyentes, de forma ininterrumpida desde el 30 de junio del año 1999, hasta la fecha en que formularon la excepción de prescripción adquisitiva de la acción reivindicatoria (18 de septiembre de 2017). Lo anterior sin dejar de lado que la referida oposición no favoreció al señor Danny Alejandro Urrego Solórzano.

Además, al resolver la apelación frente al auto de 14 de diciembre de 2018 en el R. 029 2014 00045 00 este Tribunal (M.P. Manuel Alfonso Zamudio Mora) destacó que los señores Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Johana Marcela y Eduard Leonardo Urrego Solórzano detentaban la condición de poseedores respecto del predio en disputa "**para el momento en que se practicó la diligencia de entrega**", esto es, **el 20 de marzo de 2015**, sin que de allí pueda concluirse que esa detentación material se remontaba al 30 de junio de 1999,

vicisitud que tampoco es de recibo a la luz de lo que se expondrá en los siguientes sub numerales.

2.2. En efecto, los demandados en reconvención señalaron que la posesión del inmueble inició en atención a la promesa de compraventa de 30 de junio de 1999, en la que el difunto Luis Hernando Urrego Beltrán fungió como promitente comprador.

Tal circunstancia, más que favorecer al propósito de demostrar que la posesión inició en el año 1999 como lo requería la excepción en estudio, muestra que, para ese entonces, y con ocasión a ese contrato preparatorio, los integrantes de la familia Urrego Solórzano que aquí fungen como demandados en reconvención reconocieron dominio ajeno, en cabeza de los promitentes vendedores.

Ello por cuanto, **"cuando el prometiente comprador de un inmueble lo recibe por virtud del cumplimiento anticipado de la obligación de entrega que corresponde al contrato prometido, toma conciencia de que el dominio de la cosa no le corresponde aún; que de este derecho no se ha desprendido todavía el promitente vendedor, a quien por tanto el detentador considera dueño, a tal punto que lo requiera para que le transmita la propiedad ofrecida"**[1].

Como refuerzo de lo antedicho, ha de señalarse que, en el escrito de promesa de compraventa de 30 de junio de 1999, no se dejó constancia expresa de que la entrega material del inmueble que para ese entonces se hizo a Luis Hernando Urrego Beltrán incluyera los derechos derivados de la posesión en cabeza de los promitentes vendedores.

2.3. Ahora, así se dejara de lado lo que recién se registró, tampoco esa defensa sería atendible por cuanto los excepcionantes invocaron la posesión a manera de "grupo familiar" y resaltaron, una y otra vez, que su difunto padre y esposo Luis Hernando Urrego Beltrán fungió como coposeedor del predio, desde el 30 de junio de 1999 hasta el día de su muerte (**30 de septiembre de 2008)**.

De lo anterior emerge que los cuatro integrantes de la familia Urrego Solórzano, excepcionantes (tres de ellos herederos de primer orden del señor

[1] CSJ., sent. de 24 de junio de 1980, CLXVI, No. 2407, págs. 45-53

Luis Hernando Urrego Beltrán), no podían prevalerse, o por lo menos no en forma exclusiva, del eventual señorío que sobre el mismo predio también habría ostentado el señor Urrego Beltrán hasta el día de su óbito. Se añade, esto es muy importante, que la excepción perentoria en estudio no fue invocada a favor de la sucesión del referido "coposeedor", cual sería de esperar.

En un asunto de similares contornos (en el que se reclamó la declaratoria de dominio por parte de miembros de una misma familia en la que falleció uno de sus integrantes), la Sala de Casación Civil (SC1939-2019 de 5 de junio de 2019, M.P., Luis Armando Tolosa Villabona) destacó lo que a continuación se transcribe:

> "Sin embargo, tratándose de la coposesión manifestada en una comunidad, idónea para adquirir el dominio de las cosas por el modo de la prescripción, ya sea ejercida por los comuneros, ora por un administrador designado, pero en nombre de todos, en el entretanto **puede ocurrir la muerte de uno de sus integrantes**.
>
> Sucedido el hecho, la participación del coposeedor fallecido, pasa a sus herederos. Por esto, como dejó sentado la Sala no hace mucho, "*cuando uno de los que tiene en común la cosa fallece, el porcentaje que detentaba en la misma, al ser un componente económico de su patrimonio, es susceptible de repartición entre sus herederos, con los demás elementos que lo conformen, surgiendo entre estos una 'comunidad herencial' desde el momento del deceso hasta la adjudicación*"[2].
>
> Con todo, lo anterior se diluye en pro de los restantes coposeedores, con efectos *ex nunc*, cuando toman para sí, con ánimo de señor y dueño, y con exclusión de los sucesores del comunero fallecido, la coparticipación de éste. En tal caso, una es la coposesión en comunidad antes del óbito del coposeedor, y otra, distinta, después de su deceso. Como lo resaltó la Corte en el precedente antes citado:
>
> "*(…)* ***al reconocer que el causante tuvo ánimo de señor y dueño sobre el inmueble (…), sin manifestar los descendientes que actuaban como herederos del mismo, sino a título personal, renunciaban para los fines del pleito a la posesión que había ejercido su progenitor, para tomar en cuenta sólo la que nacía con ellos luego de su desaparición***.
>
> "*(…) si 'la posesión ha sido compartida entre los demandantes, orientada, concertada y mancomunadamente sobre la totalidad del predio, no en forma individual sobre partes determinadas del mismo' (…), no podía considerarse una fecha previa a cuando se consolidó en ellos, bajo el entendido de que admitieron la participación de un tercero antes, la cual ocuparon en su propio beneficio y no como sus continuadores*".
>
> **Así las cosas, en la hipótesis de quedar reducida la comunidad de poseedores, entre otras circunstancias, por el fallecimiento de uno de sus integrantes, esto significa que los coposeedores sobrevivientes acrecen su participación en la comunidad posesoria y que previo a ese hecho reconocen dominio ajeno en el finado comunero**.
>
> En línea con lo dicho, solo cuando se desconoce el señorío de un coposeedor o de sus sucesores universales o singulares, inclusive, en el caso de que éstos renuncien, tácita

---

[2] CSJ. Civil. Sentencia de 1º de julio de 2014, expediente 00304, proferida al resolver el recurso de casación interpuesto por los ahora recurrentes en el proceso de pertenencia que incoaron contra la misma persona jurídica involucrada en este asunto, respecto del lote de terreno situado en el paraje San Esteban, municipio de Girardota, referenciado aquí con un área de 60.331.52 m^2.

> o expresamente el derecho a hacer valer la coposesión de su causante, el carácter compartido y conjunto de la posesión en comunidad anterior queda minado, de ahí que necesariamente deba empezar a computarse.
>
> (…)
>
> En la misma dirección, una cosa es la posesión en comunidad antes de variar el número de sus copartícipes, y otra, distinta, una vez recompuesta. **Ergo, el tiempo de posesión de la primera, al sufrir solución de continuidad en la homogeneidad de sus integrantes, no puede ser utilizado por los coposeedores subsiguientes para prescribir**".

2.4. Y si en simple gracia de discusión se aceptara que, apenas un día después del fallecimiento de Luis Hernando Urrego Beltrán, sus tres hijos y la cónyuge supérstite empezaron a ejercer una posesión exclusiva y excluyente -**percepción que armoniza con lo que al respecto se afirmó en la demanda de reconvención**-, por igual la excepción de "prescripción adquisitiva de dominio" estaría llamada a fracasar.

Lo anterior, en tanto que, entre el día de fallecimiento del señor Urrego Beltrán (30 de septiembre de 2008) y la fecha de contestación de la demanda reivindicatoria (18 de septiembre de 2017), transcurrieron apenas nueve años, término inferior al decenal requerido para el éxito de la aludida defensa perentoria (art. 6°, Ley 791 de 2002).

A esta altura del discurso, es bueno memorar que, en su demanda la reivindicante hizo expresa su voluntad de prevalerse de una cadena ininterrumpida de tradentes que remonta a julio de 1971.

En efecto, con ese cometido la interesada refirió, que por escritura pública N° 1842 de 4 de diciembre de 2013 de la Notaría 49 de Bogotá ella compró el inmueble a los señores Pedro Joaquín Urrego Bernal y Rosalba Londoño Rodríguez, quienes lo habían comprado a Jorge Alberto Martin González y Ruby Stella Urrego (escritura pública N° 1651 del 11 de julio de 2000); que a su vez, estos habían comprado a Ángel Alberto Agudelo Veira y Ana Belén Parra de Agudelo (por escritura pública 1144 de 7 de abril de 1997) y que los últimos dos nombrados habían comprado el predio a Inversiones García Paredes Rueda Caro y Cía. (por escritura pública 4327 de 29 de julio de 1971.

Todos esos documentos notariales obran a folios, de donde emerge que los títulos de dominio de la reivindicante, anteceden con mucho a la posesión de sus demandados, con lo que queda desvirtuada, así, la presunción que consagra el artículo 762 del Código Civil.

2.5. Se concluye entonces que la reseñada defensa no tenía la virtud de frustrar la reivindicación.

3. Ahora, visto que era inatendible la excepción perentoria que acogió el juez *a quo,* en aplicación a lo que manda el artículo 282 del C. G. del P., se impone un pronunciamiento sobre la otra defensa que esgrimieron los demandados en reconvención, vale decir, la de "mala fe del negocio jurídico realizado entre José Pedro Joaquín Urrego Beltrán su cónyuge, la señora Rosalba Londoño Rodríguez y Adriana Montejo Santana, materializado en la escritura pública No. 1842 del 4 de diciembre de 2013".

Como soporte de ese medio exceptivo, los opositores se limitaron a alegar que el contrato de compraventa de 4 de julio de 2013, que se esgrimió como título de dominio constituye "un medio presuntamente fraudulento para apropiarse del bien inmueble por parte de la demandante en reconvención, quien al no encontrar la posibilidad de cobrar los exagerados 127 millones de pesos por concepto de honorarios, decidió bajo cualquier costo despojar del bien a la familia Urrego Solórzano".

3.1. En los términos en que fue sustentada, es ostensible que, en rigor, los opositores no atacan ni la existencia, ni la eficacia del contrato de compraventa, por cuyo conducto la demandante en reconvención obtuvo el dominio sobre el predio, negocio jurídico que fue inscrito en la oficina de registro.

Ciertamente, los excepcionantes no desconocen la regularidad en la que su contraparte obtuvo su derecho de dominio (título y modo), sino que refieren la ocurrencia de las circunstancias arriba transcritas pero sin ilustrar sobre la incidencia precisa que ellas tendrían en la suerte de la acción dominical incoada.

Tampoco el Tribunal avizora la relación causa - efecto entre esas vicisitudes y la concurrencia de los requisitos que exige el éxito de la demanda reivindicatoria.

3.2. Se sabe que "La buena o la mala fe, en sí mismas, no tienen en principio incidencia sobre la validez o invalidez del negocio jurídico" (CSJ., sent. de octubre 10 de 1991), a lo que se añade que aquí no se acreditó que la demandante en reconvención hubiera desatendido el principio contractual del

que se habló en precedencia y que “la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá probarse” (Código Civil, art. 769).

No sobra resaltar que en el devenir procesal, los demandados en reconvención, más que plantear hechos concretos que pudieran soportar la excepción perentoria en comento, orientaron sus esfuerzos a hacer valer la posesión que se atribuyen a partir del 30 de junio de 1999.

3.3. No era atendible, tampoco, la excepción perentoria en estudio, lo cual impone pronunciarse sobre las restituciones de rigor.

4. RESTITUCIONES MUTUAS. Sobre el tema (arts. 961 y ss. Código Civil), ha de verse lo siguiente:

Solo se ordenarán restituciones a favor de la reivindicante, pues en la contestación de la demanda los opositores vencidos no alegaron, ni tampoco en el decurso procesal acreditaron mejoras sobre el predio a restituir, ni las expensas para la obtención de los frutos.

4.1. Con miras a calcular los frutos civiles (arts. 964 y ss., Código Civil), se hará claridad sobre el perfil que como poseedores habrá de atribuírsele a los demandados en reconvención, esto es, si se trata de buena o de mala fe.

El artículo 768 del Código Civil ha definido la buena fe, en materia de posesión, como la “conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio”. A su turno el artículo 769 precisa que “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria” y que, por contraposición, “la mala fe deberá probarse”.

El Tribunal no encuentra elementos que derriben la presunción citada, razón por la cual los poseedores solo están llamados a restituir los frutos percibidos a partir de la fecha en que se notificó del auto admisorio de la demanda reivindicatoria (**18 de agosto de 2017**, hoja 85, 001DemandaReconvencion.PDF), en aplicación del inciso 3° del artículo 964 del Código Civil.

4.2. Ante la falta de elementos de juicio que faciliten el cálculo de los frutos dejados de percibir por la señora Montejo Santana, el Tribunal se apoyará principalmente en el certificado catastral más reciente (para el año 2014 el inmueble en disputa estaba avaluado en $164´497.000) y en las previsiones contenidas en el artículo 18 de la Ley 820 de 2003, según el cual un predio (destinado a vivienda, como lo es aquel sobre el que aquí se contiende), puede producir un canon mensual de arrendamiento de hasta el 1% de su valor comercial.

Desde esta óptica, y en consideración a que dichos beneficios económicos, cual los describió la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 8 de agosto de 2011 (ex. 6182), son entendidos como "el producido del bien en disputa relacionado con los paralelos gastos ordinarios de producción que son aquellos en que habría incurrido cualquiera persona para obtenerlos", el Tribunal tomará como punto de partida de los cálculos a que hay lugar, las disposiciones de la Ley 820 de 2003 (Régimen de Arrendamiento de Vivienda Urbana), esto por cuanto el provecho mínimo que puede obtenerse de un inmueble con las características del que es objeto de este litigio, podría provenir, bajo una administración medianamente diligente, de su arrendamiento.

El artículo 18 de la referida codificación prevé como tope del canon respectivo, "el uno por ciento (1%) del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo" y asimismo establece que "la estimación comercial (…) no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente", a lo que se suma que el canon 20, *ibidem*, señala que "Cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior".

Con dicha orientación, se observa que el canon de arrendamiento para el año 2014 alcanzaba la cifra mensual de $1'644.970, esto es, el 1% del avalúo catastral al que recién se hizo alusión. El Tribunal no cuenta con elementos adicionales que acrediten un mayor reconocimiento por ese rubro.

Así ha procedido esta Sala, ante situaciones similares (*v.gr.*, exp.: 2007-00753 01, sentencia del 6 de diciembre de 2017; 2015 00405 02, sentencia del 28 de julio de 2021; 2019 00859 01, sentencia de 26 de abril de 2023).

Entonces, se calculará el monto de los cánones de arrendamiento para los años 2017 a 2023 así:

AÑO	CANON	AUMENTO %	AUMENTO $
2014	$ 1.644.970,00		
2015	$ 1.705.175,90	3,66%	$ 60.205,90
2016	$ 1.820.616,31	6,77%	$ 115.440,41
2017	$ 1.925.301,75	5,75%	$ 104.685,44
2018	$ 2.004.046,59	4,09%	$ 78.744,84
2019	$ 2.067.775,27	3,18%	$ 63.728,68
2020	$ 2.146.350,73	3,80%	$ 78.575,46
2021	$ 2.180.906,98	1,61%	$ 34.556,25
2022	$ 2.303.473,95	5,62%	$ 122.566,97
2023	$ 2.605.689,73	13,12%	$ 302.215,78

De conformidad con los siguientes cálculos, por frutos civiles se reconocerá la suma de $154’371.677, monto de los cánones de arrendamiento causados entre el 18 de agosto de 2017 y el mes de julio de 2023, incrementados anualmente con base en la variación del IPC (artículo 20 de la Ley 820 de 2003).

2017		**2018**	
CANON ACTUALIZADO	$ 1.925.302	**CANON ACTUALIZADO**	$ 2.004.047
MESES	4	**MESES**	12
SUB TOTAL	**$ 7.701.207**	**SUB TOTAL**	**$ 24.048.559**
2019		**2020**	
CANON ACTUALIZADO	$ 2.067.775	**CANON ACTUALIZADO**	$ 2.146.351
MESES	12	**MESES**	12
SUB TOTAL	**$ 24.813.303**	**SUB TOTAL**	**$ 25.756.209**
2021		**2022**	
CANON ACTUALIZADO	$ 2.180.907	**CANON ACTUALIZADO**	$ 2.303.474
MESES	12	**MESES**	12
SUB TOTAL	**$ 26.170.884**	**SUB TOTAL**	**$ 27.641.687**
2023			
CANON ACTUALIZADO	$ 2.605.690		
MESES	7		
SUB TOTAL	**$ 18.239.828**		
TOTAL		**$**	**154.371.677**

Lo anterior, en armonía con el inciso 2° del artículo 283 del C. G. del P., por cuya virtud, en lo pertinente, "el juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia".

La misma metodología se aplicará, de ser el caso, para los, meses siguientes al proferimiento de esta providencia, hasta que se restituya el inmueble a la reivindicante.

RECAPITULACIÓN

En resumidas cuentas, se acogerá la alzada; se revocará el fallo apelado; se declararán imprósperas las defensas esgrimidas por la demandada en reconvención y en consecuencia, se ordenará la restitución del inmueble con matrícula No. 50C-456448 a favor de Adriana Montejo Santana y a cargo de Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Eduard Leonardo Urrego Solórzano, Johanna Marcela Urrego Solórzano y Danny Alejandro Urrego Solórzano.

A título de frutos civiles, se reconocerá a la reivindicante la suma de $154'371.677, calculada hasta la época de emisión de este fallo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Sexta de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia que el 6 de febrero de 2023 profirió el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ordinario de la referencia y, en su lugar, desestima las excepciones de mérito que formularon los demandados en reconvención y acoge la demanda reivindicatoria.

En consecuencia, se ORDENA a Olga Esperanza Solórzano Corchuelo, Eduard Leonardo Urrego Solórzano, Johanna Marcela Urrego Solórzano y Danny Alejandro Urrego Solórzano que, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de este proveído, hagan entrega a Adriana Montejo Santana del predio con matrícula No. 50C-456448, a quien también deberán pagar, dentro del mismo término, la suma de $154'371.677, por concepto de frutos causados hasta la época de proferimiento de esta sentencia.

La misma metodología utilizada en esta providencia se aplicará, de ser el caso, para los meses subsiguientes, hasta que se restituya, a la reivindicante, el inmueble en disputa.

No se reconocen restituciones mutuas adicionales a las indicadas en este acápite.

Costas de ambas instancias a cargo de los demandados en reconvención. Liquídense por la juez *a quo*, quien incluirá, como agencias en derecho de la alzada, la suma de $2’500.000, según estimación del Magistrado Ponente. Devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Notifíquese.

Los Magistrados,

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

Firmado Por:

Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Juan Pablo Suarez Orozco
Magistrado
Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **228b5dcacd48e42a1389c366c042760a97720b4dd4127604f815ffde1515f189**

Documento generado en 24/07/2023 04:28:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

Sala Civil

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Ref.: Proceso ejecutivo de Banco de Bogotá contra José A. Londoño Castro

En cumplimiento de la orden emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 19 de julio de 2023, se deja sin efecto el auto de 6 de junio anterior, proferido dentro del proceso de referencia, así como las actuaciones que de él dependan.

En firme esta providencia, ingrese el expediente al despacho.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **863e3059973d36860a3e594840c5e64008278944268c5c0770ae9e8f4d710cfb**
Documento generado en 24/07/2023 12:10:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Exp.: 006201700698 02

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

Proceso:	Ejecutivo
Demandante:	Warco S.A.
Demandado:	Integrantes del Consorcio Estabilización Porvenir
Radicación:	11001310300820160061901
Procedencia:	Juzgado 8° Civil del Circuito de Bogotá
Asunto:	Apelación sentencia

Revisado el plenario, en los términos del artículo 325 de la ley procesal civil, se **RESUELVE:**

1. Comoquiera que confluyen las exigencias legales para admitir el recurso, pues fue formulado oportunamente por quien tiene legitimación para ello y se expusieron los reparos concretos a la providencia cuestionada, por ende, **SE ADMITE**, en el efecto DEVOLUTIVO, el recurso de apelación promovido por la parte demandada, contra la sentencia de 20 de junio de 2023 proferida por el Juzgado 8° Civil del Circuito de Bogotá.

2. Conforme al artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, a cuyo tenor: "*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes*", se OTORGA TRASLADO al apelante para que ante esta Corporación sustente el recurso, vencido el plazo legal antedicho, la contraparte podrá descorrer el traslado, si así lo considera; los términos comenzarán a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

Se advierte al recurrente, que en el plazo legal concedido y ante esta sede, **DEBERÁ SUSTENTAR EL RECURSO** so pena de declararlo desierto (artículos 322 de la Ley 1564 de 2012 y 12 de la Ley 2213 de 2022). Se recuerda que la sustentación consistirá en el desarrollo de los reparos planteados al

propiciar el recurso, cualquier aspecto adicional que se incluya no será considerado (artículos 320, 327 y 328 de la Ley 1564 de 2012).

3. Los profesionales del derecho darán estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 de la Ley 1564 de 2012, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

4. Las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

5. De otro lado, importante es señalar que el artículo 121 *ibidem* impone: "*(…) el plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a seis (6) meses contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del Juzgado o Tribunal (…). Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso*".

En el caso concreto, pertinente es hacer uso de la mencionada facultad, en atención a la complejidad del asunto, la carga laboral de la suscrita y en consideración a los trastornos generados por el trabajo virtual; en consecuencia, SE PRORROGA por una sola vez, hasta por seis (6) meses más, el término para decidir de fondo de esta segunda instancia.

Notifíquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Firmado Por:
Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **47f4d370984d79856a323bb1210306981d8523b626a4326f8035a34e135d32fe**
Documento generado en 24/07/2023 11:53:44 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) julio de dos mil de veintitrés (2023)

Radicado: Garantía Real 11001 3103 008 **2017 00534** 02 –Procedencia Juzgado 8 Civil del Circuito
Proceso: Bancolombia S.A. **vs**. Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
Asunto: **Apelación auto que ordenó levantar secuestro respecto de inmueble**

1. Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto de 13 de septiembre de 2022 proferido por el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se declaró próspera la oposición que el tercero Jhovany Andrés Carvajal Duque presentó en contra del secuestro que se adelantó sobre el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria N.° 50N20748990.

2. Para dar solución, se tiene que el legislador ha previsto una protección especial para que al poseedor no se le prive de de ese derecho. Así, el numeral 2 del artículo 309 CGP, enseña: "*Podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos,* ***si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre. El opositor y el interesado en la entrega podrán solicitar testimonios de personas que concurran a la diligencia, relacionados con la posesión. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan, siempre que se relacionen con la posesión, y practicará el interrogatorio del opositor, si estuviere presente, y las demás pruebas que estime necesarias****"* (negrillas añadidas). Por su parte, el numeral 8 del precepto 597 de esa misma codificación, señala: "*Si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la diligencia, si lo hizo el juez de conocimiento o a la notificación del auto que ordena agregar el despacho comisorio, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquella se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión. (…)".*

3. Así las cosas, es importante precisar que el artículo 762 del Código Civil define la posesión como *"la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él"*. En esos términos, debe establecerse que el promotor de la oposición al secuestro ejerce actos de señor y dueño sobre la cosa, al converger en él los dos elementos configurativos de la posesión, por un lado, el corpus, que se traduce en el ejercicio material del derecho, y de otro lado, el animus, que se refiere a la voluntad de considerarse titular del derecho. Al tener claro el anterior concepto, es preciso reiterar que no basta con alegar la condición de poseedor al momento de acudir al proceso, sino que es necesario y obligatorio acreditarla.

4. De acuerdo con lo anterior, se tiene que la parte apelante adujo que los documentos aportados por el incidentante no son suficientes para acceder a la oposición, por cuanto no hubo extinción de la hipoteca, sí se considera lo previsto en el artículo 2457 del C.C.; además, la escritura pública No. 1724 del 17 de mayo de 2017, no fue registrada, por tanto no cumple con las formalidades legales, de que trata el artículo 256 del CGP, no se le puede otorgar la calidad de público a un documento privado; por último, el artículo 46 de la ley 1579 de 2012, es claro al señalar que una escritura pública que contiene una compraventa y un levantamiento de hipoteca, no tiene valor probatorio al no contar con el registro público.

5. Al respecto, comporta precisar que el *sub lite* no corresponde a un juicio declarativo de pertenencia, por tanto, en este tipo de asuntos lo trascendente es que se demuestre posesión para al momento de la diligencia de secuestro, no es necesario verificar la manera en que se ingresó al inmueble, pues esta exigencia es solo en el caso de la prescripción ordinaria que se alega como modo para adquirir el dominio

de los bienes, en donde es menester demostrar un justo título adquirido de buena fe como antecedentes de los actos posesorios.

Tampoco es necesario el hecho de que la persona que invoca su condición de poseedor hubiera registrado en el folio de matrícula inmobiliaria la escritura pública mediante la cual suscribió en calidad de comprador la compraventa del inmueble objeto de controversia en un juicio ejecutivo, como ocurrió en este evento, toda vez que la falta de este presupuesto no desvirtúa la condición de poseedor del incidentante.

Así las cosas, es evidente que no le asiste razón a la censora en su inconformidad relacionada con la falta de registro de la escritura pública, y que por tanto la misma no cumple ni con los presupuestos del artículo 256 del CGP, ni de los preceptos 46 y 47 de la ley 1579 de 2012[1], pues como se anotó en este tipo de trámites lo que se debe analizar es que la parte que promueve el incidente debe tener la condición de poseedor y acreditarla, ya que mediante esta vía no se declara que este tercero sea el titular del derecho de dominio y como las disposiciones se refieren a la solemnidad y registro de algunos actos jurídicos, nada tienen que ver con la calidad en mención.

Así las cosas, es evidente que la falta de inscripción de la escritura pública en el folio de matrícula inmobiliaria del predio, no tiene la virtud de afectar la posesión que la juez de instancia encontró demostrada, puesto que se reitera, la labor probatoria está encaminada a verificar los actos positivos del tercero para con la heredad y que dadas las

---

[1] El artículo 46 de la ley 1579 de 2012, hace alusión a los "*instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva Oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ley, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro".* El artículo 47, se refiere a la oponibilidad de estos títulos que "*Por regla general, ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de su inscripción o registro".* El canon 256 del CGP, regula los documentos *ad subtantiam actus* "*La falta del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba"*

particularidades eran propias de una persona que actúa como propietario, poca relevancia tendría este requisito del registro, pues la debate obviamente no es el torno a la propiedad

Tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento de la censora referente a que los documentos aportados por el incidentante no son suficientes para acceder a la oposición, por cuanto no hubo extinción de la hipoteca, sí se considera lo previsto en el artículo 2457 del C.C., pues se reitera, en este tipo de trámites no se debe determinar la idoneidad del título que ostenta la persona que aduce tener la condición de poseedor, debido a que lo importante es que se demuestre la posesión para el momento en el cual se llevó a cabo el secuestro, la cual encontró probada la juez de primer grado.

La que además se halla demostrada en esta instancia, toda vez que efectivamente se logró establecer que por lo menos Jhovany Andrés Carvajal Duque, demostró los actos de señor y dueño en relación con el predio, ya que –en gracia de discusión- del contenido de la Escritura pública No. 1724 del 17 de mayo de 2017 que se suscribió con ocasión a la compraventa del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 50N-2074899, singularizado como el apartamento No. 304, el garaje No. 21 y del depósito No. 1 del edificio Torre Jazmín del Cabo P.H., que Torre Construye S.A.S. recibió de los incidentantes la suma de $400.00.000, y que de acuerdo con la cláusula novena se le hizo la entrega real y material del bien en mención en esa misma (que es lo relevante en el debate de ahora), situación que se verifica al revisar tal documento.

Para demostrar la posesión también se aportó documento en el cual el incidentante Jhovany Andrés Carvajal Duque, en calidad de arrendador, y

Lina María Matta Vanega, junto a Santiago Matta Vanegas, como arrendatarios, suscribieron el contrato de arrendamiento respecto del bien objeto de controversia el 3 de marzo de 2019. Al expediente también se allegaron recibos de pago de los servicios públicos, de impuestos, de la administración de la propiedad horizontal, y se recibieron las declaraciones Johvany Andrés Carvajal Duque y Erika Andrea Sánchez Rugeles, quienes manifestaron que para la época en que adquirieron el apartamento aún continuaban siendo compañeros permanentes, que su valor fue de $400.000.000, y que no registraron la escritura porque viajaron al exterior, que tras la ruptura de su convivencia quien quedó a cargo del bien fue Johvany Andrés, esto es, desde el 2018, que en varias oportunidades lo arrendó, en otras vivió allí, recibía el canon de arrendamiento, pagaba las cuotas de administración, los servicios públicos, los impuestos[2].

Del conjunto de los anteriores medios de convicción se pudo establecer la calidad de poseedor del incidentante, condición que en ningún instante del trámite fue desvirtuada por la apelante, pues ésta se limitó a indicar que no se podía tener en cuenta la escritura pública al no haber sido inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria, aún cuando en estos asuntos en nada influye la falta de registro.

Recuérdese que lo decidido por el juzgado solo hizo alusión al levantamiento del secuestro, pero para nada le dio la calidad de titular del derecho de dominio del predio a Johvany Andrés, por cuanto, acá se estableció que desde el 17 de mayo de 2017, es decir, luego de suscribir la escritura pública se le hizo entrega del bien, y que a partir de allí había empezado a comportarse como dueño.

---

[2] Estos medios de convicción se observan en el Cuaderno 05 "*OposiciónASecuestro"*

6. Así las cosas, como se probó que al momento de la práctica del secuestro el tercero tenía la posesión del bien, se impone confirmar la providencia recurrida.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C, Sala Civil, **CONFIRMA** el auto apelado, proferido en diligencia adelantada el 13 de septiembre de 2022, por el Juzgado 8° Civil del Circuito de Bogotá.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
*Rdo. 110013103 008 **2017 00534** 02*

Firmado Por:
German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **49c8224da10687663309521f92ec320dad17a32d0bd236c515480aacfcceaf5d**
Documento generado en 24/07/2023 04:59:07 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

MAGISTRADO PONENTE: **JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**
RADICACIÓN : **11001-31-03-008-2021-00478-01**
PROCESO : **VERBAL**
DEMANDANTE : **WILLIAM GABRIEL URREGO LANCHEROS**
DEMANDADOS : **CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA P.H.**
ASUNTO : **IMPUGNACIÓN SENTENCIA**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia proferida el 17 de abril de 2023, por el Juzgado Octavo Civil Circuito de Bogotá, en el asunto del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1. William Gabriel Urrego Lancheros pretendió que "[s]*e* ***DECLARE*** *la nulidad del numeral 8 del Acta No. 2 de Asamblea Extraordinaria de Copropietarios del Conjunto Residencial Tarragona P.H. de fecha 19 de septiembre de 2021, por medio cual se presentó y aprobó del incremento de la cuota de administración por coeficiente de las áreas privadas de cada apartamento por violación directa de los artículos 25, 26 y 85 de la Ley 675 de 2001 y el reglamento de propiedad horizontal".*

Para soportar tal súplica, expuso, esencialmente, que el 25 de julio de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios del Conjunto Residencial Tarragona P.H., y en desarrollo de la misma, se escucharon varias intervenciones, quedando "*debidamente acreditado que varios apartamentos realizaron obras incrementando sustancialmente sus áreas privadas las cuales no han sido actualizadas por* [la] *administración a fin de determinar el coeficiente real* (…)". Refirió que en dicha reunión se "*acordó que el incremento de las cuotas de administración de cada unidad se determinaría por el área real construida de cada apartamento y no por el coeficiente determinado en la Escritura Pública 6502 del 2 de septiembre de 1983* (…)".

Explicó que el 19 de septiembre de 2021, "*se llevó a cabo asamblea general extraordinaria de copropietarios del conjunto residencial*

Tarragona P.H. en la cual (…) *se presentó y aprobó el incremento de la cuota de administración por coeficiente de las áreas privadas de cada apartamento",* contrariando "*lo estipulado en la asamblea ordinaria de propietarios de fecha 25 de julio de 2021*", ya que la administradora "*aclaró que el proyecto de incremento de cuotas de administración se realizó de acuerdo a lo estipulado a la Escritura Pública 6502 del 2 de septiembre de 1983, de la notaría sexta del Círculo de Bogotá D.C., y no por el área real construida en contravía de los artículos 25, 26 y 85 de la Ley 675 de 2001* (…) *toda vez que existen varios apartamentos en la propiedad horizontal con área de construcción muy superior a lo establecido en la Escritura Pública 6502 del 2 de septiembre de 1983* (…) *toda vez que dichas ampliaciones se hicieron con posterioridad a la elaboración de dicho instrumento notarial*".

Finalmente, indicó que el coeficiente "*determinado en la Escritura Pública 6502 del 2 de septiembre de 1983* (…) *para determinar el valor de la cuota de administración no es real y va en contravía de la ley. El incremento del pago de las cuotas de administración, no se ajusta al ordenamiento jurídico colombiano toda vez que los coeficientes para determinarlo no son reales a la situación física de las unidades privadas*".

2. El extremo llamado a juicio se opuso a las aspiraciones del actor, manifestando, básicamente, que la "*cuota de administración para el año 2022 fue ajustada conforme a los metros cuadrados de las áreas privadas y los coeficientes indicados en la Escritura Pública No. 6502 del 02 de septiembre de 1983 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá D.C., dando cumplimiento a los artículos 25, 26 y 85 de la Ley 675 de 2001 y con el reglamento de la propiedad horizontal"*. En ese sentido, propuso las excepciones de "*FALTA DE CAUSA EN LA ACCIÓN*" y "*ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL DEMANDANTE"*.

II. LA SENTENCIA APELADA

La juzgadora *a quo* desestimó la pretensión impetrada, tras indicar, preliminarmente, que los coeficientes que aparecen relacionados en el acta impugnada corresponden y coinciden en su totalidad con los consignados en la escritura pública No. 6502 de 1983 de la Notaría Sexta de Bogotá, "*adicionalmente, los asambleístas votaron que el ajuste de la cuota de administración se hiciera conforme a ese coeficiente y no de acuerdo a la propuesta que se hizo en los términos del artículo 26 de la Ley 675 del año 2001, por el presidente en esta asamblea, obteniendo, de un lado, el quorum y la votación favorable para que de esta forma se aprobara"*.

A continuación, refirió que "*el problema jurídico a resolver como quedó delimitado al momento de fijarse el objeto de litigio, es, si es legal, o no es legal, que el cobro de la cuota o el ajuste de la cuota se hiciera conforme a los coeficientes que aparecen en la escritura pública desde 1983, en la medida que se ha alegado y es de pleno conocimiento, -según se refiere en el libelo demandatorio-* (…) *que existen algunas unidades privadas* (…) *que hicieron construcciones que aumentaron el área de construcción y en virtud de ello* (…) *hay lugar a la modificación del coeficiente para efectos de poder determinar las diferentes cuotas de administración"*.

En ese orden de ideas, recordó que el actor como sustento de su aspiración, afirmó que la decisión recurrida desconoció "*el numeral 10 de la asamblea que se realizó en julio 25 del año 2021*", sin embargo, y tras dar lectura textual de esa acta, la juez concluyó que, en modo alguno, "*se estableció, -como lo refiere la parte demandante-que allí se hizo una votación de que el coeficiente sería conforme se reclama en el libelo demandatorio, pues lo que se puede extraer de la lectura del numeral 10 del acta de julio del año 2021, es que existen varias posiciones de los asambleístas en relación con las construcciones que se hicieron y no se declararon en su oportunidad* (…), *es decir, que en este caso, se inició la discusión del metraje real de los apartamentos desde julio de 2021, conforme aparece acreditado con ese numeral 10, y se estableció en esta acta de asamblea de julio del año 2021, por los asambleístas que definitivamente se iba a ser el ajuste de la cuota a partir de septiembre de 2021, de acuerdo al coeficiente, y que los que habían efectuado algún mejoramiento a sus unidades privadas que hubiesen modificado de alguna manera el coeficiente, entonces, remitirían esa información a la copropiedad para efectos de que se actualizara y así se pudiera cambiar el coeficiente".*

Por lo anterior, ultimó que "*en esa asamblea no se estableció como enfáticamente se ha señalado, en este asunto, que los asambleístas hubieren decidido que el coeficiente era para cada apartamento o para cada unidad un valor determinado, entre otras cosas, porque, el coeficiente debe estar debidamente inscrito en cada uno de los apartamentos que conforman la propiedad horizontal en el folio de matrícula inmobiliaria que acredita la titularidad o la inscripción de ésta".*

Y cerró diciendo que "*es indiscutible como lo señala la parte demandante que varios copropietarios, según se ha referido, efectuaron modificaciones o remodelaciones a las unidades privadas del conjunto residencial accionado, sin embargo* (…) *no existe suficiente material probatorio que conlleve a determinar si esas remodelaciones, si esas modificaciones, si esos*

mejoramientos, cambiaron el área privada o modificaron el área privada de cada una de las unidades privadas"; y precisó que "*el proceso de impugnación de actas no ha sido establecido para efectos de entrar a determinar si un propietario de una unidad modificó, de manera arbitraria, ilegal, sin la respectiva licencia de construcción, el área de terreno que contempla el reglamento y en este caso la escritura de 1983, de esta manera el juzgado negará las pretensiones de la demanda, entre otras cosas, porque no se advierte la afectación del artículo 25, 26 y 85 de la Ley 675 de 2001* (…) *en la medida que de acuerdo a la propia prueba documental allegada por el extremo actor no se han modificado los coeficientes que obran en la escritura pública del año de 1983* (…) *que significa lo anterior, que eventualmente la parte demandante pueda discutir este asunto de la modificación de los coeficientes a través de otro proceso, una acción totalmente diferente a la impugnación de actas".*

III. LA IMPUGNACIÓN

1. En desacuerdo con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, que sustentó oportunamente, manifestando, basilarmente, en que el estrado de primer grado no "*realizó control de legalidad del acta de asamblea, toda vez que se evidenció que efectivamente el coeficiente pagado no se adecua al art. 25 y 26 de la Ley 675 del 2001* (…) *el juzgado no dio estricto cumplimiento a lo establecido por el Art. 26 de la Ley 675 de 2001, toda vez que en el proceso quedó debidamente acreditado que el coeficiente determinado en el acta no es acorde con las construcciones realizadas y reconocidas por los demás copropietarios. En la sentencia impugnada el juzgado del circuito no realizó control de legalidad correspondiente, toda vez que no hizo la valoración adecuada de las pruebas* (…)".

De otro lado, indicó que la juez de primer grado se equivocó al momento de interpretar la voluntad de los condóminos, contenida en el acta de asamblea ordinaria del 25 de julio de 2021, porque lo aprobado fue que se diera "*aplicación a la ley 675 del 2001 contemplada en los artículos 25, 26 y 85 que trata sobre ajuste y cobro de las expensas comunes por coeficiente de acuerdo con el metraje de cada área privada correspondiente a los apartamentos del conjunto residencial Tarragona a partir de enero del año 2022*", pero, el ajuste de las cuotas tuvo como referencia el reglamento de 1983 "*que no contempla las modificaciones mencionadas por los diferentes propietarios, donde incluso se habla de más de 100 metros cuadrados*".

Agregó que no se tuvo en cuenta lo descrito en el artículo 5° de la Ley 675 de 2001, porque se acreditó "*que las áreas no corresponden a las descritas en el reglamento de 1983, por cuanto las modificaciones se realizaron con posterioridad a dicha norma* (…)*. Para lo cual el conjunto en sus facultades debió establecer que se debe tomara la realidad del conjunto en temas de metraje*".

También insistió en que "*matemáticamente y aritméticamente un apartamento con el mismo metraje no puede tener coeficientes diferentes, tal cual ocurre entre los apartamentos 101 y 102, así como ocurre con el 205 y 206; con metrajes diferentes e iguales coeficientes y con metrajes iguales, pero coeficientes diferentes, respectivamente. De lo anterior se comprueba matemáticamente los errores aritméticos que posee la definición del reglamento 6502 de 1983. Adicionalmente, se tiene que se hace los mismos cobros para los apartamentos con un coeficiente del 2.01% y 1,97%. Así mismo, se demuestra matemáticamente que el metro cuadrado se cobra de manera discriminatoria*".

(…)

Ahora bien, el reglamento de 1983 tiene en cuenta las áreas privadas libres como área privada construida, es decir, en la determinación del coeficiente considera erróneamente como área privada construida (…) en las fotos satelitales que no fueron tenidas en cuenta se puede observar claramente cómo es que hay patios techados y sin techar, así como se puede apreciar las ampliaciones. Por lo anterior, con mayor precisión la jueza debió aplicar lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 5 (…)".

Finalmente, señaló que la funcionaria realizó una indebida apreciación probatoria, pues no se tuvo en cuenta una respuesta a una petición que presentó, en "*donde el administrador indica que no puedo solicitar ese derecho por cuanto no tengo las mismas condiciones del apto 112 y que la propietaria legalizará su construcción teniendo en cuenta que se había consultado profesionales tal cual lo indica en la misma petición. No se tiene en cuenta la grabación de la asamblea, que es de conocimiento de todos los asambleístas ya que con esa grabación se realiza el acta. Así mismo se acredita las modificaciones. En el Acta de asamblea general No. 001 del 25 de julio de 2021, punto 15, en su quinta proposición, la asamblea reconoce la existencia de ampliaciones y en respuesta al derecho de la igualdad permitiendo ampliaciones para otros propietarios con el fin de evitar conflictos con los de los primeros*".

2. A su turno, la demandada fundamentalmente pidió confirmar la sentencia confutada, toda vez que "*no se logró evidenciar que las modificaciones o ampliaciones realizadas por los copropietarios*

incrementaran el porcentaje del coeficiente del área construida de los apartamentos del Conjunto Residencial Tarragona- Propiedad Horizontal (…)", además, el recurrente pretende cuestionar lo consignado en la Escritura Pública del año de 1983, extralimitándose de los asuntos a tratar que se circunscriben a los problemas jurídicos planteados en el litigio, y, de otro lado, la acción de impugnación de actas de asamblea no es el medio por el cual se pretenda probar que existieron incrementos en las áreas construidas de cada uno de los apartamentos.

IV. CONSIDERACIONES

1. No advirtiéndose vicio que pueda invalidar lo rituado, de manera liminar, se hace necesario anotar que esta Sala se circunscribirá a analizar los motivos de desacuerdo demarcados por el extremo apelante, acatando los lineamientos de los cánones 320 y 328 del Código General del Proceso.

2. Con el propósito de resolver la apelación interpuesta, es del caso recordar que el artículo 37 de la Ley 675 de 2001, en su inciso segundo, prevé que "[l]*as decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto."* Empero, el canon 49, *ibidem*, faculta al administrador, al revisor fiscal y a los propietarios de bienes privados, para "*impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal*"; preceptuando, al respecto, el artículo 382 del Código General del Proceso que "[l]*a demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado, solo podrá proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción*"; asunto sobre el que la Sala de Casación Civil puntualizó, entre otras cosas, que, "[t]*radicionalmente se ha afirmado que el proceso de 'impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios' tiene como propósito establecer si la decisión adoptada por algún órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado se ajusta o no a las prescripciones legales y a los estatutos que esos entes han adoptado con el fin de regularse. Y desde esa perspectiva el debate de esos asuntos se ha circunscrito a determinar, bajo el principio de legalidad,*

si las directrices objetadas pueden ser sancionadas por el incumplimiento de la 'ley' o de los reglamentos de las asociaciones, nada más."[1]

3. Hechas esas acotaciones, debe resaltarse que la juzgadora de primera instancia negó las súplicas de la demanda, medularmente, porque, a su juicio, la decisión censurada, adoptada el 19 de septiembre de 2021, en su numeral 8°, por la asamblea extraordinaria de copropietarios del Conjunto Residencial Tarragona P.H., se ajustó a los parámetros de coeficiente consignados en la escritura 6502 de 1983 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá. Sentencia rebatida por la parte actora, al insistir, básicamente, en que los módulos de contribución se alteraron con ocasión a las construcciones y/o modificaciones que algunos propietarios le realizaron a sus unidades residenciales, pues el área de sus heredades se incrementó en más de 100 metros cuadrados, para algunos residentes.

4. Dentro de ese marco impugnativo, bien pronto se observa la confirmatoria del fallo confutado, comoquiera que la presente acción se encamina a refutar la decisión de asamblea aprobada el 19 de septiembre de 2021, por estar cimentada en el reglamento de la copropiedad demandada, que, en opinión, de la parte demandante no se enmarca dentro de las previsiones de la Ley 675 de 2001, específicamente, lo normado en sus artículos 25, 26 y 85, pues, en su criterio, el reajuste y cobro de las expensas comunes debe realizarse conforme al coeficiente calculado con el "*metraje* [real] *de cada área privada*".

Sin embargo, pasó por alto la parte opugnadora cuestionar el punto toral del fallo de primera instancia, consistente en que "***el coeficiente debe estar debidamente inscrito en cada uno de los apartamentos que conforman la propiedad horizontal en el folio de matrícula inmobiliaria que acredita la titularidad o la inscripción de ésta***", pese a que se alegó en la demanda que algunos propietarios efectuaron construcciones que, en cierto modo, afectaron el área privada de sus viviendas; asunto que examinado con los medios suasorios aportados en la actuación, condujo a la juez de conocimiento a ultimar que "*acá no aparece acreditado cual es el porcentaje que pudo haberse modificado con esas remodelaciones, entre otras cosas, porque se escapa de la fijación del objeto de litigio y se escapa de la finalidad del proceso de*

[1] CSJ SC6006-2021 de 27 de mayo de 2021, rad, 11001-02-03-000-2021-01284-00.

impugnación de actas"; omisión refutatoria que deja incólume esos segmentos conclusivos, y al margen del escrutinio de este Tribunal, puesto que, a tono con el artículo 320 del Código General del Proceso, "*el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión"*, y, según la Corte Suprema de Justicia, "*en el contexto de la apelación de sentencias, es dable comprender al reparo concreto como aquella enunciación específica de una inconformidad desprovista de argumentación dirigida en contra de una decisión judicial o parte de ella y que a su vez permite delinear los contornos dentro de los que se construirá el acto de la sustentación, entendido este como el ejercicio de justificación con el que se pretende soportar el disentimiento propuesto*";[2] conceptos que "*obedecen, en últimas, a la materialización de una misma institución procesal adoptada por la actual legislación adjetiva, esto es, la pretensión impugnativa, figura que implicó la delimitación de la competencia del ad quem a los asuntos que específicamente reprocha el apelante, punto de partida del que puede colegirse que la finalidad de estas dos cargas enunciadas corresponde a delimitar el escenario en el que se deberá desarrollar el debate de la segunda instancia.*"[3]

5. Con todo, no pierde de vista el Colegido que en las diligencias no se avista demostrado que el estatuto que regula los derechos y obligaciones de los copropietarios, cuya modificación a los coeficientes de la copropiedad se formalizó en el instrumento público 6.502 del 2 de diciembre de 1983 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, hubiese sido objeto de demanda para atacar su contenido, y, mientras no sea invalidado por la autoridad competente, se presume su legalidad y tiene plena eficacia, pues, a voces de la Corte Suprema de Justicia, "[l]*a presunción de la validez y eficacia del acto jurídico ampara y favorece a quienes en él han intervenido como partes,* (…). *Quiere decir esto que para anular o desvirtuar un acto de esa naturaleza, es preciso que quien lo impugna destruya esa presunción, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso, que demuestre o los vicios internos del acto o la falta de las solemnidades o formalidades requeridas* (...)*.*"[4]

En esas condiciones, no es posible desgajar la nulidad del acto de asamblea acusado, por el hecho de emitirse de conformidad con un reglamento de propiedad horizontal que, en criterio del extremo

[2] CSJ. Sentencia STC16558-2021 de 7 de diciembre de 2021. Rad. 11001-22-03-000-2021-02140-01.
[3] *ídem*
[4] CSJ. Civil. Sentencia del 15 de marzo de 1944, reiterada en Sentencia SC19730-2017 de 27 de noviembre de 2017, rad. 05001-31-03-007-2011-00481-01.

demandante, es contrario a ley, desconociendo que permanece revestido de legalidad hasta que dicho carácter no sea retirado del mundo jurídico por decisión judicial, sendero procesal que, según viene de verse, jamás ha sido emprendido por los interesados, ni siquiera en el presente trámite, puesto que esa temática no fue materia de pretensión en el libelo genitor.

6. En lo que dice relación con las inconformidades afincadas en el reglamento de propiedad horizontal, por los porcentajes de los coeficientes asignados a algunos apartamentos, se observa que son disertaciones introducidas al trámite de segunda instancia, cimentadas en la existencia de "*errores aritméticos que posee la definición del reglamento 6502 de 1983",* al señalar que no es posible que "*un apartamento con el mismo metraje no puede tener coeficientes diferentes, tal cual ocurre entre los apartamentos 101 y 102, así como ocurre con el 205 y 206, con metrajes diferentes e iguales coeficientes*" y que "*el reglamento de 1983 tiene en cuenta las áreas privadas libres como área privada construida, es decir, en la determinación del coeficiente considera erróneamente como área privada construida* (…) *en las fotos satelitales* (…) *se puede observar claramente cómo es que hay patios techados y sin techar".*

No obstante, tales acusaciones no serán materia de pronunciamiento por parte del Tribunal, debido a su carácter novedoso en el juicio, al no haber sido expuestas en los albores del debate, esto es, en el libelo genitor ni al descorrer el traslado de las excepciones propuestas por la pasiva -además de no contar con respaldo suasorio que permita corroborarlas-; situación que claramente muestra una súbita variación argumentativa del extremo convocante, que, de atenderse en sede de apelación, sorprenderían a su contraparte, por no haber tenido espacio para pronunciarse al respecto, conducta jurisprudencialmente reprochada, porque "(…) *evidencia un repentino cambio de postura o actitud frente al litigio, como quiera que tales giros desconocen la buena fe y lealtad que ha de presidir una contienda, a la vez que infringen el derecho de defensa, en la medida en que introducen elementos y argumentos ajenos a los extremos originales del pleito, frente a los cuales, por razones obvias, la contraparte no ha contado con una adecuada oportunidad para contradecirlos o cuestionarlos* (…)."[5]

[5] CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 30 de enero de 2007, rad. 1100131030262000-24326-01.

7. Finalmente, de cara a la "*indebida apreciación probatoria por parte del juzgado*" al no valorar "*la respuesta a un derecho de petición*" y "*la grabación de la asamblea*", medios probatorios que, en opinión del recurrente, demostraban las "*existencias de ampliaciones*" a varias viviendas, cabe destacar que la controversia, en estrictez, no giró en torno a determinar si se hicieron o no esas construcciones o modificaciones para algunas unidades habitacionales, pues la directora del proceso, al momento de fijar el litigio, estimó que uno de los problemas jurídicos a resolver, era establecer si la acción de "*impugnación de actas es el medio idóneo y eficaz, en los términos del artículo 382 del Código General del Proceso, para debatir el coeficiente de cada uno de los apartamentos que integran la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que la nulidad que aquí se alega se fija específicamente en que para ajustar el valor de la cuota debe tenerse el área real de construcción de cada uno de los apartamentos y no los que aparece en la escritura pública inicial, en la medida que a lo largo del tiempo se han efectuado varias construcciones y mejoras que han permitido que se amplíe esa área privada".*

Planteamiento procesal que mereció la conformidad de todas las partes concurrentes en la audiencia y que impone recordar que "[l]*a fijación del objeto de la litis no es una liberalidad del funcionario judicial sino una etapa en la que las partes determinan con precisión las cuestiones de hecho que serán materia del debate probatorio*."[6] De ahí que "*el Juez, al momento de proferir sentencia, debe plegarse racionalmente a los términos del litigio.*"[7]

En esa medida, los aludidos medios probatorios realmente ninguna incidencia tienen en la resolución del problema jurídico planteado, que fue desatado por la falladora de primera instancia con la ausencia de prueba de coeficientes distintos a los contemplados en la escritura de 1983, agregando que, aunque pudieran advertirse obras sin formalizarse, no se constató cuál es el porcentaje correspondiente a esas modificaciones, asunto que escapa al proceso de impugnación de actas, que no está destinado a verificar si un propietario edificó con violación a la licencia de construcción o al reglamento; conclusión no confutada por el extremo opugnador, para los fines del artículo 320 del C.G.P.

8. Todo lo delanteramente dilucidado es suficiente para confirmar el fallo apelado, con la consecuente imposición de condena en

[6] CSJ. SC780-2020, rad. 18001-31-03-001-2010-00053-01
[7] CSJ. SC 18 de diciembre de 2006, ref. 2000-00460-01.

costas de esta instancia a cargo de la parte recurrente, de conformidad con la regla 1ª del artículo 365, *ibidem.*

V. DECISION:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de 2023, por el Juzgado Octavo (8) Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en el asunto *sub examine*.

SEGUNDO. CONDENA EN COSTAS en esta instancia a la parte recurrente. El Magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la suma de $1’000.000. Tásense según las previsiones del artículo 366 del C.G.P.

TERCERO. En oportunidad, por Secretaría, ofíciese al Despacho Judicial de origen informándole sobre la presente decisión, y remítasele copia magnética de esta providencia, para que haga parte del respectivo expediente.

NOTIFÍQUESE

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado
(08 2021 00478 01)

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
Magistrado
(08 2021 00478 01)

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado
(08 2021 00478 01)

Firmado Por:

Juan Pablo Suarez Orozco
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **92c6065587b5d4708f1b2c855a0fcb422222002c98afb5b5bf5b5d5614956f49**
Documento generado en 24/07/2023 11:27:57 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SEXTA CIVIL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente
OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Bogotá D.C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés
(aprobado en sala virtual ordinaria de 19 de julio de 2023)

11001 3103 009 2021 00169 02

Ref. Proceso verbal impugnación de actos de asamblea de Andrés Gouffray Nieto contra Edificio Agrupación de Vivienda Centro Residencial el Castillo Torre No. Tres (3) P.H.

Se decide la apelación que formuló Andrés Gouffray Nieto contra la sentencia que el 24 de mayo de 2023 profirió el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso verbal que el apelante promovió contra el Edificio Agrupación de Vivienda Centro Residencial el Castillo Torre N. Tres P.H.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA. Con ella se pidió que se declare la "nulidad absoluta" de las decisiones contenidas en el Acta No. 176 de la "Asamblea General [ordinaria] de Copropietarios" de 23 de marzo de 2021, esto con soporte en dos circunstancias distintas: a) por la inobservancia de la regulación sobre reuniones no presenciales que contempla la Ley 675 de 2001 (art. 42 y 44) y b) "por cuanto se aprobó un fondo denominado Fondo de Obras Edificio, por valor de $59'328.000 equivalente al 3.52% del presupuesto" lo cual, así lo sugirió, no acompasa con la legislación vigente en materia de propiedad horizontal.

1.1. El señor Gouffray Nieto (copropietario) relató que, previa la convocatoria de rigor, se programó el 23 de marzo de 2021 para adelantar de forma **no presencial** la asamblea general ordinaria de copropietarios del año 2021, en la que se verificó un *quórum* del 67.153%, según se registró en el acta No. 176[1].

[1] Orden del día en la asamblea:
"**1.** Verificación del quorum.
2. Aprobación orden del día.
3. Elección presidente y secretario de la asamblea.
4. Nombramiento Comisión plural que aprobará el acta de la presente asamblea.
5. Informe gestión del consejo de administración y administrador
6. Aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2020
7. Análisis y aprobación presupuesto para la vigencia del año 2021.
8. Obras para realizar
9. Nombramiento consejo de administración para la vigencia año 2021-2022.
10. Nombramiento comité de convivencia para la vigencia año 2021-2022.
11. Temas varios y propuestas de los señores miembros de la asamblea"

Afirmó que en la reunión de 23 de marzo de 2021 se adoptaron múltiples decisiones sin atender las previsiones de los artículos 42 y 44 de la Ley 675 de 2001, que exigen que para la validez de la reunión no presencial es indefectible que exista prueba del "nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en que lo hace".

1.2. Aseveró el demandante que al someter a votación el punto de "análisis del presupuesto para la vigencia de 2021" se aprobó por mayoría simple, dentro de ese *ítem*, el intitulado "fondo de obras de edificio", rubro que, en rigor involucra una "cuota extraordinaria que se cobra mensualmente sin destino específico".

También anotó que para aprobar lo atinente al fondo de obras se requería una mayoría calificada del 70% de coeficientes de copropiedad, el cual no se satisfizo (num. 3°, art. 46, *ibidem*); que el artículo 38 de la misma ley de Propiedad Horizontal sólo autoriza a la asamblea general de copropietarios aprobar o improbar, por mayoría simple, el presupuesto de la P.H. y que tal fondo no corresponde a una expensa común, escenario en el que sería suficiente esa mayoría simple.

2. LA OPOSICIÓN. El Edificio Agrupación de Vivienda Centro Residencial el Castillo Torre No. Tres P.H. excepcionó: "**Inexistencia de la necesidad de mayoría calificada para la aprobación del presupuesto de la copropiedad**"; "**fondo de obras como fondo de reserva voluntaria**"; "**mala fe del demandante**" y "**prescripción**".

En síntesis, la demandada alegó que por el paso del tiempo ya prescribió la acción de la referencia; que el abogado Andrés Gouffray Nieto (demandante), actúa de mala fe al iniciar este proceso que carece de fundamento legal y fáctico, pese a ser conocedor de esas áreas del derecho; y que el fondo de obras "tiene como objeto esencial de implementación los presupuestos propios del fondo de reserva voluntaria" que regula el artículo 45 del reglamento de propiedad horizontal de la PH demandada[2].

Adicionó que la finalidad del fondo de obras es cubrir mantenimientos, mejoras necesarias y contingencias del edificio para no "sesionar de manera extraordinaria y afectar financieramente a los copropietarios"; que mediante Acta de Asamblea General de Copropietarios No. 78 de 31 de marzo de 2003 se aprobó que se incluiría en el presupuesto de cada año el rubro de fondo de obras, y que tal decisión no se impugnó.

Anotó que al enmarcarse el mencionado rubro "dentro de los presupuestos del fondo de reserva voluntaria", no corresponde a una cuota extraordinaria; que no se requiere una mayoría calificada porque allí lo que se aprobó fue el presupuesto anual de la P.H. y que la decisión que se cuestiona logró el voto favorable del 65,04% de los coeficientes de copropiedad.

[2] Escritura pública No. 2892 de 9 de junio de 2003.

3. EL FALLO APELADO. La juez *a quo* desestimó la demanda y condenó en costas a la parte actora[3].

Sostuvo que del expediente no emana la intención "ficta o simulada de la copropiedad" de crear un fondo para obtener cuotas extraordinarias; que dicha finalidad no se avizora de la lectura del reglamento de propiedad horizontal y que el demandante no probó que el fondo de obras corresponda a una expensa extraordinaria cuyo fin sea evadir la mayoría exigida para la aprobación de ese tipo de erogaciones económicas.

Añadió que no se acreditó que las decisiones de la asamblea estén revestidas de mala fe; que la Ley 675 de 2001 no prohíbe que los copropietarios aprueben la constitución de fondos, actuación que acompasa con la autonomía de la libertad que ostenta la P.H., como persona jurídica; que nada se opone a la decisión de crear el fondo, cuando como aquí ocurre no se contraría la ley; que se ajusta a derecho ese acto asambleario si se tiene en cuenta que los mismos copropietarios votaron favorablemente tal determinación y que en el reglamento de propiedad horizontal (no indicó artículo) se prevé la destinación de los recursos que se capten en beneficio de los condóminos.

Por ende, concluyó que no era factible predicar la nulidad absoluta del acto de la propiedad horizontal que se planteó con la demanda.

4. LA APELACIÓN. El copropietario Andrés Gouffray Nieto alegó:

4.1 Que la juez *a quo* dejó de lado que también la pretensión de nulidad absoluta, se soportó en el argumento según el cual, para la reunión no presencial en la que se desarrolló la asamblea ordinaria de 23 de marzo de 2021, tenía que acatarse el parágrafo único del artículo 42 de la Ley 675 de 2001.

Añadió que la representante legal de la opositora, en su declaración de parte confesó que no se cumplió con las exigencias que contempla el parágrafo del artículo 42 en cita y que "no hay grabación digital o magnetofónica, no existe constancia de la forma en la que fueron emitidos los votos" en lo que atañe a los asuntos que fueron decididos en la cuestionada asamblea de copropietarios.

4.2 Insistió el inconforme en que el fondo de obras tenía que ser aprobado con una mayoría calificada del 70%, por ser una expensa no necesaria, en observancia del numeral 3° del artículo 46 de la Ley 675 de 2001 y que las funciones de la asamblea previstas en el artículo 38, *ibidem,* no autorizan la creación de fondos.

Afirmó que el reglamento de propiedad horizontal de la opositora contempla, únicamente, el fondo de reserva voluntaria para realizar mejoras y suplir el déficit

[3] Parte resolutiva:
"**PRIMERO:** Denegar en su totalidad las pretensiones de la demanda planteadas por el actor, Dr. Andrés Gouffrayg Nieto.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, si acaso se dispuso medida cautelar en este asunto, se ordena su cancelación. Por secretaría ofíciese.
TERCERO: Se condena en costas a la parte demandante, tasando como agencias en derecho la suma de $2.000.000".

presupuestal y que no puede, entonces, asimilarse al fondo de obras que se cuestiona, el cual tiene por objeto la realización de obras en las zonas comunes del edificio.

Añadió que por la naturaleza del fondo de reserva voluntaria no sería una expensa común necesaria, por lo que también requiere para su aprobación de una mayoría calificada del 70% y que las disposiciones sobre mayorías son normas de orden público que no hay lugar a omitir.

CONSIDERACIONES

1. Verificada la ausencia de irregularidades que impidan proferir decisión de fondo, la Sala anuncia que revocará el fallo apelado, por ser ostensible, en el asunto *sub lite,* que se pretermitieron los preceptos legales en el desarrollo de la asamblea general ordinaria llevada a cabo de forma **no presencial** el 23 de marzo de 2021.

Conviene desde ahora realizar algunas citas de relevancia para lo que a continuación va a dilucidar el Tribunal.

A. Es importante resaltar que la Ley 675 de 2001, por la cual se sancionó el régimen de propiedad horizontal en Colombia, estableció con claridad meridiana determinados requisitos para la validez de las asambleas no presenciales:

> ARTÍCULO 42. **REUNIONES NO PRESENCIALES.** Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la asamblea general cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados **puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el *quórum* requerido para el respectivo caso**. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad.
>
> PARÁGRAFO. Para acreditar **la validez de una reunión no presencial**, **deberá quedar prueba inequívoca, como fax, grabación magnetofónica o similar, donde sea claro el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en que lo hace**, así como la correspondiente copia de la convocatoria efectuada a los copropietarios.

B. Sobre la disposición legal citada en el literal precedente la doctrina ha sentado que:

> "Debe existir medio de prueba válido de lo ocurrido en la reunión. Hay un requisito ***sine qua non:* La prueba o evidencia permanente de la comunicación simultánea o sucesiva de la deliberación y decisión**. En un primer momento la norma solo alude a la expresión 'siempre que ello se pueda probar' aunque más adelante **aclara qué tipo de prueba es la que deber usarse**: 'deberá queda prueba inequívoca, como fax, grabación magnetofónica o similar, donde se claro el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en que lo hace'".

La prueba debe ser obligatoriamente un medio tecnológico, que conste en cinta, video, impresión, etc., que pueda ser revisado por cualquier persona en el futuro, y pueda probar claramente lo ocurrido al interior de ella.

Esta norma consagra la obligación de la identificación en la grabación **del nombre claro de la persona** (propietario o su representante), **que emite la decisión, así como su contenido y hora en que la realiza la misma**". (Monsalve Caballero Luis Carlos. Régimen de la Propiedad Horizontal en Colombia, Ed. Ibáñez, año 2017, pág. 278).

En el mismo sentido, otro sector de la doctrina nacional precisó:

"**La asamblea no presencial deliberante y decisoria aparece consagrada en el artículo 42 de la Ley 675 de 2001** en los siguientes términos: "Reuniones no presenciales. Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la asamblea general cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad." **Parte este artículo del supuesto legal de la necesaria y absoluta probanza de la asamblea no presencial, término de perogrullo porque en el derecho lo que no tenga prueba no es derecho: Dame los hechos y te daré el derecho dice un principio universal.** El instrumento empleado para el funcionamiento de esta asamblea debe generar por su propia naturaleza una opción deliberativa, de tal forma que los propietarios tengan la posibilidad de discutir y controvertir la propuesta"(Velázquez Jaramillo Luis Guillermo. Propiedad Horizontal. Cuarta Edición. Ed. Comlibros. 4ª edición, año 2012, pág. 509).

2. En el criterio del Tribunal la ausencia de prueba inequívoca de la validez de la reunión no presencial de 23 de marzo de 2021, quedó establecida con la confesión que la representante legal de la opositora efectuó al rendir la declaración de parte en la audiencia inicial (Archivo 15GrabaciónAudiencia C.1).

2.1. En efecto, la señora Libia Monroy Valencia en el decurso de la declaración de parte que practicó la juez *a quo* expresó con claridad sobre la falta del elemento de juicio necesario para la validez de la asamblea fustigada, lo siguiente:

Pregunta: "¿Libia sírvase decir, si o no, es cierto, [que en] la asamblea que se verificó el 23 de marzo de 2021 consignada en el acta No. 176", "se realizó de manera no presencial?"

Respuesta: "sí se hizo **no presencial**, **virtual**".

Pregunta: "¿Sírvase decir si de dicha asamblea se dejó constancia en grabación digital o magnetofónica?".

Respuesta: "No doctor".

Pregunta: ¿se grabó la asamblea?.

Respuesta: "**No doctor, no se grabó**".

Pregunta: ¿No se dejó constancia de esa asamblea no presencial en ningún medio?.

Respuesta: "**No doctor**".

Pregunta: ¿Sírvase explicarnos cuál fue el mecanismo utilizado en dicha asamblea para recepcionar y contabilizar los votos que emitían los copropietarios cada vez que aprobaban algunos de los puntos sometidos a consideración de la asamblea?.

Respuesta: Doctor, nosotros en el momento de la votación, entonces, cada [propietario de] apartamento decía está de acuerdo o no está de acuerdo. Pues todos decían estamos de acuerdo y

nosotros íbamos tomando nota. El único que no estuvo de acuerdo fue el doctor Andrés [Gouffray Nieto].

Pregunta: ¿cuál era el mecanismo? - **Respuesta:** No doctor, era verbal".

Pregunta: "¿Sírvase decir quién certificó dentro de la asamblea o qué mecanismo se utilizó para certificar los votos y la comunicación de cada uno de los copropietarios cuando votaban las propuestas sometidas a la asamblea?".

Respuesta: "No, no".

Pregunta: ¿Nadie certificó? - **Respuesta:** "**No**". (min. 1:34:00 Archivo 15GrabaciónAudiencia C.1).

Cabe recordar que de conformidad con el artículo 194 del C. G. del P., "El **representante legal**, el gerente, **administrador** o cualquiera otro mandatario de una persona, podrá confesar mientras esté en el ejercicio de sus funciones", consecuencia procesal que en esta ocasión refulge de la declaración de parte absuelta por la representante legal de la PH opositora.

Queda visto, entonces, que con motivo de la confesión por representante ha de tenerse por cierto, que la propiedad horizontal demandada no cumplió con el deber legal de resguardar la prueba inequívoca sobre la validez de la reunión no presencial de 23 de marzo de 2021, es decir, apta para dar cuenta del nombre de cada copropietario que emite la comunicación, el sentido de la misma y la hora en que lo hace (art. 42, Ley 675 de 2001).

2.2. Lo anterior no es óbice para memorar que "toda confesión admite prueba en contrario" (art. 197, C. P. G.), debiéndose resaltar que, en rigor, ni siquiera la PH opositora sugirió que tal confesión fue infirmada.

Por supuesto, a la demandada incumbía la carga de demostrar, y no lo hizo (arts. 167, C. G. del P.), que contrario a los hechos confesados, la asamblea ordinaria objeto de debate se ajustó a los mandatos del régimen de propiedad horizontal para reuniones no presenciales.

En dirección contraria, la valoración conjunta de los elementos de juicio recaudados, entre ellos el proceder de la demandada, refrendan la confesión a la que en precedencia se refirió la Sala.

En rigor, al contestar la demanda ni siquiera alegó la opositora hechos concretos sobre cuya base pudiera colegirse que dio cumplimiento a las solemnidades de orden sustancial y probatorio inherentes a las asambleas no presenciales que regula el parágrafo del artículo 42 de la Ley 675 de 2001.

En resumen en el asunto *sub lite* la foliatura no reporta, ni con mucho, que tal confesión fue infirmada, deficiencia probatoria que ha de soportar la copropiedad demandada.

2.3. El Tribunal considera de utilidad efectuar unas precisiones adicionales en lo tocante con las consecuencias sustanciales que, frente a la asamblea ordinaria no presencial de 23 de marzo de 2021, generan las falencias enrostradas.

Como quiera que de la reunión que convocó la demandada en la fecha recién aludida, sólo obra en el expediente copia del Acta No. 176 de 23 de marzo de 2021, este documento privado merece algunos comentarios (pág. 1 a 29 PDF 02).

Del elemento de juicio en comento emerge, entre otras cosas, que:

> ***i)*** a "través de **la aplicación MEET**" "se reunieron los copropietarios del Edificio Agrupación de Vivienda Centro Residencial el Castillo Torre Número tres (3)" P.H., y
>
> ***ii)*** se consignó que frente a los diversos puntos sometidos a votación (ver pie de página No. 1) que: "fue aprobado en forma unánime"; "la asamblea elige para integrar el Comité de convivencia 2021-2022 a los siguientes señores (...)"; "los señores miembros de la Asamblea aprobaron en forma unánime la plancha anterior (...) para conformar el Consejo de Administración" (págs. 2, 28 y 29 PDF 02 C.1).

El presupuesto de validez que el Tribunal echa de menos no se suple por el simple hecho de que en el Acta No. 176 de 23 de marzo de 2021, se haya indicado que las decisiones se aprobaron de forma unánime, de donde no es de recibo lo que de alguna manera sobre ese particular se expresó en la contestación de la demanda.

Lo anterior, por cuanto el acta es una obligación que le impuso a las P.H. el artículo 47, *ibidem*, con fines, exclusivamente, de publicidad y oponibilidad, más no se puede confundir esa precaria constancia documental, es decir el acta física, con las exigencias que el régimen de propiedad horizontal (art. 42) estipuló como presupuesto de validez para las asambleas no presenciales.

Aquí brilla por su ausencia elemento material probatorio digital, tecnológico, telemático o similar, de los que enuncia a manera de ejemplo el artículo 42 de la Ley 675 de 2001, esto es, el fax o la grabación magnetofónica, sobre la reunión no presencial que la demandada convocó a través de la aplicación de videoconferencias "Meet" (PDF 02 C.1).

En ese escenario emerge la nulidad absoluta de la asamblea ordinaria virtual tantas veces mencionada, junto con las decisiones que allí se adoptaron, porque no se

tiene certeza sobre aspectos que la ley exige para otorgarle la validez a la misma, como lo es, "el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en la que lo hace" (art. 42, Ley 675 de 2001).

Es más, ante la ausencia de probanzas de la naturaleza mencionada (*v. gr.* grabaciones magnetofónicas, videos, etc.) no existe forma de dar por sentada, y menos con visos de validez, registro histórico idóneo en punto a las intervenciones y escrutinios que, en esa asamblea de deliberación del máximo órgano social de las copropiedades se efectuaron.

Tal omisión no es de poca monta, menos en el caso de marras, en el que el vicio recayó sobre la asamblea general ordinaria de copropietarios que la ley de propiedad horizontal ordena llevar a cabo, por lo menos una vez al año (art. 39, Ley 675 de 2001), en cuyo decurso, es de esperar que se discutan asuntos de orden prioritario para el normal desenvolvimiento de la P.H., tales como la aprobación del presupuesto anual, se hacen nombramientos y se rinden informes relevantes, entre otros.

3. Ahora de conformidad con el inciso 3° del artículo 282 del C. G. del P., resulta forzoso ocuparse de las defensas perentorias que planteó la opositora.

3.1. Se despachan conjuntamente, y de manera adversa, las excepciones de "Inexistencia de la necesidad de mayoría calificada para la aprobación del presupuesto de la copropiedad", y "fondo de obras como fondo de reserva voluntaria" pues estas defensas, como emerge de los antecedentes, no guardan relación con el particular motivo que dará lugar a la declaratoria de nulidad de la sesión general ordinaria de 23 de marzo de 2021.

3.2. Se impone la suerte adversa de la excepción de "mala fe del demandante" que la opositora sustentó en que la demanda carece de fundamento legal y fáctico, planteamiento que se desvirtúa sin mayor esfuerzo, como quiera que, como viene de verse, algunas de las irregularidades que denunció el señor Gouffray Nieto provocarán que el Tribunal acceda a las pretensiones incoadas.

3.3. Frente a la defensa de "prescripción", ha de verse, en primer lugar, que la Ley contempló un término de caducidad para definir la tempestividad de la acción, más no de prescripción extintiva.

Lo anterior no es óbice para resaltar que la asamblea general ordinaria materia de impugnación se llevó a cabo el 23 de marzo de 2021 (pág. 1 PDF 02 C.1), y que la demanda fue presentada el 14 de mayo de 2021 (pág. 2 PDF 01 C.1), de donde es evidente que no se superó el término de dos meses que dispone el artículo 382 del Código General del Proceso, para que tenga ocurrencia el fenómeno de la caducidad en este tipo de acciones judiciales.

No sobra agregar que los efectos que al respecto surgieron con la oportuna radicación de la demanda, se refrendaron con la tempestiva notificación de su admisión, a la PH, lo cual tuvo lugar el 24 de enero de 2022 (pág. 1 PDF 09 C.1), es decir, dentro del plazo de un año, según lo dispone el artículo 94 del C. G. del P.

3.4. En resumen, en vista de lo anterior, y ante el fracaso que aguarda a las defensas perentorias que sobre estos particulares impetró la parte opositora, la Sala declarará la nulidad absoluta de las decisiones a las que la PH tomó en la asamblea general ordinaria no presencial del 23 de marzo de 2021, contenida en el Acta No. 176 de la misma fecha.

4. En el criterio del Tribunal, lo expuesto en las consideraciones precedentes, que comprometen la validez de todas las decisiones tomadas en la reunión no presencial tantas veces mencionada, hace innecesario emitir pronunciamientos orientados a dilucidar sobre la naturaleza jurídica y técnica del "fondo de obras". Tampoco hay lugar a esclarecer la discusión atinente a que si es necesario una mayoría simple o calificada para la aprobación de tal partida del presupuesto.

Además, la demanda de impugnación de actas de asamblea solo contiene un pedimento principal encaminado a la declaración de nulidad absoluta, el cual en últimas resultó próspero en su integridad.

5. Prospera, por ende, la apelación en estudio.

RECAPITULACIÓN

Se revocará la sentencia que en primera instancia profirió la juez *a quo,* y como quiera que ninguna de las defensas planteadas por la opositora tendrá éxito, se declarará la nulidad absoluta de las decisiones que tomó la PH el 23 de marzo de 2021.

Se impondrán a la parte vencida las costas de primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley REVOCA la sentencia que el 24 de mayo de 2023, profirió el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso verbal de impugnación de actas de asamblea que Andrés Gouffray Nieto promovió contra el Edificio Agrupación de Vivienda Centro Residencial el Castillo Torre No. Tres (3) P.H.

En su lugar, se DISPONE:

1°. Se desestiman todas las excepciones propuestas por la demandada.

2°. Se **DECLARA** la nulidad de la totalidad de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios de 23 de marzo de 2021 de la Agrupación de Vivienda Centro Residencial el Castillo Torre No. tres PH, contenida en el Acta No. 176 de 23 de marzo de 2021.

3°. Costas de primera instancia a cargo de la propiedad horizontal demandada y a favor de Andrés Gouffray Nieto.

Sin costas de segunda, ante la prosperidad de la alzada.

Devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase

Los Magistrados

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

JUAN PABLO SUAREZ OROZCO

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

Firmado Por:

Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Juan Pablo Suarez Orozco

Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8909682da4338b83cf7b8ce6c538ae4fa21e930dcdf9b6009556225425949423**

Documento generado en 24/07/2023 01:13:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D. C.
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: **Ordinario de simulación**
DEMANDANTE: **Cristian Camilo Giraldo López**
DEMANDADOS: **Lucy Esperanza Galindo Rubio y otros**
RADICACIÓN: **11001310301320090029005**

CORRIGE PROVIDENCIA

El Despacho mediante providencia de once de julio del presente año decretó prueba de oficio consistente en que el área de soporte de correo del CENDOJ, Consejo Superior de la Judicatura certificara sobre la recepción de un mensaje electrónico y archivos adjuntos por parte del correo electrónico j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin embargo en el auto se erró en cuanto a la fecha en cuestión, ya que se mencionó 28 de octubre de 2020 cuando **la fecha correcta es 28 de septiembre de 2020**.

A pesar que el área requerida en su respuesta se manifestó también sobre la última fecha citada, el despacho para despejar cualquier inquietud sobre el particular procede con fundamento en el art. 286 CGP.

En virtud de lo expuesto el requerimiento de la prueba se precisa a continuación:

Oficiar al área de soporte de correo del CENDOJ, Consejo Superior de la Judicatura para que certifique si en el correo electrónico j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co se recibió el día **28 de septiembre de 2020** de manera efectiva mensaje de datos remitido por grunon_alberto@hotmail.com, en caso afirmativo precisar la hora de recibo y si dicho correo contenía archivos adjuntos.

Con tal fin se le concede un término de **diez (10) días** contado a partir de la fecha de notificación de la presente providencia.

Para facilitar la labor encomendada se incorpora a la presente providencial pantallazo que obra en el cuaderno principal del proceso de la referencia digitalizado; fl. 427, PDF; que parece corresponder al folio 340 del expediente físico.

La respuesta deberá ser remitida al correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co de la Secretaría de la sala civil de este Tribunal con copia al correo electrónico pmorelom@cendoj.ramajudicial.gov.co.

1/10/2020 Correo: Juzgado 406 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C - Outlook

3

Fwd: Recurso de apelación

alberto baron <grunon_alberto@hotmail.com>
Mié 30/09/2020 7:45 PM
Para: Juzgado 406 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C <j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (334 KB)
CamScanner 09-28-2020 16.42.41.pdf; ATT00001.htm;

Sra Secretaria buenas noches , quisiera saber qué trámite se le dio al recurso de apelación interpuesto, radicado el pasado 28-09-20.

Favor dar acusó de recibo del presente memorial

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: alberto baron <grunon_alberto@hotmail.com>
Fecha: 28 de septiembre de 2020, 4:48:08 p. m. COT
Para: "j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co" <j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Recurso de apelación

Favor dar acusó de recibo.

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: alberto baron <grunon_alberto@hotmail.com>
Fecha: 28 de septiembre de 2020, 4:47:01 p. m. COT
Para: "j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co" <j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Recurso de apelación

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Edison Edison <navaedpm@gmail.com>
Fecha: 28 de septiembre de 2020, 4:43:09 p. m. COT
Para: grunon_alberto@hotmail.com
Asunto: CamScanner 09-28-2020 16.42.41.pdf

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

OSCAR HUMBERTO RAMÍREZ CARDONA
Magistrado

Firmado Por:

Oscar Humberto Ramirez Cardona

Magistrado

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **97657856cd10bc5ecb158b59a4bea2780e3fe4a16e99f28f9727306f72ec93b2**

Documento generado en 24/07/2023 12:58:25 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Ref. Proceso de expropiación de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI** contra **INVERSIONES ABRIL G E HIJOS & CIA SCA**. (Recurso de queja). **Rad.** 11001-3103-013-2022-00284-01.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

I. ANTECEDENTES

1. La Agencia Nacional de Infraestructura demandó a Inversiones Abril G e Hijos & Cía. SCA para obtener la expropiación de una zona de terreno de 247.03 metros cuadrados que hace parte del predio de mayor extensión denominado "*El Peñón",* ubicado en la vereda El Porvenir jurisdicción del municipio de San Antero, departamento de Córdoba, identificado con el folio de matrícula No. 146-34106 de la O.R.I.P. de Lórica; se disponga el registro de la transferencia, junto con la correspondiente acta de entrega en la referida oficina, asignándole un número de matrícula al área indicada, la cancelación de cualquier gravamen que afecte esa porción del terreno, su avalúo y el monto de la indemnización a favor de los interesados[1].

2. Por auto del 13 de mayo de 2021, el Juzgado Civil del Circuito de Lórica admitió el libelo[2] y el 5 de agosto pasado, declaró su incompetencia para seguir conociendo del asunto, ordenado la remisión del expediente a esta capital, para que fuera repartido entre los Despachos de ese mismo nivel y especialidad[3].

---

[1] Archivo "*01 Demanda Integral"* del *"C01 Principal".*
[2] Archivo "*03 Auto Admite Demanda", ibídem.*
[3] Archivo *"11 Auto Declara Falta de Competencia", ejusdem.*

3. En providencia del 20 de septiembre anterior, el Estrado Trece de la citada categoría lo asumió y convocó a la audiencia de que trata el numeral 7 del precepto 399 del C.G.P.[4], reprogramada para el 7 de marzo del hogaño[5].

4. En esa última data se inició la aludida vista pública, en la cual se dispuso que no era dable decretar un segundo dictamen pericial para resolver la objeción planteada por el extremo pasivo, al que le incumbía haberlo allegado oportunamente, en aplicación del numeral 6 de la citada norma, no siendo dable acudir al precepto 227 de la misma Codificación[6].

5. Inconforme, la pasiva interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación; igualmente, precisó que de no concederse este último también formulaba queja. En apoyo de su solicitud señaló que al contestar el libelo cuestionó la experticia, invocando la regla citada y la Ley 388 de 1997; además, el canon 227 concede la facultad de aportarla en un plazo mínimo de 10 días, por lo que en esa ocasión solicitó 30, resaltando que le resulta imposible hacer valer sus derechos, sino se le permite allegar ese medio suasorio[7].

6. Durante el traslado, la parte actora precisó que no es dable aplicar normas diferentes al artículo 399 del C.G.P., máxime cuando transcurrieron varios meses desde que su contendor fue vinculado a la litis, es decir, ha dispuesto de un plazo suficiente para adjuntar la probanza, no siendo de recibo alegar ahora la imposibilidad de hacerlo[8].

7. El Despacho mantuvo la decisión cuestionada, reiterando que según el numeral 6 del precepto 399 *ejusdem,* quien objeta el informe técnico debe aportar uno nuevo, sin que cuente con otra oportunidad para ese fin; por último, negó la concesión de la alzada, al considerar que la determinación no es susceptible de ese recurso, también señaló que debía surtirse la queja, ordenándole a la secretaría que procediera de conformidad[9].

---

[4] Archivo "*16 Auto Avoca Conocimiento", ibídem.*
[5] Archivo "*24 Auto Fija Fecha", ejusdem.*
[6] Minutos 8:19 a 11:13 del Archivo "*28 Audiencia Art. 399 CGP", ibídem.*
[7] Minutos 11:23 a 15:56, *ejusdem.*
[8] Minutos 16:02 a 17:22, *ibídem.*
[9] Minutos 17:23 en adelante, *ibídem.*

II. CONSIDERACIONES

Establece el canon 353 del C.G.P. que *"el recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación (…), salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria"* (se subraya).

Sobre el particular precisa la doctrina en torno al medio de impugnación bajo análisis lo siguiente:

> "*Es un recurso subsidiario del de reposición, porque, salvo un caso, requiere que se pida reposición del auto que negó la apelación o la casación y solo cuando no prospera la reposición y se mantiene la negativa, se inicia propiamente al trámite del recurso de queja, lo que se desprende lo de advertido en el art. 353 del CGP, sin que sea necesario que en el escrito de reposición se pida en subsidio las copias, pues es un deber del juez ordenarlas en el evento de que no se reponga"*[10].

Bajo esa óptica impone la citada norma que el anotado recurso debe formularse en subsidio de la reposición, a excepción de que la negativa en conceder la apelación sea resultado de la que haya interpuesto su contraparte, circunstancia esta última que no acaece en el presente caso.

En efecto, durante la audiencia de que trata el numeral 6 del precepto 399 *ejusdem,* el funcionario dispuso que no era dable decretar un segundo dictamen pericial para resolver la objeción planteada por el extremo pasivo, pues le incumbía haberlo allegado oportunamente, en aplicación de la citada norma, no siendo dable acudir al canon 227 de la misma Codificación.

Inconforme, la pasiva interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación; igualmente, precisó que de no concederse este último también formulaba queja; para desatar la controversia el Despacho mantuvo la decisión cuestionada y negó la concesión de la alzada; acto seguido, concluyó que debía surtirse la queja.

---

[10] López Blanco Hernán Fabio, Código General del Proceso, Parte General, DUPRE Editores, Bogotá, 2019, página 895.

De suerte que, en forma apresurada confirió este último recurso, pese a que la interesada no formuló reposición contra el auto que negó el otorgamiento del remedio vertical y, menos aún, se definió aquel, fases que de manera obligada han tenido que adelantarse previo a la remisión de la encuadernación a esta Corporación, no siendo dable por ahora definir el recurso regulado en los preceptos 352 y 353 del C.G.P., en tanto que se itera este último es subsidiario del medio defensivo horizontal.

La razón de tal afirmación reside en que, el extremo pasivo no formuló reposición frente a la providencia que negó la concesión de la apelación, tan solo invocó el de queja, inclusive antes de que se emitiera un pronunciamiento semejante, desconociendo así los parámetros de los cánones antes referidos.

Así las cosas, por las motivaciones que se han dejado consignadas, se rechazará la queja propuesta.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la **SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**

IV. RESUELVE

Primero. RECHAZAR el recurso de queja contra el auto del 7 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de esta ciudad.

Segundo. DEVOLVER el expediente remitido al citado Despacho Judicial. Por la secretaría ofíciese y déjense las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Aida Victoria Lozano Rico

Magistrada

Sala 016 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fb3fd7e8b80ebb504ccafc6660095adb624b96eb23bf480604034dc198848957**

Documento generado en 24/07/2023 08:38:12 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

11001-31-030-15-2017-00236-03

Por encontrarse legalmente procedente, el Despacho dispone:

Admitir en el efecto **SUSPENSIVO**, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida el día 20 de abril del año 2023, por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá.

Una vez cobre ejecutoria la presente decisión, contrólense los términos con los que cuenta la aquí apelante para sustentar la alzada formulada, conforme lo consagra el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. Transcurrido dicho lapso, de la sustentación presentada se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días, a fin de que, si a bien lo tiene, se pronuncie frente a las manifestaciones elevadas por la impugnante.

Por Secretaría, una vez vencidos los mencionados términos, ingrese el expediente al Despacho, con el propósito de emitir la decisión que en derecho corresponda.

Las partes deberán allegar el escrito sustentatorio y su réplica, a la dirección de correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE,

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado.

Firmado Por:

Juan Pablo Suarez Orozco

Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8fc25ac04e0ab93ff78ad4623cb28d1095ac7b06eb126b1a12f67e8c53d39785**

Documento generado en 24/07/2023 04:16:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

Proceso:	Verbal – Responsabilidad Civil
Demandante:	Alma Cecilia Hoyos Isaza
Demandado:	Cooservi C.T.A. y otros
Radicación:	11001310301520180002003
Procedencia:	Juzgado 8° Civil del Circuito de Bogotá
Asunto:	Apelación sentencia

Revisado el plenario, en los términos del artículo 325 de la ley procesal civil, se **RESUELVE:**

1. Comoquiera que confluyen las exigencias legales para admitir el recurso, pues fue formulado oportunamente por quien tiene legitimación para ello y se expusieron los reparos concretos a la providencia cuestionada, por ende, **SE ADMITE**, en el efecto SUSPENSIVO, el recurso de apelación promovido por la parte demandada, contra la sentencia proferida en audiencia de 1° de junio de 2023 proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá.

2. Conforme al artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, a cuyo tenor: "*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes*", se OTORGA TRASLADO al apelante para que ante esta Corporación sustente el recurso, vencido el plazo legal antedicho, la contraparte podrá descorrer el traslado, si así lo considera; los términos comenzarán a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

Se advierte al recurrente, que en el plazo legal concedido y ante esta sede, **DEBERÁ SUSTENTAR EL RECURSO** so pena de declararlo desierto (artículos 322 de la Ley 1564 de 2012 y 12 de la Ley 2213 de 2022). Se recuerda que la sustentación

consistirá en el desarrollo de los reparos planteados al propiciar el recurso, cualquier aspecto adicional que se incluya no será considerado (artículos 320, 327 y 328 de la Ley 1564 de 2012).

3. Los profesionales del derecho darán estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 de la Ley 1564 de 2012, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

4. Las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

5. De otro lado, importante es señalar que el artículo 121 *ibidem* impone: "*(…) el plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a seis (6) meses contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del Juzgado o Tribunal (…). Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso*".

En el caso concreto, pertinente es hacer uso de la mencionada facultad, en atención a la complejidad del asunto, la carga laboral de la suscrita y en consideración a los trastornos generados por el trabajo virtual; en consecuencia, SE PRORROGA por una sola vez, hasta por seis (6) meses más, el término para decidir de fondo de esta segunda instancia.

Notifíquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Firmado Por:

Ruth Elena Galvis Vergara

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **23fce7c3d4d37e13258052a7f53dd3dfb8d0558e02fd69459a57c8519e49391b**

Documento generado en 24/07/2023 11:54:07 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Discutido en la Sala de Decisión virtual celebrada el 8 de junio de 2023 y aprobado en la del 22 del mismo mes y anualidad.

Ref. Proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual de **FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS** y otro contra **BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A**. (Apelación de sentencia). **Rad:** 11001-3103-016-2017-00263-01.

Se procede a emitir sentencia en desarrollo de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

I. ASUNTO A RESOLVER

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, frente al fallo proferido el 30 de junio de 2022, por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, dentro del juicio verbal promovido por Fernando Hernández Arias y Autos Halley Ltda. contra Banco Corpbanca Colombia S.A. –Hoy Banco Itaú-.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones.

El extremo activo pidió se declare que el demandado es civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios materiales causados en $778.700.000, más los intereses moratorios generados hasta que se efectúe el pago, los cuales estimó bajo juramento y, condenarlo en costas[1].

[1] Folios 55-56, archivo "*001 11001310101620170026300_C001.PDF"* del cuaderno *"01CuadernoPrincipal"*.

2. Sustento Fáctico.

En apoyo de sus pedimentos, la parte actora expuso, en síntesis, los siguientes hechos:

En el proceso ejecutivo singular con radicado 2013-00143 que cursó en el Despacho Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, adelantado por el Banco Corpbanca Colombia S.A. contra Fernando Hernández Arias y Autos Halley Ltda., se profirió sentencia el 16 de marzo de 2016, mediante la cual se condenó a la entidad bancaria al pago de los perjuicios ocasionados con las medidas cautelares practicadas, sin precisar la cuantía, por haberse encontrado probadas las exceptivas allí invocadas, concernientes a la inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, decisión confirmada por este Tribunal el 27 de julio de 2016.

3. Actuación procesal.

Subsanada en oportunidad debida, la demanda fue admitida el 27 de julio de 2017[2]. Luego, notificada personalmente la parte convocada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, formulando como medios defensivos previos los de *"Incapacidad o indebida representación del apoderado del demandante"* y de mérito los siguientes: *"a. Inexistencia de daño adicional al reparado con el pago de las agencias en derecho"; "b. Falta de prueba que soporte los supuestos daños reclamados"; "c. inexistencia de relación causal entre el supuesto daño reclamado y la demanda ejecutiva adelantada en su momento por Helm Bank"; "d. Inexistencia o ausencia de culpa o dolo de la parte demandada al instaurar la demanda ejecutiva".*

Como fundamento de ellos argumentó que, solventó a favor de su contendor, las costas a las que fue condenado al interior del juicio compulsivo, en el cual no se practicaron cautelas, por lo que no existe perjuicio para reparar.

Tampoco se allegó sustento probatorio que respalde las cantidades reclamadas por el anotado concepto, sin que el mismo derive del referido proceso ejecutivo, máxime cuando no se acreditó su actuar culposo o

[2] Folio 126, archivo "*001 11001310101620170026300_C001.PDF"* del cuaderno *"01CuadernoPrincipal"*.

doloso[3].

El 14 de mayo de 2019[4], el juzgado de conocimiento declaró la nulidad de pleno derecho sobre lo actuado, a partir del 9 de mayo de 2018, al considerar que el trámite había superado el término perentorio de que trata el artículo 121 del C.G.P., remitiendo el expediente a su homólogo Diecisiete quien, a su vez, rehusó la competencia y promovió conflicto negativo, el que fue resuelto por esta Corporación, devolviéndolo al Despacho inicialmente nombrado[5].

Por auto del 1 de marzo de 2021, se denegó la excepción previa de incapacidad o indebida representación del demandante[6]. Posteriormente, en pronunciamiento del 18 de febrero de 2022[7], fue convocada la audiencia inicial, para el 16 de marzo siguiente, resolviendo sobre el decreto de las pruebas pedidas.

4. Sentencia de primera instancia.

El 30 de junio posterior, el *a quo* declaró probada la caducidad de la acción, debido a que la parte interesada dejó transcurrir el término de 30 días previsto en el inciso tercero del precepto 283 del C.G.P., para instaurar el incidente a que alude esa regla, con el fin de obtener la cuantificación y el pago de los perjuicios causados con el trámite coercitivo No. 2013-000143-00, promovido por el hoy convocado contra los actuales demandantes, no siendo de recibo que pretenda esquivar las consecuencias derivadas de esa omisión, cuando es evidente que las pretensiones se desprende de la condena en abstracto, impuesta en el fallo proferido el 16 de marzo de 2016, por el Despacho Séptimo Civil del Circuito de esta capital[8]

5. El recurso de apelación.

El extremo actor se mostró inconforme con la decisión anterior, planteando

---

[3] Folios 153 a 158, *ejúsdem.*
[4] Folios 164 a 166, *ibídem.*
[5] Folio 7. Archivo *"11001310301620170026300_C003.PDF"* del cuaderno "*03CuadernoTribunalConflictoCompetencia*"
[6] Folio 120 y ss., archivo "*001 11001310101620170026300_C001.PDF"* del cuaderno *"01CuadernoPrincipal".*
[7] Archivo "*003 Auto Fija Aud 372 Pruebas", ejúsdem.*
[8] Archivo "*008 Sentencia Anticipada Caducidad", ibídem.*

el remedio vertical. Para ello, formuló sus reparos[9], sustentando en oportunidad el recurso[10], con apoyo en que se estructuró la invalidez de lo actuado, debido a que el auto admisorio se profirió el 27 de julio de 2017, mientras que la notificación de ese pronunciamiento al demandado ocurrió el 29 de noviembre de ese mismo año, fecha a partir de la cual comenzó a correr el término de que trata el artículo 121 del C.G.P, transcurriendo más de 4 años para emitir sentencia anticipada, acogiendo la caducidad, pero sin dirimir de fondo la controversia, tardanza que en modo alguno encuentra justificación por la suspensión de términos decretada con ocasión de la pandemia del virus Covid-19, pues la misma no superó 4 meses.

Luego, indicó que, el inciso segundo del precepto 278 *ibídem,* no determina que sea la parte demandada quien solicite al Despacho la declaración de la caducidad, pues en su concepto, la acción se promovió oportunamente, sino que, debió acogerse oficiosamente por el funcionario y no a solicitud del convocado, quien no la propuso de manera tempestiva, sino 5 años después de iniciado el proceso.

Por último, destacó que, en el juicio coercitivo tramitado en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de esta capital, no hubo condena en abstracto, omisión que lo habilita para instaurar la demandada de la referencia.

6. Pronunciamiento de la parte no apelante.

Pidió mantener la providencia cuestionada, al señalar que, reunidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada, así debe proceder el funcionario judicial, en desarrollo del precepto 278 del C.G.P, en este caso, declarando la caducidad de la acción, con independencia de que se solicite por el extremo pasivo.

Finalmente destacó que, para obtener la liquidación de los perjuicios, impuestos en abstracto en una sentencia, debe adelantarse ante el mismo administrador de justicia que la profirió, el correspondiente incidente, en la forma y términos establecidos en el inciso tercero del canon 283 *ejúsdem,* no siendo de recibo que para ese propósito se promueva un proceso

[9] Archivo *"009 Recurso Apelación"* del "*01 Cuaderno Principal"*.
[10] Archivo *"07 Sustentación Recurso.pdf"* del *"02 Cuaderno Aeplación"*.

separado[11].

III. CONSIDERACIONES

Concurren los presupuestos procesales y no se advierte vicio que invalide la actuación por los reproches sustentados por la parte apelante; por consiguiente, siendo del caso precisar que la competencia del *ad quem* está delimitada, se deja al margen del escrutinio cualquier cuestión que no hubiere suscitado inconformidad, ni esté íntimamente relacionada con las eventuales modificaciones frente a lo resuelto en el fallo cuestionado, en aplicación de la regla 328 del C.G.P.

Insiste el extremo apelante en que se estructuró una nulidad procesal, al haber excedido el juzgador el plazo contenido en la disposición 121 *ejusdem*, para dirimir la primera instancia, aspecto suficientemente decantado al resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Despachos Dieciséis y Diecisiete Civiles del Circuito de esta capital, por la misma causa, según se corrobora en el pronunciamiento del 28 de octubre de 2019[12]. De suerte que, resulta improcedente analizar nuevamente esa controversia.

De otro lado, con relación a la caducidad, es de señalar que implica la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo, al no hacerse valer dentro del plazo perentorio fijado para ello, institución que entre sus características encuentra la de ser de orden público, correspondiéndole al funcionario judicial declararla de oficio cuando se encuentra configurada; al respecto, la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, destacó:

> *"El legislador, pues, en aras de la seguridad jurídica, pretende con los términos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situación o relación de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponiéndole al interesado la carga de ejercitar un acto específico, tal la presentación de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisión, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte más allá de lo razonablemente tolerable los intereses de otros"*[13].

Ciertamente, el artículo 282 del C.G.P., dispuso:

---

[11] Archivo "*09 Descorre Traslado"* del cuaderno *"02. Cuaderno Apelación"*.
[12] Archivo "*11001310301620170026300"* del cuaderno "*03 Cuaderno Tribunal Conflicto Competencia":*
[13] Corte Suprema de Justicia, SC 2313-2018, reiterada en SC4065-2020.

> *"En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción* ***deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia****, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa"* (se resalta).

Por lo tanto, basta la simple remisión a esa normativa para dejar en evidencia que, efectivamente el juzgador de instancia debía declarar de oficio la excepción bajo análisis, con independencia de que ella hubiera sido propuesta por el extremo pasivo hasta el 15 de marzo de la anualidad pasada[14], pues en últimas, no es ese acto el determinante para adoptar la determinación reprochada. De modo que, tampoco procede acoger el reparo formulado en ese sentido.

Finalmente, sostiene la parte impugnante que, en el juicio ejecutivo no se impuso condena alguna en abstracto, omisión que lo faculta para promover el asunto de la referencia, en aras de obtener la reparación de los perjuicios causados con aquel; empero, contrario a esa aserción, se corrobora que en el fallo del 16 de marzo de 2016, emitido por el Estrado Séptimo Civil del Circuito de esta capital, al interior del trámite compulsivo No. 2013-00143-00, instaurado por Helm Bank contra Autos Halley Ltda. y Fernando Hernández Arias, se resolvió:

> "***PRIMERO: DECLARAR*** *infundada la excepción denominada INEXISTENCIA DE LA CARTA DE INSTRUCCIONES Y/O FACULTAD PARA LLEVAR DE MANERA EXPRESA E IRREVOCABLE LOS TÍTULOS VALORES, siguiendo las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.*
> ***SEGUNDO: DECLARAR*** *la prosperidad de las excepciones de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO.*
> ***TERCERO: NEGAR*** *la continuidad de la ejecución, como consecuencia de la decisión adoptada en el anterior numeral.*
> ***CUARTO: DECLARAR*** *improcedente la tacha de falsedad propuesta por pasiva* (sic), *sin lugar a la sanción de que trata el artículo 292 del C.P.C., conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.*
> ***QUINTO: DECRETAR*** *el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas en este proceso. En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición de la autoridad solicitante de la medida. Líbrense los respectivos oficios.*
> ***SEXTO: CONDENAR*** *a la parte demandada al pago de costas y perjuicios. Liquídense aquellas teniendo como agencias en derecho la suma de $12.000.000. Por secretaría practíquese la correspondiente liquidación"*[15].

Determinación confirmada por esta Corporación, según proveído del 27 de julio siguiente[16], ante lo cual se imponía que, al interior de ese rito, se solicitara la cuantificación de los perjuicios a los que fue condenado de manera abstracta la hoy convocada, en desarrollo del inciso tercero del

---

[14] Archivo "*007 Correo Solicitud Sent. Anticipada"* del "*01 Cuaderno Principal"*.
[15] Folios 13 y 14, archivo "*001 11001310101620170026300_C001.PDF"* del cuaderno *"01CuadernoPrincipal"*.
[16] Folios 15 y 16, *ejúsdem.*

precepto 283 del C.G.P., a cuyo tenor:

> *"En los casos en que este código autoriza la condena en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior. Dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse el incidente se extinguirá el derecho".*

Tesis que avaló el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, al recoger su postura inicial que admitía hacerlo en actuación separada, precisando que:

> "*Menester, por consiguiente, rectificar la doctrina de la Corte (sentencias de 12 de julio de 1993, CCXXV, 2464, pp. 91-99; 2 de diciembre de 1993, CCXXV (II), 2464, pp. 718-735; agosto 2 de 1995, exp. 4159 y 14 de febrero de 2005, exp. 12073).(…)*
> *En efecto, el análisis minucioso, sistemático e integral de la problemática a la luz de los cambios normativos posteriores a la época de la doctrina de la Corte, su ratio legis y la función práctica legal contemporánea de la caducidad, permite concluir que, en las hipótesis del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en los eventos normativos excepcionales, taxativos y restrictivos en los cuales el juzgador por autorización legal condena en abstracto o in genere, es inadmisible reclamar el derecho ya reconocido, instaurar otras acciones y promover un proceso posterior ante otro juez con idéntica finalidad, por cuanto, en tal caso, la parte favorecida debe presentar oportunamente ante el juzgador del proceso que la impuso la liquidación incidental para concretarla, tal como dispone y exige el precepto (artículo 307, C. de P.C.) atribuyendo competencia privativa al fallador que la profirió, ante quien se tramita, de modo que, a falta de su presentación tempestiva u oportuna, ex artículo 308 de la expresada codificación, el derecho caduca, se pierde y extingue.*
> *A este respecto, estableció el legislador por eficiencia, eficacia, seguridad, certeza, celeridad, economía, concentración, inmediación e impulso procesal, la competencia, forma, trámite y oportunidad, al tiempo que acentuó la carga procesal de la parte, con la consecuencia normativa de la caducidad, que comporta la correlativa extinción del derecho, y por tanto, de las acciones, en caso de inobservancia.*
> *Por lo mismo, cuando en el proceso ejecutivo se impone condena in genere a la parte ejecutante a pagar a la ejecutada los perjuicios causados con aquél y las cautelas, se excluye la posibilidad de instaurar las acciones de responsabilidad para reclamarlos en proceso ulterior ante juez diferente al de la ejecución, por cuanto el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con el artículo 307 ejusdem, estableció sin duda alguna, el trámite, forma, oportunidad, competencia privativa del mismo fallador y la consecuencia normativa de la caducidad del derecho reconocido in genere por su no ejercicio oportuno*"[17].

De lo que se sigue que, no está al arbitrio del beneficiario con la condena *in genere,* acudir al incidente o a un juicio de responsabilidad civil extracontractual, como lo aducen los promotores de la alzada, quienes al no instaurar de manera tempestiva el trámite accesorio, pierden su derecho, como en forma categórica lo establece la regla antes transcrita.

En conclusión, al no abrirse paso los fundamentos de la censura, habrá de

[17]Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil SC Exp. 41001310300420050005401 abril 28 de 2011.

refrendarse la sentencia cuestionada, imponiendo la condena en costas a cargo del extremo apelante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de junio de 2022, por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá.

Segundo. CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte apelante. Para efectos de su liquidación, la Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho la suma equivalente a dos (2) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

Tercero. Por la secretaría de la Sala devuélvase el expediente a la oficina de origen. Por la secretaría ofíciese y déjense las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Aida Victoria Lozano Rico
Magistrada
Sala 016 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada

Sala 003 Civil

Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Luz Stella Agray Vargas

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2fdb91a02ef6d54bdea6215df6b5661f88b6dce424944099fa269f112be4b2cb**

Documento generado en 24/07/2023 04:08:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Rdo. 021201400396 01

Revisada la actuación se observa que en el curso de la primera instancia se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, porque no se practicó en legal forma la notificación de personas que debían ser citadas en el proceso.

En efecto, como en virtud del tránsito de legislación del Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso, este asunto pasó a gobernarse por la nueva codificación procesal, el juez –por tratarse de un inmueble- debió informar sobre su existencia a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para que, de considerarlo pertinente, hicieran las manifestaciones a que hubiere lugar.

No se olvide que era deber del juez proceder del modo impuesto por el artículo 375 del Código General del Proceso (num. 6), toda vez que, se insiste, para la época del fallo éste proceso estaba sujeto a las reglas de la Ley 1564 de 2012.

Así las cosas, se invalidará la actuación a partir de la sentencia, para que el juzgado la renueve, según las consideraciones de esta providencia. Las pruebas recaudadas mantienen validez, por mandato del artículo 138, inciso 2º, del CGP.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE

1. **Declarar** la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de 27 de abril de 2023, inclusive, proferida en este proceso por el Juzgado 49 Civil del Circuito de la ciudad.

2. **Ordenar** que rehaga la actuación afectada, con apego a lo previsto en la parte considerativa de esta decisión.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8fe8e10ae6c74c8358616ac5f9ca05800d48fdbde79c7683b566b527dafc902c**
Documento generado en 24/07/2023 04:45:55 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Ponente
SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	DECLARATIVO - PERTENENCIA
DEMANDANTE	Alberto Soto González
DEMANDADO	Jesmin Astrid Céspedes Ardila y otros
RADICADO	11001310302120170034201
PROVIDENCIA	Interlocutorio nro. 45
DECISIÓN	**CONFIRMA**
FECHA	Veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

1. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto de 9 de marzo de 2023, mediante el cual el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá rechazó la nulidad por él impetrada.

2. ANTECEDENTES

2.1. Solicitud de nulidad. Deprecó el apoderado judicial de la parte demandante que se declarara la ilegalidad del auto de 14 de febrero de 2023, con sustento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifestó que las actuaciones irregulares o ilegales no atan al juez ni a las partes, por lo que en aras de garantizar el debido proceso (artículo 29 Constitución Política), se debe dejar sin valor ni efecto el auto que declaró terminado el asunto por desistimiento tácito. Lo anterior, teniendo en cuenta que, supuestamente, se lo requirió para notificar a los demandados -Robert Belisario Céspedes Ardila y Nelly Yanira Céspedes Ardila- y no cumplió la carga respecto

de Robert Belisario; sin embargo, en su criterio ello no es cierto conforme al auto de 15 de octubre de 2021 y las notificaciones obrantes en los folios 181 a 217.

2.2. Auto recurrido. En proveído del 9 de marzo de 2023, el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, rechazó la nulidad invocada, al considerar que "la causal alegada no se encuentran enmarcada en las contempladas por el código adjetivo".

2.3. El recurso de apelación. Inconforme con esa determinación, el apoderado judicial del demandante interpuso recurso reposición y en subsidio de apelación insistiendo en sus argumentos iniciales.

2.4. Concede recurso de apelación. En auto de 18 de mayo de 2023, el *a quo*, mantuvo incólume su decisión y concedió el recurso de alzada, a fin de que la pugna fuese resuelta por esta magistratura.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Recuérdese que el análisis de fondo de la causal y el rechazo del incidente se tratan de dos situaciones jurídicas diametralmente distintas; la primera, se refiere a cuando a la articulación se le ha impartido el trámite legal y se estudian los fundamentos de facto planteados, para concluir si existió o no el vicio endilgado, en tanto que la segunda, se remite a cuestiones de forma que impiden la procedibilidad del incidente.

Memórese que el Juzgador está facultado para rechazar todo incidente de nulidad, únicamente, cuando se encuentre encasillado en cualquiera de las siguientes causales: a) que no esté expresamente autorizado por la ley, b) el que se promueva fuera de término; c) el que no reúna los requisitos formales; d) el que se

argumente en causales distintas de las consagradas en el artículo 133 ibídem, y, e) el que se fundamente en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que ésta se proponga después de saneada.

3.2. Por averiguado se tiene que "*es regla invariable de derecho procesal, la que las causas de nulidad son de carácter taxativo e interpretación estricta, como excepciones que son del principio general de la validez y regularidad de los actos y actuaciones*"[1], tal como desde antaño lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, entonces, es natural que tales causales sólo se configuren cuando se haga patente el fundamento fáctico que las informa o consolida.

Lo anterior significa que un proceso civil es nulo en los eventos en los cuales el legislador consagró, en forma taxativa, como aquellos hechos que sólo pueden configurar la nulidad de los procesos civiles, acogiendo así el principio de especificidad, al determinar que "El proceso es nulo en todo o en parte, solamente" en los casos previstos en el artículo 133 del Código General del Proceso.

En relación con ello, se impone precisar que la Corte Constitucional señaló que "*además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución, según el cual 'es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso"*[2], la cual se configura solamente cuando la prueba fuese recaudada "*sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para*

[1] CSJ.SC. 1 de abr. de 1987.
[2] CC. 2 de nov. de 1995. C-491/95.

la producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta" [3]

3.3. De acuerdo con lo anterior, emerge diáfano que los supuestos que soportan la nulidad aquí deprecada no se encasillan dentro de alguna de las específicas causales establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso, en la medida en que la irregularidad alegada no se refiere a alguna de las hipótesis allí previstas.

Igualmente, resulta evidente que los fundamentos de la referida petición anulatoria tampoco encuadran en la causal de nulidad consagrada en el artículo 29 de la Carta Política, como quiera en nada tiene que ver con la obtención de una prueba con violación al derecho fundamental al debido proceso.

Nótese que la nulidad deprecada se cimentó en un supuesto muy diferente, consistente en la inconformidad del recurrente respecto de la decisión adoptada por la *a quo* y por este Tribunal, lo cual, a todas luces, se distancia de configurar alguna de las causales de nulidad mencionadas *ut supra.*

3.4 Así las cosas, ningún reproche puede merecer el rechazo de la nulidad deprecada en este asunto, dispuesta por el juzgador de conocimiento, si se memora que el artículo 135 del Código General del Proceso, claramente consagra que *"El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo"*.

En consecuencia, sin más consideraciones, se confirmará el rechazó de plano de la petición de nulidad formulada por el accionante, toda vez que se fundó en una causal distinta a las

---

[3] Corte Constitucional. Sentencia N° C-491 de 2 de noviembre de 1995. Ref.: Expediente D-884. Actor: Hernán Darío Velásquez Gómez. Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.

determinadas legal y jurisprudencialmente.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído recurrido, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: Oportunamente devuélvase lo actuado al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

Firmado Por:
Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ca1a4593f58cf9e374e37f4a84fd389ec612acef77b0cfbd593b310922541a72**
Documento generado en 24/07/2023 03:58:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

11001-31-03-022-2021-00249-01

Por encontrarse legalmente procedente, el Despacho dispone:

Admitir en el efecto **DEVOLUTIVO**, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la **SENTENCIA** proferida el día 07 de junio del año 2023, por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, en el asunto de la referencia.

Una vez cobre ejecutoria la presente decisión, contrólense los términos con los que cuenta el aquí apelante para sustentar la alzada formulada, conforme lo consagra el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. Transcurrido dicho lapso, de la sustentación presentada se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días, a fin de que, si a bien lo tiene, se pronuncie frente a las manifestaciones elevadas por la impugnante.

Por Secretaría, una vez vencidos los mencionados términos, ingrese el expediente al Despacho, con el propósito de emitir la decisión que en derecho corresponda.

Las partes deberán allegar el escrito sustentatorio y su réplica, a la dirección de correo electrónico **secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.**

NOTIFÍQUESE,

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado

Firmado Por:

Juan Pablo Suarez Orozco

Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bc14a325cfe63e083f132456f879fcef7940557bbcf093049b5492925a3bb922**

Documento generado en 24/07/2023 04:12:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Proceso No.	11001310302320210035001
Clase:	VERBAL
Demandante:	TRANS INHERCOR LTDA (EN LIQUIDACIÓN)
Demandados:	FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP. SUCURSAL COLOMBIA.

Con apoyo en el artículo 321, numeral 1° del Código General del Proceso, se resuelve la apelación que el demandante interpuso en contra del auto de 02 de mayo de 2023 proferido por el Juzgado 23º Civil del Circuito de esta ciudad, a través del cual revocó el auto de 30 de septiembre de 2021 que admitió la demanda, y, en su lugar, rechazó la misma por no haber atendido a lo expuesto en el numeral 6 del proveído inadmisorio.

ANTECEDENTES

1. Mediante la decisión recurrida, el juez de primer grado rechazó la demanda[1], tras destacar que en auto de 21 de septiembre de 2021 se puso de presente al demandante que "6.- Comoquiera que se pide el reconocimiento de perjuicios (daño emergente y lucro cesante), dese estricto cumplimiento al artículo 206 ejusdem, haciendo el juramento estimatorio de forma razonada discriminando y determinando cada concepto e indicando como se generan, producen o de donde provienen (art. 90 del C.G.P.).»", sin embargo, el recurrente no dio cabal cumplimiento a dicha orden.

2. Inconforme con aquella determinación, el extremo actor impetró recurso de apelación, tras aducir que en el auto inadmisorio nada se mencionó

[1] 01CuadernoPrincipal. 038DecideRecursoRechazaDemanda.pdf.

acerca de "la incorporación de nuevas pretensiones que se acompasaran con los hechos, en específico con el acápite del desequilibrio financiero", por lo que, en su criterio, el juramento estimatorio por él presentado se acomoda al *petitum,* tal como lo dispone el artículo 206 del Código General del Proceso. Con sustento en ello, solicitó revocar el auto confutado y, en su lugar, mantener incólume la admisión de la demanda.

3. Mediante auto de 6 de junio de 2023, el juez de primera instancia concedió el remedio vertical, procede, entonces, la definición de la alzada, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De entrada, se debe recordar que según lo normado en el artículo 13 del Código General del Proceso "[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"; por lo que no le es permitido a las partes, en este caso, al recurrente, pretender omitir aquellos requisitos que el legislador estableció para acudir a la administración de justicia.

Ahora bien, al tratarse de un presupuesto de índole formal, el numeral 1º y 6º del artículo 90 del Estatuto Procesal contemplan como causal de inadmisión de la demanda, la ausencia del juramento estimatorio cuando este es necesario, omisión que, de no subsanarse dentro de los cinco días siguientes, deparará en su rechazo, cuál lo pone de presente el inciso 4° del canon en cita.

El artículo 82 del Código General del Proceso contempla los requisitos que debe contener toda demanda, entre los cuales prevé en su numeral 7°, "el juramento estimatorio, cuando sea necesario"; por manera que el evocado precepto debe interpretarse en concordancia con el 206 *ibidem*, que determina que "**quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho**

juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. (...)" (se subraya y se resalta).

En el presente asunto, el juzgador de primer grado inadmitió la demanda, tras advertir, entre otras falencias, que con fundamento en las disposiciones transcritas, en relación con el reconocimiento de perjuicios correspondía al demandante dar "estricto cumplimiento al artículo 206 *ejusdem,* haciendo el juramento estimatorio de forma razonada discriminando y determinando cada concepto e indicando cómo se generan, producen o de dónde provienen", yerro que el demandante procuró subsanar únicamente con la indicación del valor por concepto de daño emergente y lucro cesante, y que para el *a quo*, fue una enmienda del todo insuficiente, pues "se limitó a parafrasear lo pedido en las pretensiones".

Vistas las decisiones objeto de impugnación y analizadas en conjunto con las demás piezas procesales aquí adosadas, resulta diáfano que el recurrente no cumplió con la obligación de estimar el monto del pago de los frutos reclamados "razonadamente", y "discriminando cada uno de sus conceptos", indicando cómo se generaron, produjeron o de dónde provinieron, tal como se lo requirió el *a quo* atendiendo a lo establecido en el artículo 206 antes citado. En efecto, al presentar el juramento estimatorio, el demandante no indicó claramente cuál era el "valor de 15% de lo facturado en el periodo octubre 2014 hasta la terminación del contrato, [ni el] costo operacional del inicio del contrato por inoperancia de los vehículos, [ni la] ganancia esperada por la operación de los vehículos al inicio del contrato", pues solo se limitó a presentar valores genéricos, que, además, tampoco eran concordantes con los referidos en el acápite del libelo subtitulado "desequilibrio financiero incumplimiento".

De manera que como la advertencia del proveído inadmisorio de adecuar las pretensiones y el juramento estimatorio de conformidad con el canon 206 referido *ut supra* no fue atendida, y ante la discordancia entre lo reseñado en ambos acápites de la demanda, devenía lógico e indefectible el rechazo de la misma, decisión que lejos está de comportar un desconocimiento frontal de las disposiciones que regulan la materia.

Sobre el particular, conviene precisar que de "la seriedad y trascendencia de los efectos procesales que el legislador le otorgó al juramento estimatorio (tanto en contra del demandante, como del demandado)[2], es forzoso colegir, en salvaguarda del derecho de defensa de las partes, que las exigencias de argumentación previstas para esa carga procesal solo podrán tenerse por satisfechas en la medida en que haya completa claridad sobre la fuente, entidad y naturaleza del perjuicio que se reclama, así como respecto de la relación causa-efecto con el hecho imputado al opositor y las demás particularidades que estructuren la estimación, pues de lo contrario, los litigantes no tendrían mayores luces sobre los fundamentos fácticos que deben controvertir, o demostrar, para obtener, del juramento, el efecto procesal que persiguen."[3].

Así las cosas, no resulta atinado sostener, como lo hizo el recurrente, que el juramento se entiende presentado con la sola indicación del valor al que asciende su pretensión de condena ($5.120.000.000), pues, además de que debía rendirlo en la forma requerida por el *a quo*, no podía soslayar que, conforme al mencionado artículo 206, "dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo", lo cual le imponía detallar de manera particularizada su estimación. De modo que, como el aportado por la actora no cumplió con dicha carga, porque debido a las referidas inconsistencias no es posible deducir con claridad el monto discriminado de los conceptos que lo integran, no puede afirmarse que el juramento en comento esté debidamente razonado y sustentado.

En conclusión, como el demandante, no subsanó la falencia recién advertida, la consecuencia no era otra que el rechazo de la demanda, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 90 del Código General del Proceso.

---

[2] Véase que, si no es objetado, el juramento estimatorio hace plena prueba del perjuicio que se reclama, y si supera en el 50% la cantidad que resultare probada, impone que se condene al demandante a "pagar a la otra parte una suma equivalente al 10% de la diferencia" (art. 206, C. G. del P).
[3] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto de 23 de agosto de 2016, exp. n.° 01 2016 45116 01. M.P. Óscar Fernando Yaya Peña.

Lo dicho impone la convalidación del proveído recurrido; no se impondrá condena en costas, por cuanto de conformidad con el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso no aparecen causadas.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado sustanciador,

RESUELVE:

PRIMERO. Confirmar el auto de 02 de mayo de 2023 proferido por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas.

SEGUNDO. Sin costas, dado que no se hallan causadas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

El Magistrado,

Firmado Por:
Manuel Alfonso Zamudio Mora
Magistrado
Sala 005 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a62641073230b7d8f905d17eae6f45a7ba3808cd27e4f1c8189a36743fdd0e56**

Documento generado en 24/07/2023 04:28:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D. C.
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA:	**CIVIL DECLARATIVO.**
DEMANDANTE:	**Meridiano Catering Services S.A.S. En Liquidación.**
DEMANDADOS:	**GS 1 Colombia y Fundación Logyca.**
RADICACIÓN:	**11001310302620110069004.**

ACATA LO RESUELTO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a través de la providencia AC1382-2023 de 28 de junio del presente año declaró inadmisible la demanda de casación allegada para sustentar el recurso interpuesto por la demandante frente a la sentencia de 11 de noviembre de 2022 proferida dentro del proceso de la referencia.

2. El Tribunal acata lo resuelto por la Sala de Casación y en consecuencia **DISPONE** la remisión del expediente al juzgado de origen para que con fundamento en lo preceptuado en el art. 366 CGP proceda a efectuar la liquidación concentrada a su cargo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

OSCAR HUMBERTO RAMÍREZ CARDONA
MAGISTRADO
(Firmado electrónicamente)

Firmado Por:
Oscar Humberto Ramirez Cardona
Magistrado
Sala 002 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c32cbe2fa2bc7c464c44e1dca1c3607fccd90d37da0705f859a253a8340e614f**

Documento generado en 24/07/2023 01:01:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SEXTA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D. C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés

11001 3103 026 2017 00598 01
Ref. proceso ejecutivo de Chaneme Comercial S.A. frente a Nancy Rocío Sabogal Sabogal

El suscrito Magistrado confirmará el auto de 6 de julio de 2021, cuya alzada correspondió por reparto a este despacho el 13 de julio de 2023, por medio del cual el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá decretó el embargo y retención de los dineros depositados en diferentes entidades financieras, en productos de los cuales es titular la ejecutada, hoy apelante

LA APELACIÓN (subsidiaria a la reposición que se desató desfavorablemente el 9 de febrero de 2023). Señaló la señora Sabogal Sabogal que el auto apelado "es nulo de pleno derecho, por haberse producido, de pleno derecho, el desistimiento tácito del proceso". Aseveró que el expediente permaneció inactivo por un período superior a los dos años que prevé el artículo 317 (num. 2º, lit. b.) del C. G. del P.

SE CONSIDERA:

1. Lo primero que ha de señalarse es que la apelante no esbozó razones distintas de las arriba citadas, por cuyo mérito en este litigio no había lugar a decretar la medida cautelar de embargo de dineros que se dispuso con el auto objeto del recurso vertical.

Lo que la parte ejecutada reclamó -por vía del recurso que hoy desata el suscrito Magistrado- es que se revocara el auto de 6 de julio de 2021, con motivo, así lo aseveró, de concurrir las exigencias previstas para la verificación del desistimiento tácito.

2. En esta ejecución, hasta la presente no se ha decretado el desistimiento tácito a que alude la apelante, ni de oficio, ni por iniciativa de parte.

Tampoco a folios obra expresa solicitud en ese sentido, lo cual solo vino a hacer ahora la demandada, en el término de ejecutoria del auto apelado, y a manera de simple reproche al juez de primera instancia por no haber decretado dicha forma de terminación de la ejecución.

Tal reproche tampoco es de recibo, por lo que a continuación se registrará.

Prevé el numeral 2º del artículo 317 del C. G. del P., que "cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, **en cualquiera de sus etapas** permanezca inactivo en

la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo".

A voces del literal *b* de ese mismo numeral 2º, "**si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada** a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos años".

El expediente en referencia (en el que se dictó sentencia que ordenó proseguir la ejecución, el **3 de febrero de 2019**) no permaneció inactivo por un periodo superior al bienio que contempla el numeral 2º, literal *b* del artículo 317 en cita.

Obsérvese que, en la etapa pertinente, el **20 de diciembre de 2020** la parte ejecutante solicitó el acometimiento de una medida cautelar**,** decretada con el auto apelado, de 6 de julio de 2021. Así se interrumpió el término que aquí interesa con una actuación de parte claramente orientada a hacer efectivas las prestaciones pecuniarias materia de la sentencia con la que se ordenó proseguir la ejecución.

Lo anterior, sin dejar de lado la incidencia que en este litigio ofreció la emisión del Decreto Legislativo 564 de 2020 (por el cual se adoptaron medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica). En efecto, hay que señalar que la suspensión de términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito operó entre el 16 de marzo de 2020 (art. 2º, D. L. 564 de 2020) y el **2 de agosto de 2020** (un mes contado desde el día siguiente al del levantamiento de la suspensión de términos judiciales que tuvo lugar a partir del 1º de julio de 2020, según Acuerdo PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020).

Así las cosas, emerge que el lapso al que recién se hizo alusión (del 16 de marzo al 2 de agosto de 2020) tampoco podía tenerse en cuenta en el cómputo del bienio que aquí interesa.

3. Se reitera que la ejecutada no formuló ningún reproche adicional frente al auto apelado, situación que impone memorar que "el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión" (C.G.P., art. 320) y que "**el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante**" (art. 328).

4. No prospera, en consecuencia, la apelación en estudio.

DECISIÓN. Así las cosas, el suscrito Magistrado CONFIRMA el auto que el 6 de julio de 2021 profirió el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

Sin costas de segunda instancia, por no aparecer causadas.

Devuélvase el expediente al Despacho de origen.

Notifiquese

Firmado Por:
Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7702efc13f85a814e463ad667bd8fbede65c94878e6414c3e483d2876e9333a2**
Documento generado en 24/07/2023 09:55:37 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: ***MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA.***

Proceso No.	11001310302720190025801
Clase:	VERBAL – RCC
Demandante:	LEGAL SAFE S.A.S.
Demandado:	ASOPAGOS S.A.

Sentencia discutida y aprobada en sala n.° 27 de diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por Legal Safe S.A.S. contra la Sentencia de 30 de junio de 2022 proferida por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda principal.

ANTECEDENTES

1. Legal Safe S.A.S.,[1] (en adelante Legal Safe) promovió demanda de responsabilidad civil contractual contra Asopagos S.A., (en adelante Asopagos) encaminada a que se declarara ***i)*** que el 14 de febrero de 2017, se perfeccionó entre las enfrentadas el "consentimiento para celebrar un contrato"[2]; ***ii)*** que el 28 de junio de 2017, los extremos de la Litis consignaron por escrito las obligaciones que regían dicho pacto[3] -o, en su defecto, que se

---

[1] Ver folios 600 y ss., cdno. 1.
[2] "[C]uyo objeto era la prestación de servicios de orientación y atención básica inicial para aportantes actual y/o potencialmente fiscalizados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)".
[3] "Asopagos estaba obligada a:

a. Establecer la necesidad, el alcance y el contenido conceptual detallado del servicio objeto del contrato, partiendo de su conocimiento y el mercado potencial del negocio derivado de su vinculación directa con las Cajas de Compensación Familiar.
b. Difundir y divulgar el servicio objeto del contrato con el fin de lograr el consumo del mismo por parte de las empresas afiliadas a la Cajas de Compensación accionistas de la sociedad y

declarara que las sociedades en contienda celebraron un "contrato de colaboración empresarial"-; ***iii)*** que la participación en la utilidad generada por la ejecución del pacto se fijó en el "Modelo de Negocio Servicios Legales"; ***iv)*** que Asopagos S.A., incumplió el contrato; ***v)*** que el 16 de febrero de 2018, la convocante terminó el vínculo negocial con justa causa; ***vi)*** que la pasiva incurrió en responsabilidad civil contractual y, en consecuencia, se le condene a esta última al resarcimiento de perjuicios discriminados en $743.564.329,oo, por concepto de daño emergente y $20.538.779.773, a título de lucro cesante; ***vii)*** se ordene a la demandada a pagar a su favor, los intereses causados sobre las sumas anteriores, o se realice la debida indexación, y ***viii)*** se condene en costas a la cuestionada.

De forma subsidiaria, peticionó que se declarara ***i)*** que el 9 de febrero de 2017, tanto el gerente como el representante legal de Asopagos S.A., "iniciaron negociaciones para celebrar un contrato"[4], con Francisco de Valdenebro –para ese entonces futuro representante legal de Legal Safe S.A.S.-; ***ii)*** que la encartada actuó de mala fe en esa etapa precontractual y, como consecuencia; ***iii)*** se le condenara al pago de perjuicios tasados en los valores referidos en precedencia.

En síntesis, las pretensiones se sustentaron en los siguientes hechos:

a) El **9 de febrero de 2017** Jorge Gutiérrez, gerente y representante legal de Asopagos S.A., presentó una oferta a Francisco de Valdenebro, consistente en la "celebración de un contrato para prestar un servicio de orientación y atención básica inicial para aportantes actual y/o potencialmente fiscalizados por la UGPP", así que el ofertante le propuso al señor Valdenebro constituir una sociedad, completamente independiente, para desplegar el objeto negocial "en nombre de Asopagos de cara a los usuarios".

b) El **14 de febrero siguiente,** Francisco de Valdenebro aceptó la oferta mediante la constitución de Legal Safe S.A.S., empresa que nació a la vida jurídica con el único propósito de prestar los servicios de asistencia ya referidos; en esta data, "se perfeccionó el

---

los Aportes que hacen sus aportes PILA a través de Asopagos"; mientras que Legal Safe S.A.S., se obligaba a diseñar la estructura del servicio en mención y a la prestación del mismo.

[4] "[C]uyo objeto era la prestación del servicio de orientación y atención básica inicial para aportantes actual y/o potencialmente fiscalizados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)".

consentimiento entre Legal Safe y Asopagos para celebrar el contrato" y convinieron las obligaciones de cada sociedad.

c) Desde el 6 de marzo del mismo año la llamada a juicio dio inicio a un envío de correos; en el primero explicó "el contexto del servicio", en el siguiente, de 17 de esa mensualidad, ilustró datos estadísticos del mercado, y luego, le insistió a la demandante "iniciar inmediatamente el proyecto mediante la implementación de un Plan Piloto para desarrollar el servicio de asistencia legal inicial UGPP en 3 cajas de compensación familiar accionistas de Asopagos: Combarranquilla, Comfacauca y Cajasán".

d) El **4 de abril de 2017** la cuestionada puso en conocimiento de Legal Safe S.A.S., una presentación que contenía el mercado potencial existente; el modelo operativo; las tarifas y el plan de trabajo piloto con una fecha de inicio del 23 de marzo anterior, lanzamiento del servicio el 15 de mayo, y cierre el 21 de julio de 2017, así que ese mismo mes celebró un contrato de arrendamiento de inmueble comercial para destinarlo a la prestación del servicio conforme al cronograma definido, el cual dotó de material de activos tecnológicos y material de trabajo.

e) El **17 de abril de 2017** la demandada le remitió vía correo electrónico el "borrador del contrato de Prueba Piloto", así que a partir de esta data las dos empresas intercambiaron e-mails, con modificaciones y estipulaciones del boceto en mención, con una última versión dada por la pasiva el **19 de mayo siguiente**, aunado, el día **27 de esa mensualidad,** la encartada le comunicó a detalle las etapas e implementación del Plan Piloto en la caja de compensación Cajasán, desde su firma, el **5 de mayo de 2017**, la salida en vivo el **6 de junio de 2017** y el cierre de la Prueba Piloto el **16 de agosto de 2017**.

f) El **15 de mayo de 2017** -fecha prevista para el lanzamiento de la Prueba Piloto-, la demandante ya había contratado la totalidad del capital locativo, tecnológico y humano necesario para iniciar la prestación del servicio.

g) A pesar de lo anterior, Asopagos incumplió con sus obligaciones estipuladas en el contrato de Prueba Piloto, salvo las relativas al "establecimiento de la necesidad, el alcance y el contenido conceptual detallado del servicio", lo cual impidió la ejecución de la Prueba Piloto; sin embargo, el **8 de junio de 2017**, la demandada le comunicó el archivo denominado "preliminar del contrato de Colaboración Empresarial para la prestación de servicios de orientación y asistencia básica a

los aportantes que se encuentren o no en proceso de fiscalización por parte de la UGPP y otros" donde ya no se encontraba el desarrollo del Plan Piloto; luego, el día 28 de ese mismo mes, "vertieron" sus obligaciones contractuales, así que al subsiguiente día la cuestionada le remitió el archivo denominado "final acordado contrato junio 28".

h) El **17 de julio de 2017** la encartada le compartió el documento denominado "IN16044 Modelo de Negocio Servicios Legales" como versión definitiva del contrato; allí, se establecieron los porcentajes de participación de las partes, 55% para Asopagos y el 45% restante de la actora.

i) El **29 de septiembre de 2017** la cuestionada remitió a la convocante, vía correo electrónico, 6 archivos; no obstante, lo allí plasmado, solo difirió de la versión dada el 29 de junio anterior, en el cambio del nombre del servicio, el cual mutó a "Asistencia Básica Inicial UGPP".

j) Adujo que mientras la actora honró a cabalidad el contrato, su contendora **incumplió con la obligación de entrega y manejo de dinero del fondo rotatorio y costos reembolsables,** últimos que incluían conceptos como "equipo de trabajo", "administración general" y "otros gastos reembolsables", los cuales se proyectaron a 7 años.

k) Si bien, el **25 de octubre de 2017,** la demandada le entregó a Francisco de Valdenebro un cheque por la suma de $46.250.000,oo, correspondientes a los aportes reembolsables pagados por Legal Safe S.A.S., entre 12 de julio y 12 de octubre de 2017, lo cierto es que con posterioridad a esa reunión, la misma no le sufragó lo causado entre el 25 de octubre de 2017 y 7 de marzo de 2018, además de que le envió sendos correos con supuestos gastos en los que había incurrido, sin los respectivos soportes, por lo que el **22 de diciembre siguiente**, la demandante le rechazó por mensaje electrónico el "supuesto nuevo modelo de negocio pretendido por la demandada" y aunque el 29 de diciembre y el 8 de enero de 2018 intentó sanear el asunto con "supuestos soportes contables faltantes", estos no correspondieron a lo acordado.

l) Relató que la sociedad demandada también incumplió **la obligación de publicidad,** pues, aunque el 13 de octubre de 2017, Asopagos S.A., contrató la agencia de publicidad, Guido Ulloa, quién propuso una "Estrategia Integral de Comunicación", la misma no se

ejecutó; en suma, el **25 de septiembre de 2017** las partes acordaron realizar comunicaciones masivas e independientes para publicitar el servicio; sin embargo, Asopagos S.A., sólo llevó a cabo la de **12 de diciembre de 2017**, vía correo electrónico a 32.815 usuarios que hacían parte de su Base de Datos de Independientes de un total de 3.000.000 potenciales -según la información que la convocada le dio en febrero de 2017-.

m) Asimismo, cuestionó la inobservancia de obligaciones, como: i) **"garantizar que las llamadas que realizasen los usuarios llegaran exclusivamente al IVR dispuesto por Legal",** en tanto, los usuarios primero debían comunicarse con el PBX de las Cajas de Compensación; ii) **facilitar su base de datos a la demandante,** pues precisamente la actora nunca obtuvo acceso a esta; iii) **"definir en conjunto con Legal el valor por la prestación de los servicios",** ya que la cuestionada impuso de manera unilateral que para usuarios categoría diamante, no se cobraría valor alguno.

n) Expuso que el **16 de febrero de 2018** Legal Safe S.A.S., le comunicó a la sociedad demandada que, de conformidad con el numeral 5º de la cláusula 17 había tomado la decisión de terminar con justa causa el contrato con base en el incumplimiento de Asopagos en el desarrollo de sus obligaciones[5], y aunque le sugirió a la pasiva cederle los contratos laborales para dar continuidad a la prestación del servicio, la encartada le rechazó tal propuesta el 21 de febrero de ese mismo mes.

o) Por último, cuestionó una "**falta al deber de obrar de conformidad a la buena fe en la etapa contractual y postcontractual de Asopagos",** porque no solo vinculó de forma irregular a varios clientes, sino que también negó la existencia del contrato y luego, el 23 de marzo de 2018, es decir, con posterioridad a la fecha de terminación del vínculo negocial, la demandada realizó el "lanzamiento del servicio de asesoría legal para requerimiento de la UGPP en Comfenalco Cartagena" e hizo un uso indebido del *know how* de Legal Safe S.A.S.

2. Notificada la demandada del auto admisorio de **23 de abril de 2019**, esta se opuso a las pretensiones, y propuso las **excepciones de mérito** que denominó: **a)** inexistencia de un contrato de prestación de servicio y/o de un contrato de colaboración empresarial; **b)** inexistencia de obligaciones y de incumplimientos; **c)** no es posible

[5] Obligación de publicidad (clausula 3.3 y 3.5), de comercialización y venta del servicio (clausula 3.8), de entrega del dinero para el Fondo Rotatorio (clausula 3, numeral 13).

terminar un contrato que no existe; **d)** inexistencia de responsabilidad contractual; **e)** los borradores de un contrato no tienen ningún efecto al faltar los elementos esenciales; **f)** los únicos acuerdos fueron cumplidos por Asopagos, esto es, el Acuerdo de Confidencialidad y lo relativo a la distribución temporal de costos y gastos; **g)** no existe daño emergente que sea indemnizable; **h)** no hay lucro cesante imputable; **i)** compensación; **j)** nulidad relativa, y **k)** excepciones adicionales.

Como soporte de lo anterior, adujo que:

Asopagos S.A., es una empresa autorizada para prestar el servicio de operador de información de las planillas integradas de liquidación de aportes –PILA; que, a finales de 2016, comenzó a considerar la posibilidad de explorar un nuevo servicio que pudiera brindar asistencia y orientación a sus clientes y usuarios frente a eventuales requerimientos a la UGPP.

Los señores Francisco de Valdenebro y Diego Conde –yerno del primero-, al conocer de la comentada idea, se acercaron al gerente de la demandada, para sugerirle que "exploraran conjuntamente la estructuración de un producto", así que contrario a lo afirmado por la actora, en la reunión de **9 de febrero de 2017** –una de muchas-, no existió oferta alguna. Y es que de haberse realizado esta, el contrato tampoco habría tenido la virtualidad de ocasionar efectos jurídicos, al **no contener los requisitos que establece el artículo 845 del Código de Comercio para su existencia**, aunado a que, resultaba imposible que la persona jurídica fuese la destinataria, pues, su constitución se realizó solo hasta el **14 de febrero de 2017**.

Relató que lo discutido en esa oportunidad quedó consignado el **17 de abril de 2017** en un celebrado "**Acuerdo de Confidencialidad"** el cual giró en torno a i) el deber de confidencialidad entre ellas, ii) la necesidad de iniciar una prueba piloto para determinar la viabilidad del servicio, y iii) un compromiso de que nada de lo que harían en adelante las obligaría a celebrar pactos a futuro.

Expuso que aun en "una etapa muy preliminar", la sociedad actora tomó la decisión de vincular a más de 10 personas a su planta de personal, arrendó una oficina y realizó cuantiosas inversiones en equipos y mobiliario.

Aunado, arguyó que el objeto social de Legal Safe S.A.S., no se circunscribió a la ejecución de algún negocio o contrato puntual con la

demandada, de hecho, en el certificado de existencia y representación legal de la reclamante, se lee de manera general y abstracta un sinnúmero de actividades, sumado a que la constitución de la persona jurídica reclamante surgió como decisión libre de sus accionistas, sin que su éxito o fracaso pudiere ser atribuible a la convocada.

Si bien, las enfrentadas intentaron negociar un "contrato de prueba piloto" y un "contrato de colaboración empresarial", nunca llegaron a un acuerdo final y definitivo sobre los términos y alcance de ambos documentos, ni tampoco de las obligaciones o elementos de la esencia, al punto que jamás suscribieron los mismos; sin embargo, durante varios meses ejecutaron "un programa piloto", que "implicó una suerte de desarrollo experimental de lo que se pensaba podría ser un eventual servicio".

Mencionó que "la prueba piloto" no fue más que "la herramienta que facilitaría la obtención de información de un mercado absolutamente desconocido e inexplorado para determinar si la prestación del servicio era o no viable"; luego, este plan inició solo con la Caja de Compensación Cajasan, la que si bien, aceptó la realización del programa, lo cierto es que no consintió firmar documento alguno que la atara al cronograma para su desarrollo.

A su vez, la extensión de la mentada prueba piloto era a todas luces flexible, esto, porque dependía de las cajas de compensación que accedieran a implementarla, así que su duración también contó con una estimación porque su ejecución no dependía únicamente del cumplimiento de las obligaciones de las partes, sino que además obedecía a la voluntad de terceros.

Asopagos S.A., jamás dejó de ejecutar las obligaciones contenidas en el Acuerdo de Confidencialidad siendo este, el único suscrito de común acuerdo, máxime que, Legal Safe S.A.S., nunca le indicó a la demandada que en su parecer hubiera dado inicio a la ejecución del borrador del contrato de Colaboración Empresarial, con todo, si así fuere, esgrimió que el mismo debía considerarse nulo, pues, la manifestación de voluntad de Asopagos adoleció de dolo y error.

El correo electrónico cuyo asunto se tituló "finales acordados" no era suficiente para concluir que con él las contendoras llegaron a un acuerdo de voluntades sobre la versión del contrato de Colaboración Empresarial, porque después de este -al menos hasta septiembre de 2017-, las partes aún intercambiaron borradores, sumado a que estos

adolecían de los requisitos esenciales, ya que si bien se incluyó un porcentaje de participación, "al lado de cada uno aparece la advertencia de que tales cifras [estaban] por validar".

Relató que para que se diera la celebración del mencionado contrato de Colaboración Empresarial no solo era imprescindible que la prueba piloto se llevara a cabo, sino que, además, esta tuviera éxito y agregó que no era cierto que la división por categorías de los usuarios se diera por imposición unilateral de la convocada, en tanto fue una decisión tomada de común acuerdo; en todo caso, aseveró que la gratuidad para la distinción de "diamante" pudo tratarse de una estrategia de mercado.

Aseguró que el redireccionamiento de llamadas de ninguna manera desnaturalizaba el servicio, con todo, el hecho de que aquellas fueran atendidas de manera directa o indirecta no garantizaba el éxito del trabajo y, por tanto, esa actividad no podía considerarse como un obstáculo para la ejecución de la Prueba Piloto.

Asimismo, negó la existencia de acuerdos sobre la forma como las enfrentadas asumirían los costos y los gastos que se produjeran durante la ejecución de la Prueba Piloto y mencionó que si bien, algunos soportes no los aportó, esto se debió a que respondían a información de carácter reservado y agregó que si no pagó la suma de $137.517.000 demandada por Legal Safe S.A.S., fue porque aquella resultó de un cálculo errado donde no se tuvo en cuenta lo que asumió directamente Asopagos S.A.

En lo relativo al pago del cheque, afirmó que esto surgió en forma transitoria, "para aligerar el impacto de las perdidas en Legal y en virtud de la decisión transitoria de que los costos y gastos del piloto fueran compartidos". A su vez, comentó que en comunicaciones entre Asopagos y Legal de diciembre de 2017, está última reconoció que la distribución de los costos y gastos sería de carácter temporal, dejando en evidencia que, lo señalado en el escrito de demanda es francamente erróneo.

3. Por otra parte, Asopagos S.A., formuló demanda de reconvención para que, en lo medular, se declarara: **(i)** la existencia, validez y eficacia del Acuerdo de Confidencialidad celebrado entre ella y Legal Safe S.A.S., el **17 de abril de 2017 (ii)** que, las partes se obligaron a realizar una Prueba Piloto para analizar la viabilidad y posibilidad de implementar un servicio y llegar a un eventual contrato, **(iii)** que, ni la

suscripción del primero, ni la ejecución del segundo, obligaba a las partes a perfeccionar futuros acuerdos entre ellas **(iv)** que, en el marco del "Acuerdo de Confidencialidad" negociaron los términos, condiciones, obligaciones, derechos y elementos esenciales de un eventual "contrato de Colaboración Empresarial" **(v)** que finalmente nunca convinieron sobre el contenido y los elementos esenciales del "contrato de Colaboración Empresarial" **(vi)** que no convinieron acuerdo alguno ni contrato diferente al de Confidencialidad **(vii)** que la Prueba Piloto evidenció que ni el servicio ni el eventual acuerdo eran viables **(viii)** que Legal Safe S.A.S., terminó la Prueba Piloto el 23 de febrero de 2018.

4. La demandada en reconvención se opuso al *petitum* enervado en su contra, como sustento adujo que, las súplicas de la demanda de reconvención no eran pretensiones en estricto sentido, aunado a que, Asopagos no agotó los requisitos de procedibilidad, dado que no convocó previamente a una conciliación extrajudicial para discutir lo pretendido mediante la contrademanda, por tal razón aquella debió ser inadmitida.

5. La sentencia de primera instancia.

En providencia de 30 de junio de 2022, la juez de primer grado, de un lado, denegó las pretensiones de la demanda principal y en ese sentido absolvió a la pasiva de aquellas; mientras que, de otra parte, declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada en reconvención, por lo que, en consecuencia, declaró que existió el acuerdo de confidencialidad suscrito por las sociedades aquí enfrentadas entre el 17 de abril de 2017 y el 23 de febrero de 2018 –data última en la que Legal Safe S.A.S., decidió concluir el plan piloto-; por sustracción de materia, negó los pedimentos enlistados en los cardinales 3°, 4°, 5°, 7° y 8° de la contrademanda y, por último, condenó en costas a la sociedad vencida.

Para arribar a la determinación en comento, la *a quo* comenzó por referenciar el marco teórico de las acciones de naturaleza contractual; a continuación, expuso que lo primero a determinar era la existencia del vínculo negocial, su validez, y el consentimiento entre los extremos de la Litis como perfeccionamiento del mismo.

Así, sentó que si bien, la génesis del contrato versó con base en una presunta oferta efectuada por Asopagos al señor Valdenebro el 9 de febrero de 2017, consistente en la *"celebración de un contrato de orientación y atención básica inicial para fiscalizados por la UGPP"* y que aquella se aceptó

desde que se constituyó la sociedad Legal Safe, lo cierto es que en esta causa la alegada oferta no existió conforme a los presupuestos de los artículos 845, 847 y 851 del Código de Comercio, y del canon 14 de la Ley 527 de 1999, pues las pruebas aportadas como soporte de ella, no resultaron idóneas en tanto el contenido de la documental nada dijo acerca de la reunión celebrada el 09 de febrero de 2017, aunado a que ningún testigo declaró haber presenciado o conocer las tratativas de la misma.

Luego, en lo referente a las pretensiones subsidiarias, esto es, que se declarara la existencia de un contrato de colaboración empresarial, sentenció que este tampoco se acreditó dado que se evidenció una *"intención de celebrarlo"* con el intercambio de borradores o proyectos del pacto en mención a lo largo del año 2017, pero estos no fueron suscritos por los negociantes y, aun cuando se demostró la ejecución de una prueba piloto, sumado a que la misma superó el término inicialmente pactado, lo cierto es que ese evento no se tornó suficiente para demostrar la mutación de un pacto contractual al contrato de colaboración alegado.

Ya en lo relativo a la demanda de reconvención, precisó que se comprobó la existencia del acuerdo de confidencialidad aquí invocado, toda vez que lo suscribieron ambas partes en contienda y que fue en virtud de aquel que se dio la ejecución de una prueba piloto, surtida con fines netamente experimentales, el cual terminó de forma unilateral por parte de Legal Safe por medio de comunicación remitida a Asopagos el 23 de febrero de 2018.

En cuanto al *petitum* encaminado a declarar que las partes nunca llegaron a un acuerdo sobre el contenido del contrato de colaboración empresarial, la juez de primer grado no se pronunció por sustracción de materia, en tanto la sociedad demandante no demostró la existencia de una oferta.

La decisión fue objeto de adición en cuento a una omisión acerca del estudio de las pretensiones subsidiarias; sin embargo, en la misma data, esta fue desechada por considerar que los mismos argumentos explicitados continuaban en línea para aniquilar las solicitudes secundarias.

6. Del recurso de apelación.

6.1. Inconforme con lo resuelto, Legal Safe S.A.S, apeló la decisión. Para dicho efecto, en la oportunidad debida presentó sus reparos y sustentó la alzada en los términos que se compendian a continuación:

a) En primer lugar, la impugnante cuestionó la forma como fue abordado el problema jurídico en primer grado, en tanto, a su juicio, se trató de una determinación incomprensible y desordenada, al punto que, al solicitar adición al fallo, la *a quo* se limitó a dar una confusa explicación de que lo esgrimido frente a las peticiones principales continuaban de soporte para la negativa de las segundas, así que discutió que no se evacuara en debida forma el estudio del pedimento subsidiario de la demanda inicial. Debatió la valoración probatoria, en tanto esgrimió que se pasó por alto el material demostrativo, tanto documental como testimonial, que revelaba la existencia del contrato de colaboración, mientras que también se omitió un análisis de fondo de las pretensiones del asunto en reconvención con el que se aceptaban las tratativas indicadas por la actora principal.

b) Asimismo, señaló que, en su criterio, sí existió una oferta ya que como lo tiene visto la jurisprudencia –sentencia SC11815 de 6 sep. 2016-, esta se puede manifestar de diversas formas y, para el caso en concreto, se reflejó con la ejecución del acuerdo para la prestación de servicios de asesoría para la UGPP, así que para este punto se pasaron por alto pruebas como la declaración de Francisco de Valdenebro, los testimonios de Diana Plata y Mario Arenas, junto con las intervenciones de los empleados de la demandante y la documental obrante en archivo *"07CDAnexosDemandaDictamenFls"* que enseña desde informes preparados a inicios de febrero de 2017, hasta correos, comunicaciones y actas del Comité Directivo emitidas durante el curso de la anualidad aludida.

c) Criticó un desconocimiento del principio de consensualidad que rige para negocios mercantiles, más concretamente, el contrato de colaboración empresarial, al manifestar que pese a verificarse la inequívoca manifestación de voluntad de ambas partes para desarrollar y prestar un servicio de asesoría, se exigió la suscripción de un documento como requisito formal no aplicable al caso en concreto.

d) Aseveró que en el trámite concurrieron los elementos de la responsabilidad civil contractual que llevaba a que salieran avante sus

reclamaciones y que lo resuelto por la falladora fue el resultado de una indebida apreciación de las pruebas.

e) Refutó que la *a quo* omitiera un análisis y valoración sobre el juicio de responsabilidad precontractual en tanto para ello aplicó los mismos argumentos de la responsabilidad contractual de las pretensiones principales y censuró que no se estudiara el material probatorio que demostraba el actuar de la mala fe de la pasiva en esa etapa previa.

f) Por último, calificó de incongruente la decisión, al concluir, de forma equivocada, que solo existió un contrato de confidencialidad cuando en las consideraciones se reconoció la celebración de una prueba piloto entre los enfrentados, la que, además, fue incumplida por la demandada, sumado a que sin prueba alguna se determinó que la actora principal terminó un acuerdo distinto al que en realidad se ejecutó.

CONSIDERACIONES

La Sala encuentra que la actuación se desarrolló normalmente, no hay causal de nulidad que se tenga que declarar, se hallan presentes los presupuestos procesales y este tribunal es competente para decidir el recurso de apelación en los términos y con las limitaciones que establece el artículo 328 del Código General del Proceso y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[6].

Precisado lo anterior, de entrada, se observa que la sentencia de primera instancia será confirmada, pues los reparos concretos que en su oportunidad expuso y sustentó la sociedad recurrente, no tienen la virtualidad de derruir la conclusión absolutoria de la demandada principal a la que llegó la juzgadora de primer grado.

En el caso *sub examine* comiéncese por decir que las partes no controvirtieron la existencia del "acuerdo de confidencialidad" signado por ellas el 17 de abril de 2017, en cuyo texto definieron términos, condiciones y alcances del ***"deber de confidencialidad"*** que les regiría frente al *"**intercambio de cualquier información** proporcionada por Asopagos*

[6] "El apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben enmendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisión, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (art. 357 del C. de P. C., y 328 del C. G. del P.)." (CSJ, sentencia del 1° de agosto de 2014, expediente SC10223-2014, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona).

a Legal Safe relacionada con la implementación del servicio tendiente a prestar orientación y asistencia básica inicial a los aportantes afiliados a las Cajas de Compensación Familiar accionistas de Asopagos, que se encuentren en procesos de fiscalización por parte de la UGPP, así como de aquellos que aún no lo están, pero requieran de asesoría para tomar medidas preventivas".[7] (Se resalta).

Sin embargo, en este punto vale la pena precisar de entrada que la única parte que pretendió la declaratoria de la existencia de este vínculo negocial, fue la demandada principal –demandante en reconvención-, mientras que la actora primigenia, promovió el juicio de responsabilidad civil contractual, no con el ánimo de controvertir tal relación o perseguir un resarcimiento de esta, sino tendiente a conseguir la declaratoria de existencia, en primer lugar, de un "contrato" consolidado, presuntamente perfeccionado el "14 de febrero de 2017" cuyo objeto era la prestación de un servicio[8] o, en su defecto, de forma subsidiaria, un "contrato de colaboración empresarial"[9].

En segundo lugar, también presentó un acápite como "pretensiones subsidiarias", cuyo texto se enfiló a que se declarara que las partes "iniciaron negociaciones para celebrar un contrato" y que Asopagos actuó de mala fe durante esa fase precontractual y, para todos los eventos, requirió que se condenara a la pasiva a indemnizar los perjuicios causados.

Luego, ante los diversos negocios jurídicos invocados y, el reiterado alegato de la demandante frente a la existencia de una relación contractual por vía de apelación, la Sala estima desde ya que las tratativas no lograron superar la etapa precontractual, dado el evidente cambio de naturaleza jurídica de los negocios dialogados, reconocido por los contendores y vislumbrado desde los albores de la documental arrimada a esta causa.

Para empezar, se evacúa en principio lo relativo al "Acuerdo de Confidencialidad", con el fin de determinar si de este se extrae que reguló o delimitó la negociación surgida entre las sociedades aquí enfrentadas o si, por el contrario, se trató de un pacto particular e independiente al de naturaleza contractual alegado por la recurrente y que más adelante se abordará.

---

[7] Folios 20 a 26 de Anexos Parte 1.pdf. (C04 Reconvención, 02 MMfl11, Anexos).
[8] Pretensiones principales primera, segunda y tercera, detalladas en folio 2 de "09DemadnaAutoAdmisorioFls600-667.pdf" (C01Principal_Cerrado).
[9] Pretensión en subsidio a las principales detallada en folio 3 *ibídem*.

Así, se torna necesario traer a colación el contenido del aludido acuerdo celebrado por escrito y signado por los extremos de la Litis el 17 de abril de 2017. En primera medida, dentro de los considerandos, los contratantes dejaron por sentado en esa oportunidad que:

> 1. *"[…]**adelantan conversaciones para analizar la posibilidad de implementar un servicio** tendiente a prestar orientación y asistencia básica inicial a los aportantes afiliados a las Cajas de Compensación Familiar accionistas de Asopagos, que se encuentren en procesos de fiscalización por parte de la UGPP, así como de aquellos que aún no lo están, pero requieran de asesoría para tomar medidas preventivas".*
> 2. *[…]*
> 3. *Que las partes **desean ejecutar un piloto del servicio** señalado en el considerando primero del presente acuerdo con la intención de analizar la viabilidad del servicio en todas las cajas de compensación familiar accionistas de Asopagos.*
> 4. *[…].*[10] (Se resalta).

De la lectura de los presupuestos del comentado arreglo, se deduce fácilmente que las partes en contienda sí adelantaron unas tratativas para implementar una eventual prestación de un servicio y que contaban con serias intenciones de ejecutar un programa "piloto"; sin embargo, de este escrito mal haría la Sala en concluir que allí se concertó la forma como se ejecutaría el plan piloto pues de su clausulado nada de ello se desprende.

Si bien, en el alusivo texto las personas jurídicas en disputa dejaron en evidencia su deseo de "ejecutar un piloto" de un servicio, lo cierto es que este asunto lo resaltaron con el fin de explicar las razones que las llevaba a esta puntual celebración de confidencialidad, y esto fue porque del hecho de surtir negociaciones entre ellas, implicaba compartir cierta "información" que pretendían proteger y mantener en reserva.

Así, de la parte introductoria del documento, se observa que los exponentes anotaron que lo suscribían "con la intención de proteger su información confidencial […] para darle protección a cualquier información suministrada a Legal Safe" y "a fin de controlar la no divulgación". Además, en la cláusula primera, el objeto se fincó en definir los términos, condiciones y alcances del **"deber de confidencialidad"** que giraría en torno al "intercambio de cualquier información proporcionada por Asopagos a Legal Safe relacionada con la implementación del servicio […]". Acto seguido, expusieron que "el deber de confidencialidad va dirigido al piloto que las partes desean implementar, **en caso de que las**

---

[10] Folios 20 a 26 de Anexos Parte 1.pdf. (C04 Reconvención, 02 MMfl11, Anexos).

partes decidan formalizar el servicio de forma permanente, dicho deber se extenderá al servicio".

En otras palabras, el "deber" de la guarda de la información compartida, se pactó tanto para la esfera precontractual, como para el evento en el que se diera un contrato consolidado y sumado a esto, las obligaciones fijadas en este convenio no eran más que: "custodiar la información (…) para impedir que terceros tengan acceso a ella y para impedir su deterioro y pérdida", "mantener en confidencialidad la información recibida y no revelar esa información parcial o totalmente (…)"., "ninguna de las partes revelará o instruirá a sus representantes para compartir información confidencial con terceros (…)" "utilizar la información suministrada (…) únicamente de la manera y para los fines establecidos en el Acuerdo", entre otras.

De ese modo, y para concluir sobre este tópico, que el "Acuerdo de Confidencialidad" en nada influyó frente a las negociaciones sobre la eventual o materializada prestación de un servicio, ni tampoco reguló el trabajo que las partes intentaron concretar.

Comporta entonces revelar porqué esta Colegiatura entiende que dichas tratativas reconocidas por ambos extremos de la Litis, no lograron superar el plano netamente previo y, en consecuencia, no alcanzaron a consolidarse en un contrato que atara a las partes.

Primero, como se decantó en precedencia, el mismo "Acuerdo de Confidencialidad" suscrito por las partes el 17 de abril de 2017, denotó que las sociedades intervinientes adelantaron "**conversaciones para analizar la posibilidad de implementar un servicio**", hecho que no requiere de un adicional medio suasorio para su comprobación.

Sin embargo, debe precisarse que, por el simple hecho de reconocer la existencia de algunos actos preparatorios, estos por sí solos no constituyen la oferta de la que trata el artículo 845 del Código de Comercio[11].

Al respecto, la jurisprudencia ha decantado que:

---

[11] "La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario".

> "El acuerdo de voluntades que da origen a una **relación contractual** -ha dicho la jurisprudencia- **no suele concretarse de un momento a otro**, sino que es la culminación de un itinerario que comienza cuando «*alguien sugiere o propone a otro la celebración del contrato, proposición a partir de la cual se discuten y consideran las diversas exigencias de las partes, las obligaciones eventuales a que daría lugar el contrato a cargo de cada una de ellas y, en fin, los distintos aspectos del negocio en ciernes de celebración*» (CSJ SC, 8 Mar. 1995, Rad. 4473; CSJ SC, 12 Ago. 2002, Rad. 6151).
>
> Esos tratos preliminares «*colocan a las partes en lo que la doctrina ha denominado estado precontractual, y a cuya culminación puede suceder el advenimiento de la oferta, esto es, el* ***proyecto definitivo de acto jurídico*** *que por alguien se somete a otra persona, o a personas indeterminadas (policitación), para su aceptación o rechazo (artículo 845 del Código de Comercio)*» (se destaca)"[12].

En ese orden, cabe precisar, entonces, que la propuesta es en últimas, la exteriorización de una declaración de voluntad, que se presenta de forma unilateral a un receptor y la que tiene por objeto la celebración de un contrato. En palabras de Luis Díez Picazo y Antonio Guillón, es imperativo que la misma "contenga todos los elementos necesarios para la existencia del contrato proyectado, y que esté destinada a integrarse en él de tal manera que, en caso de recaer aceptación, el oferente no lleve a cabo ninguna nueva manifestación"[13].

Para el caso *sub examine,* nótese que desde el hecho 6 de la demanda, Legal Safe refirió que, en reunión de **9 de febrero de 2017**, el entonces representante legal de Asopagos, presentó una **"oferta contractual"** a Francisco María de Valdenebro Bueno -como persona natural-; luego, en el numeral octavo de su recuento, expuso que el 14 de febrero siguiente el señor Valdenebro "aceptó la oferta", con el acto positivo de la "constitución de Legal Safe", a lo que agregó, que la empresa nació a la vida jurídica "con el único propósito de prestar los servicios legales de asistencia básica"; al mismo tiempo, la impulsora del asunto litigioso requirió en sus pretensiones que se declarara que el 14 de febrero de 2017 "**se perfeccionó el consentimiento** entre Legal Safe S.A.S. y Asopagos S.A. **para celebrar un contrato cuyo objeto era la Prestación del Servicio de Orientación y Atención Básica Inicial para aportantes actuales y/o potencialmente fiscalizados por la Unidad de Gestión Pensional y Paraficales (UGPP)"**.

---

[12] Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil. Sentencia SC054-2015 de 26 de enero de 2015. Rad. 11001-31-03-044-2010-00399-01. M. P. Ariel Salazar Ramírez.
[13] Díez Picazo, Luis y Guillón, Antonio. Sistema de Derecho Civil. 6ª Ed. Madrid: Tecnos, 1992. Vol. II, p. 69 y ss.

Sin embargo, indíquese que la Sala descarta de tajo la invocada "oferta" desde esos albores, por las siguientes dos razones.

La primera, porque en esa data inicial la receptora de la aparente propuesta se trató de una persona natural diferente a quien interviene en esta causa, es decir, que no es parte y mucho menos, sujeto procesal de la acción de responsabilidad y luego, quien, al parecer, pasa a aceptarla, es Legal Safe S.A.S., como persona jurídica, lo que evidencia, una disparidad en los intervinientes del negocio a celebrar.

Si, en gracia de discusión, se aceptara que el cambio de receptor no implica la desnaturalización de la oferta, dado que aquella podría estar dirigida a un destinatario ora personas indeterminadas –público en general-, lo cierto es que tampoco existió claridad en el negocio planteado pues, aunque se quiera hacer ver que el objeto era "prestar un servicio de asistencia", lo cierto es que no se evidenció de forma precisa e inequívoca, el tipo de contrato que se invitaba a celebrar.

El segundo motivo, consiste en que no se logró acreditar que el escenario precontractual culminara con una real **"oferta",** pues no se olvide que esta solo surge cuando se ha presentado de manera firme, clara, inequívoca y precisa, con el **"proyecto definitivo"** de un acto jurídico a perfeccionar.

Pues bien, se itera que, si la recurrente predica que la intención negocial era la de llegar a prestar un servicio de asistencia bajo la celebración de un "contrato de colaboración empresarial", lo cierto es que esta invitación primigenia debía contener desde su exposición los elementos esenciales del pacto policitado.

Sin embargo, como viene de comentarse, ni siquiera puede decirse que la presunta invitación realizada el 9 de febrero de 2017 contaba con el calificativo de oferta, porque ciertamente para esa data no existió una irrefutable, firme y decidida voluntad del oferente de celebrar un negocio jurídico, cuyo proyecto pudiera estar "revestido de tal seriedad que no pueda menos que tenerse la certeza de que podrá perfeccionarse como contrato, con el lleno de todos los requisitos legales"[14].

En todo caso, resulta inocuo verificar si la alegada oferta dada supuestamente a inicios de febrero contaba con los requisitos propios para calificarla de ese modo porque justamente en los mismos hechos

[14] Corte Suprema de Justicia SC, 8 Mar. 1995, Rad. 4473.

de la demanda la actora refirió que incluso el **17 de abril de 2017**, Asopagos le remitió vía correo electrónico "el borrador de prueba piloto para la prestación del servicio" y que a partir de esa data, las partes "**comenzaron a modificar y negociar las estipulaciones del borrador**", ello mediante "intercambio de correos que tuvo lugar entre el 17 de abril y el 19 de mayo", fechas en las cuales "circularon las diferentes versiones".

Y es que no entiende la Sala cómo la sociedad demandante alega en su apelación la existencia de una "oferta", cuya aceptación se probó con la "ejecución del acuerdo para la prestación de servicio de asesorías", cuando las mismas partes solo suscribieron hasta el mes de abril de 2017, el "Acuerdo de Confidencialidad" en el que, además, reconocieron estar en diálogos y tratativas. En este sentido, se aprecia que para abril, las partes aún estaban en una fase de actos preparatorios que no se habían concretado en la oferta y su consecuente aceptación, ya que continuaban intercambiando borradores de posibles contratos, de diferente naturaleza, pues el mismo representante legal de Legal Safe, en el interrogatorio de parte[15], hizo alusión a diversos "borradores", como por ejemplo un contrato de "cuentas en participación"[16], "minutas de prueba piloto" con una supuesta ejecución pactada de dos meses, y lo que finalmente desembocó en una aparente propuesta de contrato de colaboración empresarial[17].

En ese orden, por sustracción de materia, la Sala no entra a analizar las pruebas que invoca la recurrente como desconocidas con las que alegó una configurada oferta desde febrero y su consecuente aceptación, pues como ya se indicó, para esa fecha solo se evidenciaron actos preparatorios que se extendieron por varios meses dados los intercambios de correos con diferentes versiones de contratos a celebrar reconocidos por las personas jurídicas aquí enfrentadas.

Superado ese tópico, la Sala observa que Legal Safe, continúo su censura frente al presunto desconocimiento del "mandato de consensualidad que rige para los negocios mercantiles" y en ese entendido, alegó que a la *a quo* no le era dable negar la existencia de un contrato por la ausencia de suscripción o firma del documento.

---

[15] Minuto 18:10, audiencia de 22 de julio de 2021 Archivo "GrabaciónAudieica22-07-2021_2aParte.url" de "11Audiencia_22-07-2021" de Carpeta "C03Cont.Principal_Abierto".
[16] Contrato tipificado en la legislación colombiana en los artículos 507 y siguientes del Código de Comercio.
[17] Contrato atípico.

Al respecto, vale la pena resaltar que el negocio jurídico que la demandante invocó como perfeccionado consistió en el de "colaboración empresarial"; sobre este, indíquese que aun cuando cierta la apreciación de la censora, no puede desconocerse que, para hablar de un contrato consolidado de colaboración empresarial, el mismo debe honrar su naturaleza contractual donde concurran sus elementos esenciales.

Es bien sabido que el aludido contrato de colaboración empresarial no cuenta con un fundamento normativo en la legislación nacional, por lo que se enmarca en los llamados "contratos mercantiles atípicos"; no obstante, aunque su desarrollo jurisprudencial y doctrinal es un poco limitado, este ya ha sido definido como aquel por medio del cual las partes deciden unir esfuerzos para lograr la consecución de una labor o proyecto específico, con cierta atención a las calidades que ostenta cada una o, al aporte dirigido al fin previsto; aunado a que no se forma una persona jurídica diferente a quienes intervinieron en su origen; y se trata de una convención de carácter temporal, toda vez, que la unión únicamente subsiste con miras a lograr el objeto previsto.

Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia sentó:

> "Aunque en la práctica es el instrumento de cooperación del cual se sirven personas con actividades afines, que temporalmente y sin el ánimo de asociarse resuelven conjuntar esfuerzos para ejecutar determinado negocio, sin que se interfiera su organización jurídica o económica, en el derecho privado patrio no han sido objeto de regulación, constituyendo por ende una modalidad atípica de los denominados por la doctrina, contratos de colaboración, por el cual dos o más personas convienen en aunar esfuerzos con un determinado objetivo, consistente por lo general en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, sin que se establezca una sociedad entre ellos, puesto que no se dan los elementos esenciales del contrato de sociedad, amén de conservar cada cual su personalidad y capacidad para ejecutar las actividades distintas del negocio común. En otras palabras, se trata de 'una unión formada para la gestión o la defensa de intereses comunes, sin llegar a constituir una sociedad' (Caballero Sierra, Gaspar. Los Consorcios Públicos y Privados. Bogotá. Temis. 1985. Pág. 88), particularidades que por ende le confieren una naturaleza jurídica propia, una estructura singular que impide confundirlos con figuras como las

> cuentas en participación o la sociedad de hecho, pese a las aproximaciones que a primera vista pudieran avizorarse entre ellas"[18].

En armonía con lo expuesto, se configurará entonces un contrato de Colaboración Empresarial siempre que: "(i) Que los contratantes conserven su individualidad jurídica, de tal manera que no es creada una nueva persona jurídica que ejecute el objetivo en común; (ii) Que exista unidad de propósito, por lo que los contratantes trabajan conjuntamente para lograr su objetivo; (iii) Que los partícipes aporten activos, bienes o industria para el desarrollo del proyecto común; (iv) Que se delimite la forma en que se asumirán los riesgos y se distribuirán los resultados, sean pérdidas o ganancias"[19].

Situados en el *sub lite*, la Sala descarta que los elementos en cita concurrieran a cabalidad pues ciertamente entre las partes existió mayor rivalidad frente al último de los mentados, esto es, la precisión y delimitación en lo atinente a los riesgos y la forma precisa de **cómo se distribuirían las utilidades**.

Pues bien, se observa que la apelante, en su recurso, enfiló sus esfuerzos a identificar e ilustrar las pruebas con las que, en su criterio, se demostraba que "[s]í existió un acuerdo de voluntades sobre la identidad que cada parte conservará, sobre la unidad de propósito que tenía el proyecto –en detalle hasta cinco años de ejecución-, riesgos y obligaciones asumidos por cada parte, y sobre los aportes que cada una traía al proyecto". No obstante, pasó por alto hacer mención a lo pactado en cuanto a cómo se distribuían los resultados o utilidades.

Sobre el particular, la Sala echa de menos una prueba certera y contundente de la estipulación en comento, lo que lleva a concluir que dicho elemento no se configuró y, por contera, resultaba inviable declarar la existencia del vínculo contractual.

Al respecto, se tiene que, luego de varias negociaciones efectuadas por las partes, la actora hizo especial mención a dos correos; el uno, de **29 de junio de 2017**, cuyo contenido reunió cinco documentos, consistentes en "final acordado contrato junio 28 6pm.doc", acompañado de los Anexos 1, 2, 3 y 5[20]; y, el restante, de fecha **29 de**

---

[18] Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 13 de septiembre de 2006 exp. 88001-31-03-002-2002-00271-01. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.
[19] Sentencias del 02 de febrero de 2017 (exp. 20517, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas) y 27 de junio de 2018 (exp. 21745, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
[20] Folio 65 de archivo "Anexos.pdf", de "08MMfl599", carpeta C01Principal_Cerrado.

septiembre de 2017, enviado por Asopagos a Legal Safe, en el cual se adjuntaron seis archivos contentivos de un contrato y cinco anexos, cuyo asunto se tituló: "Versiones a revisar" [21].

Sobre estos, precisó desde su escrito de demanda que en la primera de las aludidas comunicaciones electrónicas, se compartió "la última versión del contrato de colaboración empresarial", y citó que en esa oportunidad se puso como consigna: "en el contrato queda pendiente determinar el porcentaje de participación […]"; luego, acerca del segundo, refirió que "tales documentos incluían nimias modificaciones respecto de su versión original", y que esta última versión únicamente difirió del e-mail que le precedió en la nominación del servicio a prestar "que mutó de Asistencia Básica Inicial UGPP a Asistencia Legal UGPP".

En ese orden, si se diera por cierto que las dos versiones de correo no modificaban de manera sustancial los términos del contrato y que este se perfeccionó de forma consensual, en todo caso, aunque la Sala se ubicara en el último de estos con el ánimo de verificar la estipulación requerida como elemento esencial, lo cierto es que, de la cláusula novena del proyecto presentado del contrato de colaboración empresarial que reguló la participación, de forma textual se anotó:

> "Las partes acuerdan que Asopagos tendrán el XX% de la utilidad y Legal Safe el XX% de la utilidad generada por los servicios objeto del presente Contrato. La utilidad y la forma de distribuirla serán determinada (sic) según lo definido en el Anexo No. 4 denominado Gestión Económica y Financiera" [22].

Ahora, como este texto remite al Anexo No. 4, de su lectura se extrae que para esa data aún quedaban asuntos pendientes de negociar en relación a los gastos como los honorarios, gastos de personal, arrendamiento, entre otros[23].

En suma, aunque también se trajera como prueba documental el acta N° 4 del "Comité Directivo de 25 de octubre de 2017"-sin suscribir-, este solo revela que para esa data aún no estaba acordado ni definido el porcentaje de participación entre las partes[24].

---

[21] Folio 113 de archivo "Anexos.pdf", *ibídem*.
[22] Folio 173 de archivo "Anexos.pdf", de "08MMfl599", carpeta C01Principal_Cerrado.
[23] Folio 148 de archivo "Anexos.pdf", de "08MMfl599", *ibídem*.
[24] Folio 457 de archivo "Anexos.pdf", de "08MMfl599", *ib.*

De igual manera, así en el sustento fáctico de la demanda se expusiera que el señor Jorge Gutiérrez –entonces representante legal de Asopagos- hubiese confirmado "verbalmente que las participaciones serían de 45% para Legal Safe y del 55% Asopagos, lo cual fue aceptado por Legal Safe, también en forma verbal", lo cierto es que esta exteriorización de voluntades de manera positiva por parte de ambas empresas negociantes no se evidenció.

Con todo, revisada la hoja de cálculo que obra en la carpeta del cuaderno principal con los archivos de "Modelo de Negocio", en su pestaña "Bases", logra evidenciarse los porcentajes en las proporciones alegadas por la apelante -45% vs 50%-; sin embargo, al frente de su casilla, se tiene una columna con la anotación "por validar"[25].

Y es que, aunque el representante legal de Legal Safe, Francisco Valdenebro, en su declaración dada en el interrogatorio de parte, acepte que existió la casilla "por validar" [26], y afirmara que "no quiere decir que no estuviera acordado, porque por un lado nunca fue rebatido, nunca fue cambiado, nunca fue propuesto de manera o forma distinta, porque eso fue un acuerdo verbal al que llegamos (…)", lo cierto es que este tópico no fue comprobado más que por el dicho del señor Valdenebro contrapuesto a la declaración del representante legal de Asopagos, quien, de forma contraria, expuso que aun cuando era cierto que "se exploraron esos porcentajes", aclaró que "nunca se llegó a un acuerdo sobre ellos"[27].

Además, cuando se le preguntó a este último, si era cierto que Asopagos y Legal Safe incluyeron en el modelo de negocio de 17 de julio de 2017, que las utilidades operacionales del acuerdo serían más de cincuenta y cinco mil millones, el interrogado contestó de forma negativa y agregó: "lo que se hizo ahí fue una exploración de unas posibles utilidades" [28].

Con lo dicho, para precisar que la sola declaración del señor Valdenebro acerca de un presunto "pacto verbal" en cuanto a la repartición de utilidades, no logra llevar a este cuerpo colegiado a esa conclusión ya que, cotejada su intervención con la manifestación

---

[25] Archivo "17 de julio de 2017 Oficial Asopagos IN16044 Modelo de Negocio Servicios Legales (…) formato excel de "06MMfl528_SoportesContablesLegal", de carpeta "C01Princpal_Cerrado".
[26] Minuto 23:40, audiencia de 22 de julio de 2021 Archivo "GrabaciónAudieica22-07-2021_2aParte.url" de "11Audiencia_22-07-2021" de Carpeta "C03Cont.Principal_Abierto".
[27] Minuto 1:48:00, audiencia de 22 de julio de 2021 *ibídem*.
[28] Minuto 1:49:02, *ib*.

contraria de su opositor, sumado a lo consignado en la documental traída como prueba, no resta más que entender que su afirmación carece de fuerza demostrativa frente a los otros elementos de prueba que sugirieron lo contrario.

Visto así, resulta innecesario entrar a analizar si el resto de elementos esenciales del Contrato de Colaboración Empresarial se encontraban configurados pues con la ausencia de uno solo, llevaba al declive de la pretensión.

Con lo dicho hasta este momento, para significar que resultaba improcedente declarar la existencia de un contrato de colaboración por las razones que aquí se exponen y, por consiguiente, se torna inviable entrar a verificar los presupuestos de la responsabilidad civil contractual pues al fundarse la acción en un presunto incumplimiento de un contrato, resulta imperativo para el juzgador determinar previamente los elementos característicos a ese negocio jurídico que se alega como deshonrado.

Superado lo anterior, se pasa entonces a revisar si las pretensiones subsidiarias estaban llamadas al fracaso como lo concluyó la juzgadora de primer grado o, si por el contario, tenían virtualidad de prosperidad.

Sobre la materia, esto es, una etapa precontractual que, según la demandante, adoleció de la buena fe de su contraparte, la Sala observa desde ya que la *a quo* se equivocó al señalar que los mismos argumentos que sirvieron para despachar de forma desfavorable las pretensiones principales, devenían para el infortunio de las secundarias, porque precisamente los perjuicios reclamados se invocaron por un actuar que la demandante reprochó de su contendora.

La jurisprudencia y la doctrina han sentado al unísono que todo daño generado durante una fase de actos preparatorios, o etapa precontractual dada con el ánimo de llegar a un determinado acuerdo, debe repararse de forma integral ante el rompimiento repentino de las tratativas negociales.

Así, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria civil, dejó visto que:

> "todo daño generado durante las conversaciones planteadas en procura de un negocio determinado, cuya génesis, eventualmente, derive del rompimiento abrupto y sin causa justificativa de las mismas ó de la comisión de actos exentos de buena fe, debe ser reparado y de manera integral (Art. 16 Ley 446 de 1998). Tal acción reparadora comprenderá, por supuesto, los conceptos tradicionales que estructuran la indemnización de perjuicios, por ejemplo y según el caso, el daño emergente, el lucro cesante, la posible afectación moral etc., en el entendido, eso sí, que dicho resarcimiento no puede pretenderse bajo características idénticas a las que originarían la indemnización por el no cumplimiento de la prestación pretendida si el contrato promovido hubiese llegado a feliz término, habida cuenta que no es el interés positivo el que debe repararse sino el negativo o de confianza, en los precisos términos concebidos por la Corte. En este propósito, la indemnización pretendida tiende, esencialmente, a volver las cosas al momento en que se encontraban cuando la víctima decidió emprender las conversaciones truncadas y colocarlo en condiciones tales como si nunca hubiese acometido las mismas (*id quod contractum initum non fuiste*), amén de repararle las probables pérdidas o daños colaterales" [29].

Y el mismo Código de Comercio, en su canon 863, regula la actividad en la etapa preparatoria, al señalar que "[l]as partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen".

En línea con lo expuesto, dígase entonces que para estar ante una responsabilidad civil precontractual, deben acaecer, de forma concurrente, los presupuestos propios de la responsabilidad civil en general, como son: i) un hecho contrario a derecho, que en este campo es la transgresión del deber de buena fe, ii) la imputación que se le atribuye a uno de los participantes en los tratos preliminares, iii) el daño que se le causa al perjudicado y iv) el nexo causal, entre el perjuicio y el hecho dañoso[30].

Pues bien, de cara a los elementos que vienen de identificarse, lo primero a determinar en el caso bajo estudio, es si la conducta

---

[29] Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC10103-2014, de 5 de agosto de 2014. Rad. 11001 3103 036 2004 00037 01. MP Margarita Cabello Blanco.
[30] ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Teoría General del Negocio Mercantil. Decimotercera edición 2012. Editorial Legis Editores S.A., pág. 137.

desplegada por la demandada Asopagos debe ser calificada como de mala fe.

Sobre el tópico, advierte la Sala que el actuar antijurídico endilgado a la pasiva no se denotó toda vez que desde los inicios de las tratativas las partes revelaron su compromiso y una seriedad tal que las llevó a interactuar activamente e intentar plasmar por escrito bajo qué naturaleza de contrato podían llegar a prestar un servicio de asistencia legal.

Así, aunque la apelante refute que su contendora le permitió realizar "cuantiosas inversiones en el negocio acordado", esto en nada se traduce en una contravención al deber de probidad y lealtad que rige para los negociantes pues ciertamente desde el inicio de los diálogos no se evidenció que existiera una propuesta sólida y de tal entidad capaz de obligar a las partes para una determinada ejecución, pues aunque desde el comienzo de las tratativas se exhibió una seria intención de prestar un servicio de asistencia básica para usuarios o afiliados de la UGPP, lo cierto es que los términos del eventual contrato a celebrar no fueron concretos ni definitivos pues, incluso, para el 17 de abril del año 2017, al suscribir el "Acuerdo de Confidencialidad", los intervinientes de este reconocieron que aún estaban en las tratativas y conversaciones de estudio de la "posibilidad de implementar un servicio", y expusieron su deseo de "ejecutar un piloto" precisamente para analizar la viabilidad del mismo.

Esto, conlleva a concluir, sin mayores elucubraciones, que cuando abrieron paso a sus actos preparatorios, para ambos empresarios era incierto no solo el éxito del negocio explorado, sino el mismo perfeccionamiento de un contrato dado el intercambio continuo de diversas versiones de un eventual y futuro pacto contractual, por ello, no queda más remedio que entender que la actora asumió por cuenta y riesgo propio la inversión a la que alude.

Ahora, el pretender trasladar a su opositora un presunto acto de mala fe con declaraciones testimoniales de empleados de Asopagos donde exteriorizaban su "percepción" de un negocio "inviable" y "exagerado", a modo de ejemplo, la intervención de Diana Plata, quien, al pronunciase sobre la "tasa de retorno" planteada en el modelo

de negocio, cuando se le indagó del porqué consideraba que era alto, refirió:

> "[L]os negocios de Asopagos normalmente no tienen una rentabilidad de 400%, de hecho la tasa de descuento que se definió por parte de la subgerencia de administrativa y financiera de Asopagos para los modelos de negocios es 14% (…) aquí es mayor, pero es exageradamente mayor, por eso infiero que era demasiado alta (…)"[31].

Y a su turno, Wilson Ordóñez relató que desde su perspectiva:

> "La inviabilidad del negocio, si no mal recuerdo también dije que partir de mitad de año se estaba viendo que no generaba las expectativas esperadas con los clientes a los que se les estaba ofreciendo el producto (…)[32].

Lo cierto es que el mismo representante legal de la sociedad demandante expuso en el interrogatorio de parte que contaba con una "certeza de la capacidad técnica para ese montaje por las experiencias de Diego Conde, en su trabajo anterior, y la capacidad gerencial de mi empresa la cual tiene 35 años de constituida y ha sido reconocida nacional e internacionalmente por sus resultados (…) conjugando la capacidad personal gerencial mía con la experiencia técnica y comercial de Diego, a Asopagos le pareció que estábamos en la capacidad de hacerlo" [33].

Así que, si en cuenta se tiene, la exigencia también de un actuar por parte de la sociedad apelante con la "diligencia y cuidado de un buen hombre de negocios", en cuyo escenario la misma actora resaltó su alta experiencia en el campo negocial, no le era dable aseverar que su opositor incurrió en una conducta reprochable y que la misma la inadvirtió pese a que desde su escrito primigenio de demanda acusó de conocer un fracaso de un plan piloto y que aun así continuaron con las tratativas para llegar a la celebración de un contrato de colaboración empresarial.

---

[31] Minuto 1:51:34, audiencia de 19 de enero de 2022.
[32] Minuto 1:42:12, audiencia de 27 de octubre de 2021.
[33] Minutos 14:32 a 15:64, audiencia de 22 de julio de 2021 Archivo "GrabaciónAudieica22-07-2021_2aParte.url" de "11Audiencia_22-07-2021" de Carpeta "C03Cont.Principal_Abierto".

Luego, sus reparos frente a la conducta de su contraparte, no cuentan con el peso suficiente para llegar a concluir que la demandada faltó a su deber de honrar con seriedad la etapa precontractual, más si se tiene en cuenta que la recurrente reconoció haber recibido pagos y reembolsos "como parte de los costos compartidos del proyecto".

Así las cosas, tampoco era procedente entrar a declarar la mala fe en una fase preparatoria, pues la actora no logró probarla con el fin de acceder a su pretensión indemnizatoria por los presuntos perjuicios ocasionados.

Con todo, aunque la censora también alegó que la juzgadora de primer grado "dejó de analizar los incumplimientos de Asopagos a la prueba piloto", resta concluir que desde los orígenes de esta causa tal estudio se tornaba innecesario, porque la actora en ningún momento peticionó declarar la existencia de ese presunto acuerdo, amén de que si no se dieron los presupuestos de la oferta y aceptación y mucho menos de un contrato consolidado, resultaba innocuo entrar a verificar la aludida infracción.

Puestas así las cosas y en congruencia con los argumentos expuestos, la sentencia de primera instancia se confirmará, con la consecuente condena en costas a la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Séptima Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. Confirmar la sentencia de 30 de junio de 2022 proferida por el Juzgado 27 Civil del Circuito de esta ciudad, conforme a lo dicho.

Segundo. Costas en esta instancia a cargo de Legal Safe S.A.S., en favor de la demandada Asopagos S.A., (artículo 365 del CGP). Liquídense por el *a quo* conforme al artículo 366, *ídem*.

El Magistrado ponente fija como agencias en derecho la suma de 6 smlmv.

Tercero. Por secretaría, devuélvanse las diligencias a la oficina de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Manuel Alfonso Zamudio Mora
Magistrado
Sala 005 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **292459aab1cbf4916d2fc08d7e974e51fdc001643db2c861167066f4dddbefa3**
Documento generado en 24/07/2023 10:06:39 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

MAGISTRADO:
LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ

Bogotá D.C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Néstor Hugo Saénz Caballero contra el proveído emitido el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esta ciudad, repartido el diecinueve de mayo de la anualidad que transcurre.

ANTECEDENTES

1. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés el representante judicial de la convocada reclamó que se diera aplicación al literal b del numeral 2 del artículo 317 del Código General del Proceso toda vez que desde el once de diciembre de 2019, fecha del auto de requerimiento al demandante para que allegara el avalúo del predio, no se ha cumplido con ese mandato ni se ha impulsado el proceso, trascurriendo 3 años y un mes, petición denegada por el juzgado de ejecución al no cumplirse los presupuestos previstos para ello.

2. Contra la determinación anterior, la interesada interpuso recurso de apelación, fundado en que: *i)* no se motivó la decisión en comento y *ii)* el demandante no ha impulsado de forma efectiva y

eficiente el proceso, ya que desde la notificación de la última providencia -19 de diciembre de 2019- han pasado más de tres años sin que aporte el avalúo del inmueble.

Dicha impugnación fue concedida, la que se pasa a resolver conforme a las siguientes,

CONSIDERACIONES

3. En la legislación patria se estableció la figura del desistimiento tácito de la demanda, del llamamiento en garantía, del incidente o de cualquiera otra actuación, cuya declaratoria trae como consecuencia la terminación del proceso o de la respectiva actuación, como sanción para el sujeto que lo promovió, por el incumplimiento de sus cargas procesales dentro del tiempo previsto en la ley.

4. El literal b del numeral 2° del artículo 317 del Código General del Proceso, destaca que la paralización de un proceso por un lapso superior a dos años para actuaciones que cuentan con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante con la ejecución, permite declarar la terminación por desistimiento tácito, parámetro en virtud del cual, de una lectura aislada, podría concluirse que la directriz trazada por el legislador para finiquitar el proceso es de estricto talante objetivo, en virtud de la cual bastaría la parálisis del juicio durante dos años con posterioridad a la última actuación para darle fin al mismo, conclusión que, en cierta medida, guarda concordancia con lo que pareciera ser la finalidad de la codificación adjetiva, esto es, castigar de forma categórica las eventualidades que dan origen a la detención de un trámite determinado, interpretación que, no

obstante, atiende solamente el tenor literal, por demás restringido, de la norma.

En efecto, no puede dejarse de lado que la sanción prevista en la norma procesal cumple, claramente, una finalidad de castigo a quien, de forma desidiosa, permite el anquilosamiento de la actuación, afectando la correcta administración de justicia, cuadro frente al que el ordenamiento jurídico responde con la finalización de esa gestión, supuesto que, anticipadamente, se advierte no se pinceló en el sub judice si se tiene en cuenta que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno se profirió auto en el que se ordenó el diligenciamiento y remisión del "formato de solicitud del certificado catastral del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1128407", en vista de lo pedido por la demandante desde el veinte de mayo de esa anualidad, el que se notificó por estado el veintiséis ese mes y año. De lo anterior se desgaja que el juicio bajo análisis no ha completado los dos años de parálisis.

Tampoco puede aceptarse que el proceso no hubiere sido impulsado de forma efectiva por la convocada, dado que el veinte de mayo de dos mil veintiuno solicitó al a quo que permitiera acceder al avalúo catastral del predio a rematar, lo que fue aceptado en la decisión anotada.

5. Así las cosas, al no acreditarse los presupuestos señalados en el literal b del numeral 2 del artículo 317 de la codificación procesal por no haberse superado el lapso de dos años de inactividad se confirmará la decisión cuestionada.

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia anotadas. No obstante, se exhorta a la señora jueza de instancia que agote el trámite necesario para de resolver la disputa respecto de las mejoras alegadas por los demandados.

SEGUNDO.- Devuélvase la actuación al despacho de origen.

Notifíquese.

LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ

Magistrado

Firmado Por:
Luis Roberto Suarez Gonzalez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4d2473a79f19aee9d86b4fa74e7998765fc9f3e2199429c3a0e3d084c93e29dc**
Documento generado en 24/07/2023 08:31:23 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D. C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés

Magistrado Ponente: **Germán Valenzuela Valbuena**

Radicado: 1100 1310 3028 2018 00630 01 - Procedencia: Juzgado 28 Civil del Circuito.
Proceso: Verbal, Jackeline Barreto Quemba ***vs***. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
Asunto: Apelación Sentencia
Aprobación: Sala virtual (05/07/2023). Sala 23.
Decisión: **Confirma.**

Se resuelve el recurso de apelación[1] interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 18 de abril de 2023.

ANTECEDENTES

1. Jackeline Barreto Quemba demandó a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. con el propósito de que se ordenara a ésta última el pago del seguro de vida colectivo hipotecario N.° 02 105 0000001400 en cuanto al amparo del riesgo de muerte, el cual fue tomado por su madre Ana Olivia Quemba de Barreto en virtud del crédito hipotecario 9600233310 que ella adquirió, y en consecuencia, que se condenara a dicha aseguradora a pagar al beneficiario Banco BBVA Colombia S.A. el saldo de la deuda registrada con anterioridad a la fecha del fallecimiento de la deudora[2].

[1] Art. 12, Ley 2213/22
[2] Demanda reformada que se admitió mediante auto de 24 de agosto de 2021.

2. Las pretensiones así resumidas se sustentaron en los siguientes hechos:

a. Que Ana Olivia Quemba de Barreto adquirió el referido crédito para la compra del inmueble ubicado en la calle 146F N.° 73A – 20 interior 7 apartamento 603, y como requisito para tal convenio presentó 'solicitud/certificado individual seguro de vida grupo deudores', generándose la póliza N.° VGDB-0110043 en la cual ella fungía como asegurada.

b. Que el 22 de noviembre de 2016 falleció la deudora *"y la causa obedeció a un suicidio"*, por lo que el 12 de abril de 2017 se radicó reclamación por el siniestro junto con los documentos pertinentes (formato de presentación de indemnizaciones, registro civil de defunción e historia clínica expedida por la Nueva EPS).

c. Que posteriormente, el 21 de abril de 2017, recibió comunicación de la sociedad demandada con objeción íntegra a lo reclamado bajo el argumento de que en la declaración de asegurabilidad se omitieron patologías relevantes, desconociéndose con ello la jurisprudencia.

d. Que el 26 de julio de 2017 pidió que se reconsiderara la objeción, y en respuesta de agosto de ese año la convocada ratificó su posición y declinó el pago del seguro.

e. Que solicitó a la aseguradora la remisión de la póliza firmada a fin de verificar los eventos reportados por la tomadora, y luego de peticiones radicadas, y hasta de una acción de tutela que se promovió, la aseguradora le remitió documentos con problemas de nitidez e ilegibilidad en punto al formulario de solicitud del seguro.

3. Enterada de la reforma de la demanda, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. se pronunció frente a los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó: *"nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado"*, *"inexistencia de obligación a cargo de la aseguradora de practicar y/o exigir exámenes médicos en la etapa precontractual"*, *"la acreditación de mala fe no es un requisito de prueba para quien alega la reticencia del contrato de seguro"*, *"BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. tiene facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato de seguro"*, *"operó el desistimiento tácito en término del artículo 137 del Código General del Proceso"*. Y como excepciones de mérito subsidiarias, planteó: *"en cualquier caso, de ninguna forma se podrá exceder el máximo del valor asegurado"*, y *"en cualquier caso, la obligación de la compañía no puede exceder los saldos insolutos de la obligación"*. Además, objetó el juramento estimatorio y señaló que la demandante no tiene legitimación en la causa.

En síntesis, alegó: que la señora Quemba de Barreto fue reticente al momento del perfeccionamiento del contrato de seguro, pues no declaró sinceramente su estado de riesgo, no informó de sus padecimientos de salud (concretamente, hipotiroidismo e hipertensión) e inclusive respondió negativamente a las preguntas que se le formularon en la declaración de asegurabilidad respecto de enfermedades de esa estirpe (tensión arterial y sistema endocrino), pese a que tenía conocimiento de ellas según se ve en la historia clínica; que de haberse conocido aquellas, se hubiere retraído de la celebración del contrato o se habría pactado en condiciones más onerosas, teniendo en cuenta "la envergadura y gravedad" de las mismas y los riesgos que éstas traen según la literatura médica que citó; que, para que opere la nulidad pretendida, no es necesario que los riesgos o enfermedades sean la causa de la muerte, y

tampoco se requiere que se acredite la existencia de mala fe por parte del declarante y asegurado; que solo es suficiente con probar *"que el consentimiento estuvo viciado como consecuencia del error en el riesgo que se creyó estar asegurando"*, y por tanto, demostrar que no se declararon hechos que determinan el estado del riesgo y su incidencia; que no tenía la carga de practicar o exigir exámenes médicos con anterioridad a la celebración del convenio, máxime que el deber de información precontractual corresponde al tomador; y que su postura y objeción al pago no está en contravía de la jurisprudencia.

LA SENTENCIA APELADA

Tras descartar la aducida falta de legitimación en la causa de la demandante y la excepción referida a que había operado el desistimiento tácito, el a-quo señaló que si bien se acreditó la reticencia pues la señora Ana Quemba conocía de la tensión alta y del hipotiroidismo y no lo expresó en el cuestionamiento que se le formuló, según la jurisprudencia no toda inexactitud o reticencia genera la nulidad del contrato.

Indicó que tanto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema (SC3791 de 2021 y STC5353) y la Corte Constitucional (T-282 de 2016 y T-027 de 2019) establecen que debe probarse la mala fe y el nexo de causalidad entre el siniestro y lo omitido o inexacto, y que, por tanto, la reticencia en que pudo incurrir la señora Quemba, al haber ocultado que padecía de tales enfermedades, no es suficiente para aniquilar el contrato con decreto de nulidad, en tanto que la aseguradora no demostró la existencia de ese nexo causal, siendo éste un elemento esencial. Acotó, en ese orden, que vista la documental, se ordenó el archivo de la investigación llevada a cabo en la Fiscalía, tras establecerse que el deceso fue producto de un

suicidio, lo que resulta extraño a la reticencia, y sobre lo cual no se demostró lo contrario.

Así, concluyó que las excepciones formuladas no estaban llamadas a prosperar, y que se debían acoger las pretensiones por tener el amparo básico de la póliza el cubrimiento por muerte del deudor, incluso en caso de suicidio.

LA APELACIÓN

1. La parte demandada sostiene que el a-quo desconoció los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en materia de nulidad relativa del contrato de seguro, concretamente en lo que atañe a la acreditación de la mala fe del asegurado y la relación entre la reticencia e inexactitud y la causa del siniestro.

Aduce que no es presupuesto acreditar tales elementos, y por ende, que resultaba suficiente para que se configurara la sanción de nulidad relativa, probar, como lo hizo, que la asegurada incurrió en una omisión en la información de las circunstancias del estado del riesgo y que, de conocer tal situación, hubiera llevado a la compañía a retraer la celebración del mismo o a pactar condiciones más onerosas. Que también se desconoce lo sentado por este Tribunal al respecto, específicamente en sentencia de 27 de marzo de 2023 en el radicado 2021-4123-01. Que la buena fe es exigible en la etapa precontractual y no cuando la aseguradora pretende demostrar la reticencia, por lo que no tiene el deber de cuestionar esa buena fe. Que en el caso *"sí es posible establecer la existencia de un comportamiento culposo de la asegurada al omitir informar enfermedades"*, máxime lo que respondió la demandante en el interrogatorio. Que, por tanto, es posible equiparar la actuación de

Quemba de Barreto como una mala fe al haber omitido sin justificación razonable informar de los padecimientos que claramente conocía. Que la causa de fallecimiento y su relación con la reticencia e inexactitud no es relevante. Y que en el caso es evidente que la señora Quemba negó y no declaró la existencia de antecedentes.

Además, señala que, en su interrogatorio, el representante legal de la entidad manifestó que, de haberse conocido los padecimientos de la asegurada, *"la Compañía no hubiese otorgado el amparo de forma automática"*, y que en la sentencia de primer grado el Juzgado aceptó la reticencia, pero erró en la aplicación de los referidos presupuestos.

2. El extremo demandante ejerció su derecho a la réplica, expresando las razones por las cuales, en su sentir, no hay lugar a acceder a los reproches de la apelación.

CONSIDERACIONES

1. De manera inicial debe ponerse de presente que si bien uno de los reparos que se manifestó en la audiencia en que se dictó el fallo se circunscribió a la aducida falta de legitimación de la demandante, el fundamento de ese aspecto concreto no fue objeto de sustentación en esta instancia, lo que impide que la Sala se pronuncie sobre el mismo.

Es de ver, en torno a ello, que al momento de proferir sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 328 Cgp, la competencia del Tribunal se limita de manera exclusiva a los reparos que fueron sustentados en el curso del presente grado jurisdiccional, de ahí que no pueda ser materia de decisión lo que ante el ad-quem no tuvo el respectivo desarrolló argumental por parte del extremo apelante.

2. Precisado lo anterior se tiene que, a juicio de la recurrente, (i) el a-quo desconoció precedente jurisprudencial sobre la nulidad relativa por reticencia, en punto a que la demostración de mala fe del asegurado y la relación entre la causa del siniestro y lo no declarado no son presupuestos para que opere tal forma de ineficacia; (ii) sí procedía la nulidad del contrato en que se aseguró a Ana Olivia Quemba de Barreto, pues acreditó los elementos requeridos para tal fin, esto es: omisión de la asegurada en informar sobre sus patologías y que el conocimiento de esa circunstancia hubiera hecho que no celebrara el acuerdo o que lo hiciera bajo condiciones más onerosas, y (iii) no haber informado sus enfermedades constituye un actuar de mala fe de la citada persona.

3. Dispuestas de este modo las cosas, y entrando de lleno al análisis de la alzada, el primer razonamiento de la aseguradora demandada parte de la base de que en la sentencia apelada se desconoció el precedente sobre los presupuestos para que pueda salir avante la pretendida nulidad por reticencia.

Al respecto, debe decirse que el fenómeno en mención no ha sido una materia pacífica en el escenario judicial; empero, no podría afirmarse que el juez de primer grado adoptó una postura contraria al estado actual de la jurisprudencia.

Nótese que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han decantado que, para que se configure la reticencia que conlleva la anulación relativa del contrato de seguro, debe demostrarse: la existencia de mala fe por parte del asegurado en cuanto al incumplimiento de su deber precontractual de información, que lo no declarado o lo inexactamente declarado habría incidido en la celebración del convenio,

y además, la relación de causalidad entre las circunstancias y padecimientos que se aduce no fueron informadas y el siniestro acaecido (fallecimiento en este caso).

3.1. La primera de las citadas Corporaciones ha sentado:

a). En Sentencia T-501 de 2016: *"la relación contractual no podrá ser declarada nula por la sola omisión en el suministro de cualquier información, pues lo que se exige es que la inexactitud en la declaratoria se origine en un actuar contrario a los postulados de la buena fe, que tenga la entidad de retraer el negocio celebrado o que, de ser conocida por el asegurador, hubiese llevado a estipular condiciones más onerosas"*.

b). En Sentencia T-282 de 2016:

"Es por esto que, en caso de que la aseguradora alegue la existencia de la figura de la "reticencia", deberá demostrar el nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la condición médica que dio origen al siniestro, de forma clara y razonada, y con fundamento en las pruebas aportadas en el expediente. De esta manera, la aseguradora es la parte contractual que tiene la carga de probar dicho elemento objetivo para efectos de exonerarse de su responsabilidad en el pago de la indemnización.

El hecho de que la carga de la prueba de la relación de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro recaiga en la aseguradora previene que los usuarios reciban objeciones por razón de preexistencias que en nada inciden con la ocurrencia del siniestro. Esta medida tiene como propósito evitar que las aseguradoras adopten una posición ventajosa y potencialmente atentatoria de los derechos fundamentales de los tomadores, los cuales se encuentran en una especial situación de indefensión en virtud de la suscripción de contratos de adhesión.

23. Ahora bien, la Sala resalta que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la aseguradora que alega reticencia, además de probar este elemento objetivo: a saber, el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro, tiene la obligación de probar el elemento subjetivo, esto es, la mala fe del tomador. En consecuencia, la aseguradora tiene una doble carga: i) por un lado, probar que existe una relación inescindible entre la condición médica preexistente y el siniestro acaecido, y ii) por otro, demostrar que el tomador actuó de mala fe, y que voluntariamente omitió la comunicación de dicha condición".

c). En Sentencia T-591 de 2017: *"En resumen, (i) el adquirente debe informar los hechos o circunstancias de los que tenga conocimiento al momento de celebrar el contrato, como enfermedades o síntomas de las mismas, de acuerdo con*

un cuestionario que realice la entidad, el cual debe ser claro y carente de ambigüedades; (ii) la aseguradora debe investigar con base en esta información el estado de salud del paciente, por ejemplo, solicitando exámenes médicos recientes a sus usuarios o consultando la historia clínica; (iii) las preexistencias deben quedar consignadas en el contrato, so pena de ser ambigüedades o vacíos que no pueden alegarse para negar el pago de la póliza o reducir el monto de la obligación[70]; (iv) ***la reticencia se presenta cuando el adquirente ha actuado de mala fe, ocultando el estado del riesgo o ha sido negligente al manifestar las condiciones preguntadas por la aseguradora para determinar el riesgo; (v) las aseguradoras deben demostrar la mala fe por ser quienes definen la trascendencia de los hechos en la celebración o aumento de la onerosidad del mismo; (vi) de constatarse la reticencia, debe existir un nexo causal entre esta y el siniestro, evento en el cual puede haber lugar a la nulidad relativa del contrato****; (vii) las aseguradoras no pueden alegar la nulidad relativa del contrato o la disminución en el pago de la obligación cuando conocen o han debido conocer los hechos o circunstancias preexistentes o, aun así, las subsane mediante su aceptación expresa o tácita[71]. Situación que se presenta cuando no realizan las labores investigativas que les asisten".*

Y *d).* En Sentencia T-061 de 2020, en la cual se reiteró la postura adoptada en fallos anteriores (*v.gr.* T-094 de 2019): *"En ese sentido, si bien quien suscribe el contrato de seguro tiene la obligación de declarar con honestidad la totalidad de los factores que puedan afectar las condiciones en que se suscribe el contrato de seguro, lo cierto es que, como se indicó con anterioridad, la mera discrepancia entre la información contenida en las declaraciones de asegurabilidad y aquella existente en la historia clínica del asegurado no implica la configuración de la "reticencia" y, en ese sentido, corresponde a la aseguradora: (i) demostrar el elemento subjetivo de la reticencia, esto es, la voluntad dolosa del asegurado tendiente a engañar y sacar provecho de la omisión evidenciada; (ii) haber desplegado todas las actuaciones pertinentes para verificar la correspondencia entre la información brindada y el estado real del asegurado, pues las aseguradoras se encuentran vedadas de alegar reticencia si conocían o podían conocer los hechos que la constituyeron; esto es, si se abstuvieron de verificar la información, habiendo podido hacerlo, mal haría el juez en validar su negligencia; y (iii) demostrar un nexo*

de causalidad entre la preexistencia evidenciada y la condición médica que dio origen a la configuración del riesgo asegurado".

3.2. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela y en el ámbito de la especialidad civil, ha expuesto:

En sentencia de casación SC3791-2021 de 1° de septiembre de 2021, que el mismo Juez de primer grado citó en su decisión: *"Para finalizar, la respuesta al cargo por errónea interpretación del 1058 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta que ésta Corte, con relación a la reticencia, ha venido haciendo una lectura del precepto siguiendo los principios, derechos y valores constitucionales, tal cual se ha venido razonando, construyendo algunos criterios o estándares: 1. Buena fe. Mediante una doctrina probable, tal cual quedó atrás trasuntada, la buena fe también cobija a la aseguradora, para hacer pesquisas al momento de la celebración del contrato sobre las condiciones de asegurabilidad del tomador. La buena fe se presume y la ubérrima bonna fides, se aplica por igual para los contratantes, y así por ejemplo, en la declaración de voluntad, como la del riesgo, se hallan arropadas por la presunción de validez, de modo que quien alega el motivo de ineficacia, debe proporcionar los elementos de convicción para demostrar el vicio, porque antes del decreto se reputa válida. 2. La mala fe debe probarse. Lo anterior conduce a establecer, que compete a la aseguradora, probar la mala fe por parte del tomador o del asegurado, para inferir si procedía retraerse del contrato o modificar las condiciones económicas del mismo. 3. La necesidad de probar el nexo de causalidad o el efecto trascendente entre la declaración de voluntad reticente o inexacta en el riesgo o en el siniestro; siendo necesario demostrar esa relación consecuencial de causa a efecto, o de concordancia entre lo inexacto u omitido y el siniestro. Es decir, se debe establecer cuál fue la trascendencia de la preexistencia y la situación médica que genera el siniestro. 4. El deber y la posibilidad de practicar exámenes médicos, cuando se trata del seguro de vida, por discurrir con un aspecto crucial y un derecho fundamental del tomador-beneficiario de la prestación aseguraticia"*.

ii. En fallo STC12251-2021 de 16 de septiembre de 2021:

"Igualmente, en cuanto al medular aspecto aquí destacado, en reciente pronunciamiento, aunque para denegar la protección allí reclamada por la entidad aseguradora frente a la sentencia que le impuso el reconocimiento del siniestro, pero con argumentos que *mutatis mutandis* resultan aplicables al caso de ahora, dejó dicho esta Sala:

> …***al estar en debate el punto concerniente a la falta validez del contrato por reticencia, indudable es, el juzgado debía resolver ese específico punto bajo los presupuestos normativos y jurisprudenciales que rigen el tema, con el fin de entrar a determinar la procedencia o no de la excepción de fondo impetrada por el tutelante, pues el nexo causal entre la enfermedad preexistente y el siniestro, es requisito inobjetable para corroborar la nulidad relativa del contrato de seguros***…".

Y *iii.* En fallo de tutela STL10871-2021 de 4 de agosto de 2021:

> "Conforme lo anterior, al analizar el contenido de la sentencia en cuestión, a juicio de la Sala, el Colegiado de instancia accionado se equivocó al afirmar que la *reticencia* opera (i) de forma automática cuando el tomador falta a la verdad en su declaración de asegurabilidad, (ii) con independencia de la causa que haya motivado el deceso y (iii) sin que el asegurador deba probar que la omisión en la información fue intencional o de mala fe, toda vez que tales argumentos desconocen el precedente judicial que la homóloga Sala de Casación Civil ha dispuesto sobre el particular.
>
> En efecto, nótese que en las sentencias CSJ SC 18 oct.1995, Exp. 4640, CSJ SC 19 may. 1999 Exp.4923, CSJ SC 02 ago. 2001, Exp. 6146, CSJ SC 26 abr. 2007, Exp. 4528 y CSJ SC5327-2018 la Sala homóloga Civil precisó que cuando se alega la figura de la *reticencia* en la declaración del estado del riesgo debe demostrarse que (i) los datos que se omitieron son trascendentes para la calificación del riesgo y (ii) la aseguradora cumplió con su obligación de confirmar la información aportada en la declaración de asegurabilidad".

Así las cosas, el estado actual de la jurisprudencia en punto a los requisitos para la prosperidad de la nulidad relativa por reticencia de un contrato de seguro, de modo reiterado y uniforme reclama la acreditación de la mala fe y el nexo causal, de donde no podría atribuirse al Juzgado 28 Civil del Circuito un yerro en las conclusiones a las que arribó y el soporte de las mismas, máxime que ese despacho halló respaldo en algunas de las providencias a las que atrás se hizo referencia que de suyo constituyen precedente que no ha sido modificado.

Cabe acotar que las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que se invocaron en el recurso de apelación, son anteriores, cronológicamente hablando –valga precisarlo-, a los fallos en los que el a-quo basó su decisión y a los que se dejaron citados en este acápite, y además, el extremo recurrente no acreditó que en la actualidad rija otro entendimiento del problema en debate.

4. A partir de lo que viene discurrido, es claro que la demandada no solo debía probar los elementos que refirió en sus escritos de contestación y apelación (una omisión en la información declarada por la asegurada y la incidencia de ese aspecto en la contratación del convenio), sino también la mala fe de la señora Quemba al momento de suscribir la declaración de asegurabilidad, y la relación entre el fallecimiento de ella y lo no informado.[3]

En esa senda, conviene acotar que sobre este último aspecto nada se reparó o cuestionó, pues en parte alguna se controvirtió que la causa de la muerte no tuvo conexidad con los padecimientos que no fueron indicados en la solicitud de aseguramiento, incumpliéndose así con uno de los presupuestos imperativos para que pudiera salir avante la nulidad por reticencia.

5. Ahora bien, aunque lo anterior podría bastar para confirmar la determinación de primer grado, de todas maneras, revisada la tesis de defensa y los argumentos en que ésta se soportó, y analizado el material probatorio recaudado en el curso del proceso, la Sala no encuentra

[3] Quedó acreditado sin objeción al respecto, que la causa del fallecimiento de la asegurada fue "suicidio". Y en el clausulado del seguro se lee: "PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO. AMPARO BÁSICO. BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., EN ADELANTE DENOMINADA "LA COMPAÑÍA", CUBRE A LOS MIEMBROS DEL GRUPO ASEGURADO CONTRA EL RIESGO DE MUERTE POR CUALQUIER CAUSA, INCLUYENDO EL SUICIDIO, HASTA POR LA SUMA ASEGURADA CONTRATADA PARA ESTE AMPARO". Y a renglón seguido se advierte: "EL AMPARO BÁSICO NO CONTEMPLA EXCLUSIONES". (Anexo 14).

probado el segundo de los aspectos que, según la recurrente, tenía la carga de probar para que su excepción de nulidad prosperara y que, a su juicio, sí acreditó, esto es: que de haberse conocido los padecimientos no declarados e informados por la señora Ana Olivia Quemba de Barreto en su solicitud de seguro o declaración de asegurabilidad de enero de 2016 (hipertensión e hipotiroidismo), no se habría celebrado el contrato de seguro o se habría suscrito pero bajo condiciones más onerosas para la asegurada.

Sobre el punto, en la ya citada sentencia SC3791-2021, se señaló con suficiencia el alcance del deber probatorio de la aseguradora. En tal providencia se dijo:

> "Por eso se ha sostenido que la entidad aseguradora es la única que puede saber con certeza «*(i) que por esos hechos el contrato se haría más oneroso y (ii) que se abstendrá de celebrar el contrato*»[4]. Así que ajustado el seguro se presume su validez. Y quien pretenda probar en contrario le corresponde arrimar la prueba respectiva. Si es la aseguradora, acreditar la reticencia o inexactitud, y la incidencia del hecho en la emisión del consentimiento.
>
> (…)
>
> De nada sirve afirmar y demostrar la insinceridad del tomador o asegurado, si no se hace saber ni se acredita cómo esa conducta influyó en el consentimiento del asegurador. Esto, porque como se anotó, no toda reticencia o inexactitud aflora en la nulidad del seguro. Algunas, al haberlas subsanado o aceptado en forma expresa o tácita luego de celebrar la convención. Otras, por cuanto conocidas, real o presuntamente, antes de ajustar el contrato, con todo, asintió la voluntad. Y las demás, al ser intrascendentes. Estas últimas, mientras no se demuestre su incidencia, ante la falta de otra explicación posible, debe seguirse que son nimias o insignificantes**.**

En efecto, y a la luz de los anteriores presupuestos, los fundamentos con los que la parte ahora recurrente cree haber cumplido la carga de prueba

---

[4] Corte Constitucional. Sentencia T-222 de 2 de abril de 2014. En últimas, como allí se indició, la «*reticencia solo existirá siempre que la aseguradora en su deber de diligencia, no pueda conocer los hechos debatidos. Si fuera de otra manera podría, en la práctica, firmar el contrato de seguro y solo cuando el tomador o beneficiario presenten la reclamación, alegar la reticencia. En criterio de esta Sala, no es posible permitir esta interpretación pues sería aceptar prácticas, ahora sí, de mala fe*».

en relación con el mencionado aspecto, desde ninguna óptica resultan atendibles.

Es de ver que, con el propósito de probar dicha cuestión, el apoderado apelante se limitó a señalar que las mencionadas enfermedades revisten una gravedad y envergadura importante, a citar la que denominó 'literatura médica' sobre esas enfermedades, y a indicar que en el interrogatorio practicado el representante de esa sociedad refirió que de haberlas conocido no se habría otorgado el amparo de forma automática, dejando de lado la aportación de un elemento que en verdad hubiera permitido al juzgador tener la certeza necesaria y suficiente sobre los efectos que la referida omisión podría haber tenido en la celebración del convenio de marras, especialmente en cuanto al amparo por muerte.

En esa línea, se evidencia que *i.* los dichos de la contestación y lo afirmado por el representante legal de la aseguradora en su interrogatorio no pueden, por sí solos, constituir plena prueba sobre el supuesto en mención, pues debe contarse con elementos que, íntegramente, tengan la virtualidad para su acreditación, *ii.* no se cuenta con medios de convicción que permitan demostrar lo alegado, y *iii.* La 'literatura médica' citada en la contestación de la demanda en cuanto a 'los graves riesgos a la salud' que implican las referidas patologías en manera alguna podría tenerse en cuenta, comoquiera que, consultados los vínculos o links indicados en ese escrito[5], se logra advertir que estos corresponden a artículos tomados de páginas internet, en los que se exponen las causas y riesgos de las enfermedades, pero en los que no obran elementos que den cuenta de la autoría del documento, fecha de publicación, fecha de estudios, entre otras aspectos necesarios para poder ser valorados,

[5] https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/high-blood-pressure/art-20045868 y https://medlineplus.gov/spanish/hypothyroidism.html.

máxime al tratarse de conceptos científicos y especiales que escapan a la ciencia del derecho.

En lo relativo a este último punto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un caso de contornos similares[6], expuso:

> "El Tribunal, es cierto, recurrió a la "*literatura*" contenida en las páginas web. Extrajo de allí conclusiones para justificar acertado el diagnóstico de conjuntivitis y blefaritis realizado en la atención inicial y la prescripción adecuada de los fármacos. La equivocación, entonces, es palmaria. El Tribunal, en una afrenta a las reglas de contradicción y defensa, realizó juicios de valor respecto de elementos no incorporados debidamente al litigio. La decisión, además, muestra total desidia en aplicar criterios de racionalidad mínimos a la hora de evaluar el conocimiento experto. **La ausencia de un razonamiento probatorio serio atenta sensiblemente al respeto de los jueces por la ciencia. Se permite el ingreso al proceso de un conocimiento del que no se sabe su validez, su vigencia ni su aplicabilidad a los hechos del caso, adulterando las reglas que rigen las pruebas por expertos, al edificarse en informaciones de dudosa procedencia**" (subrayado y negrilla por fuera del texto original).

Además, aun pasando por alto la falta de idoneidad probatoria en este escenario judicial de dichos artículos, lo cierto es que, de todas formas, de estos tampoco podría extractarse, y ni siquiera inferirse o deducirse, qué incidencia en la contratación del seguro podría haber tenido el hecho de que Ana Olivia Quemba de Barreto sí hubiera declarado tener hipertensión e hipotiroidismo; a lo sumo con ellos se podría haber acreditado –itérase, omitiendo en gracia de discusión la falencia atrás descrita- los riesgos de los padecimientos, pero de ninguna forma probaría qué habría cambiado a la hora de suscribir el convenio.

En conclusión, más allá de la afirmación genérica en punto a aquella cuestión, no se expresó de manera categórica, ni se probó por supuesto, cuál efecto podría haber tenido esa situación en la relación contractual; en esa línea, no se refirieron ni demostraron las razones particulares del caso que habrían llevado a la no contratación, ni las hipótesis que

[6] Sentencia SC5186-2020 de 18 de diciembre de 2020.

impedían celebrar el convenio en la específica situación de la referida persona, y tampoco se indicaron ni demostraron cuáles habrían sido las condiciones más onerosas bajo las que se habría podido expedir la póliza, por ejemplo, el monto de la prima que hubiera aumentado.

Resulta imperioso acotar dos aspectos de gran relevancia que ratifican la ausencia de prueba sobre esta cuestión:

En primer lugar, en el interrogatorio de parte practicado, y tras preguntársele sobre cuál habría sido la conducta de la Compañía en el caso específico si hubiera conocido de las patologías de la asegurada, el representante legal expresó que la consecuencia negocial hubiera sido sustraerse de otorgar el amparo de incapacidad total y permanente teniendo en cuenta que *"muy seguramente se iba a configurar"* ese amparo[7], ello conforme a documento del Departamento de suscripción una vez analizados los antecedentes e historia clínica y una vez sesionado el comité interdisciplinario; pero, en parte alguna, se manifestó qué consecuencia habría tenido dicha circunstancia en lo que atañe al amparo por riesgo de muerte, ni cuáles condiciones de onerosidad habría conllevado.

Y segundo, en la contestación de la demanda se pidieron, como pruebas testimoniales, las declaraciones de César Augusto Carrascal (profesional médico adscrito a la compañía), Alexander Saavedra Vásquez (Gerente Técnico de Suscripción de Banca Seguros) y Camilo Andrés Mendoza Gaitán (Asesor Externo) para que, según su experiencia, indicaran cómo hubiera procedido la aseguradora en caso de tener pleno conocimiento del estado real de salud de la asegurada; no obstante, y pese a haber sido

[7] Minuto 0:41, archivo audiovisual de la audiencia celebrada el 17 de junio de 2022: "11001310302820180063000_R110013103028CSJVirtual_01_20220617_090000_V 06_17_2022 04_08 PM UTC".

decretadas, en la audiencia de que trata el artículo 373 Cgp, la apoderada desistió de los testimonios de Saavedra y Mendoza, y el Juzgado resolvió prescindir del testimonio de Carrascal[8].

6. Por último, en la apelación se sostuvo que existió mala fe por parte de Ana Olivia Quimba de Barreto al no haber declarado de forma sincera y real su estado de salud.

Sin embargo, para la Sala no es necesario ahondar en ese aspecto ni en el debate en torno a si la mera omisión de información comporta *per se* la incursión en un acto contrario a la buena fe en la etapa precontractual, habida cuenta que en el proceso no se demostró el nexo causal entre lo no declarado y la causa de fallecimiento de la asegurada, siendo éste –como atrás se dejó expuesto- un requisito cuando se alega la nulidad del seguro por reticencia, y en todo caso, tampoco se acreditaron los elementos que la misma aseguradora aceptó que sí debía probar, esto es, la incidencia de la omisión en la contratación del seguro.

7. Como los argumentos de la alzada no lograron desvirtuar los fundamentos de la sentencia apelada, se impone su confirmación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada, proferida el 18 de abril de 2023 por el Juzgado 28 Civil del Circuito.

---

[8] Decisión ratificada en sede de reposición, minuto 21:24 archivo audiencia de 18 de abril de 2023: "11001310302820180063000_R110013103028CSJVirtual_01_20230418_090000_V 04_18_2023 02_55 PM UTC".

Costas a cargo del apelante. El magistrado sustanciador fija como agencias en derecho de segunda instancia la suma de $1.000.000. Liquídense (art. 366 Cgp).

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

Los Magistrados,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

<con salvamento de voto>

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA **JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**

Radicado: 1100 1310 3028 2018 00630 01

Firmado Por:

German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,
Firma Con Salvamento De Voto

Juan Pablo Suarez Orozco
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **814a3e4b18e323847f76d15769c8f04d697c9a195725ba2651193bb79137ecf1**

Documento generado en 24/07/2023 11:05:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Bogotá, D. C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés

11001 3103 028 2018 00630 01

Ref. proceso verbal de Jackeline Barreto Quemba vs. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente salvo voto en el proceso de la referencia, por cuanto considero que se imponía revocar el fallo apelado y en su lugar acoger las defensas que esgrimió la aseguradora demandada, con soporte en el artículo 1058 del Código de Comercio.

1. Como argumentos medulares de la sentencia de segunda instancia, y previa invocación de varios precedentes judiciales (sentencia de casación SC3791-2021 de 1° de septiembre de 2021, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona y sentencias de tutela T-501 de 2016, T-282 de 2016, T-591 de 2017 y T-061 de 2020 de la Corte Constitucional), en la providencia de la que hoy me separo se adujo lo siguiente:

a) Que "es claro que la demandada no solo debía probar los elementos que refirió en sus escritos de contestación y apelación (una omisión en la información declarada por la asegurada y la incidencia de ese aspecto en la contratación del convenio), sino también la mala fe de la señora Quemba al momento de suscribir la declaración de asegurabilidad, y la relación entre el fallecimiento de ella y lo no informado".

En el criterio de la mayoría de la Sala, la rescisión por reticencia estaba supeditada a que se hubiera demostrado, y no fue así, que la causa del fallecimiento de la señora Ana Olivia Quemba de Barreto (suicidio) tuviera relación con las preexistencias que omitió informar en su solicitud de seguro o declaración de asegurabilidad de enero de 2016 (hipotiroidismo e hipertensión).

Desde mi percepción, esa exigencia no era predicable, por cuanto de las historias clínicas recaudadas, es ostensible que la señora Quemba de Barreto (tomadora del contrato de seguro), tenía conocimiento certero de las

patologías a las que omitió hacer relación en la declaración de asegurabilidad y pese a ello optó por no informar tempestivamente sobre esas circunstancias (hipotiroidismo e hipertensión).

En ese escenario, se hace palpable la discrepancia entre las patologías que padeció y conocía la tomadora (hipotiroidismo e hipertensión) y lo que consignó en la declaración de asegurabilidad. No se trata de un simple *lapsus* u olvido circunstancial o irrelevante de información, sino algo muy distinto: el ocultamiento de unas patologías de cuya existencia ella conocía años atrás, según se anotó con antelación.

b) Aduce la Sala mayoritaria que tampoco hay lugar a acoger la excepción de nulidad relativa del contrato de seguro porque no existe nexo de causalidad entre el siniestro que provocó la muerte de la asegurada (suicidio) y las patologías cuya información se obvió en la declaración del estado del riesgo (hipotiroidismo e hipertensión), criterio por el que ciertamente optó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC3791-2021 de 1° de septiembre de 2021, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

Sin embargo, el suscrito Magistrado se acoge a la percepción que allí plasmaron los Magistrados Álvaro Fernando García Restrepo[1] y Luis Alonso Rico Puerta[2], quienes hallaron improcedente la presencia de tal circunstancia para que operen los efectos rescisorios que regula el artículo 1058 del Código de Comercio.

Como respaldo de la posición por la que hoy opta el suscrito Magistrado, hay que añadir que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha destacado que "(…) **esa reticencia acreditada en el proceso, que de otra**

---

[1] Adujo el Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo en su salvamento de voto que "En consecuencia, considero que hay nulidad relativa o anulabilidad del contrato ante la reticencia del tomador" porque al momento de suscribir el contrato cuando en la "declaración del estado de riesgo", no se informó de circunstancias importantes relacionadas con el estado de salud, o calla que se padece de patologías médicas antes conocidas, sin la condición de tener que demostrar la existencia de mala fe, demostrar que se actuó de mala fe y mucho menos la relación de causalidad entre lo callado y la existencia del nesgo, precisamente porque se vició el consentimiento desde que se celebró el contrato y no desde que ocurrió el hecho causante del daño".

[2] Sostuvo el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, al aclarar su voto, que "*Contrario sensu*, tanto en un fallo de constitucionalidad, como en la totalidad de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, se ha sostenido que la nulidad relativa derivada de la reticencia «se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tomó el seguro»".

parte no tiene porqué ser la causa del siniestro, dado que tal exigencia no la contempla ley, de conformidad con el artículo 1058 del Código de Comercio, debió conducir a que el Tribunal declarara la nulidad relativa del contrato de seguro, sobre todo porque del acervo probatorio recaudado aflora que la compañía de seguros no tenía motivo alguno que le generara desconfianza y le impusiera el deber profesional de auscultar el estado del riesgo aún más de lo que hizo, que fue examinar el estado de salud del futuro asegurado y exigir el concepto profesional del asesor y del gerente de la agencia o sucursal de la aseguradora, víctima por tanto de un engaño que le asaltó su buena fe» (CSJ SC, 11 abr. 2002, rad. 6825).

También es importante relievar que, con ponencia del suscrito Magistrado, este mismo Tribunal -acompañado por los magistrados Manuel Alfonso Zamudio Mora e Iván Darío Zuluaga Cardona-, en sentencia de 17 de agosto de 2021 (R. 11001 3103 032 2015 00397 01) avaló el criterio que se defiende en este salvamento de voto, respecto de la hermenéutica que amerita la norma que regula el artículo 1058 del Código de Comercio.

2. En esos términos dejo sentada mi disconformidad con la sentencia que hoy profiere el Tribunal.

Comedidamente,

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

Firmado Por:
Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **28a083f4f20a3ecf5eb5d613b2212e4f19513e7e5d5d167c927d518219afdf54**
Documento generado en 24/07/2023 11:08:47 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO PONENTE
ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Bogotá D.C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés
(proyecto discutido y aprobado en sala virtual ordinaria de 19 de julio de 2023)

Ref. 11001 3103 029 2018 00067 02
Proceso de entrega de la cosa del tradente al adquirente demandante **Claudia Alicia de las Mercedes Ortiz Escobar**; demandada **Concha Prieto de Caballero**.

El Tribunal decide la apelación que formuló la demandante Claudia Alicia de las Mercedes Ortiz Escobar contra el auto que el 25 de mayo de 2023 profirió el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá mediante el cual acogió la oposición que, con soporte en el artículo 309 del C. G. del P., formuló la señora **Diana Lucía Acosta Fortunatti** en la diligencia de entrega del inmueble con FMI[1] 50N-20253819, apartamento 301 del Edificio Ícaro - Calle 103 P.H. de Bogotá.

La señora Acosta Fortunatti alegó que su posesión sobre el predio se remonta al "15 de julio de 2016", esto en atención al contrato de "transacción" que en esa fecha habría acordado con el señor Alejandro Caballero Prieto, según documento privado alusivo a una liquidación de la sociedad conyugal que otrora existió entre los contratantes[2] (PDF 05 C.1).

Fundamentación del auto apelado. La juez *a quo* encontró que la opositora acreditó su condición de tercero; que en virtud de los actos materiales que ejecuta sobre el inmueble se vislumbra el *animus y corpus,* lo cual se corroboró con los testimonios de dos vigilantes al servicio de la P.H. en la que se encuentra el apartamento en disputa.

Resaltó que, de lo declarado en la diligencia por la actora y por su hermano (Mario Ernesto Ortiz Escobar), emergía que aquella no ha recibido rentas por dicho bien, en el cual tampoco ha residido y que ni siquiera previamente, la demandante había reclamado la entrega del predio a la señora Diana Lucía Acosta Fortunatti.

LA APELACIÓN. La inconforme alegó que la opositora es "causahabiente" de la señora Concha Prieto de Caballero (demandada); que la prueba de ello brota de dos documentos privados, uno, que aportó la demandante que aparece signado de 3 de julio de 2005 (de "cesión de todos los derechos que ejerzo sobre el apartamento 301") suscrita por la aquí demandada (cedente) en favor de su hijo Alejandro Caballero Prieto (cesionario y quien habría quedado con la "posesión del predio desde la misma fecha, 3 de julio de 2005) y el otro, que contiene un contrato de "transacción" de 15 de julio de 2016 que figura rubricado por la opositora y su exesposo, el mismo Alejandro Caballero Prieto, con el que este último habría transferido a la señora Acosta Fortunatti los derechos de posesión que ostentaba "desde el año 2005" sobre el bien en litigio.

[1] folio de matrícula inmobiliaria.
[2] En el contrato de "transacción" que figura fechado el 15 de julio de 2016 obrante en el PDF 05 C.1 se consignó que el 3 de octubre de 1987 Diana Lucia Acosta Fortunatti y Alejandro Caballero Prieto contrajeron matrimonio católico y que, mediante sentencia de 6 de agosto de 1998 el Juzgado 20 de Familia de Bogotá declaró la cesación de los efectos civiles de dicho matrimonio, así como disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal.

Adicionó que la opositora efectúo simples actos de tenencia o conservación sobre el inmueble; que la demandante Ortiz Escobar sufragó los impuestos prediales y que los testimonios que se recaudaron por la iniciativa de la señora Acosta Fortunatti carecen de credibilidad.

CONSIDERACIONES

1. Se atenderá la alzada en estudio, puesto que, como lo resaltó la apelante, a la luz de los elementos de juicio recaudados, la señora Acosta Fortunatti no honró la carga probatoria que sobre ella gravitaba, en punto a su condición de verdadera tercero y no de mero causahabiente de la parte demandada.

Tal contingencia, incluso hacía improcedente tramitar la oposición de marras.

En efecto, de conformidad con el literal 1° del artículo 309 del C. G. del P., el "juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona **contra quien produzca efectos la sentencia**, o por quien sea tenedor a nombre de aquella".

Como punto de partida, se observa que el negocio jurídico que guarda directa relación con la diligencia de entrega que acá interesa, y que incumbe al cumplimiento forzado de la sentencia de entrega del tradente al adquirente que se profirió el día 8 de agosto de 2019 y que cobró ejecutoria, corresponde al contrato de compraventa (dación en pago) de que trata la escritura pública No. 937 de la Notaría 32 del Círculo de Bogotá, otorgada el día 22 de mayo de 2009, e inscrita el día 29 de mayo del mismo año.

Ese documento notarial aparece signado por la demandada, señora Concha Prieto de Caballero (vendedora) y Jorge Ernesto Ortiz Torres (comprador), a la sazón padre de la demandante Claudia Alicia de las Mercedes Ortiz Escobar[3].

2. Ante una situación fáctica que guarda cierta similitud con el asunto *sub lite*, y en lo que atañe al primer requisito, ha dicho este Tribunal que como tercero sólo puede tenerse "a quien no es parte procesal ni deriva de esta, en cuanto sea perjudicada con la medida de cautela, el título que alega para sustentar su oposición"; que "el concepto de parte es de neto contenido procesal, como lo tiene establecido la doctrina, y se refiere no más a quienes intervienen en un proceso **a partir de la demanda**, esto es demandante y demandado"; y que "el concepto de la causahabiencia que aquí interesa, **ha de fijarse con exclusividad al proceso y en relación específica con los sujetos que en él participan a propósito que no es dable entender cosa distinta del contenido del artículo 332 del C. de P. C**. [hoy art. 309 del C. G. del P.], cual justamente la determina en el tiempo con posterioridad 'al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos" (TSB, auto de noviembre 19 de 2003, M.P. Carlos Julio Moya Colmenares).

No sobra poner en relieve, que se entiende por "causahabiente" al "sucesor jurídico de una persona o sea quien ha adquirido una propiedad **o un derecho de otra persona que a su vez se llama causante**". "De esta forma el comprador es causahabiente del vendedor a título singular" (Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Ed. Porrúa S.A., México 1986, pág. 149).

[3] A la señora Ortiz Escobar, en su condición de heredera, se le adjudicó el mismo inmueble según escritura pública No. 2871 de 29 de diciembre de 2017 de la Notaría 14 del Círculo de Bogotá. (pág. 23 PDF 01 C.1)

3. De conformidad con los numerales 1° y 2° del artículo 309 del C. G. del P., en armonía con el artículo 167, *ibidem,* es del resorte del opositor demostrar, entre otras cosas, su condición de tercero, junto con su comportamiento de poseedor para la época en que se surta la diligencia de entrega.

Por contera, no es la parte demandante (tampoco la demandada) quien soporta la carga de acreditar que respecto del opositor no concurren las exigencias en comento, esto es, la genuina connotación de tercero y el señorío del que se viene hablando.

Aquí, y a diferencia de lo que se percibió en el auto apelado, es palpable que la opositora no honró a cabalidad ese gravamen procesal.

Por el contrario, lo que arroja la foliatura es que la detentación que ostenta la señora Acosta Fortunatti sobre el apartamento de marras se amolda más a su condición de **causahabiente** de la demandada Concha Prieto de Caballero, quien a título de vendedora suscribió la escritura pública de compraventa soporte de las pretensiones que salieron airosas en este proceso de entrega del tradente al adquirente.

Al absolver su interrogatorio de parte, la señora Acosta Fortunatti manifestó:

i) que ingresó en el año 2005 al susodicho inmueble, en compañía de su exesposo **Alejandro Caballero Prieto**, hijo de la demandada Concha Prieto de Caballero. No indicó a título de qué ingresó al predio (*v. gr.*, comodataria, arrendataria, invitada, etc.).

ii) que desde el 15 de julio de **2016** ostenta señorío, data en la que afirmó que celebró contrato de "transacción" con el señor Alejandro Caballero Prieto (hijo de la demandada).

Sobre las anteriores vicisitudes, en la foliatura obra prueba documental que merecía una valoración muy distinta de la que hizo la juez *a quo*.

Al expediente se incorporaron dos documentos privados relevantes:

El primero, aparentemente signado el **3 de julio de 2005**, que aportó la parte actora al pronunciarse sobre la oposición en estudio de fecha 15 de febrero de 2022. En ese escrito se consignó que el señor Alejandro Caballero Prieto obtuvo de su progenitora -la aquí demandada y entonces propietaria-, "los derechos que ejerzo sobre el apartamento 301 del Edificio Ícaro" y que "de acuerdo con lo antes anotado, Alejandro Caballero Prieto **ha tomado posesión de este bien** y asumirá los costos que demande" (págs. 7 y 19 PDF 07 C.1).

También obra a folios el documento privado, contrato de "transacción", según el cual, a su vez, Alejandro Caballero Prieto le habría transferido sus "derechos" sobre el mismo predio a su exesposa (ahora opositora), "que comprenden [la] posesión (…) del citado apartamento, ejercidos por el señor Caballero Prieto **desde el año 2005**" (pág. 35 PDF 05).

4. Aplicadas las pautas contenidas en el artículo 253 del C. G. del P., como fechas ciertas de esos documentos privados -respecto de terceros-, que incluye a la aquí

demandante, quien no los signó (tampoco su causante), y a falta de circunstancia comprobada que imponga concluir una fecha anterior, se tiene:

4.1. Frente al de "transacción", que figura firmado el 15 de julio de 2016, fecha a la que la opositora remonta su aducido señorío, ha de verse que su aportación se verificó el día 15 de febrero de 2022, ya en desarrollo de la por ahora fallida diligencia de entrega.

4.2. Y en el otro documento privado, como fecha de creación -frente a terceros- no se puede tener la que allí se plasmó, 3 de julio de 2005, sino otra muy distinta, incluso muy posterior al **8 de agosto de 2019**, día de emisión de la sentencia de entrega del tradente al adquirente, con la que fueron desestimadas las defensas que aquí interpuso la señora Concha Prieto de Caballero

Tal documento fue aportado con posterioridad al día **15 de febrero de 2022** día en que se presentó la oposición cuya suerte en segunda instancia hoy se decide (PDF 07, pág. 19).

4.3. En resumidas cuentas, quedó desprovisto, por entero, del respaldo documental que apoyaría el título al que obedecería la posesión que, según la señora Acosta Fortunatti, ella vendría detentando sobre el predio desde el día 15 de julio de 2016.

En esta oportunidad, tal vacío no lo suple la prueba testimonial, ni fue aquí materia de confesión por la parte demandante.

Sobre ello se resalta, *grosso modo,* que los testigos, señores Leonardo Castro García, Pablo Alberto Castro Sabogal y William Alirio Fajardo Morales, refirieron la presencia de la opositora en el apartamento, desde hace varios años, al igual que algunas labores de mantenimiento y de mejoras, pero no ilustraron sobre el tema que acá interesa. Brilla por su ausencia manifestación de los declarantes que imponga dar por cierto que el eventual señorío de la señora Acosta Fortunatti lo ejerza sin la afectación de la causahabiencia de la que se viene hablando.

5. Ahora, pero así se prescindiera de lo que se registró en el numeral cuarto de estas consideraciones en torno a la precariedad de la prueba documental y testimonial, lo cierto es que se imponía el mismo desenlace.

En efecto, a partir de las circunstancias de tiempo, modo y lugar comentados a lo largo de esta providencia, aflora que, en últimas, la oposición en estudio se fundamenta en la secuencia de negocios jurídicos relevantes: el primero, la cesión precaria de derechos sobre el predio que la demandada Concha Prieto de Caballero habría efectuado a nombre de su hijo Alejandro Caballero Prieto y el segundo, la transferencia que, de los mismos derechos hizo el señor Caballero Prieto a su exesposa (precisamente la opositora).

Así las cosas, la Sala colige que la opositora no satisfizo la carga procesal de demostrar su condición de verdadera tercero, esto es, la ocurrencia de hechos de los cuales concluir que a ella no le era oponible la sentencia de entrega del tradente al adquirente que aquí se profirió a favor de la demandante. Por tal motivo no es factible concluir que la señora Acosta Fortunatti se desligó de su connotación de causahabiente de la demandada y, por ende, de "**persona contra quien produzca efectos la sentencia**" (núm.. 2º, art. 309 C. G. del P.).

De ahí deviene que no cabe predicar de la opositora la connotación de **tercera** ajena a los resultados de la sentencia que en este proceso de entrega del tradente al adquirente se emitió.

Por tanto, queda visto que distinto de lo que percibió la juez *a quo*, de la foliatura no aflora que la señora Acosta Fortunatti estuviera habilitada para oponerse a la diligencia de entrega.

6. Ante lo dicho, el Tribunal encuentra innecesario adentrarse en la prueba de la posesión esgrimida por la opositora, puesto que, se reitera, lo que se imponía, acorde con los numerales 1º y 2º del artículo 309 del C. G. del P., era rechazar de plano la oposición que ella impetró.

7. Prospera, por ende, la alzada en estudio.

DECISIÓN

Así las cosas, la Sala Sexta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá REVOCA el auto que el 25 de mayo de 2023 profirió el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, y en su lugar RECHAZA DE PLANO la oposición que en el decurso de la diligencia de entrega iniciada el 15 de febrero de 2022 impetró la señora Diana Lucía Acosta Fortunatti.

Se condena en costas de primera instancia a la señora Diana Lucía Acosta Fortunatti y en favor de la parte actora.

Sin costas de la alzada que salió victoriosa.

Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen.

Notifíquese

Los Magistrados,

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

JUAN PABLO SUAREZ OROZCO

GERMAN VALENZUELA VALBUENA

Firmado Por:

Oscar Fernando Yaya Peña

Magistrado

Sala 011 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

German Valenzuela Valbuena

Magistrado

Sala 019 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Juan Pablo Suarez Orozco

Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4cbfa8b01da60ba01d33034f7e9c12a3d8dbfc92508165c3a71c9ff93b81d43e**

Documento generado en 24/07/2023 10:38:16 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SEXTA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D. C., veinticuatro de julio de dos mil veintitrés

11001 3103 029 2019 00362 01
Ref. Proceso verbal de resolución contractual promovido por Gloría María Acosta de Márquez y Enrique Alfonso Márquez Yáñez contra Rafael Antonio Cepeda Arbeláez

Obedézcase y cúmplase lo dispuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, en auto AC1905-2023 de 12 de julio de 2023, mediante el cual declaró bien denegado el recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia que este Tribunal profirió el 20 de febrero de 2023.

En firme este proveído, y en cumplimiento a lo que dispuso el TSB en la sentencia de segunda instancia, devuélvase el expediente al juzgado *quo*.

Notifíquese

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

Firmado Por:
Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b2a65467882860264c0170e90d49883c73dd2a4a69512a2550bd45c0797f65a6**

Documento generado en 24/07/2023 04:00:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Ponente
SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	DECLARATIVO
DEMANDANTE	Sonia Ruiz González
DEMANDADOS	José David González y otra
RADICADO	11001310302920210051301
PROVIDENCIA	Interlocutorio nro. 46
DECISIÓN	**CONFIRMA**
FECHA	Veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

1. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada -Elizabeth Ramírez Ronchaquira-, contra el auto de 27 de febrero de 2023, mediante el cual el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá negó la nulidad impetrada por aquél.

2. ANTECEDENTES

2.1. Solicitud de nulidad. Dicha petición, la fundó el censor, en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifestó que no recibió ninguna notificación a su domicilio, pues las colillas que obran en el proceso reportan la notificación a Elizabeth Ramírez cuando su nombre es Elizabeth Ramírez Ronchaquira. Refirió que se enteró de la demanda con ocasión de la inscripción de esta en la anotación 22 del certificado de tradición del inmueble del que es copropietaria y poseedora desde 1994. Además, que al consultar el proceso en el sistema de gestión de la Rama Judicial, se enteró del auto de 6 de junio de 2022 que ordenó su emplazamiento, por lo que acudió a la sede del juzgado para

notificarse; sin embargo, se le informó que lo debía hacer por correo electrónico.

De otra parte, expuso que el Juzgado 4 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, el 22 de abril de 2016, dio por terminado el proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra Luis Hernán Maldonado Cifuentes (2005-00173) por ausencia de reestructuración, decisión que fue confirmada por esta Corporación el 15 de septiembre de 2016.

La demandante obra de mala fe al desconocer las decisiones referidas, especialmente, cuando no contrajo ninguna obligación y mucho menos le adeuda dineros. Además, en similares contornos la accionante ha presentado varias demandas, pero las autoridades judiciales las han rechazado, al parecer, por las razones expuestas.

2.2. Traslado de la nulidad. La *a quo* dio traslado de la nulidad invocada con sustento en la causal 2º del artículo 133 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que la demandada se notificó con anterioridad a la nulidad y contestó la demanda.

La apoderada judicial de la accionante, se opuso a la prosperidad del incidente. Al respecto, manifestó que el proceso que se terminó por ministerio de la ley fue uno de corte ejecutivo hipotecario, sin que ello implicara que las obligaciones quedaran saldadas o que hubiere existido una providencia liberatoria o prescriptiva de la deuda.

2.3 Auto recurrido. En proveído dictado el 27 de febrero de 2023, la Jueza denegó la solicitud de nulidad, tras considerar que la providencia dictada por el Superior no la vinculaba, pues fue dictada en el proceso de cobro. Tampoco se revive un proceso legalmente concluido teniendo en cuenta que en el presente asunto no se busca

el pago de una obligación instrumentada en un título valor, sino la declaración de existencia de un contrato de mutuo comercial, la cesión de éste y el consecuencial pago de la respectiva indemnización de perjuicios (daño emergente y lucro cesante).

2.3. El recurso de apelación. Inconforme con esa determinación, el apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso reposición y en subsidio de apelación insistiendo en sus argumentos iniciales.

2.4. Concede recurso de apelación. En auto de 24 de mayo de 2023, el *a quo* concedió el recurso de alzada, a fin de que la pugna fuese resuelta por esta magistratura.

3. CONSIDERACIONES

3.1. El recurso de apelación, tal y como es menester de ley, tiene por objeto que el superior jerárquico examine la decisión tomada en primera instancia, con el fin de revocar o reformar dicha decisión, si es del caso, únicamente cimentado en aquellos reparos formulados por el apelante.

3.2. Como se colige de la impugnación, el debate se centra en establecer, bajo la revisión del auto apelado, si la providencia emitida por *el a quo*, mediante la cual negó la nulidad deprecada por la pasiva, se encuentra ajustada a la legalidad, lo cual conduciría a su confirmación o, por el contrario, se impone su revocatoria o su reforma total o parcial, o su aclaración en algunos aspectos, en caso de existir alguna deficiencia en la resolución impugnada.

3.3. Al tenor del numeral 2º del artículo 133 del Código General del Proceso, el proceso es nulo en todo o en parte *"Cuando*

el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido (…)".

Desde esta perspectiva, se logra establecer que el proceso se anula cuando se desconoce una orden del superior funcional o la institución de la cosa juzgada material.

3.4 Pues bien, delanteramente se advierte que la providencia recurrida será confirmada, por las consideraciones que a continuación se expondrán.

Sea lo primero resaltar que la parte demandada aduce que, en el marco del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por la entidad cedente de la accionante contra Luis Hernán Maldonado Cifuentes (2005-00173), el Juzgado 4 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, el 22 de abril de 2016, dio por terminado el asunto por ausencia de reestructuración de la obligación, lo que fue confirmado por esta Corporación el 15 de septiembre de 2016, por lo que se configuró la prescripción extintiva del crédito.

A efectos de dar solución a la controversia, resulta suficiente indicar que actualmente no se adelanta un juicio de corte ejecutivo con garantía real en contra de la recurrente, pues lo que la accionante persigue con la presente causa es la declaración de existencia de un contrato de mutuo con las consecuentes condenas indemnizatorias, la cual es diametralmente distinta a las pretensiones de la demanda primigenia. También, se pone de manifiesto que los demandados no son los mismos en los dos asuntos, toda vez que solo en este proceso la apelante fue llamada a juicio.

De otra parte, ha de recordarse que a voces del artículo 303 del Código General del Proceso, para que opere la cosa juzgada

deben confluir: identidad del objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos exista identidad jurídica de partes.

En consecuencia, no puede pregonarse con éxito que con la acción que adelanta la cesionaria de la obligación hipotecaria reviva un asunto legalmente concluido, por cuanto, tal como se consignó, no hay identidad de objeto, causa y partes.

Puestas así las cosas, es evidente que los argumentos del recurrente no tienen asidero jurídico, como quiera que los autos referidos solo tienen efectos vinculantes respecto del proceso ejecutivo hipotecario 2005-00173 y no frente al que instruye la juez de instancia, por lo que no se puede inferir que se hubiere desconocido la orden del Superior o que se hubiere revivido un asunto concluido.

3.5 Así las cosas, ningún reproche puede merecer la negativa de la nulidad deprecada en este asunto. Por lo anterior, el proveído protestado será confirmado.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído recurrido, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: Oportunamente devuélvase lo actuado al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

Firmado Por:
Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e061e13f911b66bda6ea277604588ea702171c7695c8505f4a49c4f6a21f1dad**
Documento generado en 24/07/2023 03:58:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

MAGISTRADO PONENTE	: **JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**
RADICACIÓN	: **11001-31-03-031-2004-00054-01**
PROCESO	: **VERBAL**
DEMANDANTE	: **PUBLIO ARMANDO ORJUELA SANTAMARIA**
DEMANDADO	: **EVA VALBUENA MOTOCORO**
ASUNTO	: **IMPUGNACIÓN SENTENCIA**

De conformidad con el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 806 de 4 de junio de 2020, decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, frente a la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2020, por el Juzgado Primero Civil de Circuito Transitorio de Bogotá, en el asunto del epígrafe[1].

I. ANTECEDENTES:

1. En el libelo incoativo reformado, el extremo demandante solicitó a la jurisdicción: "***PRIMERA PRINCIPAL:*** *Que se declare judicialmente la Nulidad Absoluta del contrato de compraventa, contenido en la escritura No. 02439 de la notaría cuarenta y nueve (49) del círculo notarial de esta ciudad y de fecha 16 de diciembre de 1994.* ***SEGUNDA PRINCIPAL:*** *Que se reconozca la trasgresión de los artículos 872 y 920 en su inciso final, ambos del Código de Comercio por la Señora Eva Valbuena Motocoro, a través del contrato que se demanda, por ser irrisorio el pactado en la venta.* ***TERCERA PRINCIPAL:*** *Que como consecuencia de la declaratoria judicial de Nulidad Absoluta se ordenen las restituciones mutuas a que haya lugar y entre ellas en especial se ordene a la demandada restituir en su propiedad y posesión al demandante en el inmueble objeto material de la presente demanda.* ***CUARTA PRINCIPAL:*** *Por ser un acto mercantil el asunto demandado, dada su finalidad (compra para la reventa), objeto material (inmueble) y por ser la vendedora comerciante (agente especial designada por la Super Sociedades), solicito atendiendo el mandato del Código de Comercio, en especial sus artículos 10, 12, 13, 20, 21 y 22, se ordene a la demandada pagar los cánones mensuales de arrendamiento que debió percibir por el inmueble objeto material de la demanda, durante más de ciento ocho (108) meses y que pertenecen a mi mandante, todo ello en concordancia con la solicitud de prueba pericial que se encuentra en la*

[1] El expediente fue repartido al Magistrado sustanciador el día 20 de octubre de 2022. De igual manera, por auto del 18 de mayo de 2023, se suspendió el término de que trata el artículo 121 del C.G.P. mientras el juzgado de primera instancia remitía de manera completa el proceso.

demanda. ***CUARTA PRINCIPAL A:*** *Sobre el valor de los cánones mensuales de arrendamiento solicito se ordene a la demandada pagar sobre dichos valores la tasa de los intereses de mora máxima permitida por la Ley* (…). *En consecuencia, ordene a la demandada pagar los usufructos percibidos por ella y que pertenecen al demandante, por el inmueble objeto del contrato demandado, desde la fecha en que se protocolizó en la notaría la escritura de compraventa, objeto jurídico de la nulidad absoluta, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que resuelva la presente demanda; así como los intereses (lucro cesante) y perjuicios (daño emergente)* (…)*.* ***QUINTA PRINCIPAL:*** *Que la sentencia que ponga fin al proceso que se inicia con esta demanda, en su parte resolutiva ordene a la Oficina de Registro Zona Sur de esta ciudad corregir la anota ción 81 que corresponde a la matrícula inmobiliaria 40212189, que se realizó con fundamento en el contrato del cual con la presente demanda se pide la declaratoria de Nulidad Absoluta.* ***SEXTA PRINCIPAL:*** *Que como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones anteriores, se condene en las costas del proceso a la parte demandada.*

2. Como sustento de sus aspiraciones, el activante expresó que **(i)** es propietario del inmueble de mayor extensión denominado "*El Saucedal*", **(ii)** que el 10 de febrero de 1993, el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, elaboró el "*INFORME TÉCNICO – AVALÚO COMERCIAL N°00058, que determinó el valor del metro cuadrado 'VR.M2 $10.000.oo en diez mil pesos*", **(iii)** la Superintendencia de Sociedades, mediante Resolución No. 100-2782 de 30 de noviembre de 1994, intervino su patrimonio, determinación que le fue notificada el 16 de diciembre siguiente, y ese mismo día, el agente especial de la citada entidad, vendió a favor de Eva Valbuena Motocoro, una fracción de su terreno, -más exactamente 90 metros cuadrados-, por un precio irrisorio total de $40.000,oo, según escritura pública No. 2439, otorgada en la Notaría 49 de Bogotá, **(iv)** que unos peritos rindieron un dictamen ante el Tribunal Contencioso Administrativo y determinaron que el valor del metro cuadrado en la heredad "*El Saucedal*", para el año de 1994, era de $53.064,21, es decir, la venta a la que se hizo referencia líneas precedentes, debió ser por un precio de $4.775.778,90, y no como quedó estipulado en el citado documento público.

3. En su oportunidad, Eva Valbuena Motocoro se pronunció frente a las pretensiones del querellante, manifestando que se oponía al *petitum,* y formuló la excepción de mérito de "*cosa juzgada*". De igual manera, denunció en pleito a la Superintendencia de Sociedades, entidad que planteó las defensas de "*culpa de la víctima*", "*falta de legitimación en la causa por pasiva*", "*ineptitud sustantiva de la demanda*", y "*prescripción*".

A su turno, la mencionada autoridad de vigilancia y control también denunció en pleito a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y una vez compareció al juicio, propuso las excepciones de "*cosa juzgada*" y "*falta de legitimación en la causa por pasiva*".

II. SENTENCIA APELADA

1. Agotado el trámite correspondiente a esta clase de asuntos, el funcionario de cognición desestimó las reclamaciones impetradas, con sustento en las siguientes consideraciones:

"*En primer lugar, se reitera lo ya dicho en la exposición del problema jurídico, esto es, que hubo una formulación de las pretensiones carente de toda técnica jurídica ya que el libelo demandatorio, así como su reforma hablan indistintamente de nulidad por precio irrisorio y solicitud de aplicación de los dispuesto en los artículo 872 y 920 del Código de Comercio, es decir, se confunden los elementos de la nulidad y del precio irrisorio con otras figuras como fueron las mencionadas en el fundamento jurídico de esta providencia.*

En segundo lugar, hay que señalar, que, conforme al fundamento jurídico aquí expuesto, que no existe nulidad del contrato por precio irrisorio. Como quedó visto, los problemas con el precio en los contratos hacen alusión a dos temas totalmente diferentes: por un lado, a la inexistencia del contrato de compraventa si se trata de un contrato mercantil en el que se ha pactado un precio irrisorio (artículo 920 C.Co.) y, por el otro lado, la rescisión por lesión enorme, si el precio no se encuentra dentro de unos mínimos o máximos establecidos, teniendo como parangón el llamado justo precio de la cosa vendida (artículo 1947 C.C.).

Comoquiera que la pretensión no apunta a la inexistencia del negocio jurídico ni a la rescisión del contrato, no puede este juzgador entrar a analizar dichas figuras. En este sentido, los esfuerzos demostrativos orientados a demostrar un precio irrisorio, en particular, lo atinente a la pericia decretada y a la prueba trasladada, resultan inanes de cara a la pretensión de nulidad que fue planteada en la demanda.

Ahora bien, frente al tema de la nulidad absoluta por causa ilícita, hay que señalar que no existió ningún tipo de argumentación tendiente a demostrar que la causa que motivó a la celebración del contrato de compraventa consignado en la Escritura Pública 2439 del 16 de diciembre de 1994, es contraria a las leyes, a las buenas costumbres o al orden público.

Por el contrario, lo que se encuentra demostrado con las piezas documentales, tanto de la actuación en la Superintendencia de Sociedades, como en los distintos fallos de la jurisdicción contencioso-administrativa que aquí se aportaron y las escrituras públicas aportadas, fue lo siguiente:

Sobre un predio denominado El Saucedal se inició un proceso de loteo y venta de terrenos, sin el cumplimiento de los requisitos de ley. Por lo anterior, la Superintendencia de Sociedades, quien, anteriormente tenía la competencia para la inspección vigilancia y control de los proyectos de construcción de vivienda, expidió la Resolución 6307 de 1980, donde se ordenó la toma de posesión de los bienes de Luis Hernando Rodríguez Contreras, quien, estaba involucrado en la mencionada conducta. Empero, como quiera que el demandante Publio Armando Orjuela Santamaria, mediante Escritura 3750 del 6 de junio de 1983 de la Notaría 5 de Bogotá adquirió la propiedad de El Saucedal,

la misma Superintendencia expidió la Resolución 100-2782 del 30 de noviembre de 1994, donde se extendió la medida de toma de posesión al patrimonio del actor.

Adicionalmente se tiene que, a folio 811 del cuaderno principal, obra copia del contrato de promesa celebrado entre las partes, por virtud del cual el demandante Publio Armando Orjuela Santamaria prometió en venta a Eva Valbuena Motocoro un lote de terreno situado en El Saucedal. La fecha del contrato fue el 17 de agosto de 1976, es decir, antes de que el actor adquiriera la propiedad del El Saucedal. Allí se pactó como precio del contrato prometido la suma de $40.000. Dicho precio fue el que figuró en la escritura de venta aquí censurada y que reprochó el demandante en su libelo como irrisorio.

En desarrollo de tal contrato, la agente especial designada por la Superintendencia de Sociedades, como administradora de los bienes de Luis Hernando Rodríguez Contreras y Publio Armando Orjuela Santamaria (fls. 548-549) mediante la escritura pública aquí enjuiciada (fls. 12-15) trasfirió a la demandada un inmueble que se distingue ahora con el folio de matrícula inmobiliaria 50S-40212189 y que hacía parte del lote de mayor extensión denominado El Saucedal.

Sobre la legalidad de la actuación adelantada en la toma de posesión no tiene competencia este juzgador para pronunciarse, amén que ya existen sendos fallos de la justicia contencioso administrativa donde fueron enjuiciados por el actor y donde se le denegaron las pretensiones.

Como se concluye de lo narrado, no hay pruebas de que el proceder de la Superintendencia ni de la demandada pudiere ser cuestionado por ilicitud en la causa, además, debe señalarse que, en cuanto al precio, tal y como se dejó consignado en los referentes jurisprudenciales de este fallo, para efectos de determinar si es o no irrisorio, debe tenerse en cuenta no solo el precio consignado en la escritura pública de transferencia del derecho de dominio, sino, si lo hay, como en este caso que lo hay, la fecha del contrato de promesa de compra venta que para los efectos de esta actuación se celebró en 1976, es decir, no puede tenerse como referencia el precio irrisorio, para los efectos a que haya lugar, la fecha de 1994.

Pero, además, si el agente especial de la Superintendencia actuó en representación del actor, por virtud de la toma de posesión de sus negocios, haberes y bienes, ella no actuaría en causa propia, y menos como representante de la Superintendencia a motu proprio, y, por consiguiente, no existiría legitimación en la causa para haber vinculado a dicha Superintendencia, en este proceso. Esta conclusión se predica de la hoy Secretaría Distrital de Ambiente, puesto que su función solo se asocia al proceder de la toma de posesión mencionada.

Son todas estas las razones para denegar las pretensiones de la demanda, sin que sea necesario entrar a estudiar las defensas planteadas por la demandada y los vinculados, y sin que sea necesario estudiar la figura de la denuncia del pleito. De igual manera, la confesión ficta declarada en audiencia del 22 de agosto de 2016 (fl. 733) no tiene fuerza para demeritar los argumentos antes expuestos que son de orden jurídico teórico, ya que versaron

sobre las razones por las cuales no se puede declarar en esta sentencia, una nulidad absoluta por causa ilícita, no existe nulidad por precio irrisorio, no se solicitó lesión enorme -rescisión por lesión enorme por precio irrisorio-, y no se solicitó tampoco la inexistencia del contrato por precio irrisorio, por el contrario, tal declaración, tan solo versó sobre cuestiones relacionadas al precio incorporado en la escritura censurada, sin que, iterase, tal situación incida en los argumentos de orden jurídico-teórico, ya mencionados."

Por lo anterior, impuso costas al actor, pero posteriormente el *a quo* dispuso no aplicar dicha condena, dado el amparo de pobreza concedido.

III. LAS APELACIONES

1. En desacuerdo con tal determinación, el procurador judicial del extremo activante la impugnó, arguyendo como reparo central que el juez de primera instancia hizo "*una mala valoración de los documentos que están en el expediente, porque dentro de las consideraciones que expuso citó los folios 548 y 549, sobre una promesa de compra venta del año 76, si se revisa con detalle, y esa también es parte de la consideración que se hace como prueba para que se tenga en cuenta en la apelación, esa supuesta promesa de compra venta tiene dos vicios graves, en primer lugar, no existe forma de hacer efectiva la promesa, y la promesa requiere por mandato de la ley, que se estipule en su cuerpo estrictamente cual es la notaría, la hora y el día en que va a cumplirse la promesa, sin ese requisito la promesa no tiene validez porque es de imposible cumplimiento, la promesa de compraventa genera es una obligación de hacer, asistir a la notaría en una fecha, en un día, a cumplir con él, no lo tiene, se revisan esos folios 548 y 549 y no está. Y, en segundo lugar, ese documento no está relacionado con la escritura aquí demandada, porque la escritura aquí demandada que es la 2439 del 16 de diciembre de 1994 de la notaría 49 del Círculo de Bogotá* (…)*"*[2]*.*

2. Durante la etapa procedimental regida por el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el apelante introdujo argumentos novedosos, que se resumen así:

"***I. De la nulidad absoluta e inexistencia, por falta de causa en el objeto y precio serio en la Escritura Pública No. 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 del Círculo de Bogotá D.C.***

(…)

Aquí el precio pactado por el bien inmueble de la Escritura Pública No. 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 de Bogotá DC, es del ***0,16%*** *del precio real y por eso es inexistente por ridículo, como lo expresó la prueba pericial y que fue así asumida en el proceso, cumpliendo con su contradicción* (…)*.* [N]*o es una prestación conmutativa lo recibido por la agente Quintero M,*

[2] De la revisión del expediente, no se evidencia que la parte actora, en la oportunidad de que trata el artículo 322 del C.G.P. hubiese presentado, por escrito, otros reparos contra el fallo dictado en primer grado.

que fue la real vendedora y por su propia iniciativa, ante la inexistencia de la causa para la compraventa del bien inmueble y que por lo mismo ese contrato es nulo-inexistente.

II. Inexistencia de causa lícita en el contrato demandado

El fallo apelado erró; porque no existe, ni es verdad que la causa de la Escritura Pública No. 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 del Círculo de Bogotá DC, sea la fotocopia del folio 811 del cuaderno principal del expediente; porque allí no existe una promesa y menos del mismo bien inmueble objeto material de la compraventa demandada; porque ella no tiene el valor jurídico como causa del contrato de compraventa atacado (…).

(…)

Por eso el fallo apelado, violó el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, ya que el texto del folio 811 del expediente citado por el A-quo, incumple los requisitos legales para ser una promesa, siendo patente su violación por inexistencia de causa lícita, pues su objeto es 'un lote de terreno … marcado con el número OCHO (8) y por el contrario en la Escritura Pública No. 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 de Bogotá D.C, su objeto material es un 'INMUEBLE…LOTE 13' (CD. Ppal fl. 818).

(…)

No existe causa lícita en la Escritura Pública atacada, por la inexistencia de identidad entre el bien inmueble de la supuesta 'promesa' del folio 811 citado, con el de la Escritura Pública demandada, pues no es el mismo bien inmueble, como lo impone el párrafo final del artículo 1611 del Código Civil (…) *y por eso el consignado como su nomenclatura urbana, en la Escritura Pública atacada, evidencia la falta de relación causal e identidad entre los bienes inmuebles esgrimidos en el fallo apelado.*

(…)

No existe causa de la Escritura Pública No. 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49, en lo que está en el folio 811 citado en el fallo apelado, porque en esa fotocopia es patente la omisión de los requisitos legales del numeral 4) del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, porque no fijó la Notaría, la fecha y la hora, para cumplir la obligación de hacer, otorgado la Escritura Pública de compraventa (…) *y esa indeterminación sobre el requisito que impone la Ley* (…) *impone la inexistencia del contrato de promesa de compraventa y por el contrario ella imponen la falta de causa en la Escritura Pública atacada y su nulidad absoluta al no tenerla*.

(…)

[Se] *agrega la inexistencia de acuerdo de voluntades para contratar; porque el actor no se obligó con la pasiva, ni ella con él, ni obtuvieron derechos recíprocos, como lo imponen sobre los requisitos para obligarse el artículo 1502 del Código Civil, en su numeral 4°* (…).

(…)

I.C De la falta de causa onerosa en la Escritura Pública No. 2439 de diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 del Círculo de Bogotá DC, por inexistencia de precio serio, derivando en su nulidad absoluta.

El precio irrisorio-no precio y no ser onerosa y conmutativa, la Escritura No. 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 del Círculo de Bogotá DC, prueba la ausencia absoluta del elemento esencial del precio, como su causa, que se reconfirmó con la confesión de la pasiva en esos mismos términos, que es prueba por los artículos 205 del CGP y 210 del CPC, que lo antecedió, en Agosto 16 de 2012, (Cd. Ppal, fl. 403). Con lo cual se probó irrefutablemente el precio irrisorio-no precio y la falta de la causa onerosa en la Escritura Pública multicitada, además de los demás hechos confesables por el cuestionario asertivo y los correspondientes a los hechos de la reforma de la demanda, que se dieron el día de la confesión y reconocido por auto ejecutoriado y en firme.

III. Falta del A-quo a su obligación de resolver con la nulidad absoluta por inexistencia de causa lícita en la Escritura Pública No 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaria 49 de Bogotá DC.

El A-quo vulneró los artículos 1740 y 1742 del Código Civil, porque no existe el contrato de promesa de compraventa sobre el bien inmueble al que se ciña la Escritura Pública 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 de Bogotá DC, y ella no tiene causa lícita en la 'promesa' citada por el fallo apelado, siendo un vicio patente; por lo que el A-quo tenían la obligación y el deber legal de declararlo de oficio y más con la demanda de nulidad absoluta-inexistencia, por vulnerar la Ley y el orden público jurídico.

No existe promesa de compraventa sobre el bien inmueble de la Escritura Pública 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 de Bogotá DC y por el artículo 1947 del Código Civil, se impone que su justo precio tenía que estimarse el día que se firmó la Escritura y por los artículos 872 y 920 del Código de Comercio, invocados en la demanda, que nada dicen sobre el tiempo del contrato de compraventa aquí contenido en la Escritura Pública citada, es patente el precio irrisorio en ella; para el día en que se otorgó, probado con los peritajes que si están como pruebas así decretados en el proceso.

La Escritura Pública 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 de Bogotá DC, carece de causa ante la falta del elemento esencial del precio serio; porque en el Código Civil, la inexistencia como contrato de la compraventa vertida en esa Escritura Pública, se funda en su artículo 1501, que por la falta del elemento esencial del precio por irrisorio, impone la esterilidad de sus efectos, o nulidad absoluta por inexistencia de sus elementos esenciales.

También, expuso que con "*el fallo apelado, se violó ese artículo 176; porque él afirmó, contra la verdad y sin pruebas judiciales en firme, que el actor fue promitente vendedor de la pasiva, cuando no lo fue y por el contrario, la agente Quintero M, sólo por su voluntad, firmó y recibió el dinero por la viciada Escritura Pública 2439 de Diciembre 16 de 1994 de la Notaría 49 de Bogotá DC, contra su función, ya que pasiva, no fue promitente compradora del*

actor, ni tenía ningún derecho o crédito a su favor y contra él, ni ella le había dado dinero alguno a él, ni siquiera por interpuesta persona".

Finalmente, indicó que "*El A-quo en su fallo apelado, evadió su obligación legal, contra los artículos 164 y 176 del CGP; porque no atendió la necesidad de la prueba, ni las valoró una a una y en conjunto, estando decretadas, practicadas y en firme de: (i) la confesión, (ii) el dictamen pericial, su aclaración y adición y (iii) los documentos aportados con la demanda, su corrección y contestación, evadiéndola con sus dichos técnico jurídicos sobre la inexistente 'promesa' como causa, lo cual fue ilegal".*

3. De otro lado, el extremo pasivo también formuló recurso de apelación, alegando, esencialmente, que el juez debió condenar en costas a su contraparte, toda vez que el amparo de pobreza fue a favor del demandante fallecido, figura que no puede extenderse a sus herederos que actúan en su representación, como sucesores procesales, ya que éstos "*tienen plena capacidad económica para responder por las consecuencias de este proceso, ya que entraron al proceso, como o en representación de esta parte demandante como sus sucesores y herederos sin haber recibido este proceso con beneficio de inventario, razón que los hace responsable de las consecuencias de este proceso, incluido el pago de las costas y agencias en derecho* (…). *En este caso su despacho debe modificar la sentencia y ampliarla, teniendo en cuenta como perfectamente legal la condena en costas y agencias en derecho para que sean cubiertas y con la obligación de ser pagadas por sus herederos o sucesores procesales a quienes no ampara el amparo de pobreza decretado*".

IV. CONSIDERACIONES

1. De entrada, debe acotarse que esta Sala se circunscribirá a examinar, exclusivamente, los motivos de desacuerdo demarcados por los extremos opugnadores, acatando los lineamientos de los cánones 320 y 328 del Código General del Proceso, no pudiendo ser abordadas en sede de apelación las censuras planteadas tardíamente por el demandante al momento de sustentar la alzada, pese a que, si disentía de la sentencia de primer orden, le correspondía precisar sus reparos concretos cuando interpuso el recurso, para integrar la "*pretensión impugnativa*", que, según la jurisprudencia, "*marca las fronteras que debe observar el juez del escenario en la segunda instancia, para efectos de su competencia funcional decisoria.*"[3]

2. En ese contexto, prontamente se advierte el fracaso de la alzada interpuesta por la parte actora, por cuanto la inconformidad extremo recurrente, en estrictez, no contradice derechamente las motivaciones torales que sirvieron de soporte al funcionario de primer grado para adoptar el fallo cuestionado, que, basilarmente, se fundamentó en que "*no se puede declarar en esta sentencia, una nulidad absoluta por causa*

[3] CSJ. Sentencia SC2351-2019, rad. 41298-31-03-002-2012-00139-01.

ilícita, no existe nulidad por precio irrisorio, no se solicitó lesión enorme -rescisión por lesión enorme por precio irrisorio-, y no se solicitó tampoco la inexistencia del contrato por precio irrisorio, por el contrario, tal declaración, tan solo versó sobre cuestiones relacionadas al precio incorporado en la escritura censurada", precisándose que "*para efectos de determinar si es o no irrisorio* [el precio contenido en el contrato de venta]*, debe tenerse en cuenta no solo el precio consignado en la escritura pública de transferencia del derecho de dominio, sino,* [también] *la fecha del contrato de promesa de compra venta que para los efectos de esta actuación se celebró en 1976, es decir, no puede tenerse como referencia el precio irrisorio, para los efectos a que haya lugar, la fecha de 1994"*; segmentos conclusivos que evadió combatir rectamente el censor, considerando que, al sustentar su apelación, guardó silencio sobre esas específicas ultimaciones decisionales, pues, su argumentación, paralela por demás, giró en torno a la falta de validez de la promesa concertada en el año de 1976, por no estipularse cuál sería la notaría, fecha y hora en que se suscribiría la escritura pública correspondiente; olvidando el opugnador que, a voces de la Corte Suprema de Justicia, "(…) [a]*pelar no es ensayar argumentos disímiles o marginales que nada tengan que ver con lo decidido en la providencia impugnada,* (…). *Es hacer explícitos los argumentos de disentimiento y de confutación, denunciando las equivocaciones, porque son éstos, y no otros, los aspectos que delimitan la competencia y fijan el marco del examen y del pronunciamiento de la cuestión debatida* (…)*".*[4]

2.1. Además, se advierte un cambio de postura frente al debate originalmente planteado en el libelo genitor reformado, que, en modo alguno, se fincó en la invalidación del contrato de promesa celebrado entre las partes involucradas en este litigio, el cual, básicamente, se erigió en "*la Nulidad Absoluta del contrato de compraventa, contenido en la escritura No. 02439 de la notaría cuarenta y nueve (49) del círculo notarial de esta ciudad y de fecha 16 de diciembre de 1994*", por ser "*el precio de venta del metro cuadrado* (…) *en diciembre de 1994, de irrisorios cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta cuatro centavos (444.44)*". Giro discursivo inaceptable en sede de apelación, pues, de admitirse por el Tribunal la crítica constitutiva de la impugnación, se violaría el derecho de defensa de la contraparte, ya que, al ser novedosas no fue discutida oportunamente; planteamiento repentino jurisprudencialmente repulsado, porque "*avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba, expresa o tácitamente, y criticarla sorpresivamente en este escenario extraordinario, denota incoherencia en quien así procede, actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitaría la conculcación del derecho al debido proceso de su contendor, quien vería cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del proceso*";[5] premisas jurisprudenciales que cobran mayor relevancia en el presente asunto, porque el apelante soslayó que la Sala de Casación Civil ha reiterado que "[n]*o pueden confundirse, por existir notorias y sustanciales diferencias, la promesa de celebrar un contrato de compraventa con el contrato a que la*

[4] CSJ. STC. 18 jun. 2014, rad. 01190-00.
[5] CSJ. SC4826-2021

promesa se refiere",[6] pues cada acuerdo de voluntades conserva su individualidad propia, al punto que "*las cargas del comprador y vendedor no pueden tener origen distinto a la convección definitiva*",[7] y, en principio, "*los efectos del contrato de promesa se extinguen por el cumplimiento espontáneo de sus obligaciones, lo cual, referido a la obligación típica del contrato de promesa, lo es la celebración del contrato prometido*".[8]

2.2. Puestas de ese modo las cosas, claramente se avista que la parte accionante, en su condición de impugnante, no cumplió con su carga refutatoria, en los términos del artículo 322, numeral 3, inciso 2, del C. G. del P., preceptiva sobre la que jurisprudencialmente se ha adoctrinado que "(…) *el recurso de apelación a fin de proteger los derechos a la segunda instancia, al debido proceso, a la defensa y en general, las garantías judiciales, demanda una relación causal y directa entre los motivos de sustentación, los reparos concretos formulados a la providencia objeto de impugnación, y la decisión correspondiente* (…)";[9] por lo que, sin duda, era del entero resorte del aquí opositor exteriorizar su disenso directo frente al fallo de primera instancia, sin quedarse en la periferia del sustrato probatorio en que se fundó dicha providencia, al formular acusaciones tangenciales que no abordan el núcleo decisivo de la sentencia dictada por el juzgador de conocimiento.

2.3. En adición a lo dicho con antelación, la alegación tardía de la nulidad de la promesa de compraventa acordada en 1976, es inocua, por varias razones:

2.3.1. La referencia a que ella se hizo en el fallo de primera instancia, se dio a manera de simple elemento de prueba, en punto a la verificación sobre lo irrisorio del precio alegado por la demandante respecto de un negocio jurídico distinto, esto es, el de compraventa perfeccionada en escritura pública otorgada el 16 de diciembre de 1994. En ese escenario, el tema de la validez del contrato preliminar pierde importancia.

Tampoco la apelante atribuyó al juez yerro en la apreciación del contenido material del escrito que recoge esa promesa.

2.3.2. Lo anterior, sin contar que lo atinente a esa suerte de discusiones en punto a la validez del precontrato de venta, y otros aspectos, entre ellos su alcance y contenido, en aquellos eventos en que como aquí se verificó, se honró el prometido negocio jurídico a través de la firma de la consabido instrumento notarial, también tiene relevancia precaria a la luz de reconocida y repetida jurisprudencia que ha señalado

[6] CSJ. Sentencias de 22 de marzo de 1979 y de 26 de marzo de 1999
[7] CSJ. SC2221-2020.
[8] CSJ. SC2221-2020, citando "*ROCHA, Salvador. El contrato de promesa. En Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho Universidad Iberoamericana (México), 1974, pp, 621-636*".

[9] CSJ. Sentencia SC2351-2019, rad. 41298-31-03-002-2012-00139-01.

que, por regla general, la celebración del contrato perseguido extingue las obligaciones incorporadas en el contrato de promesa, comoquiera que éste "(…) *se encuentra en los momentos postreros en la gestación de los acuerdos contractuales**, teniendo un peculiar cariz provisional y transitorio** en cuanto es un **convenio eminentemente preparatorio de otro cuyo resultado no pueden o no quieren alcanzar de inmediato las partes**, pero a cuya realización se comprometen mediante un vínculo jurídico previo que les impone la obligación recíproca y futura de llevarlo a cabo con posterioridad, **agotándose en él su función económico - jurídica**, quedando claro, entonces, que como **'no se trata de un pacto perdurable,** ni que esté destinado a **crear una situación jurídica de duración indefinida y de efectos perpetuos, la transitoriedad indicada se manifiesta como de la propia esencia de dicho contrato'** (G. J. CLIX pág.283).*"[10]

3. Con todo, y de examinarse, el reproche introducido al sustentarse el recurso en esta instancia, referente a que el precio pactado en la compraventa contenida en la Escritura Pública 2439 del 16 de diciembre de 1994, otorgada en la Notaría 49 de Bogotá, "*tenía que estimarse el día que se firmó la Escritura y por los artículos 872 y 920 del Código de Comercio, invocados en la demanda* (…)", para efectos de verificar "*el precio irrisorio en ella"*, cumple destacar que tal argumentación no tiene la entidad suficiente para derruir la sentencia impugnada, ya que en el caso de autos no se logró acreditar, por ningún medio probatorio, que el precio pactado en la promesa de venta adiada 17 de agosto de 1976, fuera desproporcionadamente ridículo, mínima carga probatorio que le incumbía al demandante, en los términos del artículo 167 del C.G.P., considerando que -al resolver un debate de similares contornos, promovido por Publio Armando Orjuela Santamaría contra otra compradora, apoyado en la misma situación fáctica aquí ventilada-, la Corte Suprema de Justicia señaló lo siguiente:

"(…) *Mediante Resolución 6307 del 3 de diciembre de 1980 el Superintendente Bancario, con base en las facultades que le confería la ley 66 de 1968, estableció que Luis Hernando Rodríguez Contreras había anunciado y desarrollado -por lo menos desde 1976- un plan de urbanización denominado Saucedal, sin contar con los permisos requeridos, dentro de cuya labor celebró contratos de promesa de compraventa* (…)*; que dicho plan urbanístico lo llevó a cabo en un predio que no era de su propiedad 'sino en base a una promesa de compraventa celebrada con el señor Armando Orjuela Santamaría, quien a su vez había celebrado promesa de compraventa con Remedios Vélez Mauriño, en religión madre María Araparo, en calidad de representante de la Comunidad Hermanitas de los Pobres, como la que figura como dueña en el respectivo folio de matrícula' (ib.)*

Mediante Resolución 2782 de 1994 la Superintendencia de Sociedades extendió la toma de posesión que en 1980 la Bancaria había decretado sobre los bienes y haberes de Luis Hernando Rodríguez Contreras, al

[10] CSJ SC, 28 jul. 1998, rad. 4810, citada en SC2221-2020

demandante Publio Armando Orjuela Santamaría pues, al tenor de aquel acto administrativo, 'este último fue quien primeramente anunció y desarrolló el plan de urbanización denominado El Saucedal' (…)*. Allí se lee la orden de que dicha providencia administrativa fuese notificada a la agente especial Juliana Inés Quintero Martínez así como a Publio Armando Orjuela Santamaría y Luis Hernando Rodríguez Contreras, entre otros. También se aprecia que el ente de vigilancia y control tuvo en consideración el hecho de que no obstante que la medida cautelar de embargo decretada en abril de 1981 sobre el predio en cuestión se inscribió en el folio respectivo al día siguiente de su decreto (ocho de abril de 1981), 'el señor Publio Armando Orjuela Santamaría, logra que la citada oficina de registro instrumentos públicos, le inscriba en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria las escrituras públicas números 3750 y 6542 de fechas 6 de junio de 1983 y 21 de junio de 1984, ambas de la Notaría Quinta de Bogotá, por medio de las cuales la Comunidad Hermanitas de los Pobres, le vende el citado inmueble en cumplimiento del contrato de promesa de compraventa suscrito con fecha 10 de agosto de 1976 y también se aclara tal venta, llevándose a cabo tales registros con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 95 de 1890'.*

Mediante escritura pública 2449 del 16 de diciembre de 1994 la prenombrada Agente Especial designada por el Superintendente de Sociedades para la administración de los negocios, bienes y haberes de Publio Armando Orjuela Santamaría declaró que en representación legal de éste transfiere a título de venta los dos lotes litigados, segregados de uno de mayor extensión; y que el precio de esa venta es de $111,700,oo 'que corresponde al pactado en la fecha en la cual se realizó la negociación y/o suscribió la correspondiente promesa de compraventa y que los intervenidos declaran haber recibido a entera satisfacción'.

(…)

Para la Corte resulta claro, de cara a la anterior secuencia cronológica de los actos jurídicos realizados, que la negociación de los lotes objeto de la compraventa cuestionada en este proceso se remontó a la época en que la irregular urbanización el Saucedal comenzaba a ser desarrollada por Luis Hernando Rodríguez, quien suscribió promesa de compraventa con Alfonso Gallo, y de quien la demandada adquirió los derechos sobre los preindicados terrenos. ***De allí que la Agente Especial designada por la Superintendencia de Sociedades para la administración de los bienes y haberes de Luis Hernando Rodríguez y Publio Armando Orjuela solemnizara en nombre de este el contrato prometido*** *a quien, según lo dicho, resultó ser la sucesora del promitente comprador de entonces Sr. Gallo, esto es, la señora Inés del Carmen Morales de Castellanos.*

Es palmario entonces que el precio convenido fue el que tuvieron a bien las partes en pactar en las promesas y fue el que quedó asentado en la escritura de compraventa, otorgada casi 20 años después de esos precontratos, sin que exista hecho aducido, ni menos prueba regularmente allegada al proceso que permita establecer que para dicha

época, y no para la fecha de la escritura, tales precios ostentaran la calidad de irrisorios.*"*[11] (Negrilla y subrayado fuera del texto).

4. Desde otro paraje, el extremo pasivo se alzó contra la sentencia de primer grado, porque el juez dispuso no condenar en costas a la parte actora, decisión que no comparte, porque, si bien al demandante le fue concedido el amparo de pobreza, tal beneficio no puede extenderse a sus herederos y/o sucesores procesales.

Reparo que no tiene vocación de éxito, en razón de que "*la sucesión procesal por muerte de un litigante, consagrada en el artículo 68 del Código General del Proceso, según la cual «[f]allecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador», determina que el sucesor tomará el proceso en el estado en que se encuentre, ocupando la posición procesal de su antecesor.*

De acuerdo con esto, la doctrina ha entendido que el sucesor «queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. La sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, que, ***por tanto, continua igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado****»*[12]"

Partiendo entonces del antelado escenario jurisprudencial, este Tribunal no acoge el planteamiento esgrimido por la parte demandada, toda vez que en auto del 2 de julio de 2004, se admitió "*la solicitud de amparo de pobreza presentada por el demandante Publio Armando Orjuela Santamaria*", situación que impide condenarlo en costas, y comoquiera que sus sucesores ocupan su misma posición procesal, y, en consecuencia, asumen los mismos derechos, cargas y obligaciones, se les hace extensivo el beneficio otorgado al demandante fallecido.

5. El orden argumentativo que se trae es suficiente para ratificar la sentencia apelada, sin condena en costas a las partes impugnantes, en armonía con lo preceptuado en la regla 8ª del artículo 365 del C. G.P.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **RESUELVE:**

---

[11] CSJ SC4428-2018.
[12] CSJ STC5516-2022, citando a Azula Camacho, J. (2019). Manual de derecho procesal: teoría general del proceso". Editorial Temis. Pág. 400-401.

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2020, por el Juzgado Primero Civil Circuito Transitorio de Bogotá, en el presente asunto.

SEGUNDO.- SIN CONDENA en costas de esta instancia a las partes recurrentes.

TERCERO.- En oportunidad, por Secretaría, ofíciese al Despacho de origen informándole sobre la presente decisión, y remítasele copia magnética de esta providencia, para que haga parte del expediente respectivo.

NOTIFÍQUESE

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado
(31-2004-00054-01)

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
Magistrado
(31-2004-00054-01)

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado
(31-2004-00054-01)

Firmado Por:

Juan Pablo Suarez Orozco
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d59060ac02dfaff2825610d65ee59b5859fa5545b25cacdc4c074f716e88d144**

Documento generado en 24/07/2023 11:28:04 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Expediente No. 032202100185 01

Como la solicitud para decretar pruebas en segunda instancia fue extemporánea (Ley 2213 de 2022, art. 12, inc. 2º), se niegan las pedidas por la parte demandante.

Por el momento, no se considera necesario el ordenamiento de pruebas de oficio.

Ejecutoriado este auto, vuelva el proceso al despacho.
NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9db72cf762f45c7770e66c6a02253da4c0e9885240da98dae904def1ad4cca5d**
Documento generado en 24/07/2023 12:48:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

11001310303520160024801

La comunicación remitida por ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., -quien actúa en calidad de mandatario de Cruz Blanca EPS Liquidada-, junto con los documentos que aportó, agréguese a los autos y córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, para que ejerzan su derecho de contradicción, frente a los aludidos medios de persuasión.

Cumplido lo anterior, retornen las diligencias al Despacho para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE,

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado.

Firmado Por:
Juan Pablo Suarez Orozco
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0804d27954d42a7dedd8cf8e5c12253705a433b84139959c5b2ce47742ea1544**
Documento generado en 24/07/2023 04:15:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR SUAREZ OROZCO RV: respuesta de requerimiento Oficio OFICIO C-0533 para EXPEDIENTE N.: 11001310303520160024801

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 12/07/2023 16:15

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (11 MB)

Respuesta Colombiana de Finca Raiz.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR SUAREZ OROZCO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Mandato Cruz Blanca <mandatocruzblanca@atebsoluciones.com>
Enviado: miércoles, 12 de julio de 2023 14:48
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: respuesta de requerimiento Oficio OFICIO C-0533 para EXPEDIENTE N.: 11001310303520160024801

Buenas tardes.

Adjunto respuesta de requerimiento Oficio **OFICIO C-0533** para **EXPEDIENTE N.:** 11001310303520160024801

Cordialmente,

ATEB Soluciones Empresariales SAS
En calidad de mandatario de Cruz Blanca EPS S.A liquidada

mandatocruzblanca@atebsoluciones.com
www.atebsoluciones.com
Calle 60ª No.5-51 Chapinero - Bogotá

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 003555
Fecha: julio 2023

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA CIVIL - SECRETARIA
CAMILO ANDRES BAQUERO – Secretario Judicial
CORREO: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
DIRECCIÓN: Av. Calle 24 # 53-28-torre C Ofc. 305
TELEFONO: 4233390 Ext. 8349

EXPEDIENTE N.: 11001310303520160024801
DEMANDANTE: COLOMBIANA DE FINCA RAIZ LTDA
DEMANDADO: IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA SAS
MAGISTRADO: JUAN PABLO SUAREZ OROZCO

Referencia: Respuesta **OFICIO C-0533**

Respetado(a) señor(a) **Camilo Andrés Baquero**, reciba un cordial saludo.

Como es de común conocimiento, mediante Resolución No. 8939 del 07 de octubre de 2019 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para liquidar a la sociedad CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A – CRUZ BLANCA EPS", identificada con NIT No 830.009.783 -0",

En este mismo sentido el día 07 de octubre de 2021 se expidió la Resolución No. 2021320000013408 "Por la cual se prorroga la intervención forzosa administrativa para liquidar a Cruz BLANCA, identificada con el NIT No 830.009.783 – 0, hasta el 7 de abril de 2022.

Que el 15 de febrero de 2022, se profirió la RESOLUCIÓN N. RES003088 DE 2022 ¨POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CONFIGURADO EL DESEQUILIBRIO DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A EN LIQUIDACIÓN".

Posteriormente mediante Resolución No. RES003094 DE 2022 publicada el 07 de abril de 2022 se declaró la terminación de la existencia legal de Cruz Blanca Entidad Promotora De Salud S.A. En Liquidación, y se suscribió el contrato de mandato con representación No. CBL-026-2022, con el fin de continuar con las actividades remanentes.

En tal sentido a partir del 08 de abril del 2022, ATEB Soluciones Empresariales SAS, actúa exclusivamente en calidad de mandatario de Cruz Blanca EPS liquidada, mas no como sucesor, ni subrogatorio, tal como lo establece el parágrafo cuarto del artículo segundo del contrato de mandato con representación No. CBL-026-2022.

Que el 15 de marzo del 2023 se firmó otro si No 001 de modificación prorroga y adicción al contrato de mandato con representación No. CBL-026-2022 en un término de 12 meses, esto hasta el 08 de abril del 2024.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, me permito dar respuesta a su solicitud.

"(…) PRIMERO: OFICIAR a la superintendencia Nacional de Salud y/o al Dr. Felipe Negret Mosquera, en su condición de Liquidador de Cruz Blanca EPS S.A en Liquidacion, designado mediante la

Calle 60ª No. 5-51
Bogotá D.C
mandatocruzblanca@atebsoluciones.com
www.atebsoluciones.com

Resolución 008939 del 07 de octubre de 2019, o quien haga sus veces, a fin de que, en el término no mayor a cinco días (5) hábiles, contado a partir del día siguiente de recibir la correspondiente comunicación, se sirva remitir la copia de las Resoluciones RES002205 de 2019 (16/03/2020), por " MEDIO DE LA CUAL SE CALIFICA Y GRADUA UNA ACREENCIA OPORTUNAMENTE PRESENTADA CON CARGO A LA MASA DEL PROCESO LIQUDATORIO CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACION", y la RRP000601 de 2020 (16/10/2020) que resolvió ¨ EL RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO CONTRA LA RESOLUCION N.RES001205 DE 2020¨(…)"

Verificado en el sistema entregado por la extinta **CRUZ BLANCA EPS S.A ya LIQUIDADA** se evidencia que **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ LTDA** Identificado con **Nit 830117415**, se presentó al proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS S.A en Liquidación "Graduación y Calificación de Acreencia" asignándosele el número de radicación D16-000081 - D22-000009

Así mismo se indica que el proceso de Graduación y Calificación de Acreencias se desarrolló con apego a las disposiciones contenidas en Resolución 8939 de 2017 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y el Decreto 2555 de 2010, para lo cual el equipo liquidador realizo la validación de la información probatoria aportada como soporte de la acreencias, así como la revisión financiera, Administrativa, técnica y Jurídica con base en la documentación que reposa en los archivos físicos y magnéticos de la entidad, proceso requerido para realizar la Graduación y Calificación de créditos, proceso que concluyó con la expedición de la Resoluciones las cuales fueron notificadas conforme a lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del CPACA y los medios de notificación autorizados al momento de realizar la radicación de su crédito.

Por tanto, se adjunta Resoluciones **RES002205 de 2019** (16/03/2020), **RRP000601 de 2020** (16/10/2020), constancia de ejecutoria y la Resolución de cierre en donde se evidencia la culminación del proceso Liquidatorio, estos entregados por la Extinta **CRUZ BLANCA EPS S.A. LIQUIDADA**.

En los anteriores términos, damos respuesta de fondo a la petición señalada en el asunto y quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional que se requiera sobre el particular, la cual puede ser remitida al correo oficial de **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S** en calidad de mandataria de **CRUZ BLANCA EPS SA hoy LIQUIDADA**.

Cordialmente,

YULLY NATALIA ARROYAVE MORENO
Representante Legal ATEB Soluciones Empresariales SAS
En Calidad de Mandatario de Cruz Blanca EPS SA Liquidada

Calle 60ª No. 5-51
Bogotá D.C
mandatocruzblanca@atebsoluciones.com
www.atebsoluciones.com

RESOLUCIÓN RES001205 DE 2019
(16/03/2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CALIFICA Y GRADÚA UNA ACREENCIA OPORTUNAMENTE PRESENTADA CON CARGO A LA MASA DEL PROCESO LIQUIDATORIO CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN

FELIPE NEGRET MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.547.944 de Popayán (Cauca), liquidador de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, Identificada con el NIT: 830.009.783-0, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en la Resolución 8939 de 07 de octubre de 2019, expedida por la Superintendencia de Salud, en concordancia con el Decreto 2555 de 2010, Decreto ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero y demás normas relacionadas con el marco que regula los procesos de liquidación de liquidación forzosa administrativa;

CAPÍTULO PRIMERO
CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES DE CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN

Que mediante Resolución No. 8939 del 07 de octubre de 2019 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a **CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CRUZ BLANCA EPS S.A.** identificada con NIT No. **830.009.783-0**.

Que el artículo quinto de la citada resolución dispuso designar como Liquidador de **CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CRUZ BLANCA EPS S.A.** identificada con NIT No. **830.009.783-0**, a **FELIPE NEGRET MOSQUERA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **10.547.944** de Popayán (Cauca). Para que ejecute los actos necesarios para desarrollar y llevar hasta su culminación el proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN.**

Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de la entidad **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN,** Identificada con el NIT: 830.009.783-0, es el dispuesto en la Resolución 8939 del 07 de octubre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Salud, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010, el Decreto ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero y el articulo 20 y 70 de la ley 1116 de 2006.

Que el artículo 9.1.3.2.1 del decreto 2555 de 2010, dispone que dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de intervención forzosa administrativa para liquidar, se emplazara a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida, mediante la publicación de dos avisos en diarios de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la entidad. Lo dispuesto en el Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), y en el Decreto 2555 de 2010.

Que en cuanto a la naturaleza de los actos del liquidador establece el numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

> *"(...)* ***2. Naturaleza de los actos del liquidador.*** *Las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio.*
>
> *Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno (...).*

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN

Que el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010 dispone:

> *"Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se disponga la liquidación de la institución, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida y a quienes tengan en su poder, a cualquier título, activos de la intervenida, para los fines de su devolución y cancelación. Para tal efecto, se publicarán por lo menos dos (2) avisos en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la intervenida, el primero dentro de los primeros cinco (5) días posteriores a la fecha de la toma de posesión para liquidar y el segundo dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del primer aviso. Adicionalmente se divulgará, por lo menos una vez, a través de una cadena de televisión nacional o de un canal regional o en una emisora nacional o regional de radio, en horas de amplia audiencia y sintonía dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se dispuso la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el liquidador cuando lo considere conveniente, podrá utilizar además cualquier otro medio que en su concepto contribuya a cumplir la finalidad del emplazamiento.*
>
> *Copia del texto del aviso deberá fijarse además tanto en las oficinas principales como en las agencias y sucursales de la intervenida, en sitios a los cuales tenga fácil acceso el público, así como en la Secretaría General de la Superintendencia Financiera de Colombia y en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN.*
>
> *Cuando la liquidación se decida en el mismo acto que dispuso la toma de posesión, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente Decreto*

y las menciones hechas al agente especial en dicho artículo, se entenderán hechas al liquidador.

El aviso de emplazamiento contendrá lo siguiente:

a) La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la institución financiera en liquidación, a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el lugar que para el efecto se señale. Cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá presentarse el original del título. Sin embargo, cuando sea necesaria la presentación de un título valor en varios procesos liquidatorios a la vez, el original del título valor se aportará en uno de los procesos liquidatorios y en los demás se aportará copia del mismo con certificación del liquidador del proceso en que se haya aportado el original, sobre la existencia del mismo. Si los créditos constan en títulos valores que hayan sido depositados en depósitos centralizados de valores la existencia del crédito se probará con los documentos a que se refiere el artículo 26 de la Ley 27 de 1990. El depositante en el depósito centralizado de valores podrá autorizar al liquidador para solicitar el certificado a que se refiere dicho artículo;

b) El término para presentar las reclamaciones oportunamente, con la advertencia de que una vez vencido este, el liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna reclamación, y que las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones presentadas en forma extemporánea, que aparezcan debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales de la intervenida, serán calificadas como pasivo cierto no reclamado;

c) La advertencia sobre la cesión y terminación de los contratos de seguro, de conformidad con el artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

d) La advertencia sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase, así como la obligación de los secuestres, auxiliares de la justicia y demás funcionarios que tengan activos de la intervenida para que procedan de manera inmediata a entregarlos al liquidador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente Decreto"

Que, el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, dispone:

"El término que se establezca para presentar las reclamaciones no podrá ser superior a un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación del último aviso de emplazamiento".

Que en cumplimiento de las normas citadas, el día 15 de octubre de 2019 **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN** publicó en el diario La República, en cartelera de la entidad y en la página web https://www.cruzblanca.com.co/acreencias, primer aviso emplazatorio.

Que el 29 de octubre de 2019, se publicó segundo aviso emplazatorio en el diario la república, en los mismos términos de la publicación del 13 de agosto de 2019.

Que del 18 al 28 de octubre se publicaron dos (2) cuñas en el medio de difusión RCN RADIO, invitando a quienes se creen con derecho a presentar sus créditos al proceso liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACION.

Que en dichos avisos emplazatorios, se difundió el trámite que debían agotar los acreedores para efectuar la reclamación, a través del diligenciamiento de un formulario único de reclamación de acreencias que estuvo disponible en la página web de la entidad, https://www.cruzblanca.com.co/FormularioInscripcion en el link acreencias o por medio de la solicitud, en FORMA GRATUITA.

Que por medio de la página web de la entidad www.cruz blanca.com.co se dio amplia difusión a los formatos y la manera en que deberían ser diligenciados los formatos de reclamación. En igual sentido, se publicó un el "INSTRUCTIVO DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL" con la finalidad de instruir a todos los acreedores de CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN, acerca del proceso liquidatorio y, en especial, lo concerniente al periodo de reclamaciones y la forma de presentación de las mismas.

Que las reclamaciones remitidas por correo certificado, debían enviarse a la sede de CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACION ubicada en la Carrera 46 No. 91-78, Barrio la Castellana de la ciudad de Bogotá D.C, si la misma, fue enviada por correo certificado, se entiende oportuna, si y solo si, la oficina receptora del envío, registra timbre anterior a la hora y fecha límite de la recepción de acreencias oportunas, todas aquellas reclamaciones que registren fechas de envió posteriores al 02 de diciembre de la presente anualidad y hora posterior a las 5:00 P.M. se consideran reclamaciones extemporáneas. Lo anterior en los términos del artículo 10 de la Ley 962 de 2005.

Que el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010 señala el término de un (1) mes como periodo máximo para la presentación de reclamaciones con cargo a la masa de liquidación, el cual deberá ser contado a partir de la publicación del último aviso emplazatorio.

Que se otorgó la posibilidad de que los créditos que versan sobre incapacidades, licencias de maternidad y partos no viables pudieran presentarse sin cuantificar, o con valor indeterminado, toda vez, que **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, procederá a la calificación y graduación de dichos créditos conforme la normatividad vigente. Por lo anterior, se visualizarán acreencias con valor reclamado Indeterminado, cuantía que de ser viable se ajustará mediante acto administrativo motivado, una vez la reclamación haya surtido su trámite, si a ello hubiere lugar.

Así mismo, se relacionan con valor indeterminado, aquellas reclamaciones allegadas por correspondencia, en las que no aparezca señalada la cuantía del crédito o su determinación requiera efectuar un estudio de fondo de la reclamación, la cual únicamente se realizará en la etapa de calificación y graduación.

Que en el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2019 y el 02 de diciembre de 2019, se presentaron al proceso liquidatorio de CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN reclamaciones oportunas.

Que el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010 establece que vencido el término para la presentación de reclamaciones, se dará traslado común a todos los interesados por el término de cinco (5) días hábiles, para la presentación de objeciones acompañadas de las pruebas que tuvieren en su poder.

Que el día 09 de diciembre de 2019, **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN** publicó en la cartelera de la entidad, en la página web oficial https://www.cruz blanca.com.co y en la página No. 10 de la sección Asuntos legales, del diario La República, la Resolución No. A 00001 de 6 de diciembre de 2019 "*POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE EL CIERRE DEL PERIODO PARA RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES OPORTUNAS Y EL TRASLADO DE LOS CRÉDITOS RECLAMADOS DE MANERA OPORTUNA DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN de CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN*", entidad identificada con el NIT: 830.009.783-0".

Que una de las finalidades esenciales del proceso concursal y universal de liquidación de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, consiste en la cancelación del pasivo de forma gradual y rápida, razón por la cual se debe iniciar el proceso de calificación y graduación de las reclamaciones oportunamente presentadas ante la liquidación, teniendo en cuenta su naturaleza, cuantía, orden de restitución, prelación de pagos y privilegios de Ley.

Que para definir e implementar las políticas, estrategias y normas para el desarrollo del proceso de evaluación de las reclamaciones, se conformó, un equipo interdisciplinario para adelantar actividades orientadas al análisis, evaluación y seguimiento del proceso de calificación y graduación de las reclamaciones, quienes definieron las causales de rechazo que se deberían aplicar a cada una de ellas.

Que el estudio y calificación de las reclamaciones presentadas dentro de la oportunidad procesal, se efectuó preservando el principio de igualdad entre los acreedores y las disposiciones legales que confieren el Numeral 1 del Artículo 300 del Decreto Ley 663 de 1993[1], el Código Civil y demás normas concordantes en relación con los principios de prelación y privilegio de los créditos.

[1] ARTÍCULO 300. ETAPAS DEL PROCESO LIQUIDATORIO. <Artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> 1. En caso de liquidación, los créditos serán pagados siguiendo las reglas de prelación previstas por la Ley. En todo caso, si el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras paga el seguro de depósito o una garantía, el mismo tendrá derecho a obtener el pago de las sumas que haya cancelado, en las mismas condiciones que los depositantes o ahorradores. (...)

Que no podrán solucionarse obligaciones preexistentes a la orden de liquidación de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, sin que se haya cumplido con las exigencias legales y reglamentarias que regulan el proceso liquidatorio, de conformidad con lo establecido en la normatividad que lo rige.

Que no procede compensación automática por pasiva de obligaciones entre **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN** y sus acreedores, por constituir una modalidad de pago anticipado a favor de éstos, violatoria del principio de igualdad que debe existir entre todos y cada uno de ellos, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 301[2] del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

CAPÍTULO TERCERO
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREENCIAS

3.1 CALIFICACION Y GRADUACION

Que conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, el proceso de liquidación de una entidad es un proceso concursal y universal, que tiene por finalidad legal especial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido de los pasivos externos a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos; este procedimiento se basa en el principio racional de justicia que exige la igualdad entre los acreedores, sin perjuicio de las disposiciones que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos, en el que el carácter universal se deriva de la circunstancia de que el patrimonio mismo es una universalidad jurídica, en la cual el activo responde por el pasivo.[3]

Dentro del proceso liquidatorio, la totalidad de acreedores de CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACION se hallarán sujetos a las medidas que rigen la liquidación (principio de universalidad), por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad en liquidación; deberán hacerlo dentro del proceso de liquidación y de conformidad con las disposiciones que lo rigen (Derecho Concursal).

3.2 PRELACIÓN DE CREDITOS CON CARGO A LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN

La ley 1797 de 2016 *"POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES QUE REGULAN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*, dispuso en el Artículo 12, lo siguiente:

> *"Artículo 12. Prelación de créditos en los procesos de liquidación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, (IPS), y de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En los procesos de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud, incluso los que están en curso, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se aplicará la siguiente prelación de créditos, previo el cubrimiento de los recursos adeudados al Fosyga o la*

[2] ARTÍCULO 301 OTRAS DISPOSICIONES (...) 2. Compensación. Con el fin de asegurar la igualdad de los acreedores en el proceso liquidatorio, no procederá la compensación de obligaciones de la intervenida para con terceros que a su vez sean deudores de ella.
[3] Corte Constitucional, Sentencia T-258 de abril 12 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

entidad que haga sus veces si fuere el caso y los recursos relacionados con los mecánicos de redistribución de riesgo: a) Deudas laborales; b) Deudas reconocidas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. En estas deudas se incluirán los servicios prestados o tecnologías prestadas por urgencias, así no medie contrato. En estos casos la liquidación debe desarrollar la auditoría y revisión de cuentas para su reconocimiento en lo pertinente. c) Deudas de impuestos nacionales y municipales; d) Deudas con garantía prendaria o hipotecaria, y e) Deuda quirografaria."

3.3 PRELACIÓN PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DENTRO DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE CRUZBLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN.

Que de conformidad con lo expuesto, el pago de las obligaciones a cargo de **CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN**, reconocidas en la presente Resolución, se efectuará respetando estrictamente el siguiente orden o prelación de pago.

1. Gastos de administración de la liquidación.
2. Obligaciones causadas con posterioridad al inicio de la medida liquidatoria.
3. Sumas de dinero o bienes de propiedad de terceros, y/o créditos excluidos de la masa de la liquidación.
4. Los créditos oportunamente presentados a cargo de la masa de la liquidación.
5. Los créditos a cargo del pasivo cierto no reclamado (PACINORE).

3.4 CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE CRÉDITOS Y SU PAGO

Que de igual forma, las reclamaciones presentadas en las cuales se solicita el pago de la desvalorización monetaria causada con posterioridad al Decreto de supresión y liquidación, incluidas aquellas en las cuales la autoridad competente haya autorizado o autorice el pago de este concepto, son rechazadas, por cuanto no se relacionan con el objeto de la presente Resolución, pues en el proceso de liquidación el pago de la desvalorización monetaria está sujeto a las reglas establecidas en el Decreto 2555 de 2010.

Que las reclamaciones presentadas oportunamente, que pretendían que el Liquidador declare la existencia de un derecho incierto o no determinado, sin haber acudido previamente ante el juez competente, fueron rechazadas, por cuanto el Liquidador carece de competencia legal para pronunciarse sobre esta modalidad de reclamaciones

Que las reclamaciones presentadas oportunamente, relacionadas con procesos declarativos u ordinarios, iniciados con anterioridad a la orden de liquidación de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN**, y que tengan por objeto el reconocimiento de pretensiones cuya existencia o cuantía está supeditada a decisión judicial por no existir certeza sobre su existencia, cuantía, naturaleza y por no constituir obligaciones expresas, claras y exigibles a cargo de la entidad en liquidación, se tendrán como obligaciones litigiosas hasta tanto sean resultas de forma definitiva por el juez de conocimiento,

siempre y cuando reúnan los requisitos formales y procesales necesarios; en caso contrario se rechazaran.

Que los procesos ordinarios iniciados con posterioridad al 07 de octubre de 2019, fecha de inicio del proceso liquidatorio forzoso de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN,** ordenada por la Superintendencia de Salud, mediante Resolución 8939 del 07 de octubre de 2019, originados en hechos anteriores a dicha fecha, si no fueron reclamados oportunamente en los términos del Decreto – Ley 663 de 1993, el Decreto 2555 de 2010, los avisos emplazatorios señalados en esta Resolución y las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, no son objeto de calificación en este acto administrativo y en consecuencia los derechos que llegasen a reconocerse en sentencias judiciales, serán incorporados al proceso concursal, como pasivo cierto no reclamado.

Que de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 1 del Artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010, los procesos ejecutivos que remitieron los jueces de la República y las entidades que adelantan procesos de ejecución coactiva se tendrán como oportunamente presentados, siempre y cuando su incorporación se haya surtido antes del cierre de la etapa para la recepción de acreencias oportunas, esto es el 02 de diciembre de 2019, y en todo caso, el reconocimiento de estas reclamaciones también estará sujeto a las consideraciones generales para la aceptación, calificación y graduación establecidas en la presente Resolución, aplicables en lo pertinente a cada caso particular.

Que en cumplimiento de lo anterior, **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN,** dio aviso directamente a los Jueces de la República, y a las entidades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, mediante sendos oficios y a través de los avisos de emplazamiento publicados los días 15 y 29 de octubre de 2019, en los cuales expresamente se advirtió que todos los procesos ejecutivos y coactivos debían terminarse y remitirse al proceso liquidatorio.

Que en aplicación del Artículo 83, 209 y 228 de la Constitución Política, el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Artículo 11 Código General del Proceso y los Artículos 2304 a 2312 del Código Civil y en desarrollo de los principios orientadores de las actuaciones administrativas de economía, celeridad, eficacia, y prevalencia del derecho sustancial, las reclamaciones presentadas oportunamente al proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN,** por personas que actuaron a favor de un tercero sin acreditar la correspondiente representación legal, se tendrán como reclamaciones oportunamente presentadas por agentes oficiosos y la aceptación del crédito se hará en cabeza únicamente del titular de la acreencia, siempre y cuando hubiere existido ratificación expresa por el titular del derecho hasta antes de que se profiera el presente acto administrativo.

Que las reclamaciones presentadas para obtener la restitución de sumas cuyos titulares han fallecido o fallezcan durante el curso del proceso de liquidación, serán reconocidas en cabeza de su titular, sin perjuicio que el pago se efectúe a las personas que conforme a la Ley tengan derecho y acrediten previamente el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Que las reclamaciones sobre sumas de dinero o bienes sobre los cuales exista o llegaren a existir a favor de terceros órdenes de embargo proferidas por la autoridad competente, serán reconocidas, pero su pago estará condicionado al cumplimiento de la respectiva orden judicial.

Que en cumplimiento de las normas fiscales y del sistema integral de seguridad social vigentes al momento de efectuarse la cancelación de las obligaciones reconocidas total o parcialmente, los respectivos pagos se harán previas las deducciones que correspondan por concepto de impuestos nacionales y territoriales, tasas, contribuciones y además se verificará que se hayan efectuado el pago de las cotizaciones al sistema integral de seguridad social.

Que en desarrollo de lo establecido en el literal c) numeral 9) del Artículo 295 del Decreto Ley 663 de 1993 "Estatuto Orgánico del Sistema Financiero" norma que dispone el deber del Liquidador de realizar todos los actos necesarios para recuperar los activos que deben ingresar a la masa de la liquidación; en el Artículo 293 del Decreto – Ley 663 de 1993, que ordena que el proceso de liquidación debe ser gradual y rápido; en el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece el principio de economía y celeridad en las actuaciones administrativas, el pago de las reclamaciones reconocidas se realizará previa deducción de las deudas a favor de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN**, que adeuden los reclamantes de la liquidación, por cualquier concepto, tales como deudores varios y en general cualquier acreencia que exista a favor de la entidad y que esté determinada al momento de producirse el pago.

Cualquier hecho o pago que surja y que demuestre la existencia de un saldo a favor de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN**, a cargo de un acreedor reconocido, será descontado en el momento del pago, independientemente que dicho valor no se encuentre identificado y relacionado en la presente Resolución.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS CAUSALES DE RECHAZO DE LAS ACREENCIAS

Que en aras de la claridad y transparencia en la calificación y graduación de créditos de las reclamaciones presentadas al proceso liquidatorio, **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN** adoptó un catálogo de causales de rechazo integrado por conceptos de tipo administrativo, jurídico, médico y contable, las cuales fueron aplicadas según la clase de crédito reclamado de conformidad con los formatos y anexos exigidos publicados en la página web de la entidad https://www.cruzblanca.com.co/ para el proceso de radicación de acreencias.

Que de conformidad con lo anterior, el Liquidador, en uso de sus facultades conferidas por el ordenamiento legal, indicará al momento de calificar y graduar las acreencias presentadas de manera oportuna al proceso de liquidación de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, el tipo de glosa o concepto de rechazo de la acreencia presentada a fin de poder ejercer así el derecho constitucional de defensa.[4]

[4]CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

CAPÍTULO QUINTO
ACREENCIAS PRESENTADAS AL PROCESO LIQUIDATORIO Y RESULTADO DE SU ANÁLISIS

5.1 CARGA Y VALOR PROBATORIO DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES

Que el literal a) del Artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010, establece de manera clara y expresa que las personas que se consideren con derecho a formular reclamaciones contra la entidad en liquidación deben presentar reclamación de sus créditos, conforme los requisitos establecidos por el liquidador, en el lugar que para el efecto se señale. Para el caso de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, de conformidad con lo establecido en los avisos emplazatorios publicados los días 15 y 29 de octubre de 2019, tal como se expuso en el CAPITULO SEGUNDO del presente texto, los acreedores debían radicar sus reclamaciones en la carrera 46 no. 91-78, barrio la castellana de la ciudad de Bogotá D.C. En tal sentido el Liquidador estableció un equipo interdisciplinario que prestó asesoría a todos los interesados en relación con el proceso concursal adelantado, garantizando en tal forma el derecho constitucional de defensa y debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Que por expresa disposición legal, el aporte de pruebas o soportes documentales regulado en las normas establecidas en el Código General del Proceso debieron ser aportadas por los acreedores que concurrieron al proceso universal y concursal de liquidación de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, quienes en principio ostentan el deber legal de cumplir con la carga procesal de aportar las pruebas necesarias, siguiendo las reglas señaladas por la Ley, en especial los documentos que acreditaran la existencia y cuantía de las obligaciones que se pretenden hacer valer dentro del proceso; documentos que debieron cumplir con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para ser valorados y tenidos como tales.

Que con base en lo indicado es jurídicamente válido efectuar un proceso de auditoría integral a las reclamaciones presentadas oportunamente al proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, en especial, si se tiene en cuenta que es imperativo que el liquidador adquiera certeza sobre la procedencia o validez de todas y cada una de las reclamaciones que califica.

Que dentro de un proceso concursal y universal, el liquidador sólo puede pronunciarse acerca de reclamaciones que contengan obligaciones expresas, claras y exigibles que reúnan las condiciones

---

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a Leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la Ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

establecidas para el título ejecutivo en el artículo 422 y siguientes del Código General del Proceso. En consecuencia, dentro de las facultades legales del Liquidador no se encuentra la de controvertir, dirimir y determinar la existencia de un derecho que no contiene las características para ser un título ejecutivo.

5.2. PRESUPUESTOS PARA EL ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN INDIVIDUAL DE LAS ACREENCIAS PRESENTADAS DE MANERA OPORTUNA AL PROCESO.

Que en el presente acto, el Liquidador se pronunciará sobre una reclamación presentada de manera oportuna al proceso liquidatorio, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores. Así las cosas, para el análisis individual de cada acreencia se tuvieron en cuenta en forma general los siguientes preceptos:

5.2.1 De la Fuente de la Obligación Reclamada: Según la fuente de la obligación se determinará su prelación de lo cual se ocupa el Capítulo Tercero de la presente Resolución, y de acuerdo con la fuente de los recursos con los cuales se atenderá su pago, se establece si el crédito se atenderá con cargo a recursos externos, o a cargo de la masa, o su rechazo parcial o total.

5.2.2 De la capacidad para ser parte, representación de la persona jurídica reclamante y la legitimación en la causa por activa: En cuanto al presupuesto procesal capacidad para ser parte, se encuentra que las personas jurídicas y naturales que presentaron sus reclamos y a quienes se les reconoce personería para actuar dentro del presente proceso están debidamente representadas, por quien goza de plena capacidad (legal y negocial) por ser mayor de edad y no encontrarse impedido(a) para actuar y acredita en debida forma su condición.

5.2.3. Respecto de los presupuestos de cada reclamación o petición, en cuanto a la forma, se encuentra que están debidamente cumplidos, por definir las partes y soportar la existencia y representación legal de la persona jurídica o natural reclamante, su domicilio y ubicación, así como determinar las peticiones y los hechos en los que se fundamentan, citar parcialmente el amparo del derecho sustento de la reclamación y aportar prueba sumaria de los créditos considerados a su favor.

5.2.4. Acerca de la competencia, es justamente este proceso la única instancia de reclamación, al cual acudió el acreedor dentro del término señalado para el efecto.

5.2.5. Sobre los presupuestos materiales o sustanciales de la acción, la persona jurídica reclamante se encuentra legitimada en la causa por parte activa, en virtud de la relación jurídico sustancial vinculante con la reclamada derivada de obligaciones ciertas, claras, expresas y exigibles.

5.2.6. En lo referente al interés para obrar o legitimación para actuar, se tiene que dadas las condiciones entre reclamante y reclamada, a aquella le asiste un derecho, del cual surgen obligaciones reclamadas como pendientes, sobre las que se entrará a determinar su procedencia actual.

5.2.7. Del mérito ejecutivo: Ha de dejarse constancia, que en efecto las obligaciones que se reconozcan, bien sea a cargo o no de la masa, provienen de la deudora.

5.3. CONDICIONES RELACIONADAS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA EL CREDITO RECLAMADO

Que de conformidad con las normas que rigen la actuación administrativa, toda decisión jurídica deberá estar sustentada en los soportes documentales encontrados en el archivo de la entidad que emite la decisión, para el caso en particular los archivos de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, con las deficiencias propias del mismo, así como por los documentos aportados por el reclamante, elementos estos que para el caso en particular se han tenido en cuenta para efectos de emitir el presente Acto Administrativo.

Que en el trámite del proceso concursal, quien ostenta la carga de la prueba y en consecuencia está obligado a aportar los soportes o pruebas que quiera hacer valer dentro del proceso liquidatorio, no es otro más que el acreedor, quien bajo la órbita procesal es el llamado a desvirtuar la presunción legal contenida en el parágrafo único del artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, esto es "*la duda del liquidador*".

Que en todo caso, se ha dispuesto de un equipo humano y tecnológico amplio para la realización de una correcta auditoría a los documentos que fueron aportados por los presuntos acreedores. De la labor desplegada se evidenció múltiples falencias en los documentos y sus soportes, ya que los mismos en varios eventos no estaban completos y dicha falencia no fue subsanada por el presunto acreedor al momento de radicar su acreencia en el periodo establecido para ello.

Que el Liquidador, con la finalidad de brindar seguridad jurídica, proteger el derecho de igualdad de los acreedores y observar las disposiciones especiales y preferentes que rigen el proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, y teniendo en cuenta que la carga de la prueba corresponde en este caso al presunto acreedor, en virtud del principio general del derecho "*affirmanti non neganti incumbit probatio*", se pronunciará frente a cada acreencia reclamada teniendo en cuenta que los soportes de cada una de las acreencias sea completo y genere la certeza requerida para determinar la existencia y naturaleza del crédito respecto de la entidad en liquidación; caso contrario, de no ser completos o generar duda, el Liquidador rechazará la presunta acreencia.

CAPÍTULO SEXTO
CASO EN CONCRETO

Inicialmente se hace necesario aclarar que, verificado el expediente de la reclamación, se identifica que el reclamante no corresponde a **IMPECABLE LAVANDERÍA HOSPITALARIA S.A.S**, con NIT **830.117.415,** sino a **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ** identificada con NIT **860.058.033,** por lo que se procedera a hacer la modificación en este sentido.

Qué **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ** identificada con NIT **860.058.033**, presentó al proceso liquidatorio de manera oportuna la reclamación **D16-000081**, en la cual reclama proceso ejecutivo 2016-248 adelantado en el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, sin que dentro del mismo se haya llegado a emitir orden de seguir adelante con la obligación, por lo que se procedió a revisar el origen de la obligación, correspondiente al reconocimiento de la contraprestación derivada del contrato u orden de servicio suscrito con el reclamante.

Que los contratos celebrados por CRUZ BLANCA EPS SA, como entidad privada, se rigieron bajo las normas que regulan las relaciones contractuales dispuestas en el Código Civil y el Código de Comercio, tales como:

> Artículo 1494 del código civil "Las *obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.*
>
> Artículo 1495, del Código Civil dispone que el *contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas."*

Que al tenor del decreto 2555 del 2010, artículo 9.1.3.2.4, en su parágrafo, el cual dispone: *"Si el liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier reclamación prevista en el presente Libro, la rechazará".*

En consecuencia , el liquidador en el marco del proceso de liquidación forzosa administrativa, tiene la condición de auxiliar de justicia, y debe verificar el cumplimiento de la exigencia legal de aportar los documentos soporte de la obligación, teniendo en cuenta que los acreedores que concurren al proceso, tienen el deber de cumplir la carga procesal de aportar las pruebas necesarias, siguiendo las reglas señaladas por la ley, los documentos que acrediten la existencia y la cuantía de las obligaciones que pretenden hacer valer dentro del proceso, so pena, de sufrir las consecuencias desfavorables por la omisión o defecto en el cumplimiento de la mencionada carga procesal.

Así, deberá ser probada la prestación efectiva del servicio o el suministro de los bienes objeto de la reclamación, por medio de acta de recibo de bienes, informes de supervisión, certificado de recibo de satisfacción de los servicios prestados/bienes suministrados o contrato, según sea el caso, para resolver toda duda sobre la procedencia o validez de la reclamación.

En este caso se evidencia que Cruz Blanca en calidad de deudor solidario no fue notificado para la aprobación de las modificaciones establecidas en los Otrosi, suscritos por las partes, y si bien cierto la solidaridad pactada establecida en el contrato inicial y sus prorrogas estableció una exoneración de la obligación de la partes de comunicar y someter a consideración dichas modificaciones, así

mismo se evidencia dentro del contenido del contrato la facultad del arrendador de ceder libremente los derechos del contrato, situación jurídica que solo producirá efectos a partir de la notificación de la cesión, requisito que no se cumplió frente a Cruz Blanca EPS S.A en calidad de deudor solidario.

En consideración a lo referido, del proceso de graduación y calificación se concluye:

Ítem	Número Contrato	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Aprobado	Causal de Rechazo
1	1	$ 150.119.872,00	$ 150.119.872,00	$0,00	1.2, 1.14, 1.30, 1.31, 1.35, 1.40, 6.6, 6.9, 6.10

Valor Total Reclamado al Proceso Liquidatorio	$150.119.872,00
Objetado en la Liquidación	$150.119.872,00
Valor a Reconocer en el Proceso Liquidatorio	$ 0,00

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR la identificación del reclamante dentro de la acreencia D16-000081, quien pasará a ser **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ** identificada con NIT **860.058.033.**

ARTÍCULO SEGUNDO RECHAZAR TOTALMENTE la acreencia presentada de manera oportuna por **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ** identificada con NIT **860.058.033**, como crédito de **PRELACIÓN E**, por valor **CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($150.119.872,00)**, así:

No.	Radicado	Fecha	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Aceptado	Causales de Rechazo
1	D16-000081	2/12/2019	$150.119.872,00	$150.119.872,00	$ 0,00	1.2, 1.14, 1.30, 1.31, 1.35, 1.40, 6.6, 6.9, 6.10

ARTÍCULO TERCERO. - DEDUCIR del valor reconocido, las sumas de dineros que el acreedor haya obtenido en calidad de anticipo o pago parcial y se encuentre contabilizado. Igual procedimiento se aplicará al valor reconocido a favor de otros acreedores que a la fecha estén debidamente registradas

contablemente por concepto de impuestos nacionales, territoriales, tasas, contribuciones, aportes parafiscales, estampillas, publicaciones y demás descuentos de Ley al momento del pago de sus créditos válidamente reconocidos.

ARTÍCULO CUARTO. - Cualquier hecho o pago que surja y que demuestre la existencia de un saldo a favor de **CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN** a cargo del acreedor reconocido, será descontado en el momento del pago, independientemente que dicho valor no se encuentre identificado y relacionado en la presente Resolución. En los casos en que se establezca esta situación, se expedirá el respectivo acto administrativo motivado que podrá ser controvertido a través del recurso de reposición que otorga la Ley a cada acreedor.

ARTICULO QUINTO. - ADVERTIR que no se reconocen intereses, indexaciones y demás sanciones, causados con posterioridad al inicio del proceso de liquidación, por los motivos señalados en la parte considerativa de esta Resolución.

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR la presente Resolución a **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ**, con NIT No. **860.058.033**, de conformidad con lo señalado en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. En el evento de no ser posible la notificación personal o por aviso del presente acto administrativo, efectúese la notificación mediante publicación en la página https://www.cruzblanca.com.co/, conforme lo señalado en el inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para lo cual se dejara constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra la presente Resolución ÚNICAMENTE procede el recurso de reposición, conforme lo señalado en el inciso 2 numeral 2 del artículo 295 del Decreto-Ley 663 de 1993 "Estatuto Orgánico del Sistema Financiero" y el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante la entidad en liquidación, representada legalmente por el Apoderado General del Agente Liquidador de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN**, a través de su representante legal o apoderado debidamente constituido (sólo abogado en ejercicio), radicación que deberá realizarse en la Calle 77 No. 16a-23, de la ciudad de Bogotá D.C.

PARÁGRAFO. Si el recurso de reposición se remite por correspondencia o correo certificado, se pondrá como fecha de radicación la del día de llegada a la oficina de recepción ubicada en la Calle 77 No. 16a-23, de la ciudad de Bogotá D.C. Si el recurso de reposición se radica o llega después del vencimiento del término legal para interponerlo, será rechazado por no haberse presentado dentro del término legal establecido.

ARTÍCULO OCTAVO. De los recursos presentados se correrá traslado a los interesados, en la oficina principal de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN**, ubicada en la Calle 77 No. 16a-23 de la ciudad de Bogotá D.C, durante los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término para su presentación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9.1.3.2.6 del Decreto 2555 de 2010.

ARTÍCULO NOVENO. Reconocer personería jurídica al Dr. **FRANCISCO JOSE AYALA SAN MIGUEL**, con cédula de ciudadanía No. **79.785.547,00** y tarjeta profesional de abogado No. **101.658** del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ**

Dada en Bogotá D.C, a los 16 días del mes de marzo de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador de
CRUZ BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN

RESOLUCIÓN RRP000601 DE 2020
(16/10/2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. RES001205 DE 2020

FELIPE NEGRET MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía no. 10.547.944 de Popayán (Cauca), liquidador de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN**, identificada con NIT **830.009.783-0**, en ejercicio de las facultades legales, en especial las contenidas en la Resolución 8939 de 07 de octubre de 2019, expedida por la Superintendencia de Salud, en concordancia con el Decreto 2555 de 2010, Decreto Ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas relacionadas con el marco que regula los procesos de liquidación forzosa administrativa; procede a decidir el recurso de reposición presentado por **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S**, identificada con NIT no. **860.058.033**, contra la Resolución **RES001205 de 2020**, por medio de la cual se califica y gradúa una acreencia oportunamente presentada con cargo al proceso liquidatorio de Cruz Blanca E.P.S S.A en Liquidación, presentada a través de la reclamación **D16-000081**.

CAPÍTULO PRIMERO
CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES DE CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN

Que mediante Resolución No. 8939 del 07 de octubre de 2019 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a **CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CRUZ BLANCA E.P.S. S.A**. identificada con NIT No. **830.009.783-0**.

Que el artículo quinto de la citada resolución dispuso designar como Liquidador de **CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.** identificada con NIT No. **830.009.783-0**, a **FELIPE NEGRET MOSQUERA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **10.547.944** de Popayán (Cauca). Para que ejecute los actos necesarios para desarrollar y llevar hasta su culminación el proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN.**

Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de la entidad **CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN,** Identificada con el NIT: 830.009.783-0, es el dispuesto en la Resolución 8939 del 07 de octubre de 2019, expedidas por la Superintendencia de Salud, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010, el Decreto ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero y el articulo 20 y 70 de la ley 1116 de 2006.

Que en cumplimiento del artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010, **CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN** publicó el día 15 de octubre de 2019 en el diario La República, en cartelera de la entidad y en la página web https://www.cruzblanca.com.co/acreencias, primer aviso emplazatorio.

Que el 29 de octubre de 2019, se publicó segundo aviso emplazatorio en el diario La República, en los mismos términos de la publicación del 13 de agosto de 2019.

Que del 18 al 28 de octubre se publicaron dos (2) cuñas en el medio de difusión RCN RADIO, invitando a quienes se creen con derecho a presentar sus créditos al proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN**.

Que en dichos avisos emplazatorios, se difundió el trámite que debían agotar los acreedores para efectuar la reclamación, a través del diligenciamiento de un formulario único de reclamación de acreencias que estuvo disponible en la página web de la entidad, https://www.cruz blanca.com.co/Formulario Inscripción en el link acreencias o por medio de la solicitud, en FORMA GRATUITA.

Que por medio de la página web de la entidad www.cruz blanca.com.co se dio amplia difusión a los formatos y la manera en que deberían ser diligenciados los formatos de reclamación. En igual sentido, se publicó un el "INSTRUCTIVO DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL" con la finalidad de instruir a todos los acreedores de **CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN**, acerca del proceso liquidatorio y, en especial, lo concerniente al periodo de reclamaciones y la forma de presentación de las mismas.

Que las reclamaciones remitidas por correo certificado debían enviarse a la sede de **CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACION** ubicada en la Carrera 46 No. 91-78, Barrio la Castellana de la ciudad de Bogotá D.C, si la misma, fue enviada por correo certificado, se entiende oportuna, si y solo si, la oficina receptora del envío registra timbre anterior a la hora y fecha límite de la recepción de acreencias oportunas, todas aquellas reclamaciones que registren fechas de envió posteriores al 02 de diciembre de la presente anualidad y hora posterior a las 5:00 P.M. se consideran reclamaciones extemporáneas. Lo anterior en los términos del artículo 10 de la Ley 962 de 2005.

Que se otorgó la posibilidad de que los créditos que versan sobre incapacidades, licencias de maternidad y partos no viables pudieran presentarse sin cuantificar, o con valor indeterminado, toda vez que, **CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN**, procederá a la calificación y graduación de dichos créditos conforme la normatividad vigente.

Así mismo, se relacionarán con valor indeterminado, aquellas reclamaciones allegadas por correspondencia en las que no aparezca señalada la cuantía del crédito o su determinación requiera efectuar un estudio de fondo, el cual únicamente se realizará en la etapa de calificación y graduación.

Que en el período comprendido entre el 30 de octubre de 2019 y el 02 de diciembre de 2019, se presentaron al proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN** reclamaciones oportunas.

Que el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010 establece que, vencido el término para la presentación de reclamaciones, se dará traslado común a todos los interesados por el término de cinco (5) días hábiles, para la presentación de objeciones acompañadas de las pruebas que tuvieren en su poder.

Que el día 09 de diciembre de 2019, **CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN** publicó en la cartelera de la entidad, en la página web oficial https://www.cruz blanca.com.co y en la página No. 10 de la sección Asuntos legales, del diario La República, la Resolución No. A 00001 de 6 de diciembre de 2019 "*POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE EL CIERRE DEL PERIODO PARA RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES OPORTUNAS Y EL TRASLADO DE LOS CRÉDITOS RECLAMADOS DE MANERA OPORTUNA DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACION*", entidad identificada con el NIT: 830.009.783-0".

Que la entidad tomó un término prudencial para recepcionar las reclamaciones enviadas por correo certificado dentro del periodo de radicación de acreencias oportunas, y por medio de la Resolución No. RES-00200 del 24 de enero de 2020, adicionó la Resolución No. A00001 de 6 de diciembre de 2019, con los créditos reclamados de manera oportuna y enviados por correo certificado al proceso de liquidación de CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, la cual se publicó en la cartelera de la entidad y en la página web oficial https://www.cruzblanca.com.co, y se le dio traslado común a los interesados, a fin de que cualquiera de ellos pudiera objetar las reclamaciones presentadas, acompañando las pruebas que tuviere en su poder.

Que el día 22 de noviembre de 2019 **CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN**, publicó en la página no. 06 de la Sección Asuntos Legales del diario La República, la Resolución No. A-00200 del 24 de enero de 2020 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA LA RESOLUCIÓN A-00001 DE 2019 QUE DISPUSO EL CIERRE DEL PERIODO PARA RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES OPORTUNAS Y EL TRASLADO DE LOS CRÉDITOS RECLAMADOS DE MANERA OPORTUNA DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACION"*.

CAPÍTULO SEGUNDO
ANTECEDENTES

2.1 De lo solicitado en la presentación del crédito:

COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S, identificada con NIT no. **860.058.033**, presentó al proceso liquidatorio de manera oportuna la reclamación **D16-000081** por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($150,119,872.00)**, mediante la cual solicita el reconocimiento del crédito derivado de deuda por proceso ejecutivo conforme se expresó en el FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN, en el cual, además, autorizó a la entidad en liquidación el envío de notificaciones respecto de su acreencia por vía NOTIENECORREO@CRUZBLANCA.COM.

2.2 De la Resolución que califica y gradúa una acreencia oportunamente presentada:

Mediante Resolución No. **RES001205 de 2020**, *"POR MEDIO DE LA CUAL SE CALIFICA Y GRADÚA UNA ACREENCIA OPORTUNAMENTE PRESENTADA CON CARGO A LA MASA DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN"*, se dispuso lo siguiente:

"ARTÍCULO SEGUNDO RECHAZAR TOTALMENTE la acreencia presentada de manera oportuna por COLOMBIANA DE FINCA RAIZ identificada con NIT **860.058.033**, como crédito de PRELACIÓN E, por valor **CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($150.119.872,00)**, así:

No.	Radicado	Fecha	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Aceptado	Causales de Rechazo
1	D16-000081	2/12/2019	$150.119.872,00	$150.119.872,00	$ 0,00	1.2, 1.14, 1.30, 1.31, 1.35, 1.40, 6.6, 6.9, 6.10

Que la resolución antes citada, fue notificada a la reclamante mediante mensaje de datos remitido el 1 de julio de 2020, a la cuenta de correo electrónico autorizada por el reclamante; dicho mensaje de datos fue abierto, según la certificación generada por Certi-email, operador de correo electrónico certificado.

CAPÍTULO TERCERO
DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Que mediante comunicación radicada el 15 de julio de 2020 bajo el consecutivo interno **RR RES001205**, la reclamante **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S**, identificada con NIT no. **860.058.033**, presentó recurso de reposición en término contra la Resolución No. **RES001205 de 2020**.

Que conforme lo previsto en el artículo 9.1.3.2.6 del Decreto 2555 de 2010, de los recursos de reposición presentados se corrió traslado mediante publicación en la página web de la entidad.

3.1. Del fundamento del recurso de reposición:

Como razones de inconformidad, la recurrente adujo las siguientes:

VALOR DE LA ACREENCIA RECONOCIDO EN EL PROCESO LIQUIDATORIO NO COINCIDE CON EL VALOR RECLAMADO EN EL PROCESO EJECUTIVO ORIGEN DE LA MISMA.

En primer lugar se debe señalar que el valor reclamado en el proceso ejecutivo 2016-248 que cursaba en el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual fue remitido a dicho proceso liquidatorio es superior al señalado en la resolución en mención. En efecto, los valores reclamados en dicho proceso ejecutivo fueron:

Los conceptos aceptados dentro del mandamiento de pago de dicho proceso ejecutivo, según autos de mayo 4 y 24 de 2018, son:

Concepto mes / año	Valor $	
sep-15	$15.858.514,00	Más interés moratorio
oct-15	$15.858.514,00	Más interés moratorio
nov-15	$16.914.692,00	Más interés moratorio
dic-15	$16.914.692,00	Más interés moratorio
ene-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
feb-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
mar-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
abr-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
may-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
jun-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
jul-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
ago-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
sep-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
oct-16	$16.914.692,00	Más interés moratorio
nov-16 (medio mes)	$8.457.346,00	Más interés moratorio
TOTAL	$243.150.678,00	Más interés moratorio sobre cada canon

2) INTERES MORATORIO (causado a diciembre 2 de 2019): $247'180.808 al momento de ser remitido el expediente del Juzgado al proceso liquidatorio.

3) CLAUSULA PENAL. $ 31.717.028,00

4) SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: $ 25.645.941,00, TOTAL: $ 548'694.955,00 (a diciembre 02 de 2019).

Como la base de la creencia (Reclamación D16-000081) fue la remisión directa que hiciera el Juzgado de Origen del expediente del proceso ejecutivo al proceso liquidatorio, no tenía allí mi poderdante COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S la oportunidad de señalar el valor de la deuda, incluyendo capital (cánones y servicios públicos debidos), intereses moratorios e indemnizaciones adicionales, ni había en dicho expediente liquidación judicial de dicha deuda, tan solo los conceptos admitidos en el respectivo mandamiento de pago. Sin embargo, la documentación que reposa en el expediente (incluyendo reconocimiento de tales valores en el respectivo mandamiento de pago) es suficiente prueba de los valores reclamados anteriormente señalados.

No obstante, lo cual COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S, a través de apoderado, hizo la debida aclaración sobre el concepto y monto de los valores reclamados, en radicación concomitante que hizo directamente, bajo el numero D22-000009 que cursa en dicha liquidación, señalando allí de manera clara y explícita que la misma incluía los conceptos ya previstos en el proceso ejecutivo atrás mencionado, y otros conceptos derivados de la responsabilidad civil extracontractual. Al mencionar dicho proceso ejecutivo se razonó de manera clara y concreta el monto de la deuda cursante en dicho proceso ejecutivo, consecuencia de lo cual, tales montos deben ser reconocidos en el proceso liquidatorio, respecto a la reclamación D16-000081.

LA OBLIGACION COBRADA EN EL PROCESO EJECUTIVO ES OPONIBLE A CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACION.

En la resolución de la referencia se argumenta, dos situaciones: 1) Que hubo otro si al contrato del que surge la obligación el cual no fue notificado a Cruz Blanca, como deudor solidario; 2) Que no fue notificada la cesión del contrato.

Respecto al primer punto "Que hubo otro si al contrato del que surge la obligación el cual no fue notificado a Cruz Blanca, como deudor solidario", cabe repetir lo dicho en la misma resolución, a saber, que en el contrato inicial y sus prórrogas, se establece una exoneración de la obligación de las partes de comunicar y someter a consideración del deudor solidario, las modificaciones del contrato (clausula vigésimo quinta del contrato).

En todo caso en la resolución no se da argumento jurídico de fondo para sostener el por qué la firma de otro si con uno de los deudores, implicaría liberación del otro deudor solidario de las obligaciones del contrato. Este fenómeno de liberación del deudor solidario respecto a la obligación original, solo podría darse a la luz del fenómeno de la novación, según lo establece el artículo 1704 del Código Civil. Sin embargo, en el caso de la firma de otro sí, no se produce el fenómeno de la novación a la luz de lo señalado en el art 1705 del Código Civil, que señala:

Articula 1705. OBLIGACION DE LOS CODEUDORES. Cuando la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores subsidiarios y solidarios podrán ser obligados pasta concurrencia de aquello que en ambas obligaciones convienen.

En el caso concreto es claro que el otro si al que hace referencia la Resolución impugnada no alude a un elemento estructural de la obligación, ya que este hace referencia únicamente al monto del canon, pero no a elementos estructurales de la obligación como la naturaleza del tipo contractual y las obligaciones de las partes etc. En consecuencia, el deudor solidario, aun existiendo otro si al contrato no suscrito por el sigue vinculado al mismo al valor del otro si, a la voz de lo dispuesto en la cláusula vigésimo quinta del contrato.

En cuanto al segundo punto de la argumentación del Liquidador en la resolución objeto de impugnación, a saber, "no fue notificada la cesión del contrato", en la misma solo se alude la cláusula décimo-octava del contrato, que señala que la cesi6n de derechos por parte del arrendador producirá efectos respecto al arrendatario, a partir de la fecha de la comunicación certificada al mismo.

Sin embargo, no se menciona lo señalado en la Ultima página del contrato, respecto al deudor solidario (clausula vigésimo sexta) a saber:

"CESION DEL CONTRATO. Aceptamos desde ahora cualquier cesión que el Arrendador haga respecto del presente contrato y aceptamos expresamente que la notificación de que trata el artículo 1960 del Código Civil se surta con el envió por correo certificado y a la dirección que registramos al

lado de nuestra firma, de la copia de la respectiva nota de cesión acompañada de la copia simple del contrato"

Ahora bien, si se observa el contenido del contrato de la referencia, en el espacio de firmas, se observa que el deudor solidario CRUZ BLANCA nunca identifico la dirección donde enviar el correo certificado mencionado en la cláusula anteriormente citada, con lo cual impidió el cumplimiento del trámite señalado para la notificación de la cesión, tal como lo señala la clausula atrás citada.

Por otra parte, tenemos que el artículo 1960 del Código Civil, señala:

"Articulo 1960. NOTIFICACION 0 ACEPTACION. La sesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este." (resaltado es nuestro)

Como se procede a demostrar en el siguiente acápite CRUZ BLANCA EPS ha aceptado expresamente la calidad de deudor solidario en el mencionado contrato

3. CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACION SE RECONOCIO EXPRESAMENTE COMO DEUDOR SOLIDARIO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA, POR COMUNICACION DEL 28 DE MARZO DE 2019.

Téngase en cuenta lo señalado en el artículo 1962 del Código Civil:

Artículo 1962. ACEPTACION. La aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como la Litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc.

En efecto, para el caso concreto, tenemos que CRUZ BLANCA EPS aceptó expresamente su calidad de deudor solidario respecto al contrato que fundamenta la acreencia, por comunicación calendada el 28 de marzo de 2019, enviada por la Sra. Yomaira Andrea Gómez Guzmán, Directora Administrativa de Cruz Blanca EPS, dirigida al representante Legal de COLOMBIANA DE FINCA RAÍZ LTDA., Ser Jonathan Jordán R, en la que solicita expedición de paz y salvo acerca del inmueble ubicado en la carrera 41 # 165-27, contrato 096 cuyo arrendatario fue la empresa IMPECABLE LAVANDERÍA HOSPITALARIA LTDA, la cual manifiesta que ya entrego dicho inmueble y todo lo referente al tema contractual se encuentra al día, nuestra solicitud se sustenta teniendo en cuenta que Cruz Blanca EPS, es codeudor solidario". En consecuencia se da la aceptación de que CRUZ BLANCA EPS en liquidación siguió vinculada al contrato de la referencia aun después de ser cedido el mismo por el arrendador original a COLOMBIANA DE FINCA RAIZ LTDA, y que era esta última compañía la nueva arrendadora del contrato. En consecuencia, se configura la aceptación del contrato por parte del codeudor solidario, a la luz de lo señalado en el art 1962 del Código Civil.

Con todo, dicha comunicación constituye prueba de la obligación, a la luz de lo previsto en el art 1757 y ss. del Código Civil y 260 y ss. del CGP.

Esta comunicación NO obra en el expediente del proceso ejecutivo base de la reclamación de la referencia, ya que la misma se dio de manera sobreviniente al inicio del proceso (en el año 2016). Tampoco pudo aportarse al mismo por la parte demandante (COLOMBIANA DE FINCA RAÍZ SAS), toda vez que no se pudo notificar a uno de los deudores solidarios dentro de dicho proceso, es decir, a Impecable lavandería, y en consecuencia no se realizó el traslado a la parte demandante de las excepciones de los demandados, que era la oportunidad procesal para aportar dicha documentación.

En consecuencia, esta comunicación no aparece dentro de la reclamación D16-000081, pues se reitera, la misma tiene como Única base la remisión que por oficio hiciera el Juzgado 35 Civil del Circuito del expediente al proceso liquidatorio, remisión respecto a la cual Colombiana de Finca Raíz no podría incluir ningún documento, ni influir en la misma ni en la forma en que esta se radic6 ante la liquidación.

Sin embargo, COLOMBIANA DE FINCA RAIZ SI APORTO OPORTUNAMENTE AL PROCESO LIQUIDATORIO, dicha comunicación, en la radicación concomitante que hizo directamente, bajo el numero D22-000009 que cursa en dicha liquidación, señalándola claramente como ANEXO 14 a dicha liquidación, en archivo PDF denominado "D022-860058033_14_CartaCruzBlanca-PazYSalvo". En consecuencia, debe entenderse aportada oportunamente dicho documental al proceso liquidatorio en mención.

Con todo se Anexa a la presente comunicación copia escaneada de dicha comunicación, a afectos de que se tenga como probada la aceptación de parte de Cruz Blanca EPS en liquidación como deudor solidario en el contrato y otro sí, que da origen a la reclamación de la referencia.

CONCLUSIONES.

1. El valor actual de la acreencia es $ 548'694.955,00 (a diciembre 02 de 2019), o la suma que figure probada en la documental que hace parte del expediente judicial que sirve de base a la reclamación de la referencia, y no la suma de $150'199.872.00, como señala la resolución impugnada.

2. Cruz Blanca EPS es deudor solidario respecto al contrato original y el otro sí que lo acompaña, en virtud de lo señalado en la cláusula vigésimo quinta del contrato y lo establecido en el artículo 1705 del Código Civil

3. La aceptación de la cesión del contrato ha sido aceptada expresamente por CRUZ BLANCA EPS en liquidación, tal como lo señala la comunicación enviada al Acreedor Colombiana de Finca Raíz, el 28 de marzo de 2019.

CAPÍTULO CUARTO
CONSIDERACIONES PARA LA DECISIÓN DEL RECURSO

Dando trámite al recurso de reposición interpuesto por el señor CARLOS ALBERTO LARA GPMEZ actuando en calidad de Apoderado Sustituto de **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S** contra la

Resolución N° **RES001205 DEL 16 DE MARZO DE 2020**, esta entidad procede a revisar nuevamente la acreencia **D16-000081**, teniendo en cuenta los documentos aportados en el recurso de reposición, y de los argumentos de inconformidad manifestados por el recurrente en su escrito, se procede a resolver el recurso en los siguientes términos:

1. Es pertinente aclarar que efectivamente al revisar el expediente del proceso ejecutivo 2016-00248 proveniente del Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá se encuentra auto de mandamiento de pago; sin embargo, en el mismo proceso no se encontró Auto que ordenara seguir adelante con la ejecución, razón suficiente que permite que el Agente Liquidador entrar a analizar y auditar la presunta obligación, pues de recordar que el Agente Liquidador conforme al proceso de liquidación forzosa administrativa tiene la condición de auxiliar de la justicia y juez del concurso.

2. Por lo anterior, al realizar nuevamente la auditoria de la acreencia **D16-000081** y conforme a los hechos que el recurrente argumenta en su escrito, es pertinente indicar que está entidad se mantiene en su posición de rechazar la reclamación, pues desde un principio se ha evidenciado que la cesión que se realizó al acreedor **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S.** no se dio dentro de los términos pactados dentro del contrato de arrendamiento acatando en especial la cláusula décima octava, de lo cual no se desprendería ninguna responsabilidad por parte de CRUZ BLANCA EPS pues la misma cesión no produjo efectos jurídicos.

3. También se recalca que el Otro si por medio del cual se modificó el valor del canon de arrendamiento y su forma de pago no fue suscrito por CRUZ BLANCA ni puesto en conocimiento.

4. El recurrente afirma que en el contrato de arrendamiento CRUZ BLANCA EPS actuando en calidad de tercero solidario no suministro la información de su residencia; no obstante, si la intensión del acreedor era realizar la notificación del Otrosí y la cesión de derechos, era sencillo adquirir la información de notificación de la EPS, haciendo una lectura de la Cámara de Comercio de la Entidad, la cual si fue utilizada y presentada al momento de radicar el proceso judicial.

5. Con relación al escrito que aporta el recurrente en el recurso de reposición, donde presuntamente CRUZ BLANCA EPS reconoce la deuda, es pertinente indicar que la persona que firma y remite el documento no ostenta la calidad y competencia para atribuirse una obligación de este tipo.

   Por último, es necesario indicar que al observar el proceso ejecutivo 2016-00248 se evidencia que el señor FRANCISCO JOSE AYALA SANMIGUEL apoderado de **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S.** presento ante el Juzgado 035 Civil del Circuito de Bogotá memorial en el cual solicitó seguir adelante con el proceso ejecutivo en contra de **IMPECABLE**

LAVANDERIA HOSPITALARÍA S.A.S. Oficio que fue atendido y aceptado por el juzgado mediante 25 de noviembre de 2019, por esta razón y al ser el deudor real y con quien efectivamente suscribió el OTROSI de fecha 1 de noviembre de 2008, es a esa entidad a la que le debe exigir las obligaciones pactadas entre ambos.

Por lo antes expuesto, esta entidad decide CONFIRMAR las causales 1.2, 1.14, 1.30, 1.31, 1.35, 1.40, 6.6, 6.9 y 6.10. aplicadas en la Resolución N° **RES001205 DEL 16 DE MARZO DE 2020.**

En consideración a lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR íntegramente el acto recurrido, esto es, la Resolución No. **RES001205 de 2020,** *"POR MEDIO DE LA CUAL SE CALIFICA Y GRADÚA UNA ACREENCIA OPORTUNAMENTE PRESENTADA CON CARGO A LA MASA DEL PROCESO LIQUIDATORIO CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN".*

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución, de conformidad con lo señalado en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR que contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía administrativa.

Dada en Bogotá D.C, a los 16 días del mes de octubre de 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador de
CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cruz Blanca E.P.S.

EN LIQUIDACIÓN

Bogotá, 4 de febrero de 2021

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

El liquidador de CRUZ BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, hace constar que la Resolución RRP000601 **de 16/10/2020**: "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la Resolución No. RES001205 DE 2020" se realizó **NOTIFICACION ELECTRONICA** el día **05/01/2021** a: **COLOMBIANA DE FINCA RAIZ S.A.S**, identificado (a) con CC/NIT **860058033**.

Por lo que, para el referido acto administrativo, no procede recurso alguno en la vía administrativa, por lo tanto la decisión adoptada mediante el acto de la referencia queda en firme el **05/01/2021**, conforme a lo establecido en el articulo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La presente certificación se expide por CRUZ BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, el **04/02/2021**.

FELIPE NEGRET MOSQUERA
LIQUIDADOR

RESOLUCIÓN No. RES003094 DE 2022
(07/04/2022)

POR MEDIO DE LA CUAL EL LIQUIDADOR DECLARA TERMINADA LA EXISTENCIA LEGAL DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN

El Liquidador de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, entidad identificada con el NIT. 830.009.783-0, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las contenidas en las Resoluciones Nos. 8939 del 07 de octubre de 2019 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con el Decreto 2555 de 2010, Decreto Ley 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas relacionadas con el marco que regula los procesos de liquidación forzosa Administrativa y,

CONSIDERANDO

CAPÍTULO PRIMERO
ANTECEDENTES DE CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN

Que mediante Resolución No. 8939 del 07 de octubre de 2019 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a **CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CRUZ BLANCA E.P.S S.A.**, identificada con NIT No. **830.009.783-0**.

Que el artículo quinto de la citada resolución dispuso designar como Liquidador de **CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CRUZ BLANCA E.P.S S.A.** identificada con NIT No. **830.009.783-0**, al suscrito **FELIPE NEGRET MOSQUERA**, para que ejecute los actos necesarios para desarrollar y llevar hasta su culminación el proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN.**

Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de la entidad **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN,** identificada con el NIT. 830.009.783-0, es el dispuesto en la Resolución 8939 del 07 de octubre de 2019, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010, el Decreto ley 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el articulo 20 y 70 de la ley 1116 de 2006.

Que, en cuanto a la naturaleza de los actos del liquidador, el numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece lo siguiente:

> *"(...)* ***2. Naturaleza de los actos del liquidador.*** *Las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio.*
>
> *Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno (...).*

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN

Que el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010 dispone:

"Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se disponga la liquidación de la institución, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida y a quienes tengan en su poder, a cualquier título, activos de la intervenida, para los fines de su devolución y cancelación. Para tal efecto, se publicarán por lo menos dos (2) avisos en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la intervenida, el primero dentro de los primeros cinco (5) días posteriores a la fecha de la toma de posesión para liquidar y el segundo dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del primer aviso. Adicionalmente se divulgará, por lo menos una vez, a través de una cadena de televisión nacional o de un canal regional o en una emisora nacional o regional de radio, en horas de amplia audiencia y sintonía dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se dispuso la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el liquidador cuando lo considere conveniente, podrá utilizar además cualquier otro medio que en su concepto contribuya a cumplir la finalidad del emplazamiento.

Copia del texto del aviso deberá fijarse además tanto en las oficinas principales como en las agencias y sucursales de la intervenida, en sitios a los cuales tenga fácil acceso el público, así como en la Secretaría General de la Superintendencia Financiera de Colombia y en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN.

Cuando la liquidación se decida en el mismo acto que dispuso la toma de posesión, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente Decreto y las menciones hechas al agente especial en dicho artículo, se entenderán hechas al liquidador.

El aviso de emplazamiento contendrá lo siguiente:

a) La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la institución financiera en liquidación, a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el lugar que para el efecto se señale. Cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá presentarse el original del título. Sin embargo, cuando sea necesaria la presentación de un título valor en varios procesos liquidatorios a la vez, el original del título valor se aportará en uno de los procesos liquidatorios y en los demás se aportará copia del mismo con certificación del liquidador del proceso en que se haya aportado el original, sobre la existencia del mismo. Si los créditos constan en títulos valores que hayan sido depositados en depósitos centralizados de valores la existencia del crédito se probará con los documentos a que se refiere el artículo 26 de la Ley 27 de 1990. El depositante en el depósito centralizado de valores podrá autorizar al liquidador para solicitar el certificado a que se refiere dicho artículo;

b) El término para presentar las reclamaciones oportunamente, con la advertencia de que una vez vencido este, el liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna reclamación, y que las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones presentadas en forma extemporánea, que aparezcan

debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales de la intervenida, serán calificadas como pasivo cierto no reclamado;

c) La advertencia sobre la cesión y terminación de los contratos de seguro, de conformidad con el artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

d) La advertencia sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase, así como la obligación de los secuestres, auxiliares de la justicia y demás funcionarios que tengan activos de la intervenida para que procedan de manera inmediata a entregarlos al liquidador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente Decreto"

Que, el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, dispone:

"El término que se establezca para presentar las reclamaciones no podrá ser superior a un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación del último aviso de emplazamiento".

Que en cumplimiento de las normas citadas, el día 15 de octubre de 2019 **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN** publicó en el diario La República, en cartelera de la entidad y en la página web https://www.cruzblanca.com.co/acreencias, primer aviso emplazatorio.

Que el 29 de octubre de 2019, se publicó segundo aviso emplazatorio en el diario La República, en los mismos términos de la publicación del 13 de agosto de 2019.

Que del 18 al 28 de octubre se publicaron dos (2) cuñas en el medio de difusión RCN RADIO, invitando a quienes se creen con derecho a presentar sus créditos al proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN**.

Que en dichos avisos emplazatorios, se difundió el trámite que debían agotar los acreedores para efectuar la reclamación, a través del diligenciamiento de un formulario único de reclamación de acreencias que estuvo disponible en la página web de la entidad, https://www.cruzblanca.com.co/Formulario Inscripción en el link acreencias o por medio de la solicitud, en FORMA GRATUITA.

Que por medio de la página web de la entidad www.cruzblanca.com.co se dio amplia difusión a los formatos y la manera en que deberían ser diligenciados los formatos de reclamación. En igual sentido, se publicó un "INSTRUCTIVO DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL" con la finalidad de instruir a todos los acreedores de **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN**, acerca del proceso liquidatorio y, en especial, lo concerniente al periodo de reclamaciones y la forma de presentación de las mismas.

Que las reclamaciones remitidas por correo certificado, debían enviarse a la sede de **CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN** ubicada en la Carrera 46 No. 91-78, Barrio la Castellana de la ciudad de Bogotá D.C., si la misma, fue enviada por correo certificado, se entendía oportuna, si y solo si, la oficina receptora del envío, registra timbre anterior a la hora y fecha límite de la recepción de acreencias oportunas, todas aquellas reclamaciones que registren fechas de envió posteriores al 02 de diciembre de 2019 y hora posterior a las 5:00 P.M. se consideran reclamaciones extemporáneas. Lo anterior en los términos del artículo 10 de la Ley 962 de 2005.

Que el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010 señala el término de un (1) mes como periodo máximo para la presentación de reclamaciones con cargo a la masa de liquidación, el cual deberá ser contado a partir de la publicación del último aviso emplazatorio.

Que en el período comprendido entre el 30 de octubre de 2019 y el 02 de diciembre de 2019, se presentaron al proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN** reclamaciones oportunas.

Que el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010 establece que, vencido el término para la presentación de reclamaciones, se dará traslado común a todos los interesados por el término de cinco (5) días hábiles, para la presentación de objeciones acompañadas de las pruebas que tuvieren en su poder.

Que el día 09 de diciembre de 2019, **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN** publicó en la cartelera de la entidad, en la página web oficial https://www.cruz blanca.com.co y en la página No. 10 de la sección Asuntos legales, del diario La República, la Resolución No. A 00001 de 6 de diciembre de 2019 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE EL CIERRE DEL PERIODO PARA RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES OPORTUNAS Y EL TRASLADO DE LOS CRÉDITOS RECLAMADOS DE MANERA OPORTUNA DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN".*

Que el estudio y calificación de las reclamaciones presentadas dentro de la oportunidad procesal, se efectuó preservando el principio de igualdad entre los acreedores y las disposiciones legales que confieren el Numeral 1 del Artículo 300 del Decreto Ley 663 de 1993[1], el Código Civil y demás normas concordantes en relación con los principios de prelación y privilegio de los créditos.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN, Y GRADUACIÓN DE LAS ACREENCIAS DE LA LIQUIDACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN

3.1 CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN

Que conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, el proceso de liquidación de una entidad es un proceso concursal y universal, que tiene por finalidad legal especial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido de los pasivos externos a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos; este procedimiento se basa en el principio racional de justicia que exige la igualdad entre los acreedores, sin perjuicio de las disposiciones que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos, en el que el carácter universal se deriva de la circunstancia de que el patrimonio mismo es una universalidad jurídica, en la cual el activo responde por el pasivo.[2]

Que dentro del proceso liquidatorio, la totalidad de acreedores de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN** se hallan sujetos a las medidas que rigen la liquidación (principio de universalidad), por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad en liquidación, deberán hacerlo dentro del proceso de liquidación y de conformidad con las disposiciones que lo rigen (Derecho Concursal).

3.2 PRELACIÓN DE CRÉDITOS CON CARGO A LA MASA DE LIQUIDACIÓN

[1] ARTÍCULO 300. ETAPAS DEL PROCESO LIQUIDATORIO. <Artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> 1. En caso de liquidación, los créditos serán pagados siguiendo las reglas de prelación previstas por la Ley. En todo caso, si el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras paga el seguro de depósito o una garantía, el mismo tendrá derecho a obtener el pago de las sumas que haya cancelado, en las mismas condiciones que los depositantes o ahorradores. (...)

[2] Corte Constitucional, Sentencia T-258 de abril 12 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

Que la ley 1797 de 2016, *"POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES QUE REGULAN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*, dispuso en el artículo 12 lo siguiente:

> *"Artículo 12. Prelación de créditos en los procesos de liquidación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, (IPS), y de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En los procesos de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud, incluso los que están en curso, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se aplicará la siguiente prelación de créditos, previo el cubrimiento de los recursos adeudados al Fosyga o la entidad que haga sus veces si fuere el caso y los recursos relacionados con los mecánicos de redistribución de riesgo: a) Deudas laborales; b) Deudas reconocidas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. En estas deudas se incluirán los servicios prestados o tecnologías prestadas por urgencias, así no medie contrato. En estos casos la liquidación debe desarrollar la auditoría y revisión de cuentas para su reconocimiento en lo pertinente. c) Deudas de impuestos nacionales y municipales; d) Deudas con garantía prendaria o hipotecaria, y e) Deuda quirografaria."*

3.3 PRELACIÓN PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DENTRO DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN.

Que, de conformidad con lo expuesto y al tenor de lo prescrito en los artículos 9.1.3.5.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, el pago de las obligaciones a cargo de **CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN**, debía efectuarse respetando estrictamente el siguiente orden o prelación de pago, así:

1. Gastos de administración de la liquidación.
2. Obligaciones causadas con posterioridad al inicio de la medida de liquidación forzosa administrativa liquidatoria.
3. Sumas de dinero o bienes de propiedad de terceros, y/o créditos excluidos de la masa de la liquidación.
4. Los créditos oportunamente presentados a cargo de la masa de la liquidación.
5. Los créditos presentados extemporáneamente al proceso liquidatorio, así como los que hagan parte del pasivo cierto no reclamado (PACINORE).

3.4 DEL RESULTADO FINAL DEL RECONOCIMIENTO DE ACREENCIAS OPORTUNAS DENTRO DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN.

Que como lo dispuso el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, los avisos emplazatorios, la guía de liquidación, el instructivo de ordenación documental y los anexos técnicos correspondientes, el proceso de recepción de acreencias oportunas se surtió durante el periodo comprendido del 30 de octubre de 2019 al 02 de diciembre de 2019, no obstante, como se señaló en el parágrafo primero de la Resolución A-00001 del 06 de diciembre de 2019 y el artículo 10 de la Ley 962 de 2005, las reclamaciones enviadas por correo certificado se entendían oportunas, en los términos ya explicados en procedencia.

Que, por lo expuesto, se profirieron los actos administrativos N° A-00001 del 06 de diciembre de 2019 y RES000200 del 24 de enero de 2020 mediante los cuales se efectuó el cierre de la recepción de acreencias oportunas, y se adicionaron las acreencias que cumplieron con la condición de remisión por correo postal.

Que igualmente, con ocasión del proceso de auditoría de las acreencias presentadas al proceso de calificación y graduación, los valores que se reportan como reclamados pudieron verse sujetos a cambios, dado que, si bien los reclamantes señalaron en el

formulario de reclamación una determinada suma de dinero, si realizada la auditoría integral de los créditos, dicho valor no concordaba con los soportes allegados, ni con lo registrado en las bases de datos que reposan en la entidad en liquidación, se procedió a realizar la modificación a que hubiera lugar, sin disminuir nunca el valor reclamado inicial, es decir, siempre en favor del reclamante. Es el caso de las solicitudes de prestaciones económicas, facturas que soportan servicios de salud, sentencias judiciales, procesos ejecutivos, entre otros.

Que las reclamaciones presentadas, en cumplimiento del marco normativo que gobierna el proceso de liquidación, fueron objeto de auditoría técnica, jurídica y financiera, y el resultado de la auditoría integral fue el soporte de los actos administrativos de calificación y graduación de créditos, notificados a los acreedores oportunos de la Entidad, quienes contaron con los términos legales para la interposición de recursos de reposición.

Que, surtido el trámite anterior, una vez ejecutoriados los actos administrativos, se consolidó y cobró firmeza el Auto de Graduación y Calificación de Acreencias, con el siguiente resultado:

Cifras en miles de pesos

Prelación	Cantidad Acreencias	Valor reclamado	Valor Total reconocido	Valor Total rechazado
Prelación A	5	$ 1.009.101	$ 0	$ 1.009.101
Prelación B	733	$ 607.970.354	$ 217.933.188	$ 390.037.166
Prelación C	2	$ 10.610.247	$ 0	$ 10.610.247
Prelación E	126	$ 431.297.406	$ 11.491.202	$ 419.806.204
Subtotal Oportunas Masa	**866**	**$ 1.050.887.107**	**$ 229.424.390**	**$ 821.462.718**

3.5 DEL RESULTADO FINAL DEL RECONOCIMIENTO DE ACREENCIAS EXTEMPORÁNEAS DENTRO DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN.

Que, concluido el periodo para la radicación de reclamaciones oportunas, es decir, a partir del 03 de diciembre de 2019, se dio continuidad a la recepción de acreencias por fuera de los términos previstos en los avisos emplazatorios, razón por la cual las mismas se consideraron extemporáneas.

Que las reclamaciones presentadas, en cumplimiento del marco normativo que gobierna el proceso de liquidación, fueron objeto de auditoría técnica, jurídica y financiera, y el resultado de la auditoría integral fue el soporte de los actos administrativos, que ha emitido el Liquidador con las decisiones correspondientes independientes, las cuales se han notificado a los correspondientes interesados.

Presentándose el siguiente resumen a la fecha:

Cifras en miles de pesos

Prelación	Cantidad Acreencias	Valor reclamado	Acreencias Reconocidas	Valor Total reconocido	Valor Total rechazado
Prelación A	2	$ 54.919	1	$ 11.180	$ 43.740
Prelación B	109	$ 115.913.483	36	$ 10.757.995	$ 105.155.487
Prelación E	34	$ 4.202.626	8	$ 479.103	$ 3.723.523
Subtotal Extemporáneas Masa	**145**	**$ 120.171.028**	**45**	**$ 11.248.278**	**$ 108.922.750**
Total	**3074**	**$ 1.198.822.349**	**1621**	**$ 243.604.750**	**$ 955.217.599**

3.6 DEL RESULTADO FINAL DEL RECONOCIMIENTO DE ACREENCIAS NO MASA y PAGOS POR ESTE CONCEPTO

Que con corte a 28 de febrero de 2022 se presentaron 2063 reclamaciones, que posterior a su auditoria técnica, jurídica y financiera, y el resultado de la misma, fueron catalogadas como excluido de masa, lo cual fue el soporte de los actos administrativos, que ha emitido el Liquidador con las decisiones correspondientes independientes, las cuales se han notificado a los correspondientes interesados.

cifras en miles de pesos

Concepto	No.	Valor Reclamado	Total Reconocido	Valor Total Rechazado	valor Pagado	Valor Pendiente de Pago
Sumas excluidas de la masa	2063	$ 27.764.214	$ 2.932.082	$ 24.832.132	$ 2.800.632	$ 131.450

CAPITULO CUARTO
DEL PASIVO CIERTO NO RECLAMADO

Que el artículo 9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010, dispone:

"Artículo 9.1.3.2.7. Pasivo cierto no reclamado.

Si atendidas las obligaciones excluidas de la masa y aquellas a cargo de ella, de acuerdo con las reglas previstas en el presente Libro, subsisten recursos, el liquidador mediante acto administrativo, determinará el pasivo cierto no reclamado a cargo de la institución financiera intervenida señalando su naturaleza, prelación de acuerdo con la ley y cuantía. Para el efecto, se tendrán en cuenta los pasivos que no fueron reclamados oportunamente pero que aparezcan debidamente registrados en los libros oficiales de contabilidad de la intervenida, así como las reclamaciones presentadas extemporáneamente que estén debidamente comprobadas.

Para efectos de la notificación de la resolución que determine el pago del pasivo cierto no reclamado, así como de los recursos interpuestos contra la misma se atenderá el procedimiento previsto en los artículos 9.1.3.2.5 y 9.1.3.2.6 de este decreto.

Parágrafo. Dentro del pasivo cierto no reclamado a cargo de la institución financiera no se incluirán las obligaciones respecto de las cuales se hayan cumplido los términos de prescripción o caducidad."

Que, de conformidad con lo expuesto, mediante resolución motivada el liquidador determinará el pasivo cierto no reclamado con base en las acreencias, tanto a cargo de la masa de la liquidación como de las excluidas de ella, que no fueron reclamadas pero que aparezcan debidamente justificadas en los libros y comprobantes de la entidad en liquidación, así como las presentadas extemporáneamente que estén debidamente comprobadas.

Que, en el marco de lo anterior, el Liquidador procedió a expedir la Resolución No. 3044 del 31 de mayo de 2021 "*Por medio de la cual el liquidador de Cruz Blanca E.P.S S. A en liquidación se pronuncia acerca del Pasivo Cierto No Reclamado dentro del proceso liquidatorio".*

Que, frente a las reclamaciones extemporáneas, el liquidador emitió las decisiones correspondientes mediante actos administrativos independientes, notificados a los correspondientes interesados.

Que los procesos judiciales que se incluyeron como pasivo contingente, dentro de la Resolución RES003044 del 31 de mayo de 2021, de los cuales hace parte CRUZ BLANCA E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN, ascienden a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y**

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($859.940.317), correspondientes a:

Cifras en miles de pesos

N°	Radicado judicial	Despacho actual del proceso.	Ciudad	Cuantía	Prelación
1	50013103013200900000000	Tribunal Superior de Medellín	Medellín	$ 114.287	E
2	50013103012201600000000	Juzgado Civil de Circuito 12 de oralidad	Medellín	$ 154.438	E
3	50013103013201300000000	Juzgado Civil de Circuito 22	Medellín	$ 77.625	E
4	11001310304020100000000	Juzgado Civil de Circuito 40	Bogotá	$ 22.875	E
5	11001410500720100000000	Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá	Bogotá	$ 297	E
6	76001310300320000000000	Corte Suprema de Justicia Sala casación Civil	Bogotá	$ 490.418	E
Total				**$ 859.940**	

CAPÍTULO QUINTO
CONFORMACIÓN DEL ACTIVO

Que a la fecha se encuentran plenamente identificados los activos de la liquidación, tal y como consta en la Resolución No. 01 de fecha once (11) de mayo de dos mil veinte (2020) *"Por medio del cual se acepta la valoración de activos del inventario de Cruz Blanca EPS S.A en Liquidación"* y la Resolución N°01 de treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiunos (2021), *"Por medio de la cual se actualiza la valoración de activos del inventario de Cruz Blanca E.P.S S. A en Liquidación".*

Que conforme se refleja en los estados financieros con corte al 28 de febrero de 2022, el total de activos disponibles de ***CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.*** *EN LIQUIDACIÓN, asciende a* ***SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 60.855.950.171,34****), discriminados de la siguiente manera:*

Cifras en miles de pesos

ACTIVO	A 28 DE FEBRERO 2022
Efectivo y equivalente al efectivo	$ 15.547.693
Inversiones e instrumentos derivados	$ 0
Cuentas por cobrar	$ 44.779.976
Propiedad, planta y equipo	$ 141.428
Propiedad de Inversión	$ 386.853
TOTAL ACTIVO	**$ 60.855.950**

Que los valores correspondientes a "cartera" y a "pretensiones procesos a favor" no constituyen un activo actualmente disponible, pues su consolidación está sujeta al cumplimiento de una condición favorable (fallo o recaudo).

CAPITULO SEXTO
DECLARACIÓN DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN

Que el día 15 de febrero de 2022, se profirió la RESOLUCIÓN No. RES003088 DE 2022 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA CONFIGURADO EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN",* en el cual se resolvió lo siguiente:

> *"(...)* ***ARTÍCULO PRIMERO:*** *DECLARAR configurado el desequilibrio financiero del proceso de liquidación forzosa administrativa del CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN.*

ARTÍCULO SEGUNDO: *DECLARAR como insolutos, los créditos reconocidos en las diferentes prelaciones oportunas, extemporáneos y pasivo cierto no reclamado, por el agotamiento total de sus activos, configurándose un desequilibrio económico entre los activos y los pasivos de la intervenida.*

ARTÍCULO TERCERO: *DECLARAR la imposibilidad material y financiera de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN de constituir la reserva técnica y económica que dispone el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010 por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución y en consecuencia, en caso de producirse cualquier tipo de condena por concepto de procesos judiciales ordinarios, declarativos, cobro coactivo, de responsabilidad fiscal y/o sancionatorios en contra de la entidad intervenida, no será posible efectuar el pago de la eventual condena como tampoco atender la eventual solicitud futura del demandante de revocar el acto administrativo para proceder a su inclusión entre las acreencias aceptadas, por el agotamiento total de los activos disponibles.*

ARTÍCULO CUARTO: *NOTIFICAR la presente Resolución en la forma prevista en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, a todos los acreedores reconocidos dentro del concurso. De la misma manera, NOTIFICAR la Resolución en los términos previstos en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo mediante la publicación de la parte resolutiva en un diario de amplia circulación nacional y en la web institucional www.cruzblanca.com.co.*

ARTÍCULO QUINTO: *Contra la presente Resolución únicamente procede el recurso de reposición, conforme lo señalado en el inciso 2 numeral 2 del artículo 295 del Decreto-Ley 663 de 1993 "Estatuto Orgánico del Sistema Financiero" y el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación electrónica (para aquellos sujetos a quienes se practique la notificación de dicha manera) o dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación referida en el artículo 4° precedente; recurso que deberá presentarse con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante* ***CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN****, a través de su representante legal o apoderado debidamente constituido (sólo abogado en ejercicio), únicamente en el correo electrónico procesoliquidatorio@cruzblanca.com.co"*

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Resolución No. RES003088 de 2022, se procedió con la notificación de la siguiente manera:

- **Publicación en un diario de amplia circulación** – Realizada el día 22 de febrero de 2022 – Diario La República.
- **Publicación en la página web de la entidad** - Realizada el día 22 de febrero de 2022 - http://www.cruzblanca.com.co.
- **Notificación por correo electrónico** – a setecientos cuatro (704) acreedores oportunos y extemporáneos reconocidos y con valores pendientes de pago, excluidos de la masa, en prelación A, B, C, y E.

Acto administrativo que a la fecha se encuentra en firme.

CAPITULO SÉPTIMO

CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN

Que de conformidad al artículo 9.1.3.10.1 del decreto 2555 de 2010, Cruz Blanca EPS en Liquidación realizó las actividades tendientes a la depuración del archivo de la extinta de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley.

Así mismo, garantizó la reserva presupuestal para la conservación del archivo una vez finalice el proceso liquidatorio por el término dispuesto en la Ley.

CAPITULO OCTAVO
TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA JURÍDICA DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN

Que el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 preceptúa:

*"**Artículo 9.1.3.6.5** Terminación de la existencia legal.*

El liquidador declarará terminada la existencia legal de la institución financiera en liquidación, previa acreditación del cumplimiento de las condiciones que a continuación se señalan:

a) Que se encuentran plenamente determinadas las sumas y bienes excluidos de la masa, los créditos a cargo de la masa de la liquidación, el pasivo cierto no reclamado y la desvalorización monetaria, de conformidad con lo señalado en el presente Libro;

b) Que se encuentra plenamente determinado el activo a cargo de la institución financiera en liquidación, de acuerdo con lo señalado en los artículos 9.1.3.3.1 y 9.1.3.3.2 del presente decreto;

c) Que el pasivo externo a cargo de la institución financiera en liquidación se encuentra total y debidamente cancelado o que la totalidad de los activos de dicha institución se han distribuido entre los acreedores;

d) Que en el evento en que se establezca que el proceso de liquidación forzosa administrativa se encuentra en desequilibrio financiero, el Liquidador haya adoptado y perfeccionado los esquemas previstos en los artículos 9.1.3.6.3 y 9.1.3.6.4 del presente decreto;

e) Que las reservas previstas en el artículo 9.1.3.5.10 del presente decreto se encuentran debidamente constituidas;
f) Que la provisión para el mantenimiento y conservación del archivo de la institución financiera en liquidación se encuentra debidamente constituida, y que el archivo haya sido entregado a quien tendrá la custodia del mismo;

g) Que el cierre contable se haya realizado;

h) Que una copia impresa y en medio digital del directorio de acreedores debidamente actualizado haya sido recibido en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN;

i) Que la rendición final de cuentas presentada por el liquidador se encuentre en firme y protocolizada y una copia de la respectiva escritura pública se haya recibido en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN;

j) Que se haya entregado al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN una copia de la escritura pública o del documento privado contentivo del contrato de mandato que la entidad intervenida haya celebrado con un tercero o con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, a través del cual otorga facultad al mandatario para que, en ejercicio del mencionado contrato pueda cancelar a nombre de la institución financiera en liquidación, los gravámenes constituidos a su favor, y pueda expedir certificados de paz y salvo, siempre y cuando esté comprobado que el deudor no tiene obligaciones con la entidad intervenida."

Que en el caso concreto de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, a la fecha se encuentra plenamente identificadas las sumas y bienes excluidos de la masa, los créditos a cargo de la masa de la liquidación, el pasivo cierto no reclamado y la desvalorización monetaria, tal como quedó señalado en los capítulos tercero y cuarto del presente acto administrativo.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555, a la fecha se encuentran plenamente identificados los activos de la liquidación, tal y como consta en la Resolución No. 01 de fecha once (11) de mayo de dos mil veinte (2020) "*Por medio del cual se acepta la valoración de activos del inventario de Cruz Blanca EPS S.A en Liquidación"* y la Resolución N°01 de treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), *"Por medio de la cual se actualiza la valoración de activos del inventario de Cruz Blanca E.P.S S.A en Liquidación".*

Que igualmente lo referido al activo de la institución sometida a proceso de liquidación, quedó determinado en la Resolución No. RES003088 de 15 de febrero de 2022 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA CONFIGURADO EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN",* de lo cual se dio cuenta en el capítulo quinto del presente acto administrativo.

Que cabe precisar que si bien en activos – financiamiento al cierre del proceso de liquidación, se reportaron pretensiones de cartera y procesos a favor, los mismos están sujetos al recaudo y solo se podrán disponer una vez estos ingresen a la entidad o a los terceros encargados de la gestión de remanentes, para ser distribuidos en los términos y prelaciones del proceso liquidadorio.

Que en relación con lo dispuesto en el literal c) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, es pertinente referir que el pasivo externo a cargo de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, no se encuentra total ni debidamente cancelado, debido a la declaratoria de DESEQUILIBRIO FINANCIERO efectuada mediante la Resolución No. RES003088 de 15 de febrero de 2022.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, el Liquidador de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN mediante la citada Resolución No. RES003088 del 15 de febrero de 2022 declaró el desequilibrio financiero del proceso de liquidación, con fundamento en los argumentos expuestos en dicho acto administrativo, razón por la cual se adoptó el esquema previsto en el literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010, previa autorización de la Superintendencia Nacional de Salud según comunicación 20221300000437021 del 31 de marzo de 2022, esto es, la suscripción de un contrato de mandato con representación con la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, el Liquidador de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, mediante la Resolución RES003088 de 15 de febrero de 2022, declaró la imposibilidad material y financiera del CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN para constituir la reserva técnica y económica que dispone el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010 y como consecuencia, en caso de producirse cualquier tipo de condena por concepto de procesos judiciales ordinarios, declarativos, ejecutivos, de responsabilidad fiscal y/o sancionatorios en contra de la entidad CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, no será posible efectuar el pago de la eventual condena como tampoco atender la eventual solicitud del demandante de revocar el presente acto administrativo para proceder a su inclusión entre las acreencias aceptadas, por el agotamiento total de los activos disponibles de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal f) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, y de acuerdo a lo expuesto en el **CAPITULO SÉPTIMO** de la presente resolución CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN cuenta con la provisión presupuestal para la custodia, el mantenimiento y conservación del archivo de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, procedió a efectuar el cierre contable de la entidad el día 07 de abril de 2022, tal como se puede verificar en las cifras contenidas en el informe final de del proceso de Liquidación.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal h) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, el Agente Especial Liquidador del CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, todos los meses entregó en el informe mensual de los acreedores a la Superintendencia Nacional de Salud con base en los formatos establecidos, no obstante, lo anterior el día 06 de abril de 2022 procedió a radicar el directorio de acreedores ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal i) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, el Liquidador CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, remitió el 06 de abril de 2022 a la Superintendencia Nacional de Salud la Rendición de Cuentas con corte al 28 de febrero de 2022 del proceso de liquidación.

Que, del mismo modo, el 31 de marzo de 2022 se llevó a cabo sesión de Junta de Acreedores para la presentación de la rendición de cuentas del liquidador frente a la misma no se presentaron objeciones por parte de los miembros de la Junta.

Que el 04 de abril de 2022 se corrió traslado a los acreedores mediante publicación de la rendición de cuentas a través de la página web http://www.cruzblanca.com.co y remitiendo correo electrónico a cada uno de los acreedores reconocidos.

Que, del mismo modo, la rendición de cuentas con corte a 28 de febrero de 2022 se protocolizó mediante Escritura Pública No. 958 otorgada en la Notaría 16 del Círculo de Bogotá D.C.

Que en relación con lo dispuesto en el literal j) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010, mediante comunicación 20221300000437021 de fecha 31 de marzo de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud, emitió concepto favorable respecto de la posibilidad de suscribir contratos de mandatos como opción para el cierre del proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS S.A.

Que, así las cosas, se encuentran satisfechos los requisitos para emitir el presente acto administrativo de declaración de terminación de la existencia legal de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN.

CAPÍTULO NOVENO
CARENCIA DE PERSONERÍA JURÍDICA DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN

Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, ha sentenciado:

> *"En suma,* ***una sociedad liquidada no es sujeto de derechos y obligaciones*** *y por tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco puede demandar ni ser demandada. Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación legal ni pueden exigírsele a este el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad liquidada"* [3] *(Negrita fuera del texto).*

Que, por lo expuesto, se concluye que una vez liquidada CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN desaparece, lo que se traduce en la falta de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y a la postre, en la imposibilidad para ser parte en un proceso, esto es, ser representada judicial y extrajudicialmente, de conformidad con lo establecido en el inciso 1° del artículo 633 del Código Civil.

Que, así las cosas, CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN no tendrá legitimación en la causa por activa o por pasiva, al carecer de personería jurídica, capacidad de goce y ejercicio, como tampoco capacidad procesal.

Que, en virtud de lo anterior, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución que declara terminada la existencia legal de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, ningún tercero puede iniciar o promover demanda o actuación administrativa contra CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, al carecer de capacidad procesal.

Que de manera expresa se manifiesta que como consecuencia de la terminación de la existencia legal de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, no existe subrogatario legal, sustituto procesal, patrimonio autónomo o cualquier otra figura jurídico procesal que surta los mismos efectos.

Que en igual sentido, a partir de la fecha de expedición de la resolución que declara terminada la existencia legal de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, ninguna autoridad administrativa y ningún órgano de control, podrá iniciar actuación alguna en contra de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, toda vez que a partir de la expedición de la presente resolución, CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN carece de personería jurídica para actuar y por tanto desaparece del escenario jurídico.

Que las anteriores precisiones se realizan sin perjuicio de los activos contingentes y remanentes a favor de la empresa en liquidación, que pueden estarse discutiendo o reclamando en instancias administrativas o judiciales y para las cuales no existe ninguna renuncia o desistimiento por parte de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, como quiera que los mismos están destinados al pago de las acreencias insolutas.

---

[3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 23 de abril de 2015, Radicación 25000-23.27-000-2012-00378-01. Número interno 20688. Consejera Ponente: Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

En mérito de lo expuesto, el Liquidador de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR terminada la existencia legal de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, NIT 830.009.783-0, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.

PARÁGRAFO: De manera expresa se manifiesta que como consecuencia de la terminación de la existencia legal de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, no existe subrogatario legal, sustituto procesal, patrimonio autónomo o cualquier otra figura jurídico procesal que surta los mismos efectos, sin perjuicio de los activos contingentes y remanentes que se discuten judicial y administrativamente.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Cámara de Comercio de Bogotá la cancelación de la matrícula mercantil a nombre de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION, NIT 830.009.783-0 así como la cancelación de inscripción de las sucursales, agencias y establecimientos de comercio de la empresa.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la inscripción de la presente Resolución en los registros administrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades del orden nacional y territorial; así como la cancelación del registro como Liquidador de Felipe Negret Mosquera identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.547.944.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente resolución en la forma prevista en el artículo 9.1.3.6.6 del Decreto 2555 de 2010 y en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante la publicación, por una sola vez, de la parte resolutiva en un diario de amplia circulación nacional y en la web institucional http://www.cruzblanca.com.co/.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso conforme lo señalado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D. C, a los siete (07) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 11:13:21
Recibo No. AA22856174
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2285617475EE4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA CRUZ BLANCA E.P.S.
Nit: 830.009.783-0
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00668637 cancelada
Fecha de cancelación: 19 de abril de 2022

Agencia: Bogotá

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 3.184, Notaría 41 de Santafé de Bogotá del 5 de octubre de 1.995, inscrita el 13 de octubre de 1.995 bajo el Número 512.454 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. La sociedad podrá utilizar la sigla CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.

REFORMAS ESPECIALES

Mediante Resolución No. 008129 del 28 de agosto de 2019 inscrita el 4 de Septiembre de 2019 bajo el No. 02502899 del Libro IX, la Superintendencia Nacional de Salud ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la entidad vigilada de la referencia, por el termino de dos (02) meses.

Mediante Resolución No. 008939 del 07 de octubre de 2019 inscrita el 9 de Octubre de 2019, bajo el No. 02513862 del Libro IX, la Superintendencia Nacional de Salud ordena la intervención forzosa

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

administrativa para liquidar la entidad de la referencia, por el término de dos (02) años.

APROBACIÓN DE CUENTA FINAL LIQUIDACIÓN

Mediante Resolución No. RES003094 de 2022 del 7 de abril de 2022, inscrita el 19 de abril de 2022, bajo el No. 02816523 del libro IX, el Liquidador resuelve declarar terminada la existencia legal de la sociedad de la referencia.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Resolución No. 8939 del 7 de octubre de 2019, de Superintendencia Nacional de Salud, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de octubre de 2019 con el No. 02517719 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Liquidador	Felipe Negret Mosquera	C.C. No. 000000010547944

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 11:13:21
Recibo No. AA22856174
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2285617475EE4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8430

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 19 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 19 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2022 Hora: 11:13:21
Recibo No. AA22856174
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2285617475EE4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACIÓN No. CBL-026-2022 SUSCRITO ENTRE CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN Y ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, NIT. 901.258.015-7

Entre los suscritos, **FELIPE NEGRET MOSQUERA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.547.944, quien obra en su condición de liquidador de **CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN**, identificada con NIT No. **830.009.783-0**, conforme a la Resolución No. 008939 del 07 de octubre de 2019, entidad que en adelante se denominará **EL MANDANTE** y, por la otra **JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS** identificada con cédula de ciudadanía No **52.498.801**, quien actúa en calidad de Representante legal **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S con Nit No. 901.258.015-7**, quien en adelante para todos los efectos de este Contrato se denominará **EL MANDATARIO**, previo al cumplimiento de los requisitos de Ley, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Mandato con representación, con observancia del Código de Comercio, el Código Civil, el Decreto 2555 de 2010, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las normas que lo modifiquen y adicionen, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante Resolución No. 008939 del 07 de octubre de 2019 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud se ordenó la intervención forzosa administrativa para liquidar CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA E.P.S., identificada con NIT 830.009.783-0.

2. Que en el artículo 5º de la Resolución No. 008939 del 07 de octubre de 2019 fue designado como liquidador de CRUZ BLANCA EPS S.A. al suscrito FELIPE NEGRET MOSQUERA quien ejercerá las funciones propias de su cargo de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que le sean aplicables. Así mismo, ejercerá la función de Representante Legal de la Entidad objeto de liquidación.

3. Que el artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, consagra la liquidación como consecuencia de la toma de posesión de las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

4. Que el numeral 2° inciso tercero del artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero indica *"La realización de activos y de los demás actos de gestión se regirán por las normas del derecho privado aplicables por la naturaleza del asunto."*

5. Que de forma concordante, el numeral 1° del artículo 295 del mismo Estatuto, señala que el liquidador cumplirá funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de liquidación.

6. Que la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución No. 2021320000013408-6 del 07 de octubre de 2021, mediante la cual ordenó *"Prorrogar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS, identificada con Nit. 830.009.783-0, ordenada en el artículo primero de la Resolución 008939 del 07 de octubre de 2019, por el término de 6 meses, contados a partir del 07 de octubre de 2021, hasta el 07 de abril de 2022".*

7. Que el artículo 295, numeral 9º, literal i) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que es función del liquidador: *"Celebrar todos los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten su adelantamiento, restituir bienes recibidos en prenda, cancelar hipotecas y representar a la entidad en las sociedades en que sea socia o accionista, así como transigir, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley.*

8. Que el parágrafo Primero de la Sección 2 *"Mecanismos de Contratación"* del Capítulo III del Manual de Contratación de CRUZ BLANCA E.P.S. SA EN LIQUIDACIÓN establece: *"Debido al objeto cualquiera sea la cuantía del contrato a celebrar, en CRUZ BLANCA EPS S.A. en liquidación podrá contratar directamente sin requerir pluralidad de oferentes los siguientes bienes y servicios: (...) 7. Convenios o contratos de mandato, fiducia mercantil, patrimonios autónomos y encargos fiduciarios."*

9. Que el literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010, señala que *"en concordancia con lo previsto en el numeral 11 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Liquidador podrá suscribir directamente convenios o contratos de mandato (...), con terceros (...), mediante los cuales contrate la realización de actividades relacionadas con la liquidación. || Igualmente, el Liquidador podrá constituir patrimonios autónomos y encargos fiduciarios o celebrar todo tipo de contratos para la administración y enajenación de los activos remanentes y para el pago de las obligaciones a cargo (...)."*

10. Que el artículo mencionado en el párrafo anterior permite la celebración de contratos de mandato, cuando subsistan procesos o situaciones jurídicas no

definidas, que el LIQUIDADOR previa información a los acreedores o a la Junta de Acreedores, según el caso, encomiende a tercero especializado.

11. Que el liquidador preparó el informe detallado del que trata el literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010 con destino a los acreedores con la justificación de las razones por las cuales se estima conveniente suscribir contratos post-cierre y post-liquidación para CRUZ BLANCA E.P.S. SA EN LIQUIDACIÓN, publicado en la página web de la entidad y mediante aviso en prensa publicado el día 15 de marzo de 2022 en el Diario Nuevo Siglo.

12. Que posterior a ello, fue remitida la solicitud de autorización ante la Superintendencia Nacional de Salud de que trata el párrafo 2 del literal b) el artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 del 2010, mediante Oficio No. 17017 fechado 28 de marzo de 2022 – Expediente 20211300026260005E.

13. Que mediante comunicación 20221300000437021 de fecha 31 de marzo de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud, emitió concepto favorable respecto de la posibilidad de suscribir contratos de mandatos como opción para el cierre del proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS SA, indicando:

> *"(...) 3. Para el caso concreto de CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, habida cuenta de que no fue posible la adjudicación por consenso de los acreedores y en consideración a que la adjudicación forzosa no es viable en razón a la insuficiencia de los activos y la celebración de contratos es la opción más idónea, dadas las condiciones particulares y la existencia de situaciones jurídicas no definidas, esta dependencia considera razonable la autorización para la celebración de contratos, en los términos del inciso segundo del literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010.*
> *(...)*
>
> *5. En vista de lo enunciado hasta este punto se autoriza, en los precisos términos del referido literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010, la celebración de los contratos para la administración de la cartera y de las acreencias de CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN; (...)"*

14. Que en reunión ordinaria de la Junta de Acreedores realizada el día 30 de marzo de 2022, el Liquidador presentó ante los miembros de tal órgano el acogimiento a lo dispuesto en el artículo 9.1.3.6.3 literal b) del Decreto 2555 de 2010, siendo la celebración del presente contrato de mandato la opción que más se ajusta a las necesidades del proceso liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, respecto a lo cual no se presentó observación alguna.

15. Que el artículo 2142 del Código Civil define al contrato de mandato en los siguientes términos: *"El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera."* Por su parte, el artículo 2195 *ibídem* dispone, en lo pertinente, lo que sigue: *"No se extingue por la muerte del mandante el mandato destinado a ejecutarse después de ella."*

16. Que el inciso final del literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010, dispone: *"El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN en ejercicio de la labor de seguimiento señalada en la ley, podrá pronunciarse sobre el desarrollo y ejecución de los contratos de que trata el presente artículo;"*

17. Que, en concordancia con lo anterior, vistos los elementos y características del contrato de mandato, se colige que se ajusta a los preceptos contenidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 de 2010 y demás disposiciones que regulan los procesos de liquidación.

18. Que el Liquidador, la Superintendencia Nacional de Salud y la Junta de Acreedores de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN se han pronunciado sobre la viabilidad de llevar a cabo las actividades de qué trata la suscripción del presente contrato de mandato con representación.

19. Que existe la necesidad de celebrar el presente contrato de mandato con representación para adelantar las actividades derivadas del cierre de la liquidación de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN.

20. Que el MANDATARIO es una persona jurídica que cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo el presente Contrato.

De conformidad con los considerandos anteriores, las partes hemos decidido celebrar el presente Contrato de Mandato con representación, el cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA - DEFINICIONES: Para los efectos del presente Contrato de Mandato, las siguientes expresiones tendrán el alcance y significado que a continuación se determinan:

1. **ACTIVOS o BIENES**: Son los bienes muebles, inmuebles, derechos incorporales, recursos líquidos, así como sus accesorios y frutos, que hacen parte

del **PROCESO DE LIQUIDACIÓN** y serán encomendados al MANDATARIO, que están afectos a las finalidades previstas en el presente contrato y que relacionarán en el Anexo No. 2.

Este Anexo tendrá la relación A, B, C, D, E, etc., que clasificará la relación de los **ACTIVOS** conforme su naturaleza, como se relaciona a continuación:

a) Anexo No. 2 -A: Bienes Inmuebles
b) Anexo No. 2 -B: Bienes Muebles – Activos Fijos.
c) Anexo No. 2 -C: Derechos Incorporales – Participaciones Accionarias.
d) Anexo No. 2 -D: Derechos Incorporales – Títulos Valores.
e) Anexo No. 2 -E: Derechos Incorporales – Títulos Ejecutivos - Cartera.

2. **COMITÉ DE SEGUIMIENTO:** Se constituye un órgano de control al ejercicio del mandato y estará integrado como lo establece el Artículo 9.1.3.9.1 del Decreto 2555 de 2010.

3. **CONTRATOS**: Son los actos fuente de derechos y obligaciones celebrados por **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN,** y que serán cedidos en la posición contractual que ostenta aquella a favor del **MANDATARIO** para su ejecución y culminación. Los mismos se relacionarán como Anexo No. 3 del presente contrato.

4. **MANDANTE:** Será **CRUZ BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN** representada por **EL LIQUIDADOR**, quién se encargará de impartir las instrucciones mediante el presente contrato y las demás comunicaciones, al MANDATARIO, respecto de la gestión del **MANDATO,** hasta tanto finalice la existencia legal de la sociedad. A su vez, tendrá a su cargo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

   Una vez se finalice la existencia legal del MANDANTE, el MANDATARIO para el cumplimiento de sus funciones deberá sujetarse a lo aquí establecido.

5. **MANDATARIO:** es la sociedad **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S con Nit No. 901.258.015-7**, legalmente constituida con arreglo a las leyes de la República de Colombia.

6. **BENEFICIARIOS DE PAGO:** Serán los acreedores reconocidos por el liquidador de **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN**, relacionados en el Anexo No. 1 del presente Contrato, quienes se denominan como meros beneficiarios de pago y cuya estipulación a su favor consistirá exclusivamente en el pago de su acreencia en recursos o activos en los términos previstos en el presente contrato, conforme su acreencia, en el exclusivo evento en que se dé la efectiva enajenación o realización de ACTIVOS o recuperación de cartera, conforme lo establecido en el presente contrato y una vez cumplan con los requisitos exigidos

para realización de dichos pagos. A su vez, hacen parte de ésta definición, los terceros a quienes corresponda efectuar pagos con cargo a los recursos del **Mandato.** En ningún caso, los referidos **BENEFICIARIOS DE PAGO** podrán perseguir activos propios del **MANDATARIO**, toda vez que éste no se convierte en deudor solidario ni conjunto de los pasivos del **MANDANTE.**

7. **PROCESOS JUDICIALES o ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS:** Serán los procesos judiciales y actuaciones administrativas, o de otro tipo en los cuales sea parte, tercero, interviniente o litisconsorte **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACION**, en los cuales el MANDATARIO ejercerá la representación correspondiente.

   Esta función solo corresponderá los procesos que se encuentren debidamente admitidos previo al cierre del proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS S.A en Liquidación.

   La relación de los procesos judiciales, constará en el Anexo No. 4 del presente contrato.

8. **GASTOS POR HONORARIOS GENERADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO:** Son los honorarios pactados a favor de terceros que prestan sus servicios al **MANDATARIO,** cuando la actuación tenga relación con las funciones atribuidas en el presente contrato.

9. **PROCEDIMIENTO DE VENTA:** Será el establecido en el Manual Operativo, en el cual se fijarán los términos, condiciones y parámetros bajo los cuales actuará el Mandatario– *como instrucciones previas dadas por el* ***LIQUIDADOR-*** para obtener la liquidez necesaria para el pago a los **BENEFICIARIOS DE PAGO**.

10. **PROCEDIMIENTO DE DACIÓN EN PAGO:** Será el establecido en el Manual Operativo, en el cual se fijarán los términos, condiciones y parámetros bajo los cuales actuará el MANDATARIO – *como instrucciones previas dadas por el* ***LIQUIDADOR-*** para la adjudicación de los **ACTIVOS** a favor de los **BENEFICIARIOS DE PAGO** en los eventos allí determinados cuando no se logre en el tiempo determinado la liquidez esperada.

11. **PROCEDIMIENTO DE PAGO**: Será el establecido en el Manual Operativo, en el cual se fijarán los términos, condiciones y parámetros bajo los cuales actuará el MANDATARIO – *como instrucciones previas dadas por el* ***LIQUIDADOR-*** para el pago en recursos líquidos o mediante la dación en pago de los activos, a favor de los **BENEFICIARIOS DE PAGO.**

12. **MANUAL OPERATIVO:** Es el documento que contiene el **PROCEDIMIENTO DE VENTA**, el **PROCEDIMIENTO DE DACIÓN EN PAGO**, el **PROCEDIMIENTO DE**

PAGO, así como todos los lineamientos técnicos, administrativos y de procedimientos, para operar adecuadamente el MANDATO, constituyéndose en un instrumento de apoyo y consulta obligatoria y permanente de los funcionarios que integran la **UNIDAD DE GESTIÓN**. El **MANUAL OPERATIVO** será elaborado por el MANDANTE y podrá ser ajustado una vez se cuente con autorización previa, expresa y escrita del comité de seguimiento.

13. **UNIDAD DE GESTIÓN:** Es la unidad de trabajo que se conformará por un grupo interdisciplinario de profesionales y técnicos, para la operación, gestión, administración y liquidación del **MANDATO**, conforme los términos establecidos en el presente contrato y el **MANUAL OPERATIVO.**

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO: Por medio del presente contrato EL MANDANTE encarga AL MANDATARIO la realización de las actividades especialmente establecidas en la cláusula tercera, sin perjuicio de aquellas adicionales que deba surtir, correspondientes al proceso de liquidación de **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN**, así como la representación de dicha entidad para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

En desarrollo del objeto mencionado, el MANDATARIO deberá administrar los recursos que se entreguen al momento del cierre del proceso liquidatorio de **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN** y los demás que ingresaren en virtud del recaudo de cartera, y la recuperación de excedentes y rendimientos financieros y demás recursos que ingresen conforme a lo instruido por el **MANDANTE.**

PARÁGRAFO PRIMERO. - Todos los pagos a realizarse de las obligaciones contractuales y legales serán hasta concurrencia de los recursos entregados en administración y los dineros a recuperar, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del MANDANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - EL MANDATARIO en ningún momento comprometerá el patrimonio social o propio para el cumplimiento de las actividades encomendadas, y en consecuencia responderá **única y exclusivamente hasta la concurrencia de los recursos entregados en administración.**

PARÁGRAFO TERCERO. – EL MANDATARIO no será sucesor, ni subrogatario de la persona jurídica de **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN** y no tendrá legitimación en la causa por pasiva (a título personal) para actuar en procesos judiciales o administrativos que sean del interés de **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN**, toda vez que sus atribuciones se limitan a las previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL MANDATARIO: El MANDATARIO se obliga a llevar a cabo las siguientes obligaciones especiales:

a) Suscribir los contratos de la UNIDAD DE GESTIÓN que se requieran para adelantar el respectivo trámite de acuerdo con el presupuesto aprobado para el proceso de mandato.
b) Finalizar, de ser necesario, el proceso de notificación o comunicación, de acuerdo a la normativa aplicable, de los actos proferidos por CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN.
c) Pronunciarse, dentro del marco de su competencia, sobre las solicitudes relacionadas con recursos de reposición, revocatorias directas, agotamiento de vías gubernativas, solicitudes de conciliación, porcentaje de pago y en general todas las actuaciones necesarias para la definición y/o cancelación de las obligaciones que deban ser calificadas y graduadas de manera oportuna y extemporánea en el proceso liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, conforme a la normatividad vigente y a la disponibilidad de recursos recuperados.
d) Realizar las gestiones de protocolización y legalización del informe de cierre de liquidación de la EPS.
e) Recibir en cesión los CONTRATOS que sean identificados por el Liquidador, realizar todas las actividades y obligaciones a cargo del MANDANTE y que deriven de la cesión de dichos contratos, los cuales deben seguir ejecutándose en el MANDATO, dentro de las cuales se incluyen la verificación de ejecución y el cumplimiento, los respectivos pagos, realizar la liquidación de los mismos y suscribir las respectivas actas y certificaciones.
f) El MANDATARIO, deberá constituir una fiducia mercantil o un encargo fiduciario para la administración de los recursos transferidos al Mandato y los que se llegaren a incorporar por gestión de cartera, venta de ACTIVOS, recuperación de títulos judiciales y/o la materialización de cualquier derecho a favor del MANDANTE, el cual efectuará pagos relativos a los costos administrativos del mandato y a favor de terceros reconocidos con estricta sujeción a las prelaciones legales definidas por el liquidador o los jueces de la República, sin que en ningún momento comprometa el patrimonio social y/o personal del MANDATARIO. El contrato fiduciario se deberá suscribir con una institución financiera legalmente autorizada en la República de Colombia.
g) Atender de manera directa o a través de apoderados la defensa judicial y las acciones constitucionales o administrativas de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, en aquellos PROCESOS JUDICIALES o ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, o de otro tipo en los cuales sea parte, tercero, interviniente o litisconsorte **CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACION**, existentes al cierre del proceso liquidatorio, así como en aquellos que deban iniciarse por activa para la defensa, recuperación, recaudo, transferencia, legalización o entrega de los ACTIVOS entregados en administración.
h) Atender las situaciones jurídicas no definidas al cierre del proceso de liquidación, conforme al alcance de las obligaciones aquí señaladas. Cuando

ello implique la obligación de efectuar pagos, se seguirán las reglas aquí definidas.

i) De ser necesario efectuar las diligencias de escrituración, registro y todas las conexas para la transferencia definitiva y entrega material de los ACTIVOS de la liquidada, facultad que incluye la de aclarar, resciliar o complementar las escrituras públicas correspondientes y efectuar las declaraciones que bajo la gravedad de juramento exige la ley, incluso para el caso de las escrituras o contratos que hubieren sido suscritos por el MANDANTE antes del cierre del proceso liquidatorio.

j) Finalizar el proceso de transferencia del inmueble denominado "CASA DE FONTIBON", distinguido con folio de matrícula inmobiliaria 050C00549530, en los términos acordados en el contrato de compraventa, destinando el producto de la venta a los fines establecidos en el presente contrato de mandato.

k) Llevar a cabo la gestión de cobro, castigo, depuración y recaudo de la cartera entregada por el MANDANTE, o gestionar cualquier otro derecho que se llegare a identificar a favor del MANDANTE, para lo cual el MANDATARIO se encuentra facultado para iniciar y/o continuar cualquier proceso de cobro a favor de CRUZ BLANCA EPS S.A en Liquidación, cualquiera sea la instancia o entidad en que se tramita.

l) Efectuar o instruir la realización de pagos a favor de los BENEFICIARIOS DE PAGO, incluyendo los gastos de administración definidos en el artículo 9.1.3.5.2 del Decreto 2555 de 2010, con estricta sujeción a la prelación legal definida por el liquidador y por el marco normativo aplicable, siguiendo lo previsto en el MANUAL OPERATIVO y sin comprometer sus activos propios o sociales.

m) Administrar los recursos originados del recaudo de cartera, de los desembargos de las cuentas bancarias y títulos judiciales a nombre de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN y los demás recursos que ingresen por concepto temas varios (copias, certificaciones, etc.), bajo los estándares más altos de manejo y administración de bienes ajenos.

n) Adelantar las acciones necesarias para garantizar la conservación de los fondos documentales del MANDANTE y conformación del archivo correspondiente al proceso liquidatorio y mandato, incluyendo, en la medida que los ACTIVOS lo permitan, la constitución del fondo para atender los gastos de conservación, guarda y disposición de los archivos.

o) Presentar los informes que sean requeridos por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de funciones de seguimiento y control, conforme se dispone en los artículos 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010 y 11 numeral 10 del Decreto 1080 de 2021, así como cualquier otro informe solicitado por una instancia debidamente acreditada.

p) Dentro de los primeros veinte (20) días hábiles de cada semestre calendario, efectuar una rendición de cuentas de su gestión sobre las actividades desarrolladas en virtud del presente contrato, en los campos jurídico, administrativo, financiero y archivo, así como los demás que correspondan

sobre el desempeño de su encargo, informe que será remitido al COMITÉ DE SEGUIMIENTO y a la Superintendencia Nacional de Salud.

q) Contestar derechos de petición o requerimientos derivados del cierre del proceso liquidatorio y aquellos relacionados con el desarrollo del mandato.
r) Realizar el cierre de las cuentas bancarias.
s) Atender los requerimientos, solicitudes, informaciones y demás comunicaciones relacionadas con los actos expedidos en desarrollo del proceso de liquidación.
t) Elaborar el acta balance final del presente contrato cuando se cumpla el objeto del mismo, o cuando se configure cualquiera de las causales de terminación.
u) El MANDATARIO, se encuentra facultado para adelantar cualquier acción dispositiva o de administración que se encuentre directamente relacionada con el efectivo cumplimiento de las actividades encomendadas.

PARÁGRAFO: EL MANDATARIO se obliga a observar en su gestión las normas aplicables al MANDANTE y a los procesos de liquidación de las entidades privadas, así como las demás que resulten pertinentes en razón a la naturaleza del mandato.

CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL MANDANTE. - En desarrollo del presente contrato y hasta la finalización de su existencia legal, el MANDANTE se obliga conforme al artículo 2184 del Código Civil Colombiano y en especial a:

a) Entregar al MANDATARIO las sumas correspondientes a los recursos para la ejecución de las actividades establecidas en la Cláusula anterior, hasta la concurrencia del monto previsto para tales fines, así como entregar en administración los demás ACTIVOS mencionados en el presente Contrato.

b) Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual, hasta el momento en que ocurra el cierre definitivo del proceso de liquidación.

CLÁUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. - Conforme al artículo 2143 del Código Civil Colombiano, este contrato es remunerado por la cuantía de **CUATROSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($420.000.0000) MAS IVA,** los cuales serán cancelados en mensualidades vencidas de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) MAS IVA.**

CLÁUSULA SEXTA – COSTOS Y GASTOS A CARGO DE LOS RECURSOS DEL MANDATO: Todos los costos, gastos y demás expensas que se causen en desarrollo de la administración de los **ACTIVOS**, tales como tasas, contribuciones, retenciones y los relacionados con la carga impositiva de cada pago, los gastos de transferencias de fondos para efectos de pagos a terceros, costos y/o gastos bancarios, defensa de

los activos, incluido gastos de abogados externos, los honorarios y gastos de los profesionales que deban ser contratados, los honorarios por asesorías especializadas que se requieran, cualquier multa, sanciones pecuniarias y demás, derivadas del uso, destinación o utilización de los **ACTIVOS**, traslado y manutención de funcionarios de la UNIDAD DE GESTIÓN fuera de la ciudad de Bogotá D.C., gastos de viaje para la revisión de los **ACTIVOS**, costos y gastos que se generen de la Dación en Pago, costos y gastos de cualquier dictamen a cargo de terceros (revisoría fiscal), y custodia de los recursos, estarán a cargo de los ACTIVOS del MANDATO y se descontarán de los recursos transferidos; a título meramente enunciativo, se relacionan algunos:

1. Honorarios del Mandatario;
2. Los necesarios para realizar la enajenación, transferencia y entrega de los **ACTIVOS**;
3. Impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones que se causen con ocasión de la administración de las **ACTIVOS;**
4. Los correspondientes a la administración integral de los **ACTIVOS**;
5. Los derivados para la atención de procesos judiciales o administrativos;
6. Los derivados de los contratos que sean cedidos por el **MANDANTE**.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será de Doce (12) meses, contados a partir del ocho (08) de abril de 2022 y hasta el ocho (08) de abril de 2023.

PARAGRAFO. En todo caso, el mismo podrá ser prorrogado o adicionarlo en tiempo, según las necesidades del servicio, previa autorización del COMITÉ DE SEGUIMIENTO.

CLÁUSULA OCTAVA. - COMITÉ DE SEGUIMIENTO: Durante la ejecución del presente contrato se conformará un COMITÉ DE SEGUIMIENTO, siguiendo para el efecto la misma composición de la Junta de Acreedores constituida en el proceso de liquidación, órgano que podrá requerir informes del cumplimiento de las acciones encomendadas al **MANDATARIO.**

En general, el referido COMITÉ DE SEGUIMIENTO podrá sugerir, recomendar, proponer y/o orientar políticas para la debida ejecución y desarrollo del contrato de mandato y de ser procedente suscribir los otrosíes o reformas contractuales en el caso de requerirse, para lo cual podrá designar un delegado o representante que en nombre del referido COMITÉ suscriba la reforma contractual.

CLÁUSULA NOVENA. - GARANTÍAS DEL CONTRATO: EL MANDATARIO, en virtud del presente contrato y con cargo a sus propios recursos, se compromete a constituir por su cuenta y a favor del MANDANTE, las siguientes garantías:

1. Garantía única de cumplimiento, en el formato de entidades particulares, que

debe amparar el CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por el termino de duración del mismo y cuatro meses más, desde la suscripción del contrato.

2. Póliza de seguro de manejo, en el formato de entidades particulares, por equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los ACTIVOS entregados en administración y por el termino de duración del mismo, en condiciones y clausulado de mercado.

PARÁGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al MANDATARIO de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado sin la autorización del MANDANTE. EL MANDATARIO deberá mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

PARÁGRAFO TERCERO: En el evento que se incremente el valor del Contrato o prorrogue su vigencia, EL MANDATARIO se obliga a ampliar el valor asegurado o prorrogar la vigencia de la garantía, atendiendo para ello los términos de las respectivas modificaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA- TERMINACIÓN. - El presente contrato de mandato, se dará por terminado únicamente en cualquiera de los siguientes eventos:

1) Por mutuo acuerdo;
2) Por el desempeño o agotamiento del objeto del negocio para el que fue constituido;
3) Por la expiración del término;
4) Por la renuncia, muerte o declaratoria judicial de interdicción del mandatario;
5) Por las causales de terminación del artículo 2189 del Código Civil Colombiano, salvo la muerte del MANDANTE, toda vez que el presente encargo se suscribe justamente para desarrollar actividades una vez ocurra la terminación de la existencia legal del MANDANTE;
6) Por el agotamiento de los ACTIVOS o por la iliquidez que haga imposible o especialmente gravoso seguir atendiendo los gastos de operación del mandato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL: El presente contrato de mandato con representación no constituye vínculo laboral entre EL MANDANTE y EL MANDATARIO.

CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACIÓN No. CBL-026-2022 SUSCRITO ENTRE CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN Y ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, NIT. 901.258.015-7

PARÁGRAFO: El presente contrato además de sus estipulaciones, se rige por las normas civiles y comerciales pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El MANDATARIO no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, ni subcontratar total o parcialmente, previa autorización del MANDANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - COMPROMISO Y GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN RESERVADA: EL MANDATARIO se obliga y garantiza guardar absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del MANDANTE con ocasión del desarrollo del presente contrato. En consecuencia, EL MANDATARIO se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. En todo caso si EL MANDATARIO utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le cause a EL MANDANTE y a terceros perjudicados, autorizando expresamente al MANDANTE a declarar los siniestros y hacer efectiva la garantía de que trata el presente contrato en caso de vulnerar tal confidencialidad.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Para solucionar cualquier diferencia que surja con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las partes podrán intentar un arreglo directo. En caso de no intentarse o de no prosperar, las diferencias serán tramitadas ante los jueces o instituciones competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: EL MANDATARIO mantendrá indemne al MANDANTE y al Liquidador de cualquier reclamación proveniente de BENEFICIARIOS DE PAGO, contratistas cedidos o de terceros, que tengan como causa sus acciones u omisiones o de las de sus subcontratistas o dependientes. En el evento en que EL MANDANTE y/o el Liquidador sean convocados, demandados o accionados en cualquier clase proceso, trámite o procedimiento, sea este jurisdiccional o no, aquellos tienen plena legitimación para hacer citar a EL MANDANTE y su garante, para que respondan por los perjuicios o sumas de dinero que se vean obligados a pagar, así como de cualquier otra obligación impuesta en tales procesos, todo conforme a la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato de mandato con representación se entiende perfeccionado y podrá ser ejecutado con la suscripción del presente instrumento por las partes contratantes.

CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACIÓN No. CBL-026-2022 SUSCRITO ENTRE CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN Y ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, NIT. 901.258.015-7

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – ANEXOS: Hacen parte integral del presente Contrato, los siguientes Anexos:

- Anexo No 001 – ACREEDORES RECONOCIDOS POR PARTE DE CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACION
- Anexo No 002 - ACTIVOS
  - Anexo No. 2 -A: Bienes Inmuebles
  - Anexo No. 2 -B: Bienes Muebles – Activos Fijos.
  - Anexo No. 2 -C: Derechos Incorporales – Participaciones Accionarias.
  - Anexo No. 2 -D: Derechos Incorporales – Títulos Valores.
- Anexo No 003 – Contratos cedidos
- Anexo No 004 – Procesos Judiciales
- Anexo No 005 – Manual operativo

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor legal, a los seis (06) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).

EL MANDANTE,

FELIPE NEGRET MOSQUERA
C.C. 10.547.944
Agente Especial Liquidador
CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

EL MANDATARIO,

JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS
C.C No 52.498.801
Representante Legal
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Nit No. 901.258.015-7

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Nit: 901.258.015-7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03071976
Fecha de matrícula: 22 de febrero de 2019
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 8 12 C 35 Oficina 604
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@atebsoluciones.com
Teléfono comercial 1: 3148209520
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 8 12 C 35 Oficina 604
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@atebsoluciones.com
Teléfono para notificación 1: 3148209520
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 14 de febrero de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2019, con el No. 02427364 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene como objeto principal, prestar servicios especializados a personas jurídicas públicas, privadas, mixtas y personas naturales incluyendo sin limitarse a ello, los siguientes: 1. Recuperación de cartera: 1. Ejecutar el cobro de la cartera; 2. Prestar los servicios profesionales en gestión de cartera (recaudo y seguimiento); 3. Realizar estrategia de recuperación de cartera, haciendo cobro preventivo; 4. Cobro prejurídico y jurídico, cuando sobre la cartera no se logre ningún acuerdo de pago o el mismo fue incumplido; 5. Revisión y seguimiento al manejo y control de glosas; 6. Prestar asesoría en las conciliaciones de cartera y glosas; 7. Asesorar las diferentes aéreas que intervienen en el proceso de cartera; 8. Realizar asesoría en las áreas de facturación, cartera y auditoría de cuentas, con su respectivo seguimiento a los procesos. 2. Defensa judicial: 1. Prestar los servicios profesionales para la defensa judicial y extrajudicial; 2. Contestar las demandas y los requerimientos, presentar excepciones, interponer los recursos a que haya lugar, aportar las pruebas, participar en la práctica de pruebas, elaborar y presentar los alegatos de conclusión, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en primera y segunda instancia en que sea parte el poderdante y para los cuales se le haya otorgado poder; 3. Elaborar, presentar y sustentar ante el Comité de Conciliación las fichas técnicas y los informes en que sea parte el poderdante y para los cuales se le haya otorgado poder; 4. Asistir en calidad de apoderado a las diligencias de conciliación judicial y

extrajudicial presentando la posición aprobada por el poderdante; 5. Solicitar de manera oportuna la información y las pruebas para la defensa de los intereses del poderdante; 6. Realizar el respectivo seguimiento en los despachos judiciales; 7. Presentar estudio de cada uno de los procesos judiciales y extrajudiciales asignados, señalando las acciones que debería tomar el cliente para prevenir el daño antijurídico; 8. Formular propuestas de políticas para la prevención del daño antijurídico que surjan del ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial del poderdante; 9. Emitir conceptos relacionados con los procesos que se estén tramitando o los que puedan iniciar en contra del poderdante; 10. Diligenciar y actualizar de manera veraz, completa, permanente y oportuna la información litigiosa de los procesos en los cuales se represente al poderdante en el aplicativo o base de información que se lleguen a establecer; 11. Efectuar los análisis de los procesos que se adelantan en contra del poderdante con el propósito de efectuar las recomendaciones necesarias; 12. Analizar permanentemente la normatividad expedida por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional con el fin de actualizar los conocimientos en la cuestión jurídica a resolver, que sirvan de fundamento jurídico para estructurar adecuadamente la estrategia de defensa a usar en cada proceso promovido contra el poderdante; 13. Presentar a solicitud del poderdante los informes con los datos y soportes requeridos; 14. Realizar la sustitución de poderes previa aprobación o solicitud del poderdante y en el término en que éste indique; 15. Guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca con ocasión del ejercicio de la defensa judicial; 16. Prestar los servicios profesionales acorde con las normas y conductas previstas en él estatuto del ejercicio de la abogacía. 3. Procesos de gestión de talento humano: 1. Elaboración de nóminas; 2. Cálculo y liquidación de prestaciones sociales y salariales, incluyendo cesantías, indemnizaciones y otros conceptos laborales; 3. Reestructuración administrativa de plantas de personal, programas de ingreso, ascenso y retiro; 4. Planes de retiro voluntario; 5. Contratación de personal; 6. Asesoría en el trámite pensional; 7. Asesoría en bonos pensionales y cuotas partes pensionales; 8. inscripción, actualización y cancelación de trámites de carrera administrativa; 9. Asesoría en la elaboración de formatos para el trámite de bonos pensionales; 10. Asesoría y acompañamiento en la presentación de giros para saneamiento fiscal y financiero, pago de pasivos y otros. 4. Organización integral de fondos documentales: 1. Clasificación; 2. Ordenación; 3. Depuración; Inventario; 4. Empacado; 5. Identificación de cada una de las cajas con sus contenidos; 6.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Eliminación; 7. Elaboración de tablas de valoración documental; 8. Elaboración de tablas de retención documental; 9. Adecuación de bodegas de almacenamiento de fondos documentales; 10. Servicio de almacenamiento con consulta. 5. Prestación de servicios de consultaría, asesoría, capacitación e interventorías para todo lo relacionado con las actividades propias del sector de externalización de procesos de entidades públicas, privadas, mixtas y particulares. 6. La comercialización de elementos de seguridad industrial (trabajo en alturas y elementos de protección personal) así como consultaría y asesoría en su uso y mantenimiento. Distribución, importación, representación, artículos para seguridad de trabajo en alturas, rescate, escalada, montañismo y sus derivados, seguridad para espacios confinados, distribución y comercialización de arneses, ascendedores, bloqueadores, cuerdas, líneas de vida, descendedores, dispositivos de anclaje, eslingas, dispositivos retractiles, poleas, elementos de protección para cabeza, protección ocular, protección auditiva, protección de manos, protección respiratoria, protección calzado, ropa industrial, salud y rescate y elementos para atención de emergencias, seguridad vial y señalización. 7. Comercialización, distribución, asociación, conformación de uniones temporales y consorcios y suministro de insumos y dotaciones de aseo y cafetería y trabajos en altura, hasta el software para el control del servicio, entre otros el cual cuenta con el personal calificado para todo tipo de sector, también se prestara el mantenimiento de edificios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo incluyendo el suministro de materiales, repuestos y accesorios para los bienes inmuebles y muebles (enseres y mobiliario). 18. Comercialización, distribución y suministro de dotación en general de camas, camillas, mesas, camarotes y salones de recepciones, y en general todo el menaje para el hogar, el. hotelería, la industria y casinos o comedores. 8. Comercialización y distribución de materiales eléctricos, industriales, materiales de construcción y ferretería en general. 9. Compra, venta, alquiler, almacenamiento, mantenimiento, comercialización, de toda clase de equipos, tecnologías, y sistemas de cómputo, servidores, hardware y software, equipos de comunicación, conmutación, procesamiento de datos, así como todos los accesorios y repuestos que estos equipos utilizan tales como, pero sin limitarse a ellos: Equipos periféricos, calculadoras, registradoras, fax, equipos multifuncionales, portátiles o de escritorio, tabletas, reales, virtuales o en la nube, etc. 10. Compra, suministro, transformación, distribución y servicio a la mesa de alimentos preparados e industrializados: Caliente, frio y tipo catering, además servicio de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

logística y transporte para toda clase de eventos público y/o privados. Adquisición y distribución, bajo cualquier modalidad comercial, al por mayor y al detal de productos para relojería, joyería y piedra preciosas. 11. Compra y venta de créditos y títulos judiciales. 12. Construcción de edificios, residenciales y no residenciales. 1. Realización de obras de ingeniería civil. 13. Construcción y mantenimiento de carreteras, construcción de proyectos de servicio público y construcción de otras obras de ingeniería civil. 14. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, como demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas. 15. Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 16. Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 17. Prestar servicios de tipo administrativo, incluida la organización física y técnica de los fondos documentales acumulados, incluyendo la recolección, conservación, clasificación, ordenación y depuración de archivos documentales. 18. Actividades de impresión, fotocopiado, y de producción de copias a partir de grabaciones originales. 19. Comercio al por mayor y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco. 20. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, muebles y ensere, equipos de oficina y papelería. 21. Actividades de servicios de comidas y bebidas, como actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas. 22. Comercio al por mayor y al por menor de artículos deportivos. 23. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática; actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 24. Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas. 25. Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. 26. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 27. Compra y venta de vehículos automotores y maquinaria pesada. 28. Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión, auditoría, asesoría y consultoría en asuntos financieros, tributarios, y demás actividades conexas, relacionadas y afines como dictámenes financieros, avalúos técnicos y planeación tributaria. 29. Desarrollar actividades como la ganadería, en especial la cría y comercialización de ganado bovino, bufalino, equino y porcino. 30. Extracción y comercialización de madera. 31. Confección y comercialización de prendas de vestir. 32. Podrá participar en invitaciones, convocatorias y licitaciones de cualquier persona

natural o jurídica de derecho público o privado, para ofertar los servicios, bienes y actividades descritas anteriormente y en general podrá desarrollar cualquier actividad lícita en el territorio nacional.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : $50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $40.000.000,00
No. de acciones : 800,00
Valor nominal : $50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $20.000.000,00
No. de acciones : 400,00
Valor nominal : $50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y Representación Legal de la sociedad está en cabeza del Representante Legal, legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los Representantes Legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente, con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 005 del 31 de marzo de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de abril de 2022 con el No. 02812185 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Janneth Del Pilar Peña Plazas	C.C. No. 000000052498801

Por Acta No. 4 del 25 de febrero de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de marzo de 2022 con el No. 02798937 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Adriana Milena Calderon Ricaurte	C.C. No. 000000039581483

Por Acta No. 005 del 31 de marzo de 2022 del Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de Abril de 2022 con el No. 02812512 del Libro IX, se removió del cargo a Adriana Milena Calderón Ricaurte y se dejó vacante el cargo.

PODERES

Por Escritura Pública No. 963 del 06 de abril de 2022, otorgada en la Notaría 16 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2022, con el No. 00047106 del libro V. compareció Janneth del Pilar Peña Plazas identificada con la Cédula de ciudadanía número 52.498.801 en su calidad de Representante Legal de la sociedad de la referencia, por medio del presente documento, confirió poder general, amplio y suficiente a Jenny Paola Sandoval Pulido identificada con la Cédula de ciudadanía número 39.804.256. para que en nombre y representación de la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, con NIT 901.258.015-7, ejecute toda clase de actos y celebre toda clase de contratos civiles y comerciales con facultades administrativas en general. Segundo - Facultades Generales: La

apoderada queda investida de las facultades que le otorguen el mandante en forma expresa en el presente mandato por tanto responderá de su ejercicio en los términos que establecen los artículos 2142 y ss., del Código Civil, 1262 y 832 y ss., del código de Comercio y demás normas concordantes y pertinentes. Tercero. - Atribuciones y Obligaciones del Apoderado General. - La apoderada general tendrá en el ejercicio de sus funciones, las siguientes facultades y obligaciones especificas en nombre y representación del mandante: a) Suscribir cualquier tipo actos, mandatos y contratos con entidades públicas o privadas de cualquier orden territorial, incluso con entidades que se encuentren en estado de liquidación; de conformidad que complemente, modifique o adicionen conforme a las facultades que se establezcan en el este documento, incluidos los contemplados en los actos administrativos de liquidación que se profieran según el caso y demás normas que las complementen, modifiquen o adicionen y aquellas normas a las cuales remiten las citadas normas, así como las normas pertinentes y concordante que se aplique de acuerdo con la naturales del proceso liquidatario (liquidaciones voluntarias o forzosas administrativas). b) Otorga poderes especiales para la defensa y representación judicial extrajudicial y administrativa de la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, así como de las entidades con quien esta suscrita contratos, mandatos o haya o sea designada como depositario de la sociedad o establecimiento de comercio, sin perjuicio de los poderes generales otorgados por el mandante a otros apoderados. c) Notificarse de las actuaciones administrativas, judiciales y/o constitucionales que se adelanten o en las que se vincule directamente la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, o donde se vinculen las entidades con quien esta tenga suscritos mandatos, contratos o haya sido o sea designada como depositaria de sociedades o establecimiento de comercio. d) para que en nombre y representación de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, o de las entidades con quien esta tenga suscritos mandatos, contratos o haya sido o sea designada como bienes muebles e inmuebles e ellos vinculados o que llegue a tener recaude sus productos y celebre los contratos de administración que sean necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo en estos los relativos a prestación de servicios bajo el régimen civil y mercantil. E) para que cobre, requiera el pago y exija judicial o extra judicialmente que exista a favor ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, o de las entidades con quien ésta tenga suscritos mandatos, contratos o haya sido o sea designado como depositaria del sociedades o establecimiento de comercio; pudiendo ser estas obligaciones actuales o futuras, expida

---

los recibos y otorgue cancelaciones. f) para que exija cuentas quienes tengan la obligación de rendirlas a la sociedad poderdante, las apruebe o impruebe, pague o perciba, según el caso, el saldo respectivo y otorgue el finiquito correspondiente. g) para que represente a la sociedad poderdante ante las sociedades civiles y comerciales en todo lo relacionado con las acciones o intereses sociales que posean en las mismas, con derecho a intervenir con voz y voto en las asambleas generales, junta de socios o como miembro de juntas directivas pudiendo ejercer los actos de administración que le corresponde como socio o miembro de ella con facultad suficiente para cobrar y recibir dividendos y participaciones, suscribir acciones, hacer aportes o aumentar los ya hechos, y en general todos los derechos y facultades que le corresponde como socio. h) Para que represente a LA SOCIEDAD PODERDANTE ante cualquier corporación, entidad, funcionario, empleado y servidores de las distintas ramas del poder público y sus organismos vinculados o adscritos de la rama judicial y de la rama legislativa del poder público, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso sea como demandante, demandado, coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar y seguir hasta su terminación los procesos actos o diligencias y actuaciones respectivas. Para que asuma la personería LA SOCIEDAD PODERDANTE ante cualquier autoridad cuando se estime conveniente y necesario de tal modo que en ningún caso quede sin representación alguna. i) En general, para que asuma la personería de LA SOCIEDAD PODERDÄNTE cuando lo estime conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso quede sin representación en sus negocios. CUARTO. - En general la apoderada queda autorizada y facultada para realizar. promover y ejecutar los actos y acciones procesales que se requieren para el cumplimiento del presente mandato, recibir desistir, transigir, conciliar, sustituir, reasumir, negociar en las audiencias de conciliación e interrogatorios de parte la apoderada queda facultada para: desistir, declarar, recibir, transigir, confesar y conciliar observando las limitaciones de ley. QUINTO. _ TERMINACION DEL PODER GENERAL. - El presente Poder General se terminará por las siguientes causales: 1. Cuando el mandante revoque el presente Poder. 2. Por renuncia de la Apoderada Genera 3. Por cualquier otra causa legal y contractual. - SEXTO El ejercicio de las facultades conferidas a través del presente poder general no causa honorarios a favor de la, apoderada general.

Por Escritura Pública No. 1244 del 26 de abril de 2022, otorgada en la Notaría 16 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

el 2 de Mayo de 2022 con el No. 00047260 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Yully Natalia Arroyave Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.915.351 de Armenia (Quindío), con Tarjeta profesional número 224.334 del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en su nombre y representación, sin limitación alguna y con las más amplias facultades administrativas y dispositivas así: 1.- Representar legalmente ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), en las acciones de tutela, incidentes de desacato, sanciones, asistencia a audiencias de conciliación, y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte y demás actuaciones relacionadas con el proceso y/o trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia, para el efecto podrá otorgar poderes a los abogados designados. 2.- Presentar memoriales frente a los procesos judiciales o administrativos, reclamaciones o gestiones que intervengan a nombre del poderdante incluidos los recursos que en sede judicial o administrativa interponga y los incidentes que promueva, para el efecto podrá otorgar poderes a los abogados designados. 3.- Representar legalmente a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), como demandante, demandado, coadyuvante, en cualquier petición, actuación diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente la facultad para otorgar poderes a los abogados designados. 4.- Representar legalmente a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial conciliación judicial, audiencias de pacto de cumplimiento, citadas por la Superintendencia nacional de salud o ante cualquier autoridad judicial o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), o que se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte fórmulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de la empresa. 5.- Representar a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como

mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas del orden nacional, territorial o seccional, en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita administrativa, requerimiento o diligencia, así como pare el ejercicio de todos los recursos en vía a gubernativa procedan en el procedimiento administrativo, para el efecto podrá otorgar poderes a los abogados designados. 6.- Representar a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), en las mesas de saneamiento, mesas de trabajo y mesas de conciliación de cartera citadas por la Superintendencia nacional de salud, además de las entidades nacionales, departamentales, municipales, y personas jurídicas de derecho privado, para lo cual se encuentra facultado para adelantar las gestiones que considere pertinentes. 7.- Suscribir contratos de carácter asistencial o administrativo de acuerdo con las necesidades de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), en el marco del desarrollo del objeto social de la empresa, de las facultades y obligaciones establecidas en el contrato de mandato. 8.- Suscribir los oficios mediante los cuales se termina unilateralmente los contratos asistenciales y administrativos, las terminaciones bilaterales, los incumplimientos contractuales, la efectividad de las cláusulas penales y la liquidación de los contratos suscritos por ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), o que le fueron cedidos en virtud del contrato de mandato. 9.- Representar a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), para responder cualquier requerimiento técnico, jurídico o administrativo presentado por la autoridad judicial, administrativa, interventoría y en general cualquier petición elevada por terceros de naturaleza pública o privada. 10.- Representar a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), para remitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de salud y protección social o que de oficio deban presentarse, así como para interponer los recursos en vía administrativa contra los actos administrativos emitidos por la

---

entidad.

Por Escritura Pública No. 1245 del 26 de abril de 2022, otorgada en la Notaría 16 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 2 de Mayo de 2022 con el No. 00047264 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial, amplio y suficiente a Rosa Elvira Reyes Medina, identificado con la cédula de ciudadanía No. 46.663.025 de Duitama (Boyacá) y portadora de la Tarjeta profesional de Abogado No. 163.922 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en su nombre y representación, sin limitación alguna y con las más amplias facultades administrativas y dispositivas así: atribuciones y obligaciones de la apoderada especial - la apoderada especial tendrá en el ejercicio de sus funciones, las siguientes facultades y obligaciones específicas en nombre y representación de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. con Nit 901.258.015-7, sociedad que actúa como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., Hoy liquidada, de conformidad con las funciones y obligaciones establecidas en el contrato número CBL-026-2022: 1. Ejercer la defensa técnica ante cualquier autoridad judicial en acciones de tutela en que sea parte CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN (Hoy liquidada) y/o de la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada). 2. Notificarse en representación de CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN (Hoy liquidada) y/o de la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), de las providencias judiciales que sean emitidas por los despachos de conocimiento en cada una de las acciones de tutela, incidentes de desacato y demás procesos y acciones constitucionales en que sea parte CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN (Hoy liquidada) o que sienta bien con ocasión del proceso liquidatorio de la entidad a nivel nacional. 3. Comparecer a las audiencias judiciales en representación de CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN (Hoy liquidada) y/o de la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), que citen los despachos de conocimiento en cada una de las acciones de tutela, incidentes de desacato, acciones constitucionales y procesos judiciales en que sea parte CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN (Hoy liquidada). De igual manera la apoderada

puede solicitar el aplazamiento de las actuaciones judiciales siempre que medien motivos suficientes para ello. 4. elaborar y presentar mensualmente los informes requeridos por la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), así como todos aquellos que sean requeridos ordinaria y extraordinariamente por los diferentes entes de control y la Superintendencia nacional de salud. 5. representar a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), para responder cualquier requerimiento técnico, jurídico o administrativo presentado por autoridad judicial, administrativa, interventoría y en general cualquier petición elevada por terceros de naturaleza privada o pública en cada una de las acciones de tutela, incidentes de desacato, acciones constitucionales en las que se aparte CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN (Hoy liquidada). 6. La apoderada especial queda investida de las facultades anteriormente expuestas, por tanto, responderá de su ejercicio en los términos que establecen los artículos 2142 y s.s de Código Civil; 1262 y 832 y s.s, del Código de Comercio y demás normas concordantes y pertinentes. Terminación del Poder Especial: el presente poder se terminará por las siguientes causales: 1. Cuando haya terminación del contrato de mandato con representación para la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., como mandataria con representación de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA EPS S.A., (Hoy liquidada), por cualquier causa. 2. Por muerte real o presunta de la Apoderada Especial. 3. Por la renuncia o terminación del vínculo que la Apoderada Especial tiene con CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN (Hoy liquidada). 4. Por la renuncia de la apoderada especial al poder conferido. 5. En el caso que la sociedad poderdante revoque el poder conferido.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 1 del 17 de octubre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02516888 del 21 de octubre de 2019 del Libro IX
Acta No. 002 del 26 de noviembre de 2019 de la Asamblea de	02529620 del 3 de diciembre de 2019 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Accionistas

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 21 de febrero de 2019, inscrito el 22 de febrero de 2019 bajo el número 02427365 del libro IX, comunica el accionista único:
Janneth Del Pilar Peña Plazas
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 22-02-2019

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7020

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 338.161.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7020

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de mayo de 2022 Hora: 10:51:02
Recibo No. AA22770634
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A227706349BAE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14821923459

(415)7707212489984(8020) 000001482192345 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ATEB SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 12 C 31 OF 604

42. Correo electrónico atebsolucionesempresariales@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 8 1 2 2 6 9	4 7 1 1 8 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 0 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 05 / 14 : 24: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO PLAZAS RAUL ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14821923459

(415)7707212489984(8020) **000001482192345 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 2 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 7 1 9 7 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 2 2 2		-
2	8 1	2 0 1 9 0 2 2 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14821923459

(415)7707212489984(8020) **000001482192345 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 9 8 8 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ESCRITURA PÚBLICA No. MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (1244)
DE FECHA: VEINTISEIS (26) DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)
OTORGADA EN LA NOTARIA DIECISÉIS (16) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO NOTARIA 110010016

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

FORMATO DE CALIFICACIÓN:

PODER GENERAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

DATOS PERSONALES	NUMERO DE IDENTIFICACION
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	**NIT . 901.258.015-7**
Representada por	
JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS	**C.C. 52.498.801**

APODERADO(A,OS):

YULLY NATALIA ARROYAVE MORENO **C.C. 1.094.915.351**

VIGENCIA: TERMINO INDEFINIDO

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), en la **NOTARIA DIECISÉIS (16) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.**, siendo Notario Titular el Doctor **EDUARDO VERGARA WIESNER**, se otorgó la escritura pública contenida en las siguientes estipulaciones:

COMPARECIÓ CON MINUTA: JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.498.801 expedida en Bogotá D.C., representante legal de la sociedad **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, con NIT 901.258.015-7,** constituida mediante Documento Privado todo lo cual se acredita con copia autentica del certificado de

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO005871480
PC044274086
2DGMVAL4PB 78ML4G6PX3 24-11-21 PO 28-02-22 PC044274086

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá; documentos todos estos que se anexan y se protocolizan con el presente instrumento público; sociedad que actúa como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN**, de **CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., HOY LIQUIDADA**, de conformidad con el **CONTRATO NÚMERO CBL-026-2022**, quien en ejercicio de las facultades legales, y en adelante se denominará **PODERDANTE**, declara: ----------

PRIMERO. - Que por medio del presente instrumento, se otorga PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, a favor de la doctora **YULLY NATALIA ARROYAVE MORENO**, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.094.915.351 de Armenia (Quindío), con Tarjeta profesional número 224.334 del Consejo Superior de la Judicatura , para que, en su nombre y representación, sin limitación alguna y con las más amplias facultades administrativas y dispositivas así:----------

1.-Representar legalmente **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** en las acciones de tutela, incidentes de desacato, sanciones, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorios de parte y demás actuaciones relacionadas con el proceso y/o trámites para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la Entidad, por parte de las autoridades judiciales y organismos de inspección, control y vigilancia, para el efecto podrá otorgar poderes a los abogados designados.----------

2.- Presentar memoriales frente a los proceso judiciales o administrativos, reclamaciones o gestiones en que intervenga a nombre del poderdante incluidos los recursos que en sede judicial o administrativa interponga y los incidentes que promueva, para el efecto podrá otorgar poderes a los abogados designados.

3.- Representar legalmente a **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** como demandante, demandado, coadyuvante, en cualquier petición, actuación diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas,

con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente la facultad para otorgar poderes a los abogados designados.-----

4.- Representar legalmente a **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** en calidad de parte, en las diligencias de conciliación extrajudicial, conciliación judicial, audiencias de pacto de cumplimiento, citadas por la Superintendencia Nacional de Salud o ante cualquier autoridad judicial o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** o que se inicien en su contra, para que en ellas proponga, rechace o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de la empresa.----------

5.- Representar a **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas del orden nacional, territorial o seccional, en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita administrativa, requerimiento o diligencia, así como pare el ejercicio de todos los recursos en vía gubernativa procedan en el procedimiento administrativo, para el efecto podrá otorgar poderes a los abogados designados.----------

6.- Representar a **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** en las mesas de saneamiento, mesas de trabajo y mesas de conciliación de cartera citadas por la Superintendencia Nacional de Salud, además de las entidades nacionales, departamentales, municipales y personas jurídicas de derecho privado, para lo cual se encuentra facultado para adelantar las gestiones que considere pertinente.----------

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO005871481

PC044274085

5U7L1A4XIW 24-11-21 PO 28-02-22 PC044274085

R5GSPWXEU2

THOMAS GREG & SONS

7.- Suscribir contratos de carácter asistencial o administrativo de acuerdo con las necesidades de **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** en el marco del desarrollo del objeto social de la empresa, de las facultades y obligaciones establecidas en el contrato de mandato. ----------

8.- Suscribir los oficios mediante las cuales se termina unilateralmente los contratos asistenciales y administrativos, las terminaciones bilaterales, los incumplimientos contractuales, la efectividad de las clausulas penales y la liquidación de los contratos suscritos por **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** o que le fueron cedidos en virtud del contrato de mandato.

9.- Representar a **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** para responder cualquier requerimiento técnico, jurídico o administrativo presentado por la autoridad judicial, administrativa, interventoría y en general cualquier petición elevada por terceros de naturaleza pública o privada.----------

10.- Representar a **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.,** como **MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS S.A., (HOY LIQUIDADA),** para remitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social o que de oficio deban presentarse, así como para interponer los recursos en vía administrativa contra los actos administrativos emitidos por la Entidad.----------

HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA

CONSTANCIA DE LOS INTERESADOS Y ADVERTENCIA DEL NOTARIO: EL (LA,LOS) COMPARECIENTE(S) HACE CONSTAR QUE: 1. Ha(n) verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, su real estado civil, número correcto de sus documentos de identificación, y aprueba este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. 2. Las declaraciones consignadas en

instrumento corresponden a la verdad y el(los) otorgante lo aprueba totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asume la responsabilidad por cualquier inexactitud. 3. El Notario no puede dar fe sobre la voluntad real del(los) compareciente y beneficiaria, salvo lo expresado en este instrumento, que fue aprobado sin reserva alguna por el(los) compareciente y beneficiaria en la forma como quedo redactado. 4 Conoce la Ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza pero no de la veracidad de las declaraciones del(los) otorgante ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento. 5. Será responsable civil, penal y fiscalmente, en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. 6. Solo solicitara correcciones, aclaraciones, o modificaciones al texto de la presente escritura en la forma y en los casos previstos por la Ley. ----------

ADVERTENCIA NOTARIAL: A el(la,los) otorgante(s) se le advirtió que una vez firmado este instrumento la Notaría no asumirá correcciones o modificaciones si no en la forma y casos previstos por la Ley, siendo esto solo responsabilidad de la otorgante. Además el Notario le advierte a EL (LA,LOS) COMPARECIENTE(S) que cualquier aclaración a la presente escritura, implica el otorgamiento de una nueva escritura pública de aclaración, cuyos costos serán asumidos única y exclusivamente por EL (LA,LOS) COMPARECIENTE(S). ----------

DE LA COMPARECENCIA: El (la,los) ciudadano(a,os) declara(n) bajo la gravedad del juramento que su presencia física y jurídica, así como las manifestaciones en las diferentes cláusulas de este instrumento, obedecen a la autonomía de su voluntad y que no se ha ejercido sobre ellos dolo, fuerza física o psicológica, que los datos consignados en la comparecencia del presente instrumento como los son sus nombres y apellidos, la titularidad del documento de identificación exhibido, así como su estado civil corresponden a su actual realidad jurídica, los cuales han sido confirmados de viva voz a los funcionarios Notariales y transcritos de su puño y letra al momento de plasmar su firma en señal de aceptación del presente acto notarial, hechos que dejan plenamente establecida su asistencia en este Despacho Notarial. ----------

DE LA CAPACIDAD: El(la,los) compareciente(s) manifiesta(n) que es(son) plenamente capaz(ces) para contratar y obligarse, que no tiene ningún tipo de

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

PO005871482

PC044274084

9DOVIB10CN 24-11-21 PC044274084 MQ62X8GTR9 28-02-22 PC044274084

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

impedimento legal que vicie de nulidad las declaraciones que dentro del acto o negocio jurídico se han consignado. Que goza de forma absoluta del ejercicio de sus Derechos y que las declaraciones redactadas en este instrumento son su real voluntad y de esta forma buscan la eficacia jurídica del acto o negocio otorgado. Que sus condiciones mentales e intelectuales son las idóneas y en razón a ello han conllevado al Notario a través de un juicio de valores, a determinar su capacidad para comparecer. Que han entendido el clausulado que conforma la presente escritura pública y que la aprueba en su totalidad. ----------

DE LA IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA: EL (LA,LOS) COMPARECIENTE(S) manifiesta que exhibe los documentos de identidad de los cuales es titular y que son los idóneos para establecer los atributos de su personalidad, como los son sus nombres, nacionalidad, mayoría de edad y serial de identificación. Que accede a que su cédula de ciudadanía sea sometida a una lectura biométrica que permite extraer del código de barras la información que habilita al Notario presumir la originalidad, validez y autenticidad del documento de identidad. En caso que EL (LA,LOS) COMPARECIENTE(S) presente para su identificación una contraseña que señala el trámite de duplicado, corrección o rectificación, el ciudadano afirma bajo la gravedad de juramento que el sello que certifica el estado de su trámite ha sido estampado en una oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En todo caso, la titular de la contraseña de expedición de cédula de ciudadanía por primera vez, o no certificada, la cédula de extranjería, pasaporte o visa que no puede ser sometidas al control de captura de identificación biométrica, manifiesta que estos documentos han sido tramitados y expedidos por la entidad competente y legítimamente constituida para ello (Registraduría, Consulado, embajadas, etc.) y que no ha sido adulterada o modificada dolosamente. ----------

NOTA. En aplicación del principio de la autonomía que dentro del control de legalidad puede ejercer el notario, amparado en el artículo 8 del decreto ley 960 de 1970 y el articulo 116 del decreto 2148 de 1983, se advierte e informa a el (la,los) compareciente(s) de este publico instrumento, que con el fin de prevenir una suplantación en las personas, de salvaguardar la eficacia jurídica de este acto y así producir la plena fe pública notarial, se ha implementado un sistema de control biométrico en el que queda consignada de forma electrónica su huella digital y la

imagen fotográfica de su rostro así mismo la diligencia realizada ha quedado filmada a través de las cámaras instaladas en la sala de lectura, a todo lo cual de forma voluntaria asienten y manifiestan aceptar, obligándose la notaria a no publicar o comercializar dichos datos y/o imágenes. ----------

NOTA: los datos personales aquí aportados, forman parte de los ficheros automatizados existentes en la notaria, serán tratados y protegidos según la ley orgánica 1581 de 2012 de protección de datos de carácter personal, la legislación notaria y las normas que los reglamentan o complementan para el almacenamiento y uso. ----------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: ----------

LEÍDO: El Notario personalmente, conjuntamente con los Asesores Jurídicos han advertido a las partes sobre la importancia del Acto Jurídico. Les han explicado los requisitos de Ley para su existencia y validez y les han advertido sobre la importancia de obrar de buena fe, conforme a los principios normativos y del derecho y les han instado para que revisen nuevamente las obligaciones, los derechos que contraen y el texto de la escritura, y demás datos del mismo, para lo cual exoneran a la Notaria y a sus funcionarios dado que han revisado, entendido y aceptado lo que firman. A todo lo anterior EL (LA,LOS) COMPARECIENTE(S) dio su asentimiento y en prueba de ello lo firma en esta Oficina, junto con el(la) Suscrito(a) Notario(a), quien de esta forma lo autoriza. ----------

Se utilizaron las hojas de papel notarial números: ----------

PO005871480 / PO005871481 / PO005871482 / PO005871483 — — — — ———

RESOLUCIÓN NUMERO 00755 DE ENERO 26 DE 2022 ----------

DERECHOS NOTARIALES COBRADOS: $ 66.200.oo ----------

SUPERINT. DE NOT. Y REG. : $ 7.150.oo ----------

FONDO NAL.DEL NOT $ 7.150.oo ----------

IVA $ 30.647,oo

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO005871483
PC044274083
24SHQA8F3Z VDWRHFT5YE 24-11-21 PO 28-02-22 PC044274083
THOMAS GREG & SONS

LA COMPARECIENTE

JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS

C.C. 52.498.801

DIRECCIÓN Cl 6 B # 12c 35

TELÉFONO

E-MAIL contactenos@ebsoluciones.com

ACTIVIDAD COMERCIAL

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016

SI__NO_X_

CARGO

FECHA DE VINCULACIÓN FECHA DE DESVINCULACIÓN En nombre y representación de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. NIT. 901.258.015-7

Se autoriza la firma fuera del despacho notarial (Art. 2.2.6.1.2.1.5 Dcto. 1069 de 2015)

NOTARIA-16

HUELLA
ÍNDICE DERECHO
TOMADA POR:

EDUARDO VERGARA WIESNER

NOTARIO DIECISÉIS (16)

DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

RAD: 17839- 2022
RADICO: HEIDY
DIGITO: STELLA
LIQUIDO
V.B BUENO

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22655030E587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Nit: 901.258.015-7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03071976
Fecha de matrícula: 22 de febrero de 2019
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 8 12 C 35 Oficina 604
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: atebsolucionesempresariales@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3004812269
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 8 12 C 35 Oficina 604
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: atebsolucionesempresariales@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3004812269
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
PC044274082
28-02-22 PC044274082
0MD5PI7BWY
Firma válida Constanza Del Pilar Reyes Murillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22655030E587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 14 de febrero de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2019, con el No. 02427364 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene como objeto principal, prestar servicios especializados a personas jurídicas públicas, privadas, mixtas y personas naturales incluyendo sin limitarse a ello, los siguientes: 1. Recuperación de cartera: 1. Ejecutar el cobro de la cartera; 2. Prestar los servicios profesionales en gestión de cartera (recaudo y seguimiento); 3. Realizar estrategia de recuperación de cartera, haciendo cobro preventivo; 4. Cobro prejurídico y jurídico, cuando sobre la cartera no se logre ningún acuerdo de pago o el mismo fue incumplido; 5. Revisión y seguimiento al manejo y control de glosas; 6. Prestar asesoría en las conciliaciones de cartera y glosas; 7. Asesorar las diferentes aéreas que intervienen en el proceso de cartera; 8. Realizar asesoría en las áreas de facturación, cartera y auditoría de cuentas, con su respectivo seguimiento a los procesos. 2. Defensa judicial: 1. Prestar los servicios profesionales para la defensa judicial y extrajudicial; 2. Contestar las demandas y los requerimientos, presentar excepciones, interponer los recursos a que haya lugar, aportar las pruebas, participar en la práctica de pruebas, elaborar y presentar los alegatos de conclusión, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en primera y segunda instancia en que sea parte el poderdante y para los cuales se le haya otorgado poder; 3. Elaborar, presentar y sustentar ante el Comité de Conciliación las fichas técnicas y los informes en que sea parte el poderdante y para los cuales se le haya otorgado poder; 4. Asistir en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226550306587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

calidad de apoderado a las diligencias de conciliación judicial y extrajudicial presentando la posición aprobada por el poderdante; 5. Solicitar de manera oportuna la información y las pruebas para la defensa de los intereses del poderdante; 6. Realizar el respectivo seguimiento en los despachos judiciales; 7. Presentar estudio de cada uno de los procesos judiciales y extrajudiciales asignados, señalando las acciones que debería tomar el cliente para prevenir el daño antijurídico; 8. Formular propuestas de políticas para la prevención del daño antijurídico que surjan del ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial del poderdante; 9. Emitir conceptos relacionados con los procesos que se estén tramitando o los que puedan iniciar en contra del poderdante; 10. Diligenciar y actualizar de manera veraz, completa, permanente y oportuna la información litigiosa de los procesos en los cuales se represente al poderdante en el aplicativo o base de información que se lleguen a establecer; 11. Efectuar los análisis de los procesos que se adelantan en contra del poderdante con el propósito de efectuar las recomendaciones necesarias; 12. Analizar permanentemente la normatividad expedida por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional con el fin de actualizar los conocimientos en la cuestión jurídica a resolver, que sirvan de fundamento jurídico para estructurar adecuadamente la estrategia de defensa a usar en cada proceso promovido contra el poderdante; 13. Presentar a solicitud del poderdante los informes con los datos y soportes requeridos; 14. Realizar la sustitución de poderes previa aprobación o solicitud del poderdante y en el término en que éste indique; 15. Guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca con ocasión del ejercicio de la defensa judicial; 16. Prestar los servicios profesionales acorde con las normas y conductas previstas en el estatuto del ejercicio de la abogacía. 3. Procesos de gestión de talento humano: 1. Elaboración de nóminas; 2. Cálculo y liquidación de prestaciones sociales y salariales, incluyendo cesantías, indemnizaciones y otros conceptos laborales; 3. Reestructuración administrativa de plantas de personal, programas de ingreso, ascenso y retiro; 4. Planes de retiro voluntario; 5. Contratación de personal; 6. Asesoría en el trámite pensional; 7. Asesoría en bonos pensionales y cuotas partes pensionales; 8. Inscripción, actualización y cancelación de trámites de carrera administrativa; 9. Asesoría en la elaboración de formatos para el trámite de bonos pensionales; 10. Asesoría y acompañamiento en la presentación de giros para saneamiento fiscal y financiero, pago de pasivos y otros. 4. Organización integral de fondos documentales: 1. Clasificación; 2. Ordenación; 3. Depuración; Inventario; 4. Empacado;

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
PC044274081
28-02-22 PC044274081
RSDPMY41WL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22655030E587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

5. Identificación de cada una de las cajas con sus contenidos; 6. Eliminación; 7. Elaboración de tablas de valoración documental; 8. Elaboración de tablas de retención documental; 9. Adecuación de bodegas de almacenamiento de fondos documentales; 10. Servicio de almacenamiento con consulta. 5. Prestación de servicios de consultaría, asesoría, capacitación e interventorías para todo lo relacionado con las actividades propias del sector de externalización de procesos de entidades públicas, privadas, mixtas y particulares. 6. La comercialización de elementos de seguridad industrial (trabajo en alturas y elementos de protección personal) así como consultaría y asesoría en su uso y mantenimiento. Distribución, importación, representación, artículos para seguridad de trabajo en alturas, rescate, escalada, montañismo y sus derivados, seguridad para espacios confinados, distribución y comercialización de arneses, ascendedores, bloqueadores, cuerdas, líneas de vida, descendedores, dispositivos de anclaje, eslingas, dispositivos retractiles, poleas, elementos de protección para cabeza, protección ocular, protección auditiva, protección de manos, protección respiratoria, protección calzado, ropa industrial, salud y rescate y elementos para atención de emergencias, seguridad vial y señalización. 7. Comercialización, distribución, asociación, conformación de uniones temporales y consorcios y suministro de insumos y dotaciones de aseo y cafetería y trabajos en altura, hasta el software para el control del servicio, entre otros el cuál cuenta con el personal calificado para todo tipo de sector, también se prestara el mantenimiento de edificios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo incluyendo el suministro de materiales, repuestos y accesorios para los bienes inmuebles y muebles (enseres y mobiliario). 18. Comercialización, distribución y suministro de dotación en general de camas, camillas, mesas, camarotes y salones de recepciones, y en general todo el menaje para el hogar, el hotelería, la industria y casinos o comedores. 8. Comercialización y distribución de materiales eléctricos, industriales, materiales de construcción y ferretería en general. 9. Compra, venta, alquiler, almacenamiento, mantenimiento, comercialización, de toda clase de equipos, tecnologías, y sistemas de cómputo, servidores, hardware y software, equipos de comunicación, conmutación, procesamiento de datos, así como todos los accesorios y repuestos que estos equipos utilizan tales como, pero sin limitarse a ellos: Equipos periféricos, calculadoras, registradoras, fax, equipos multifuncionales, portátiles o de escritorio, tabletas, reales, virtuales o en la nube, etc. 10. Compra, suministro, transformación, distribución y servicio a la mesa de alimentos preparados e

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22655030E587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

industrializados: Caliente, frio y tipo catering, además servicio de logística y transporte para toda clase de eventos público y/o privados. Adquisición y distribución, bajo cualquier modalidad comercial, al por mayor y al detal de productos para relojería, joyería y piedra preciosas. 11. Compra y venta de créditos y títulos judiciales. 12. Construcción de edificios, residenciales y no residenciales. 1. Realización de obras de ingeniería civil. 13. Construcción y mantenimiento de carreteras, construcción de proyectos de servicio público y construcción de otras obras de ingeniería civil. 14. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, como demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas. 15. Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 16. Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 17. Prestar servicios de tipo administrativo, incluida la organización física y técnica de los fondos documentales acumulados, incluyendo la recolección, conservación, clasificación, ordenación y depuración de archivos documentales. 18. Actividades de impresión, fotocopiado, y de producción de copias a partir de grabaciones originales. 19. Comercio al por mayor y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco. 20. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, muebles y enseres, equipos de oficina y papelería. 21. Actividades de servicios de comidas y bebidas, como actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas. 22. Comercio al por mayor y al por menor de artículos deportivos. 23. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática; actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 24. Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas. 25. Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. 26. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 27. Compra y venta de vehículos automotores y maquinaria pesada. 28. Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión, auditoría, asesoría y consultoría en asuntos financieros, tributarios, y demás actividades conexas, relacionadas y afines como dictámenes financieros, avalúos técnicos y planeación tributaria. 29. Desarrollar actividades como la ganadería, en especial la cría y comercialización de ganado bovino, bufalino, equino y porcino. 30. Extracción y comercialización de madera. 31. Confección y comercialización de prendas de vestir. 32. Podrá participar en

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
PC044274080
28-02-22 PC044274080
K3WX1AIQTZ

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22655030E587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

invitaciones, convocatorias y licitaciones de cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, para ofertar los servicios, bienes y actividades descritas anteriormente y en general podrá desarrollar cualquier actividad lícita en el territorio nacional.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $500.000.000,00
No. de acciones	: 10.000,00
Valor nominal	: $50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $40.000.000,00
No. de acciones	: 800,00
Valor nominal	: $50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $20.000.000,00
No. de acciones	: 400,00
Valor nominal	: $50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y Representación Legal de la sociedad está en cabeza del Representante Legal, legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los Representantes Legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente, con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22655030E587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 005 del 31 de marzo de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de abril de 2022 con el No. 02812185 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Janneth Del Pilar Peña Plazas	C.C. No. 000000052498801

Por Acta No. 4 del 25 de febrero de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de marzo de 2022 con el No. 02798937 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Adriana Milena Calderon Ricaurte	C.C. No. 000000039581483

Por Acta No. 005 del 31 de marzo de 2022 del Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de Abril de 2022 con el No. 02812512 del Libro IX, se removió del cargo a Adriana Milena Calderón Ricaurte y se dejó vacante el cargo.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 1 del 17 de octubre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02516888 del 21 de octubre de 2019 del Libro IX
Acta No. 002 del 26 de noviembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02529620 del 3 de diciembre de 2019 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
PC044274079
28-02-22 PC044274079
C39DUYFIOG
THOMAS GREG & SONS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22655030E587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del constituyente del 21 de febrero de 2019, inscrito el 22 de febrero de 2019 bajo el número 02427365 del libro IX, comunica el accionista único:
Janneth Del Pilar Peña Plazas
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 22-02-2019

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7020

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22655030E587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 338.161.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7020

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
PC044274078
28-02-22 PC044274078
R6Z1NQWJ9T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de abril de 2022 Hora: 19:22:36
Recibo No. AA22655030
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226550305587D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Notaria 16

EDUARDO VERGARA WIESNER

NOTARIO DEL CÍRCULO DE BOGOTA

CÓDIGO NOTARIAL 1100100016

PRIMERA (1ª) COPIA AUTENTICA DE LA ESCRITURA PUBLICA 1244 DE ABRIL 26 DE 2022, TOMADA DE SU ORIGINAL CONFORME AL ARTICULO 80 DEL DECRETO LEY 960 DE 1970, EXPEDIDA EN PAPEL DE SEGURIDAD SEGUN EL ARTICULO 2.2.6.13.1.1 DEL DECRETO LEY 1069 DE 2015, EN (10) HOJAS LA PRESENTE SE EXPIDE CON DESTINO A:

INTERESADO.

BOGOTA D.C. 27/04/2022

Hora de Impresión 8:47:21 a. m.

JANNETH ROCIO SANTACRUZ MARTINEZ
SECRETARIA DELEGADA

NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS SIN LA AUTORIZACIÓN E INTERVENCIÓN DEL NOTARIO CONFORME A LA LEY ES ILEGAL Y UTILIZARLAS PUEDE CAUSAR SANCIÓN PENAL.

FUNCIONARIO QUE EXPIDIO LA COPIA: MILENA

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

PC044274067

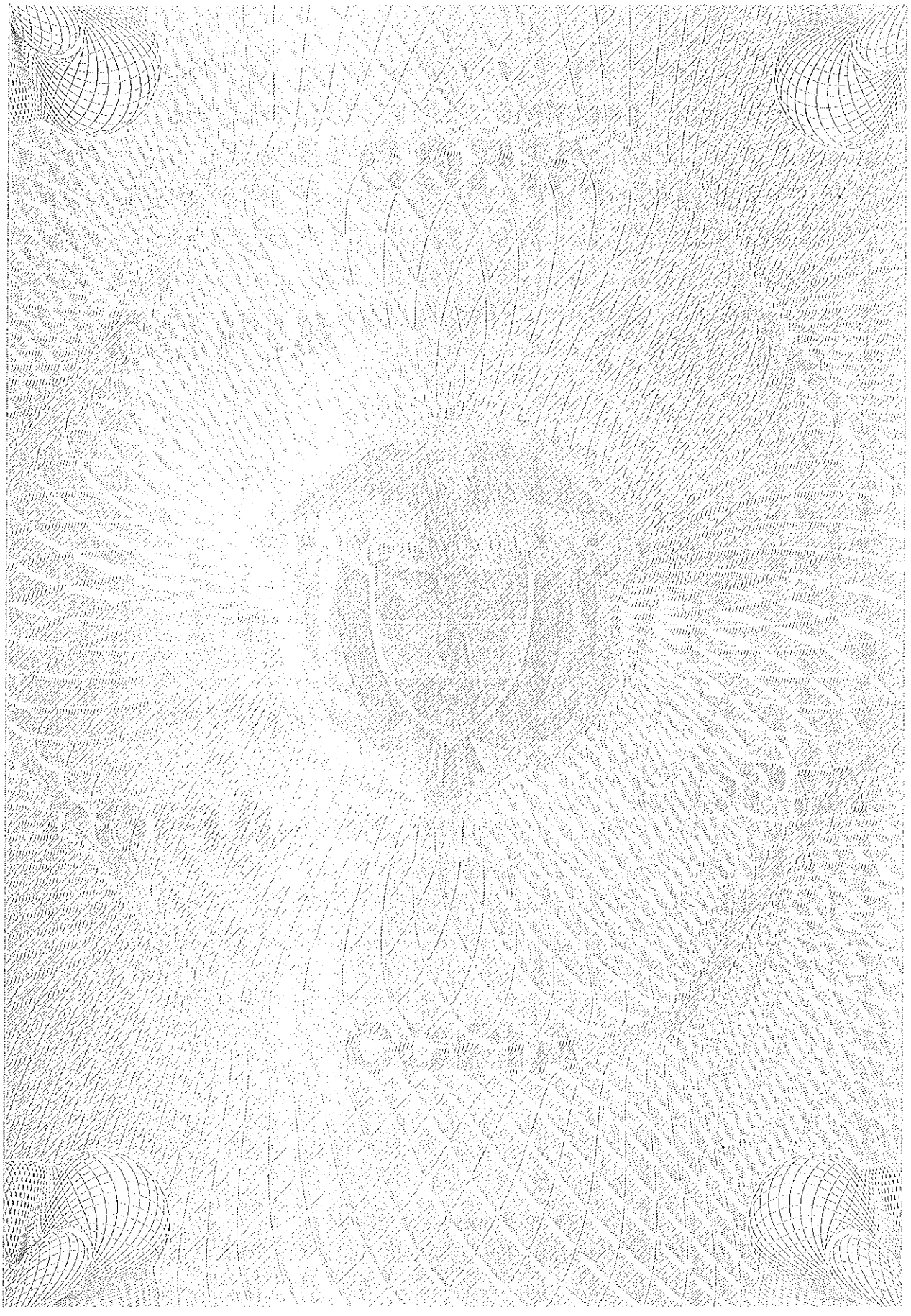
V4QCRF1NUM 28-02-22 PC044274067

THOMAS GREG & SONS.

Cra 9 # 69 A – 06 Tels 7425745-6066777

E-mail: administracion@notaria16.com Visítanos en www.notaria16.com

Bogota, D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.094.915.351**

ARROYAVE MORENO

APELLIDOS

YULLY NATALIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1990**

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-SEP-2008 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00458262-F-1094915351-20130820 **0034**58463A 3 4172432234

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

11001-31-030-37-2021-00245-01

Por encontrarse legalmente procedente, el Despacho dispone:

Admitir en el efecto **SUSPENSIVO**, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el día 19 de mayo del año 2023, por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá.

Una vez cobre ejecutoria la presente decisión, contrólense los términos con los que cuenta la aquí apelante para sustentar la alzada formulada, conforme lo consagra el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022. Transcurrido dicho lapso, de la sustentación presentada se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días, a fin de que, si a bien lo tiene, se pronuncie frente a las manifestaciones elevadas por la impugnante.

Por Secretaría, una vez vencidos los mencionados términos, ingrese el expediente al Despacho, con el propósito de emitir la decisión que en derecho corresponda.

Las partes deberán allegar el escrito sustentatorio y su réplica, a la dirección de correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE,

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado.

Firmado Por:

Juan Pablo Suarez Orozco

Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **06166bd301d2cb4671d44e66f0c998c93ac8b90225e85233d5022027acd37737**

Documento generado en 24/07/2023 04:15:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Ponente
SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	EJECUTIVO
DEMANDANTE	CONDOMINIO BELLO HORIZONTE P.H.
DEMANDADO	GRUPO M&R CONSTRUCCIONES S.A.S.
RADICADO	11001310303920220046101
PROVIDENCIA	Interlocutorio No.44
DECISIÓN	**CONFIRMA**
FECHA	Veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

1. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra el auto de 9 de febrero de 2023, mediante el cual el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá negó mandamiento de pago y, en consecuencia, ordenó devolver la demanda y sus anexos al inconforme.

2. ANTECEDENTES

2.1. La demanda. El Condominio Bello Horizonte P.H solicitó que se libre mandamiento ejecutivo en contra de Grupo M&R Construcciones S.A.S. por las siguientes sumas de dinero:

> *"(…) por el capital de cada cuota correspondiente al respectivo mes, por cada uno de los lotes de propiedad del demandado, para un total de ciento cuarenta y cuatro millones novecientos dieciocho mil ochocientos diecisiete pesos ($ 144.918.817,00) M/CTE*
>
> *(…) por los intereses de mora sobre cada una de las cuotas relacionadas, por cada uno de los predios, desde que se hicieron exigibles (a partir del día primero del siguiente mes al de la cuota causada), según certificaciones anexas expedidas por el Represente Legal y Administrador del Condominio Bello Horizonte – Propiedad*

Horizontal, hasta el pago total y efectivo de las mismas, equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera, por un total de ciento treinta millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($ 130.757.635,64) M/CTE.

Por las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración, que en adelante se sigan causando y por los intereses de mora de esas mismas cuotas, desde que se hicieron exigibles hasta el pago total de las mismas."

2.2. Auto recurrido. En proveído del 9 de febrero de 2022, el Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá negó el mandamiento de pago incoado por la demandante, al concluir que no existe un título ejecutivo que soporte las pretensiones de la demanda, pues de los aportados con esta no se desprende que se cumpla con el artículo 422 del Código General del Proceso. Lo anterior, al reparar que en las certificaciones de deuda no se señala la fecha exacta de exigibilidad de cada cuota reclamada, lo que deja de lado los requisitos de claridad y exigibilidad.

2.3. El recurso de apelación. Inconforme con esa determinación, el demandante interpuso recurso de reposición, en subsidio el de alzada. Expuso que el juez debe hacer un ejercicio hermenéutico para desentrañar el contenido de la demanda conjugándolo con las pretensiones, hechos y pruebas, para no caer en una denegación de justicia al extralimitar las exigencias procesales frente al derecho sustancial.

Se quejó de que no existe un mandato legal o procesal que disponga cómo se deben elaborar las certificaciones para el tipo de ejecución que se adelanta. Por lo que considera viable que se señale clara y expresamente el valor de cada cuota ordinaria y extraordinaria respecto de los meses a que se hace alusión en los documentos aportados.

Así, las certificaciones cumplen con los requisitos exigidos por los 422 del Código General del Proceso y 48 de la Ley 675 de 2001, razón suficiente para revocar la decisión.

2.4. Concede recurso de apelación. En auto de 25 de mayo de 2023 el *a quo* mantuvo la decisión atacada y concedió el recurso vertical, para que la pugna fuese resuelta por esta magistratura.

3. CONSIDERACIONES

3.1. El recurso de apelación, tal y como es menester de ley, tiene por objeto que el superior jerárquico examine la decisión tomada en primera instancia, con el fin de revocar o reformar dicha providencia si es el caso, únicamente cimentado en aquellos reparos formulados por el recurrente apelante.

Como se colige de la impugnación, el debate se centra únicamente en establecer, si las certificaciones de deuda aportadas como títulos ejecutivos no satisfacen los requisitos de claridad y exigibilidad contemplados por el artículo 422 del Código General del Proceso, tal como se señaló en la providencia del 9 de febrero de 2023.

3.2. Limitado el objeto de los reparos, se precisa que tiene por sentado la doctrina que el proceso de ejecución tiene como base la existencia de un título ejecutivo que parte de la certeza de la existencia de la obligación que se reclama, para que el órgano jurisdiccional del Estado, de manera coactiva, obligue al deudor al cumplimiento de aquella que se encuentra insatisfecha, de tal suerte que ante la ausencia de título que cumpla a cabalidad las exigencias de ley, no es viable adelantar ejecución alguna. (*nulla executio sine títulos*).

Por ello, junto con la demanda, debe necesariamente anexarse título que preste mérito ejecutivo, acorde con las previsiones contenidas en el ordenamiento, es decir, apoyarse inexorablemente no en cualquier clase de documento, sino en aquel que efectivamente produzca en el fallador un grado de certeza tal, que de su simple lectura quede acreditada, al menos en principio, una obligación indiscutible que se halle insoluta, debido a las características propias de este proceso, en el que no se entra a discutir el derecho reclamado, como si acontece con el declarativo.

Así las cosas, el título ejecutivo que se anexe debe reunir los requisitos señalados en la ley y la ausencia de cualquiera de esas condiciones legales lo torna insuficiente para ser soporte de la pretensión ejecutiva, aclarando que en tales eventos no se niega la existencia del derecho o la obligación misma, sino la idoneidad del documento para servir como báculo de la ejecución.

3.3. En el caso sub examine, se observa que el Juzgado 39 Civil del Circuito decidió negar el mandamiento de pago respecto de las expensas comunes de la copropiedad cuyo recaudo se persigue, en últimas, porque la certificación de deuda expedida en los términos del artículo 48 de la Ley 675 de 2001, no indicaba la fecha de exigibilidad de cada una de las obligaciones incorporadas.

De la revisión del expediente, se advierte que en efecto le asiste razón al juzgado de conocimiento, pues es claro que en el aludido documento solo se consignó el período de causación de las cuotas de administración, el valor mensual de cada mensualidad y el rubro de intereses, sin hacer alusión a la fecha en cada una de las obligaciones autónomas e independientes se hacían exigibles.

Ahora bien, ha de recordarse que la exigencia de claridad *"(…) consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de*

manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo".[1]

Por su parte, *"(…) la exigibilidad, de acuerdo con el artículo 422 del Código General del Proceso, ese requisito se refiere a la obligaciones puras y simples, de plazo de vencido, o, de condición cumplida."*[2]

En consecuencia, el título ejecutivo debía, sin necesidad de acudir a esfuerzos hermenéuticos, delimitar los alcances de las obligaciones, entre otros, en lo que respecta a los plazos o condiciones para el pago de cada una de ellas, lo que no se observa en los documentos aportados como títulos ejecutivos.

Conforme a lo anterior, es evidente que no procede librar mandamiento de pago con sustento en los documentos allegados con la demanda, pues no cumplen con las exigencias del artículo 422 del Código General del Proceso, al no poderse identificar de forma clara la exigibilidad de las obligaciones objeto de ejecución. Así, se colige que con el escrito introductorio no se acompañó el documento que preste mérito ejecutivo para soportar el *petitum*, tal como lo exige el artículo 430 *ejusdem*.

En consecuencia, sin más consideraciones, se confirmará la decisión apelada.

4. DECISIÓN

[1] CSJ. SC. 14 de mar. de 2019. STC3298.
[2] CSJ. SC. 4 de feb. de 2021. STC720.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído recurrido, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: Oportunamente devuélvase lo actuado al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

Firmado Por:
Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7bd0a83510333b17bb14800be49accd25e3b48b94873278ec58f3a9566aa2f56**
Documento generado en 24/07/2023 03:57:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Radicación: 110013103039-2017-00559-01 (Exp. 5730)
Demandante: Mary Luz Beltrán y otro
Demandado: Herederos de Casilda Herrera
Proceso: Verbal
Trámite: Apelación sentencia – admite

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023).

En el efecto suspensivo, admítese el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 28 de junio de 2023, proferida por el Juzgado 39 Civil del Circuito.

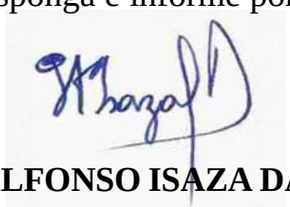
De acuerdo con el art. 12, inciso 3º, de la ley 2213 de 2022, aplicable a este caso, deberán atenderse las cargas para sustentación del recurso contra la sentencia y la réplica respectiva. Con la prevención de que si no hay ninguna forma de sustentación del recurso "*se declarará desierto*".

El(los) apelante(s) deberá(n) tomar en cuenta que, acorde con el art. 327, inciso final del CGP, la sustentación debe sujetarse exclusivamente a "*desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia*".

Para precaver posibles dificultades, conocida la intermitencia de la plataforma OneDrive y los problemas del internet que generan limitaciones en los equipos de cómputo para el manejo del expediente electrónico, de acuerdo con el artículo 121 del CGP, se prorroga el término de este recurso de apelación por el máximo permitido.

Los escritos que las partes presenten, deberán dirigirse exclusivamente al correo electrónico que se disponga e informe por Secretaría.

Notifíquese.



JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO TRIBUNAL SUP. DE BOGOTÁ, SALA CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Ref. Proceso de responsabilidad civil extracontractual de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A**. (Aclaración de auto). **Rad.** 11001-3103-040-2022-00105-01.

I. ASUNTO A RESOLVER

Se decide acerca de la solicitud de aclaración que elevó la parte demandante, frente al auto del pasado 5 de junio, emitido por esta Magistratura.

II. ANTECEDENTES

1. En la evocada data, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandado contra la determinación que negó el decreto de pruebas pedidas por ese extremo de la *lid,* revocando parcialmente la providencia censurada, para en su lugar, ordenar el interrogatorio de parte al representante legal de la activa, confirmando en lo demás que fue materia de la alzada el pronunciamiento censurado[1].

2. El pasado 8 de junio, la demandante solicitó su aclaración para que se le indique si el medio suasorio dispuesto corresponde al aludido o, a la declaración de parte; si en aplicación del precepto 195 del C.G.P., puede evacuarse a través de un informe presentado bajo la gravedad del juramento, indicándole la forma en que debe evacuarse.

---

[1] Archivo *"05AutoResuelveApelacion.pdf"* del *"CuadernoTribunal"*.

Igualmente, pidió se le explique la manera en que "*la decisión resulta compatible con la jurisprudencia reciente del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria al respecto"* y se fijen los lineamientos generales para su realización, en aras de orientar a las partes y al Despacho de primer grado, para evitar la vulneración del derecho al debido proceso[2].

III. CONSIDERACIONES

El artículo 285 del C.G.P., establece que las providencias son susceptibles de aclaración cuando existan *"conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia".*

De igual manera, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, ha explicado que no es procedente el esclarecimiento cuando *"la parte resolutiva de dicha decisión no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, como tampoco se encuentran estos en la fundamentación expuesta"*[3].

De cara a la solicitud presentada, prontamente se advierte que no se configuran los supuestos fácticos a que alude la evocada norma, ante la ausencia de palabras o expresiones que ofrezcan incertidumbre, pues es claro que, al revocar parcialmente la decisión acusada, se decretó el interrogatorio de parte al representante legal del extremo activo, como así también se precisó palmariamente en la considerativa, es decir, la decisión es comprensible, cosa distinta es que la solicitante discrepe del criterio esgrimido en el pronunciamiento.

Puestas de ese modo las cosas, se advierte que su finalidad es reabrir el debate ya zanjado, para que nuevamente se dirima una controversia dilucidada, alegando que no es claro si debe rendirse una declaración o

---

[2] Archivo "*06SolicitudAclaracion.pdf"* del *"Cuaderno Tribunal"*.
[3] Corte Suprema de Justicia, ATC028, 22 de enero de 2020, rad. No. 2019-01387-02.

el interrogatorio, pidiendo se le señalen los motivos por los cuales el auto es compatible con la jurisprudencia reciente del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, siendo evidente que ese propósito es ajeno a los lineamientos de la norma transcrita.

Tampoco le compete al Tribunal fijar los parámetros para la evacuación de la probanza decretada, pues ese aspecto lo definirá en su momento la funcionaria de primer grado.

En consecuencia y sin más consideraciones sobre el particular por innecesarias, no se accederá al pedimento de la actora.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la **SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE

Primero. NEGAR la solicitud de aclaración frente al auto proferido el 5 de junio del año en curso, por esta Corporación.

Segundo. ORDENAR a la secretaría acatar lo dispuesto en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la mencionada decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
Aida Victoria Lozano Rico
Magistrada
Sala 016 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **71dfa21f27df5df777bf513cc5416ac868c951e506b391f0cf40e1d8a480b846**

Documento generado en 24/07/2023 08:37:15 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Radicación 110013103040 2022 00039 01

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, una vez ejecutoriado el auto que admite la alzada, **SE ORDENA:**

Correr traslado al apelante por el término de cinco (5) días para sustentar el recurso, so pena de declararlo desierto.

Vencido dicho lapso, si se satisface la carga procesal, se otorgará el mismo plazo a la parte contraria, para que se pronuncie al respecto.

Infórmese a los señores abogados que los memoriales deben dirigirse al correo institucional del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co -artículo 109 del Código General del Proceso-; remitiendo un ejemplar a los demás intervinientes en el juicio, según los lineamientos del artículo 78 numeral 14 *ídem,* en concordancia con el artículo 3 de la Ley en cita.

NOTIFÍQUESE.

Firmado Por:
Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cddbc8f56f4c8e10e6efaa6f53d2778020f694f4e5df3e3a2dabd1b9d1eec3d8**

Documento generado en 24/07/2023 09:37:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Magistrado Ponente:
MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Ref. Proceso verbal No. 11001310304120190025301

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante inicial, demandada en reconvención, contra la sentencia de 9 de agosto de 2022 proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito de la ciudad, en el proceso que promovió contra los herederos de María Natividad Vargas Lancheros.

RESEÑA DEL LITIGIO Y DEL PROCESO

En este proceso se plantearon dos controversias entre hermanos: la del señor Raúl Sierra Vargas, relativa a una prescripción adquisitiva (demanda primigenia), y la de Zenaida y Olga Patricia López Vargas, Myriam y Gladys Vargas, concerniente a una acción dominical para la sucesión ilíquida de la progenitora de todos (demanda de reconvención).

Para una mejor comprensión, la Sala hace un breve recuento de ambos casos:

1. La demanda inicial:

a. El señor Sierra pidió la pertenencia, por prescripción extraordinaria, del dominio que su madre, María Natividad Vargas Lancheros, tenía sobre el inmueble ubicado en la Calle 128 B Bis A No. 87 D 21 de Bogotá, identificado con la matrícula No. 50N918070.

Con ese propósito manifestó que ejercía la posesión del inmueble de manera pública, quieta, pacífica e ininterrumpida desde junio de 2004, habiendo construido la casa de habitación en la que reside y arrienda, realizando, además, el mantenimiento del predio, pagando servicios públicos e impuestos prediales.

b. Las señoras Zenaida y Olga Patricia López Vargas, Myriam y Gladys Vargas, en su condición de herederas, se opusieron con los siguientes planteamientos: (i) "falta de los requisitos legales para adquirir el bien inmueble por prescripción"; (ii) "el demandante actualmente acepta que el dominio del bien inmueble pertenece a la sucesión ilíquida"; (iii) los actos de señor y dueño que se aducen fueron realizados "en calidad de tenedor y con autorización de la propietaria del bien inmueble"; (iv) "el poseedor no detenta la posesión como mejor derecho frente al derecho de propiedad de la causante (…) ni su posesión se establece de manera anterior al título"; y (v) "la posesión alegada por la parte demandante es clandestina y de mala fe" (cdno. 1, archivo 28, pp. 8 a 20).

El curador *ad litem* guardó silencio (cdno. 1, archivo 33).

2. La demanda de reconvención:

a. Las hermanas Vargas y López Vargas contrademandaron en orden a reivindicar dicho inmueble para los haberes de la sucesión, por lo que pidieron condenar al señor Sierra a restituírselo. No reclamaron frutos.

Para tal efecto, adujeron que su madre adquirió el predio –para esa época un lote sin construcciones– a través de la escritura pública 1897 de 23 de septiembre de 1985, otorgada en la Notaría 1ª de la ciudad. En 2004, delegó a su hija Olga Patricia para que efectuara unas reparaciones necesarias en el bien, quien lo demolió y levantó la única planta que existía en ese momento. Entre 2006 y 2009, tanto ella como Raúl Sierra arrendaron el inmueble a diferentes personas, y su madre lo hizo entre los años 2009 y 2011.

Añadieron que el 10 de mayo de 2012, fecha para la cual la dueña habitaba el bien, se acordó en conciliación que autorizaba a su hijo Raúl Sierra para que construyera otros pisos en la casa. Además, convinieron que los gastos serían solventados con los cánones de arrendamiento que el inmueble produjera.

El 21 de julio de 2015, todos los hijos de la señora María Natividad Vargas, incluyendo al señor Sierra, acordaron que éste le pagaría $200 000 como renta por el arrendamiento del predio, suma que pagó hasta el 25 de junio de 2018, fecha en la que aquella falleció.

b. La oposición a esta demanda fue soportada en que no procedía la acción dominical, tampoco la entrega, lo mismo que en la buena fe del poseedor. Reclamó, también, el reconocimiento de expensas y mejoras, e invocó el derecho de retención. Aquellas fueron estimadas en $733 104 396 (cdno. 2, archivo 16, p. 40).

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Para negar la pertenencia, la jueza señaló que el demandante no probó que era poseedor material con anterioridad a la muerte de su madre; antes bien, admitió que ingresó al predio y edificó con autorización de ella, por lo que resultaba claro que “ocupó el inmueble y construyó mejoras (…) con el beneplácito que recibió de su progenitora”, reconociendo así su dominio, como se desprende de la contestación a la demanda de reconvención, su declaración y el documento que suscribió el 15 de julio de 2015, en el que se comprometió a pagar “un arriendo” por el lote de propiedad de la señora Vargas (cdno. 1, archivo 86, pp. 12 y 13).

En relación con los testigos Flavio y Jorge Enrique Niviayo Reyes, y Jimmy Gabriel Ávila Fajardo, la juzgadora señaló que, si bien reconocieron al señor Sierra como poseedor, ninguno conoció “el verdadero motivo que dio origen a la presencia del demandante en el inmueble, vale decir, la autorización expresa de su señora madre, caso en el cual los actos de dominio que vieron

y declararon los testigos, en verdad fueron ejecutados a nombre de la verdadera propietaria del inmueble" (cdno. 1, archivo 86, pp. 13 y 14).

Por el contrario, la jueza concedió la acción reivindicatoria a favor de la sucesión de la señora María Natividad Vargas, por considerar probados sus presupuestos. Sin embargo, negó las restituciones mutuas porque el señor Sierra no probó que fueran "de exclusiva propiedad del demandado por haberlas construido con sus propios recursos, su propio peculio o patrimonio" (cdno. 1, archivo 86, p. 17); antes bien, agregó que la edificación fue solventada con los arrendamientos del inmueble y recursos de algunas de las demandadas reconvinientes; y en cuanto a los frutos, sostuvo que fueron renunciados.

EL RECURSO DE APELACIÓN

El demandante reconvenido solicitó revocar la sentencia, por las siguientes razones:

a. "Si la herencia está en manos de un heredero y no de un tercero, como cuando un hermano se queda con una casa excluyendo a otros hermanos, los otros hermanos deben recurrir a la acción de petición de herencia" (cdno. Tribunal, archivo 06, p. 5), por lo que no procedía la acción reivindicatoria.

b. Se omitió que "ejerce la posesión sobre el bien inmueble pretendido en usucapión, pero no tiene en este evento calidad de tercero, sino de heredero" (cdno. Tribunal, archivo 06, p. 6).

c. La jueza desconoció que, como poseedor vencido, tenía derecho a que se le reconocieran -aun oficiosamente- las mejoras, obras y construcciones que efectuó en el predio desde el año 2004 y que fueron pagadas con sus propios recursos, por lo que podía ejercer el derecho de retención.

CONSIDERACIONES

1. Circunscrita la competencia de la Sala a los reparos que formuló el único apelante (C.G.P., arts. 320 y 328), desde ya anticipa la confirmación de la sentencia, por las siguientes razones:

a. El señor Sierra confunde y entremezcla las acciones dominical y de petición de herencia.

En efecto, la reivindicatoria es una acción real que confronta al propietario con el poseedor material de la cosa (CC. arts. 946, 948, 950 y 952), en virtud de la cual uno y otro disputan quién tiene mejor derecho a poseerla: si el titular del derecho real principal (art. 740 y 745, ib.) o quien ejerce el dominio por los hechos (art. 762, inc. 2º, ib.). Sus presupuestos son de todos conocidos: (i) dominio en el demandante; (ii) posesión en el demandado; (iii) singularidad de la cosa; e (iv) identidad entre el bien poseído y el pretendido.

Por su parte, la de petición de herencia es una acción que concierne a otro derecho real: el de herencia (C.C., art. 1321). La disputa aquí es otra: quién tiene mejor derecho a recoger el patrimonio de un difunto y a que, por ende, se le adjudiquen y restituyan las cosas hereditarias, bien de manera absoluta y excluyente si se demuestra ser heredero universal único, o de modo relativo o parcial si admite la concurrencia de otros herederos, hipótesis en la que la adjudicación y restitución se harán en proporción a lo que le corresponde. Sus requisitos, también averiguados, son (i) la vocación hereditaria de quien demanda y (ii) la ocupación del demandado en calidad de heredero de una universalidad.

Sobre las diferencias entre una y otra acción, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,

> **La acción reivindicatoria se distingue de la de petición de herencia por razones de origen, objeto, partes, controversia y pruebas**. Así: 1º La reivindicatoria se origina del derecho de dominio; la de petición se origina del derecho real de herencia; 2º La reivindicatoria tiene por objeto una cosa singular; la de petición tiene por objeto una cosa universal, con universalidad

> de derecho, no de hecho. (Hay universalidades de hecho, como un rebaño o una biblioteca, que pueden reivindicarse); 3º La reivindicatoria corresponde al verdadero dueño contra el que posee una cosa singular que no es suya; la de petición corresponde al legítimo heredero contra el que ocupa indebidamente una herencia diciéndose heredero; 4º La reivindicatoria da origen a un juicio en que se discute la calidad de dueño; la de petición da origen a un juicio en que se discute la calidad de heredero, y 5º La reivindicatoria impone al actor la carga de probar el derecho de propiedad que invoca; la de petición impone al actor la carga de probar su calidad de heredero.[1] (Se resalta y subraya)

En este caso las demandantes no armaron reyerta contra el señor Sierra para disputarle su condición de heredero; antes bien, se la atribuyen. Como él se proclamó poseedor de un bien determinado sobre el cual ejerció posesión material (hecho admitido; cdno. 1, archivo 15, p. 4, y cdno. 2, archivo 16, p. 31), lo que intentaron con éxito fue proteger el patrimonio de la causante, para cuya sucesión reclamaron. Aquí no hay una controversia sobre la calidad de heredero, ni sobre una masa de bienes; tan sólo se ejercitó una acción real: la dominical que le corresponde al dueño, no la de herencia que le compete al heredero. Y como el apelante no disputa que su madre era la dueña del bien (escritura pública No. 1897 de 23 de septiembre de 1985, otorgada en la Notaría 1ª de Bogotá[2], inscrita en el folio de matrícula No. 50N918070[3]), que él viene siendo poseedor y que la cosa poseída es singular y correspondiente con la que es de propiedad de la señora María Natividad Vargas, hizo bien la juzgadora al conceder las pretensiones de la demandante de mutua petición.

b. Veamos ahora el asunto de las mejoras, cuyo reconocimiento y pago se reclaman.

No se discute que el señor Sierra edificó en el inmueble. Así se desprende de su declaración (“*desde el 2004 para acá la persona que maneja ese lote he sido yo* (…) *yo lo he construido del 2004 al 2012*”, “*mi mamá compró el lote, yo fui el que comencé a construirlo desde el 2004* (…)”; audiencia, mins. 15:36 y 36:09), corroborada por los testigos Flor Alba Riaño (“(…) *no le puedo decir las fechas en que empezaron la construcción,*

---

[1] G.J, T. XLIV, No. 1914-1915, pp. 153 a 158, reiterada en sentencia de 13 de diciembre de 2000. Exp. 6488

[2] Cdno. 1, archivo 24, pp. 3 a 12

[3] Anotación No. 1, cdno. 1, archivo 18, p. 1

digamos, cuando Raúl empezó a construir (…); audiencia, min. 1:57:24), Gladys Lucía Delgado ("*sabía que a Raúl sí le había dado permiso* [María Natividad] *pa' construir porque, pues ella estaba en ese tiempo*"; audiencia, min. 8:18), Pedro Nel Sepúlveda Mendivelso ("*yo le colaboré aquí* [a Raúl Sierra] *haciendo la ornamentación de la casa*", "*yo hice las puertas principales de los apartamentos, ventanas de la fachada, tanto traseras como delanteras y* (sic) *hice marcos internos*"; audiencia, mins. 31:33 y 40:06), Flavio Niviayo Reyes ("*yo siempre lo veía ahí* [a Raúl Sierra] *construyendo*"; audiencia, min. 26:08) y Jimmy Gabriel Ávila Fajardo ("[Raúl es quien] *ha estado al tanto del predio y de construir la casa, de edificar la* casa"; audiencia, min. 1:21:22). La controversia se limita a establecer el derecho a su reconocimiento y al pago.

Demos comienzo con lo primero recordando que, según el inciso 2º del artículo 739 del Código Civil, "si se ha edificado (…) a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio (…)". Luego, si el señor Sierra construyó con la aquiescencia de la dueña del lote, su madre, como lo confirma la conciliación a la que se hará alusión más adelante, tiene -en principio- derecho a que se le pague el precio de la construcción que hizo. No importa aquí el tema de la buena o mala fe, porque el consentimiento de la propietaria para que su hijo obrara del modo en que lo hizo torna vacua o trivial toda averiguación al respecto; antes bien, ese beneplácito le da solidez a la presunción de buena fe prevista en el artículo 769 del Código Civil.

Respecto de lo segundo, la cuestión radica en determinar si el pago ya se hizo, punto en el que cobra especial importancia el acuerdo conciliatorio de 10 de mayo de 2012, celebrado entre el señor Sierra y su mamá, la propietaria del predio, conforme al cual el precio de la construcción sería satisfecho con las rentas producidas por el inmueble. El siguiente es el texto de la conciliación, en lo que aquí interesa:

> "La Sra. María Natividad Vargas Lancheros autoriza a su hijo Raúl Sierra Vargas para que siga con el lote que está construyendo y después de pagar la deuda, le corresponderá a la Sra. María Natividad Vargas el usufructo (…)" (cdno. 2, archivo 03, p. 6).

La interpretación de dicho acuerdo –que hizo tránsito a cosa juzgada (Ley 446 de 1998, art. 66, vigente para esa época)– permite afirmar varias cosas: (a) que la señora María Natividad Vargas habilitó a su hijo para levantar construcciones en el lote de su propiedad, como se anticipó ; (b) que la dueña le reconocería a su descendiente el precio de la edificación (por eso se habla de “pagar la deuda”); (c) que mientras esa obligación no fuera pagada, la señora Vargas no tendría el “usufructo” del inmueble; tal la razón para que se haya precisado que ella sólo asumiría el “usufructo” “después de pagar la deuda”; (d) por contradicción, que el señor Sierra, para obtener el pago de su inversión, tendría provisionalmente el “usufructo” del bien.

Que ello es así también lo demuestran las declaraciones de Gladys Vargas y Olga Patricia López Vargas, quienes, en su orden, manifestaron lo siguiente: “se llegó a eso, él siguió construyendo y nosotros… como él aprobó eso, él siguió cogiendo la plata de los arriendos, en ningún momento le pasaba un peso a mi mamá (…) mi hermano no pagaba arriendo (…) él no nos pagaba arriendo, él todo era para inversión de la casa (…) y como se había acordado, o sea, mi mamá se (sic) había acordado de que (sic) lo de los arriendos se invirtiera en la casa”, “cuando a mí me daban lo del arriendo él [Raúl Sierra] inmediatamente me lo quitaba, me decía ‘venga’, yo le decía ‘no, pero es que yo quiero recoger mi plata, la que ya invertí’, porque mi mami se (sic) llegó a un acuerdo de que (sic) lo del arriendo… que ella no se pasaba a vivir ahí por un tiempo, mientras él recogía lo del arriendo (…), entonces, él dijo que no, que porque eso tocaba seguir construyendo y haciendo mejoras (…), [que se hicieron con dineros] de los arriendos que pagaba la gente a la cual yo le arrendé (…). La plata que se reciba del arriendo era reunirse (sic) para ir metiendo la plata para hacer mejoras. (…) Él decía que esa plata era para seguir invirtiendo para hacer mejoras. Era solo… siempre él decía eso” (audiencia, mins. 44:50, 58:48, 1:24:05, 1:24:35, 1:24:56, 1:25:21).

En sentido similar declaró Flor Alba Riaño, quien expresó que “yo en alguna oportunidad a juntos les hice la misma pregunta [quién costeaba los gastos de la construcción], yo le pregunté, la primera vez se lo pregunté a ella, yo le pregunté ‘oiga vieja y usted lo que yo pago de arriendo ¿eso es para usted?’. Ella me contestó ‘no Flor, porque Raúl me dice que lo que se coja acá de arriendo es para seguir construyendo (…), me dijo ‘sí, sí, a mí me

toca entregarle la plata'. Mas, sin embargo (sic), yo pensé que eran mentiras, entonces, en otra ocasión cuando yo le pagué el arriendo a Raúl le hice la misma pregunta (…), él me dijo 'no porque lo que esta casa lote esté dando de arriendo es para seguir construyendo porque, pues igual toca seguir construyendo y avanzando'" (audiencia, min. 1:54:21).

El mismo Raúl Sierra aceptó, en cierto modo, los hechos así planteados. En su versión refirió que "yo pagué arriendos hasta el 2004 de un lote que comencé a construir", "eran 3.500.000", tras lo cual agregó que "ese dinero [proveniente de cánones de arrendamiento] entraba para pagar préstamos míos y para uso personal", créditos "para acabar de pagarle la casa… los préstamos de la construcción (audiencias, minutos 27:33 en adelante). Incluso puntualizó que un porcentaje de la construcción se pagó con los dineros de los arriendos de la casa.

Por tanto, si fue acordado en conciliación que es cosa juzgada, que las mejoras autorizadas al señor Sierra le fueran pagadas con la renta que produjera el inmueble, y si el precio de los arrendamientos respectivos fueron efectivamente recibidos por él, no puede pretender ahora que, como secuela de la acción reivindicatoria, se le vuelvan a pagar.

Más aún, si se miran bien las cosas, el recurrente parece enfocarse en el pago de otras mejoras, "las cuales ascienden a un valor aproximado de $733 104 396, según avalúo realizado por el perito Juan Manuel Pira Umbarila", y que habría solventado "con dineros propios" (cdno. Tribunal, archivo 06, pp. 11 y 12); sin embargo, no precisó, ni probó, cuáles eran -específicamente- esas otras construcciones, diferentes de las ya pagadas.

Aunque aportó diferentes facturas de venta por compra de materiales, cotizaciones, comprobantes de pago y recibos de caja (cdno. 1, archivos 10, 11 y 12), a partir de esos documentos no es posible establecer qué gastos adicionales solventó utilizando sus propios recursos y cuáles empleando los dineros provenientes de los arrendamientos, como fue autorizado por la señora Vargas Lancheros. Y si bien es cierto que en el dictamen pericial elaborado por el señor Pira Umbarila, cuyo objeto fue "determinar el avalúo comercial el inmueble, discriminando el valor del terreno y el valor de la

construcción y mejoras", se concluyó que el valor del lote es de $128 606 184 y el de las mejoras $733 104 396 (cdno. 2, archivo 16, pp. 7), no lo es menos que en ese concepto no se especificaron las mejoras que el perito evidenció, sus costos y soportes, ni se discriminó el cálculo efectuado para llegar a esas conclusiones. Incluso, cuando se le preguntó al experto si el demandante inicial presentó documentos sobre compra de materiales o pagó de maestros de obra para llegar al valor que consignó en el dictamen, contestó que, "como lo mencioné, tengo entendido que el señor Sierra él (sic) es constructor, entonces, no entregó los recibos, digamos de los materiales porque él como construyó con sus manos, según me comentó, pues él mismo se hacía, digamos, sus propios recibos de su pago, porque él mismo era el que construía (…)", agregando que para la elaboración del dictamen "no habían (sic) recibos" para determinar la vetustez de los materiales, por lo que lo hizo a partir de su experiencia (audiencia, mins. 1:21:14 y 1:30:06).

Pero sea lo que fuere, lo cierto es que el señor Sierra, hijo y hermano, comenzó a recibir todas las rentas del inmueble para pagar la construcción; la fuente de los recursos destinados para levantarla pudieron ser los cánones de arrendamiento y préstamos que él tomaba con acreedores, pero, en todo caso, el precio que recibía de los arrendatarios, como lo aceptó, lo destinó para acabar de pagar la casa, los préstamos propios y para su uso personal.

Así pues, fue correcta la decisión de la juzgadora de no reconocer suma alguna por concepto de mejoras. Su decisión fue legal y justa. Tampoco, entonces, hay lugar al derecho de retención.

2. Puestas de este modo las cosas, se confirmará íntegramente la sentencia apelada.

El señor Raúl Sierra Vargas pagará las costas de la segunda instancia, porque su recurso no fue venturoso.

DECISIÓN

Por el mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República

de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia de 9 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito de la ciudad dentro de este proceso.

Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Liquídense.

NOTIFIQUESE

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
JAIME CHAVARRO MAHECHA
RICARDO ACOSTA BUITRAGO
(en permiso)

Firmado Por:

Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dfb37eb85e85e4638548a4aa5fff84e742688b97b2a2a8ae5e80f6e0b509d4ef**
Documento generado en 24/07/2023 01:55:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Ref. Proceso verbal de **OTTO LUIS NASSAR MONTOYA** en contra **BALOCO S.A.S.** y otro. (Recurso de reposición). **Rad.** 11001-3103-042-2019-00855-03.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO A RESOLVER

Se decide el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra el auto del 8 de febrero pasado, proferido por esta Magistratura.

II. ANTECEDENTES

1. En la aludida providencia se confirmó el pronunciamiento del 10 de junio de 2022, emitido por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta capital, a través de la cual se rechazó la solicitud de nulidad alegada por la demandada Neander Ltda. en liquidación, sin imponer condena en costas[1].

2. En oposición, la parte actora promovió el remedio de defensa horizontal, para que se revoque esa última determinación, argumentando que sí procedía esa sanción, en aplicación del numeral 1 del artículo 365 del C.G.P., máxime cuando ya en dos oportunidades se ha alegado y definido lo atinente a la invalidez del rito por pérdida de competencia[2].

---

[1] Archivo "*05ConfirmaAuto03.pdf*" de la carpeta "*02CuadernoTribunal*"
[2] Archivo *"07RecursoReposicion.pdf"* de la carpeta "*02CuadernoTribunal*"

3. El 15 de febrero pasado[3], se corrió traslado de ese medio defensivo a los demás intervinientes, quienes guardaron silencio, según da cuenta el informe secretarial del 21 siguiente[4].

III. CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 318 del Código General del Proceso "*el recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja*", vale decir que ese medio de defensa no tiene cabida contra las decisiones de esa estirpe, sin que se establezca excepción alguna.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia precisó: "*del referido texto legal se desprende que el medio de impugnación planteado no se halla autorizado para decisiones como la que en este asunto se ha pretendido controvertir y en esa medida, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º del canon 38, ibídem, su rechazo debe ser la consecuencia*"[5].

En el caso bajo análisis, el proveído recurrido es precisamente el que decidió la apelación interpuesta contra el pronunciamiento del 10 de junio de 2022, resultando abiertamente improcedente el medio defensivo, aun cuando a través de él se pretende controvertir la causación de las costas.

En un asunto de similares contornos, en el que a través de ese mecanismo de impugnación se pretendía censurar la imposición de esa sanción, la memorada Alta Corporación procedió a desecharlo, al estimar:

> *"En relación con el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia de casación, se rechaza por improcedente*
> *(…)*
> *Cabe aclarar que la norma en que se sustenta el memorialista para pretender reponer la sentencia de casación en lo atinente a la fijación de las costas de primer y segundo grado, en la forma señalada en la decisión de instancia de la misma providencia, esto es, el artículo 366 del CGP, no es la llamada a operar en la medida que la misma regula es la liquidación de las agencias en derecho y costas del proceso, la cual aún no se ha practicado"*[6].

---

[3] Archivo *"08TrasladoRecurso.pdf", ib.*
[4] Archivo "*09 Informe Entrada 20230221", ib.*
[5] Corte Suprema de Justicia, AC. 12 mar. 2012, Rad. 2012-00300-00.
[6] Corte Suprema de Justicia AL2743-2022, Rad. 85859, 22 de junio de 2022.

Postura que también acogió al decidir un recurso de súplica interpuesto, para que se revocara la determinación que impuso una condena en costas, resaltando su improcedencia, por cuanto *"la providencia en virtud de la cual se adoptó la decisión ahora cuestionada parcialmente fue un pronunciamiento de Sala, por tanto, de conformidad con el artículo 331 del CGP, no es susceptible de este medio de impugnación"*[7].

Por consiguiente, en aplicación del numeral 2 del artículo 43 *ejusdem,* se dispondrá su rechazo.

En consecuencia, se **RESUELVE:**

Primero. RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra el auto del 8 de febrero pasado.

Segundo. Por la secretaría dese cumplimiento a lo ordenado en el ordinal tercero de la parte resolutiva del aludido proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
Aida Victoria Lozano Rico
Magistrada
Sala 016 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **49f9a258eca6c4f34271772cf96c94052b62c5dccb6ca182d331af0376949d6c**
Documento generado en 24/07/2023 08:35:56 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[7] Corte Suprema de Justicia AL1645-2020, Rad. 69469, 15 de julio de 2020.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Ref. Proceso verbal No. 11001310304120190025301

En la liquidación de costas, la secretaría del juzgado incluirá la suma de $2.000.000 por concepto de agencias en derecho causadas en la segunda instancia.

CÚMPLASE.

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a24ceb2f565a14946c99eddfd463868cca982f9bd48f5fd0bfdcc919b8566839**
Documento generado en 24/07/2023 01:57:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica